
UR

Nuevo Código de Infancia y Adolescencia

Antecedentes, análisis y trámite legislativo

Nuevo Código de Infancia y Adolescencia

Antecedentes, análisis y trámite legislativo

Observatorio Legislativo y de Opinión
–Editor académico–



COLECCIÓN TEXTOS DE JURISPRUDENCIA

© 2007 Editorial Universidad del Rosario
© 2007 Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario,
Facultad de Jurisprudencia
© 2007 Observatorio Legislativo y de Opinión

ISBN: 978-958-8298-73-3

Primera edición: Bogotá, D.C., julio de 2007
Coordinación editorial: Editorial Universidad del Rosario
Corrección de estilo: María José Díaz Granados M.
Diagramación: Margoth C. de Olivos
Diseño de cubierta: Antonio Alarcón
Impresión: Servigraphic
Editorial Universidad del Rosario
Calle 13 Nº. 5-83 Tels.: 336 6582/83, 243 2380
editorial@urosario.edu.co

Todos los derechos reservados. Esta obra no puede ser reproducida
sin el permiso previo por escrito de la
Editorial Universidad del Rosario

Observatorio Legislativo y de Opinión
Nuevo Código de Infancia y Adolescencia: antecedentes, análisis y trámite legislativo.—
Facultad de Jurisprudencia. Observatorio Legislativo y de Opinión. Bogotá:
Editorial Universidad del Rosario, 2007.
442 p.—(Colección Textos de Jurisprudencia)

ISBN: 978-958-8298-73-3

Adolescencia – Legislación / Infancia – Legislación / Derechos humanos / Niños – Legislación
/ I. Título / II. Serie.

348.023083 SCDD 20

Impreso y hecho en Colombia
Printed and made in Colombia

CONTENIDO

Introducción 13

Comentarios al Proyecto
de Código de la Infancia y la Adolescencia

Generalidades 17
- Universalidad 17
- Integralidad 18
- Realidad 19
- Eficiencia, precisión y simplicidad 19
- Calidad y oportunidad de las medidas 20
- Herramientas técnicas, económicas, reales y permanentes 21
- El menor y sus intereses como "bien jurídico tutelado" 22
- Pedagogía y compromiso 23
- La normatividad como *ultima ratio* 24
- La prevención en materia de salud física de los menores desde el vientre materno 24
- El derecho a la salud de los menores y su alcance 25
- Las medidas de restablecimiento de derechos 26
- Asuntos penales 29
  - La responsabilidad penal de los menores de edad 29
  - Posición mayoritaria del grupo de trabajo que defiende la disminución de la edad para la responsabilidad penal 29
    - ¿Es responsable penalmente el menor de 18 años? 30
    - La inimputabilidad de los menores de edad 30
    - Toma de posición 31

La determinación de las edades 32
De la orientación de las definiciones relacionadas con los menores, tendientes a evitar la estigmatización del menor 34
Posición de quienes defendieron en el grupo mantener la inimputabilidad penal de los menores 35
Los principios que debe materializar el proyecto de ley 36
Una mirada hacia atrás. La experiencia previa a la expedición del Código del Menor 37
Asuntos procesales 38
En cuanto a los inspectores de policía 38
En cuanto al cómputo de términos 39
En cuanto al traslado y el recurso de revisión 40
En cuanto a la fijación de cuota alimentaria 41
En cuanto al procedimiento judicial 43
En cuanto a las medidas cautelares 44
En cuanto a la legitimación especial 44

Observaciones particulares 46
El término niño, para definir al menor 46
Perspectiva de género 46
La protección del menor y las tendencias culturales 46
Los deberes del menor 47
El cuidado personal y la protección como derechos 47
La prevención en salud como obligación 47
El derecho a tener una familia 47
El cuidado personal del menor 47
El derecho de alimentos y la capacidad económica 48
El menor en establecimientos públicos 48
Derecho a la participación 48
La libertad de asociación y sus restricciones 49
Derecho a la información 49
Actividades no laborales remuneradas 49

El menor con deficiencia cognitiva 50
El término jurídico para las cargas de la familia 50
Detección y atención en materia de daños del menor 50
El asunto de las sanciones 51
Restablecimiento de los derechos 51
Obligación del restablecimiento de los derechos 51
Verificación de la garantía de derechos en las medidas de restablecimiento 51
Medidas de restablecimiento de derechos 52
Amonestación 52
Ubicación en hogar de paso 52
Vinculación a programas de atención especializada para el restablecimiento de derechos vulnerados 52
Adopción 52
Procedencia de la adopción 53
Efectos jurídicos de la adopción 53
Requisitos para adoptar 53
Adopción de niños miembros de comunidades indígenas 53
Adopción internacional 54
Aspectos procesales de la adopción 54
Programa de adopción 54
Participación del ICBF en las juntas directivas de las instituciones de adopción 54
Aplicación del nuevo sistema penal acusatorio para adolescentes 54
Autoridades competentes para el restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes 55
Sistema de responsabilidad penal para adolescentes, niños y niñas víctimas de delitos 55
Distinción entre el sistema de responsabilidad penal para adolescentes y para niños y niñas menores de 12 años 56
Testimonio de niños, niñas y adolescentes 56
Designación del defensor desde el conocimiento de la noticia criminal 57

Principio de inmediación de la prueba 58
Cambio de la denominación de la sentencia anticipada 58
Integración del sistema de responsabilidad penal para adolescentes 59
Clasificación de los delitos 59
Incorporación de la mediación en el trámite del proceso penal ... 60
Prescripción de la acción penal 60
Juez de ejecución de las medidas 60
Internamiento preventivo 61
Imposición de la sanción 61
Detención en flagrancia 62
Competencia subsidiaria del inspector de policía 62
Cómputo de términos 63
Reglas generales del trámite administrativo 63
Fijación de la cuota provisional de alimentos en el procedimiento administrativo 64
Acumulación de pretensiones y pronunciamiento oficioso 64
Fijación de la cuota provisional de alimentos en el procedimiento judicial 65
Medidas especiales para el cumplimiento de la obligación alimentaria 65
Legitimación especial 66

Anexos 67
Análisis de los antecedentes legislativos del nuevo Código de Infancia y Adolescencia 67
Revisión desde 1989 hasta 2006, de los proyectos de ley por medio de los cuales se intentó regular temas relacionados con la infancia y la adolescencia 67
Leyes sancionadas en temas relacionados con la infancia y la adolescencia desde el año 1989 hasta el año 2006 78
Proyecto de Ley Estatutaria Cámara 88
Exposición de motivos 172

Antecedentes 172
El proyecto actual 175
La necesidad del cambio 176
El imperativo del cambio normativo 178
El marco jurídico internacional 178
El marco político internacional 179
El marco conceptual de los derechos humanos de la niñez 180
La situación de los derechos humanos de la niñez en Colombia 180
La estructura del proyecto de ley 184
Libro I. Protección integral 184
Libro II. Sistema de responsabilidad penal para adolescentes 187
Libro III. Inspección, vigilancia y control 190
El sistema de responsabilidad penal para adolescentes 190
Niños y niñas desvinculados de grupos armados al margen de la ley 191
Los niños y las niñas víctimas de delitos 193
Procedimientos 193
Aspectos presupuestales y políticas públicas 195

Ponencia para primer debate en Cámara al Proyecto de Ley 085 de 2005 Cámara, acumulado 096 de 2005 Cámara 199
Ponencia para primer debate 199

Ponencia para segundo debate en Cámara aAl proyecto de ley 085 de 2005 –Cámara acumulado 096 de 2005– Cámara 299
Ponencia para segundo debate 299

Ponencia para primer en Senado debate al proyecto de ley 215 de 2005 –Senado, 85 de 2005– Cámara 317
Antecedentes del Proyecto de Ley 317

Justificación, conveniencia y necesidad del proyecto de ley 319
Estructura del texto aprobado por la Cámara de Representantes 321
Naturaleza de la ley 322

Ponencia para segundo debate en Senado al proyecto de ley 215 de 2005-Senado, 85 de 2005-Cámara "por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia" 333

Acta de conciliación 337

Diario oficial 46.446. Ley 1098. 08/11/2006 339

Índice de autores, personas naturales y jurídicas que colaboraron en la elaboración del proyecto de ley Nuevo Código de Infancia y Adolescencia 434

Índice de normas nacionales e internacionales 440

Introducción

A comienzos de la legislatura anterior (2005-2006), varios congresistas solicitaron a la Universidad del Rosario su colaboración para la formulación de observaciones y sugerencias al borrador del proyecto de ley que buscaba modificar el Código del Menor, iniciativa que pretendían presentar durante el mes de agosto del año 2005.

Así las cosas, con el apoyo de las facultades de Jurisprudencia y Medicina, y de la Decanatura del Medio Universitario, el Observatorio Legislativo y de Opinión de la Universidad organizó un equipo de trabajo compuesto por docentes expertos en la materia pertenecientes a las áreas de derecho civil personas, derecho de familia, derecho procesal, derecho penal y genética, con la idea inicial de revisar la primera propuesta de proyecto de ley elaborada por la unidad legislativa de la entonces representante a la Cámara Gina María Parody, hoy senadora de la República.

Dicho equipo de trabajo se integró con las siguientes personas:

- Doctor Juan Enrique Medina Pabón, docente de la cátedra de derecho civil personas y familia de la Facultad de Jurisprudencia.
- Doctora Cecilia Diez Vargas, docente de la cátedra de derecho civil personas y familia de la Facultad de Jurisprudencia.
- Doctora Martha Patricia Guzmán Álvarez, docente de la cátedra de derecho civil personas y familia de la Facultad de Jurisprudencia.
- Doctora Sonia Martínez Rujana, docente de la cátedra de derecho de familia de la Facultad de Jurisprudencia.
- Doctor Gabriel Hernández Villarreal, director de la especialización en derecho procesal y docente de dicha cátedra en la Facultad de Jurisprudencia.
- Doctor Alfredo Rodríguez Montana, coordinador del Área Penal de la Facultad de Jurisprudencia y docente de la misma.
- Doctor Juan Carlos Forero Ramírez, director de la especialización en Derecho Penal y docente de dicha cátedra en la facultad de Jurisprudencia.

- Doctor Carlos Martín Restrepo Fernández, jefe del Departamento de Genética de la Facultad de Medicina.
- Doctor Manuel Guillermo Rueda Serrano, director del Observatorio Legislativo de la Universidad.
- Doctora María Lucía Torres Villarreal, asistente jurídica del Observatorio Legislativo de la Universidad.
- Así mismo, se contó con la participación de los estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia Manuel Alberto Alfonso Rueda, Laura Gabriela Curiel y Rodolfo Galvis, quienes realizaron una investigación dirigida a la consecución de antecedentes legislativos de la reforma y normas relacionadas con la infancia y la adolescencia.

Este primer trabajo de revisión del borrador de proyecto de ley resultó tan importante, que se generó una dinámica permanente de reuniones de este grupo de trabajo con el fin de realizar el seguimiento estricto a la iniciativa, no sólo para conocer los avances del proyecto sino para buscar enriquecer, dentro de su trámite, la regulación planteada.

A partir de este trabajo la Universidad, con base en los estudios y análisis realizados por este grupo de expertos, formuló comentarios a las ponencias presentadas para primer y segundo debate en la Cámara de Representantes, y para primer y segundo debate en el Senado de la República.

Muchas de nuestras observaciones fueron acogidas por los congresistas con quienes se realizó un intercambio de opiniones, al igual que con sus unidades de trabajo legislativo.

Debemos destacar el esfuerzo realizado por la Universidad y por este grupo de trabajo con el único fin de contribuir, desde la academia, en el quehacer legislativo.

La Universidad, como bien público, está llamada a participar activamente en los diversos escenarios de la vida nacional, uno de los cuales es el Congreso de la República. Este escrito, que recoge el trabajo realizado en torno a una iniciativa desde su concepción inicial y durante todo el proceso legislativo, refleja la importancia de mantener vivo el lazo entre academia y vivir nacional, que en esta oportunidad se concreta en el Congreso de la República.

La estructura de la publicación permite a los lectores conocer el desarrollo del proyecto de ley en sus diversas etapas legislativas, los principios que orientaron los comentarios y las observaciones del grupo de trabajo, y las sugerencias concretas que fueron planteadas al Congreso Nacional –con su respectiva justificación–, indicando cuáles fueron acogidas y cuáles no.

Esperamos que la publicación que presentamos contribuya en el análisis de la legislación de los menores –pasada, presente y futura–, y sirva de punto de reflexión para quienes deban aplicarla.

Comentarios al Proyecto de Código de la Infancia y la Adolescencia

Generalidades

El proyecto presentado en la legislatura de 2005, modificaba sustancialmente el que fue presentado en el año 2004, el cual, si bien era fruto de un plausible esfuerzo de los promotores, era completamente nuevo, demasiado detallado, reglamentarista y no pocas veces repetitivo, lo que hacía la norma pesada y le restaba utilidad, además de exigir un esfuerzo especial para su difusión y aplicación; por lo anterior, los miembros del grupo coincidieron en destacar como acertada la fórmula netamente normativa del proyecto del año 2005,[1] que procuraba trasladar los aspectos administrativos y operativos a las autoridades de bienestar familiar, dejando la ley como un instrumento de dirección de sus acciones y no como un vademécum procedimental que limitara el tratamiento apropiado de cada caso e impidiera la permanente adaptación de las actuaciones de las autoridades, a efecto de responder acertadamente a las diversas situaciones sociales y culturales propias de cada época, sin tener que variar el estatuto de menores.

Siguiendo esos criterios, el grupo procedió a identificar y sentar los principios básicos de análisis y crítica del documento, los cuales pueden resumirse en procurar:

Universalidad

El concepto de universalidad se aprecia bajo dos aspectos primordiales:

La Ley de la Infancia y la Adolescencia debe ser de aplicación al universo social cualquiera que sea su situación, nivel cultural o económico, para que nadie pueda excusarse de brindar la protección adecuada al menor por el hecho de hallarse éste en un medio determinado y, por eso, se propuso la eliminación de toda opción especial de manejo de la problemática del menor por razones de cultura, género, religión o cualquier otro condicionante que permita tratamientos diferenciales en circunstancias idénticas, no sólo por la dificultad de precisar cuándo un determinado proceder frente al sujeto protegido llega a ser ilegítimo, sino porque los mayores atentados contra la libertad y el bienestar de éstos han

[1] Originalmente fue concebido como una ley estatutaria [Lit. a), art. 152 CN].

provenido del sistema cultural que no pocas veces valida y tolera conductas en la familia que chocan frontalmente contra los dictados de la razón y la concepción que hoy tenemos de la forma como debe procurarse la crianza en la especie humana a fin de obtener los mejores resultados para el individuo y la sociedad.

El grupo de estudio insistió en que se evitara el reconocimiento del sistema cultural en el caso del tratamiento a los menores (facultando a pueblos indígenas para manejar bajo sus reglas al menor), lo que estaría en franca contradicción con el propósito de la norma, porque se trata de normas protectoras "aculturales", concebidas para corregir las fallas propias de quienes no están identificados con el patrón de "civilización" que es la exigencia de este Código, extensivo a los demás aspectos de la cultura (política, religiosa y social).

Por otra parte, la universalidad está concebida como la compatibilidad con los estatutos de protección de menores existentes en los diversos Estados, para lo cual deben detectarse y suprimirse aquellos "localismos" innecesarios o injustificados que hagan chocar las instituciones nacionales con las internacionales de modo que el rango de aplicación de la norma sea transfronterizo, es decir, geográficamente lo más amplio posible.

Lo anterior, por supuesto, obliga a detectar aquello que se constituye en el localismo de la norma extranjera, o constituye un error o choca conceptualmente con la norma interna y, en estos casos, es necesario imponer el criterio de nuestro estatuto, no sólo como una manifestación de la soberanía sino como muestra de la calidad científica de la propuesta interna.

Integralidad

Sobre este aspecto el objetivo fue hacer de la Ley de la Infancia y la Adolescencia un elemento normativo que, sin dejar de desarrollar a cabalidad las directrices trazadas por la Carta Política, esté correlacionado de la mejor manera posible con el resto de la legislación de familia contenida en otras disposiciones, sin perjuicio de modificar o derogar las normas obsoletas o que se presten para eludir el cumplimiento de los propósitos de la mencionada ley.

En especial se procuró detectar cuándo una norma de la Ley de la Infancia y la Adolescencia, o del resto del sistema jurídico, se constituye en "regla de amparo" que permita hacer fraude a la ley en materia de la protección del menor, para proponer su eliminación.

Realidad

El Código del Menor que se modificó es un estatuto moderno y acertado en la mayoría de sus disposiciones; sin embargo, en el curso de su vigencia había demostrado falencias en algunos campos de las instituciones que regula, y en otros aspectos había llegado a ser insuficiente, de modo que era necesario poner de presente esas debilidades, debidamente soportadas, con el fin de que la ley, además del apoyo intelectual y lógico propio de la norma racional, tenga la suficiente validación "empírica".

Es de resaltarse la condición *humana* del menor, tanto en el aspecto de la protección de su individualidad y dignidad, como en el reconocimiento de la muchedumbre de seres que cobija (cada uno con sus propias características), lo que hace que la consagración y protección de sus derechos fundamentales no omita tomar en cuenta las particularidades derivadas de su grado de desarrollo físico e intelectual, su identidad individual y de género, su situación en materia de sanidad mental y orgánica, y el entorno en que se desenvuelve. La regla tiene que ser lo más precisa en la calificación de los individuos y sus circunstancias, pero dejando a las autoridades y jueces el campo suficiente para actuar según la ciencia y el sano criterio.

De igual manera, tendrán que concebirse las reglas a fin de que se entienda que no es lo mismo un hecho frente a un menor en unas condiciones que en otras, ni generalizar como buenas o malas las conductas que adoptan tanto los menores como los mayores. Los conceptos de "sustancial", "natural" y "accidental", que tanto ilustran a quienes se ven en la necesidad de valorar la eficacia de los actos jurídicos, son imprescindibles para la valoración de toda actuación que pueda afectar a los menores extendiendo su sentido a toda valoración de su comportamiento.

Eficiencia, precisión y simplicidad

Una norma, como cualquier actividad a las que los humanos dedicamos nuestra atención, es aquella que busca obtener el mejor de los resultados con el mínimo consumo de energías y esfuerzos, por eso se procuró cumplir con esos principios, no sólo en su redacción, sino en su conocimiento y aplicación.

Se puso un especial cuidado en evitar el desperdicio del trabajo de la sociedad, lo que incluye aprovechar al máximo lo existente y que ya ha sido probado como eficaz, eliminar aquellos puntos que conocidamente se han prestado para discusiones y procurar, por su propia sencillez y certeza, que no se permita el bizantinismo en su interpretación o la elusión de su ejecución.

En la organización del trabajo del grupo se estimó conveniente iniciar con el planteamiento de principios generales que sirvieran de directiva de interpretación y aplicación, a fin de que desaparezca del estatuto toda norma que, sin ser principal (contentiva de principios), no tenga forma de aplicarse (por no existir coercibilidad o sanción, o porque existe imposibilidad actual). De igual manera, se solicitó que fueran suprimidos o, por lo menos, que no fueran presentados como determinantes cualesquiera elementos normativos que pudieran deberse a prejuicios culturales o sociales, o aquellos cuya comprobación científica aún esté pendiente, a efectos de permitir que sean los sujetos y la práctica los que establezcan su propia validez.

Al señalarse claramente el norte de la norma se consigue que cualquiera, conociendo apenas los principales enunciados, pueda llegar a reconocer su contenido con un simple ejercicio lógico y, de igual manera, pueda reconocer si está en un error al interpretarla cuando el resultado sea incongruente con el sentido general –jerarquización y sistema–. Este elemento, unido a una acertada técnica jurídica, permitirá que las normas especiales queden para los especialistas, pero la ley y su sentido sean comprendidas por todos, porque la ley, no podemos olvidarlo, tiene que llegar a todos los miembros de la sociedad, aun a los ignorantes, desatentos o simplemente infractores de la misma.

Tampoco pueden excluirse las definiciones legales, pero deben usarse solamente en aquellos puntos específicos que se presten a ambigüedades o realmente sean vocablos técnicos y con su precisión se consiga la omnicomprensión de su sentido.

Calidad y oportunidad de las medidas

Teniendo en cuenta que la Ley de la Infancia y la Adolescencia es en esencia una norma de protección del menor cuyo norte es procurar que dichos menores puedan desarrollarse con el mayor bienestar, no puede pasarse por alto que cientos, por no decir casi todas, de las actuaciones benéficas para los menores llevan un

grado de molestia, que se impone por la necesidad, y siempre esperando ventajas comparativas.

Como si se tratara de amargos remedios, las prácticas de salud e higiene, los mecanismos de educación y entrenamiento de habilidades o para superar deficiencias, y todas las medidas correctivas y de promoción de la disciplina causan desagrado al menor pero son tan necesarias que, aunque nos pese, hay que "hacer ingerir" al sujeto y, por eso, se procuró ser especialmente cuidadoso para no cambiar la Ley de la Infancia y la Adolescencia en un sistema que por defender al menor, termine convirtiéndose, en el largo plazo, en una forma de ataque contra el individuo mismo y contra la sociedad, temor que se hace cada vez más patente en la problemática de la desadaptación social y la delincuencia juvenil.

Por otro lado, las medidas que deben tomar autoridades administrativas y jurisdiccionales tienen que concebirse con la mira puesta en su resultado real esperado, eliminando cualquier dilación o ineficiencia para conseguirlo, por lo que las reglas procedimentales tendientes a fijar competencias y garantizar el derecho de defensa de los involucrados deben ser compatibles con la eficiencia de tales medidas.

Aun a sabiendas del sentido coyuntural de la propuesta, derivado de la excesiva congestión del aparato jurisdiccional, se estimó necesario reducir la participación directa del juez en las actuaciones que puedan manejarse satisfactoriamente y sin riesgo por las autoridades administrativas, con el ánimo de evitar que la Ley de la Infancia y la Adolescencia se convierta en un factor más de la ineficiencia de la rama. Las medidas de trascendencia respecto de la persona del menor serán precedidas de conceptos periciales sobre su necesidad y dimensión.

Herramientas técnicas, económicas, reales y permanentes

La protección del menor es una más de las innumerables funciones que cumple el Estado social de derecho, y como en todo Estado, pero especialmente en aquellos en vías de desarrollo en que las necesidades superan con creces las disponibilidades, puede quedar sometida a la valoración de prioridades; así, en cualquier momento el gobernante puede decidir debilitar el sistema de protección de menores para dirigir sus esfuerzos hacia otros frentes del servicio público donde considere reditúen más en lo social, económico o político, y por eso es necesario que

la norma tenga la aptitud de defenderse por sí misma y de permanecer cumpliendo de manera precisa sus propósitos.

Dos aspectos principales se incorporan a este punto para conseguir la eficiencia. Por una parte la *especialización* tanto funcional como intelectual de los agentes involucrados en la protección del menor y, por otra, el establecimiento de *fuentes económicas* ciertas y cuantificables que permitan al sistema contar con instrumentos administrativos ágiles y autoridades que sepan sus funciones y puedan actuar sin muchas interferencias a fin de conseguir el beneficio para el menor.

No sobraría establecer la obligación de adelantar los programas "No niños de la calle", "Cultura de no discriminación y tolerancia", "Crecimiento demográfico apropiado", "Permanencia y protección del núcleo familiar", y otros que tiendan a combatir las causas objetivas y comprobadas de la desprotección de la infancia, programas que tendrían el carácter de "inversión social" con metas definidas y fórmulas de evaluación de resultados.

El menor y sus intereses como "bien jurídico tutelado"

De especial importancia es conseguir un cambio en la mentalidad del sujeto particular o público encargado del menor para que tenga plena conciencia de que las facultades que le confieren las normas son solamente instrumentos y, no pocas veces, verdaderas cargas a fin de conseguir que el menor tenga todo lo necesario (no lo superfluo, se destaca) para un desarrollo apropiado, dentro de unos parámetros que minimicen la afectación de los intereses del encargado o de la sociedad misma.

De especial trascendencia es dejar el espacio necesario al adulto encargado del menor para tomar las decisiones de conveniencia, porque el menor, no podemos olvidarlo, no tiene las facultades suficientes para tomar decisiones acertadas, y siempre está enfrentado al conflicto entre su propio interés y libertad, y la preparación para la subsistencia en una sociedad compleja que cada día exige un comportamiento social más apropiado; lo anterior no obsta para que siempre haya alguien vigilante –una autoridad– que determine la diferencia entre una mayor disciplina y el ataque a los derechos individuales del menor.

Los menores siempre están en la posición de "objeto" del conflicto entre los adultos (incluido el Estado) que, por razones que abarcan desde el condenable

egoísmo hasta el mayor y bienintencionado altruismo, consideran que su apreciación sobre el menor es la acertada. Ninguna medida puede tomarse, entonces, en consideración de los intereses de los mayores sino del menor, lo cual es esencial en esta época de disgregación familiar.

Es necesario empezar a apreciar la capacidad intelectual y por ende jurídica del menor como una situación de amplio espectro –en la que se mueve gradualmente entre la mínima y la máxima– a efecto de impedir que la clasificación capaz-incapaz sea una más de las limitantes del desarrollo social del menor, empezando a dar soluciones de las que carece el sistema legal actual. El ejercicio de sus derechos por el menor tendrá que ser necesariamente correlativo a su desarrollo intelectual y su madurez de conducta.

Un tema accesorio, pero no por ello de menor interés, es el ligado a la protección de los intereses económicos de los menores, especialmente cuando su patrimonio es considerable y sus administradores naturales (padres y guardadores) no tienen el conocimiento o la habilidad para manejarlo. Los sujetos encargados de la protección personal del menor deben ser retirados de su administración cuando carezcan de idoneidad y calidad para la gestión.

Hay que establecer mecanismos para que el Estado pueda exigir que estos patrimonios sean administrados por profesionales que garanticen patrimonialmente sus actuaciones y que puedan existir consejeros expertos para administradores e incapaces relativos que presten su concurso (obligatorio) en la toma de decisiones más importantes.

Pedagogía y compromiso

Visualizar el sistema normativo únicamente como un conjunto de mandatos hace que muchos tengan una percepción distorsionada del objetivo pedagógico de la regla que "enseña" a la sociedad lo que se considera mejor entre varias opciones. Tratándose de la norma del menor, es un error pasar por alto este propósito y, por eso, la Ley de la Infancia y la Adolescencia debe concebirse como una fórmula educativa de la sociedad, especialmente para aquellos que fueron formados en un medio donde el ejercicio de la autoridad era puramente efectista (la orden es la causa y el cumplimiento el efecto), y se empeñan en mantener una visión distorsionada del asunto.

Por su parte, ante la dificultad de llegar a cada uno e inculcar las disposiciones normativas, se requiere del apoyo social (que hemos denominado compromiso o, más modernamente, "empoderamiento") para que cada uno de los miembros de la sociedad esté dispuesto a cooperar en la vigilancia de la conducta de los demás en estas materias.

La normatividad como *ultima ratio*

Como sucede en todos los campos del derecho, las normas y el aparato de gobierno sólo se ponen en ejercicio cuando se presenta un fenómeno lesivo de alguna entidad, ya sea en lo cuantitativo o en lo cualitativo. Conjugar la atenta vigilancia para prevenir los ataques a los sujetos protegidos, con la discreta actuación para no generar interferencias indebidas en situaciones coyunturales, es sin duda uno de los retos más difíciles a los que se enfrenta este tipo de reglas, pero es necesario abordarlo con la debida seriedad, porque no son pocos los casos en que la mejor intención termina convirtiéndose en la peor de la soluciones.

Los padres y encargados tienen que continuar con la facultad de decidir el modo como ejercen, directamente o con el concurso de terceros, las acciones de protección.

La prevención en materia de salud física de los menores desde el vientre materno

A lo largo del proyecto se apreciaba la intención del legislador de proteger al sujeto no nacido de enfermedades infecciosas que, en ciertas etapas del embarazo, podrían causar daños irreparables al feto. Se solicitó entonces incluir en esta protección las vacunas hoy disponibles contra la infección con el virus de la rubéola. Además, el Ministerio de la Protección Social está promoviendo la vacunación gratuita de todas las mujeres contra la hepatitis, enfermedad para la que también existen vacunas disponibles para los tipos A y B, exceptuando la hepatitis C, aunque infortunadamente aún no están incluidas en el plan obligatorio de salud (POS), y el VIH-SIDA, enfermedad para la que aún sin método de protección mediante vacunas, se puede evitar el contagio al menor no nacido mediante acciones médicas pertinentes durante el embarazo.

Por otra parte, en el medio existe un conjunto de sustancias llamadas teratógenos, que pueden causar alteraciones del desarrollo físico y mental del menor no nacido si la madre expone al feto a alguna de éstas. Entre los teratógenos existen algunos ampliamente disponibles y de fácil acceso para la madre gestante, como son el alcohol y las sustancias psicoactivas. Los daños fetales causados por estas sustancias, cuando la madre expone al feto a lo largo del embarazo a una o varias de ellas, incluyen desde el retardo del crecimiento y bajo peso, alteraciones que pueden afectar la capacidad de sobrevivir del recién nacido, hasta verdaderos defectos físicos como microcefalia (cabeza pequeña y el consecuente retardo mental), cardiopatías congénitas, y los llamados síndromes de dependencia a las sustancias psicoactivas con los riesgos derivados de muerte del recién nacido.

Las acciones de salud pública que se puedan tomar mediante esta Ley de la Infancia y la Adolescencia, a través de la intervención sobre este conjunto de enfermedades causadas por agentes externos al feto y a la madre –la mayor parte de ellas prevenibles mediante vacunas o la educación a la población–, contribuirá a que más colombianos nazcan sanos, evitando enfermedades de elevado costo social, personal, familiar, psicológico y económico

El derecho a la salud de los menores y su alcance

La Constitución Política otorga trato preferente y especial a los niños; de igual manera, los menores con discapacidad merecen un trato preferente y prevalente no sólo por su condición de menores de edad, sino por las particularidades de los padecimientos "sobreagregados" que colocan en riesgo su bienestar, las posibilidades de desarrollo y la capacidad de sobrevivir. El hecho de que la Ley de la Infancia y la Adolescencia otorgue un trato adecuado a los menores de edad con anomalías congénitas –defectos de nacimiento– o algún tipo de discapacidad, garantizando sus derechos a recibir atención, diagnóstico, tratamiento especializado y rehabilitación prevalente, no es más que el desarrollo de ese mandato constitucional en aras de lograr que los menores de edad que nacen con discapacidad o diferencia sean adecuadamente protegidos por el Estado con el objeto de garantizar sus derechos.

Lo anterior se fundamenta en los siguientes artículos de la Constitución Política: el artículo 2 que consagra "…como fin esencial del Estado servir a la

comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución". El artículo 5 que dispone que el Estado "…reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como la institución básica de la sociedad". El artículo 11 que establece "…que el derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte". El artículo 44 que consagra la protección de los derechos fundamentales de los niños a "…la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura …la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás". El artículo 47 donde se dispone que "…el Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran". Finalmente, el artículo 49 que establece que "…la atención en salud y saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud".

Las medidas de restablecimiento de derechos

Consideramos que si bien era importante una reforma al Código del Menor, resultaba más conveniente ajustar lo existente siempre y cuando se pusieran a disposición de todos los que de alguna manera intervienen directamente en los asuntos de menores las herramientas necesarias para lograr el restablecimiento eficaz de los derechos de los menores que han sido vulnerados.

Para lograr una verdadera materialización de los derechos de los menores, en caso de ser vulnerados, es indispensable que se consagren cánones procedimentales y se fijen competencias que garanticen la eficiencia de las medidas de protección que se llegaren a imponer.

El Código del Menor anterior traía un ordenado y cohesionado enfoque de las situaciones irregulares:

- El Título Primero iniciaba con su clasificación.
- El Título Segundo trataba del menor abandonado o en peligro físico o moral.

  - ✓ En su capítulo primero se consagraban las situaciones típicas, las obligaciones especiales de quienes tienen el deber de actuar en pro de garantizar la oportuna atención y toma de la correspondiente medida de protección, señalando además las sanciones en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas.
  - ✓ El capítulo segundo se refería a la competencia asignándosela al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a través del defensor de familia y a las reglas de procedimiento.
  - ✓ El capítulo tercero se ocupaba de las medidas de protección, indicando cuáles puede adoptar el funcionario competente, las condiciones y su modificación ante la ocurrencia de nuevos hechos o circunstancias.
  - ✓ El capítulo cuarto, en sus cinco secciones, pasaba a determinar la ejecución de las medidas de protección desarrollándolas integralmente: en primer lugar en cada sección se definía la amonestación, la colocación familiar, la atención al menor en un centro de protección especial y la adopción, para así señalar como operará su ejecución.

Ahora, si afirmamos que los preceptos de la actual legislación no han logrado una eficacia real esto no se debe exclusivamente a falta o insuficiencia en la regulación sino, más bien, a la ausencia de voluntad política y recursos presupuestales.

Por ello, y para la consecución del objetivo señalado al inicio de las reflexiones de este título, la solución no parecía ser la redenominación de las actuales "medidas de protección" por la de "medidas de restablecimiento"; en el mismo sentido, tampoco lo era el hecho de asignar otro nombre a medidas ya consagradas y variar la ubicación de las normas existentes que se conservan en el proyecto de ley.

Consideramos sí provechoso el ajuste hecho a algunas medidas pues realmente ello es lo que en nuestro criterio resulta más apropiado en beneficio de los menores involucrados en situaciones que ameritan la intervención en forma oportuna y eficaz por parte de la familia, la sociedad y el Estado.

Entonces, resulta primordial que exista una voluntad política real, y la asignación presupuestal adecuada, pues no de otra forma es posible que los propósitos de la reforma se materialicen, toda vez que, a manera de ejemplo, el artículo 352 del Decreto 2737 de 1989 consagró la obligación del gobierno de realizar las operaciones presupuestales y de crédito necesarias para la cumplida ejecución del Código, y es la hora que, transcurridos más de 16 años desde su entrada en vigencia, aún no se ha dado cumplimiento al artículo 295 por parte de los municipios de crear y poner en funcionamiento por lo menos una Comisaría de Familia, pese a que hace más de cinco años, a través de la Ley 575 de 2000 en su artículo 30, se reiteró tal obligación para los municipios en donde aún no existe, concediéndoles el término de un año –el que ya está más que vencido–; de esta manera, tenemos municipios que no cuentan con una Comisaría de Familia. De nuevo, en el artículo 84 de la ponencia para segundo debate se insiste en lo mismo, ¿será que con ello se logrará la tan anhelada creación y funcionamiento?

Por eso acogemos con gran preocupación el interrogante formulado por el sindicato del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en su intervención en la audiencia de participación ciudadana celebrada en el Congreso el 14 de septiembre de 2005 en el sentido de cuestionar cuáles son las verdaderas causas de la situación de la infancia en Colombia, esto es, si se trata de que el Código del Menor no garantiza sus derechos o si son las políticas sociales las que no lo hacen.

No obstante lo anterior, no puede dejarse de lado que algunas de las reformas introducidas en este apartado del Título I, capítulos II al IV, pueden incidir en el cumplimiento de los fines queridos por el legislador, y éstas son:

a) El reconocimiento de los hogares de paso.
b) Los hogares sustitutos.
c) La solidaridad familiar.
d) El desarrollo con mayor amplitud y precisión del artículo que regula lo referente al consentimiento para dar en adopción al hijo de quienes ejercen la patria potestad, haciendo claridad en cuanto a las implicaciones que tiene el que deba ser este civilmente válido e idóneo constitucionalmente.

   En el mismo tema del consentimiento para la adopción en protección a los padres menores de edad señala que debe dárseles previamente apoyo

psicosocial especializado para la toma de la decisión ya sea la de permanecer con su hijo o hija, o la de otorgar el consentimiento para su adopción.

e) La adopción internacional.
f) La actualización y relación aún más detallada de las funciones de las autoridades competentes.
g) La exigencia de calidades más especiales que las actuales para ser defensor de familia y comisario de familia.
h) La regulación de la restitución internacional de niños.

Asuntos penales

La responsabilidad penal de los menores de edad

El tema de cuál debe ser la respuesta jurídica ante las infracciones penales en que incurran los menores no podía, ni podrá, estar exenta de polémica, y en un foro académico como el convocado por el Observatorio Legislativo y de Opinión, conformado por expertos en diversas disciplinas, difícilmente podría esperarse un consenso sobre un asunto tan delicado y de impacto social. Si bien el grueso del grupo se inclinó por considerar que la propuesta de los redactores del proyecto de Ley de la Infancia y Adolescencia era conveniente, en el sentido de reducir la edad para hacer imputables a los menores, no faltaron las voces que defendían el mantener al menor como inimputable, con argumentos serios y sustentos científicos poderosos, por lo que aquí se incluyen los resúmenes argumentales de ambas posiciones, empezando por aquella que refleja la postura mayoritaria propuesta por los profesores en el campo del derecho penal, y a continuación la exposición de la profesora Sonia Martínez Rujana, ex directora del ICBF, cuyo conocimiento e interés en el tema son incuestionables.

Posición mayoritaria del grupo de trabajo que defiende la disminución de la edad para la responsabilidad penal

Es importante hacer una revisión de algunos conceptos centrales en la comprensión de la responsabilidad que corresponde a los menores por infringir las disposiciones de la ley penal.

¿Es responsable penalmente el menor de 18 años?

Uno de los temas sobre los cuales existe acuerdo doctrinario, respaldado por los tratados internacionales, la ley y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, es precisamente que los menores infractores de la ley penal son responsables ante ésta a través de un sistema específico y diferente de responsabilidad. Los puntos de divergencia giran en torno a determinar si realmente pueden ser considerados como inimputables en el sentido técnico de la expresión, y también sobre los límites de las edades, tanto para considerar sus conductas totalmente irrelevantes para el derecho penal, o para estimarlas relevantes pero con un tratamiento diferenciado del de los mayores.

El siguiente escrito pretende presentar una posición sobre las dos cuestiones planteadas.

La inimputabilidad de los menores de edad

Son inimputables aquellas personas que carecen de capacidad de culpabilidad por cuanto, como lo señala el Código Penal en su artículo 33, al momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no tienen capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, por inmadurez psicológica o trastorno mental.

La inimputabilidad se presenta cuando falla alguno de los extremos expuestos en la ley, o sea, cuando está ausente la capacidad de comprender la ilicitud del hecho, o cuando existiendo esta no capacidad, hay autodeterminación.

El Código del Menor anterior, en su artículo 165, señala expresamente que para todos los efectos se considera penalmente inimputable al menor de 18 años. Por su parte, la doctrina nacional y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en las sentencias C-817 de 1999, C-203 de 2005, reiterando abundante jurisprudencia, de igual forma consideran inimputable al menor de 18 años.

Con dicha interpretación se asume desde un punto de vista técnico que los menores no ejecutan conductas punibles en el sentido de lo expuesto en la norma rectora consagrada en el artículo 9 del Código Penal, como quiera que al ser inimputables, sus conductas carecen de culpabilidad ya que no es posible hacer un juicio individual de reproche a aquella persona que no comprende la ilicitud de su conducta o no puede determinarse de acuerdo con dicha capacidad.

El menor de 18 años no será jurídicamente culpable, su hecho constituye un injusto típico pero no delictivo; en tal sentido, la declaración de responsabilidad del juez no tiene un carácter penal sino que busca rehabilitar y reinsertar el menor a la sociedad.

No obstante la Corte Constitucional, en sentencia del 6 de mayo de 1993, señaló que existen dos clases de hechos punibles: el realizado por el sujeto imputable que surge como conducta típica, antijurídica y culpable, y el hecho punible realizado por el sujeto inimputable que surge como conducta típica y antijurídica pero no culpable.

En conclusión, para el Código del Menor y para el desarrollo de la jurisprudencia, los menores de 18 años son inimputables, y tienen responsabilidad penal sujeta a los principios de especificidad y de diferenciación, con una orientación educativa, rehabilitadora y protectora.

Toma de posición

Ante las posibles contradicciones que técnicamente se pueden presentar en el entendido de que los menores ejecutan conductas punibles pero sin culpabilidad, y que al existir responsabilidad objetiva en frente de ellos únicamente se verifica la realización de un injusto típico, pero que excepcionalmente se analizan elementos estructurales del moderno juicio de culpabilidad, como actuar fuera de toda coacción, fuerza mayor o caso fortuito, o incluso la posibilidad de conocimiento de la antijuridicidad del hecho, sería más conveniente adoptar los modelos alemán o italiano que consideran que los menores que superan el tope de edad fijado para ellos (14 años) y que son menores de 18, serán considerados penalmente responsables si al momento de actuar podían comprender la ilicitud del hecho y comportarse de acuerdo con esa comprensión. En este caso no hablamos de una presunción de pleno derecho de inimputabilidad, sino de que los menores son considerados imputables, siempre que tengan capacidad de comprensión y autodeterminación.

Observemos cómo el Código Penal, en su artículo 33, ya no menciona tajantemente como inimputables a los menores de 18 años, sino que dice que están sometidos al sistema de responsabilidad penal juvenil.

Desde este punto de vista se puede obviar la separación expuesta en el proyecto en el Senado, entre menores de 18 años pero mayores de 16, que plantearía una nueva clasificación con presunciones legales, que no permite el análisis de las circunstancias en el caso en concreto.

Lo que se sugiere es que no exista presunción de inimputabilidad sino que frente a cada menor, dependiendo de su desarrollo cognitivo y demás circunstancias, se le puedan aplicar algunas medidas especiales pero que plantean un mejor tratamiento dada la gravedad del hecho y la imputación personal de la conducta antijurídica.

Existirían, según lo planteado, unos menores de 18 años y mayores de 12 que, dadas sus condiciones particulares puedan ser considerados inimputables y frente a los cuales su conducta será típica y jurídica pero no culpable, y otros en las mismas edades que por su capacidad de comprender la ilicitud de sus conductas y de determinarse de acuerdo con ellas, ejecutan actos típicos, antijurídicos y culpables, pero no punibles, ya que por razones de prevención político-criminal son sujetos de procesos especiales con finalidades educativas, protectoras y rehabilitadoras. De tal forma que no generalizamos considerando a todos inimputables de pleno derecho, pero podemos tener en cuenta la realidad de que la educación, el desarrollo de los medios de comunicación y las oportunidades proporcionan a los menores una más rápida capacidad de comprender la ilicitud o licitud de sus acciones.

La determinación de las edades

La determinación de las edades es una tarea que corresponde a cada legislador en particular, como quiera que no existe una norma de carácter internacional o constitucional en el plano interno que señale cuál debe ser la edad para considerar a un menor irresponsable penalmente o sujeto del régimen de responsabilidad penal de los menores. En Colombia, unificando criterios en materia civil y penal, se considera que los menores de 12 años no responden penalmente, y que los menores entre 12 y 18 años son sujetos del sistema penal respectivo.

El tema de la "mayoría de edad penal", o edad mínima para efectos de atribución de responsabilidad penal a los menores, es estudiado por algunos instrumentos internacionales, y su estudio es retomado por la Corte Constitucional en la sentencia C-203 de 2005.

Así por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Colombia mediante Ley 74 de 1968, en su artículo 6.5 establece que "no se impondrá la pena de muerte por delitos cometidos por personas de menos de 18 años de edad"; el artículo 10.3, referente al régimen penitenciario, establece que "los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica".

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada mediante Ley 16 de 1972, se refiere a la situación de menores de edad responsables de haber violado la ley penal en el artículo 4.5, "no se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad..."; y el artículo 5.5 establece que "cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento".

En la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas se discutieron las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores, conocidas como Reglas de Beijing, y las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad. Según reseña la Corte Constitucional, se trata de estándares mínimos que reflejan, en conjunto, las diversas garantías que el ordenamiento internacional de los derechos humanos reconoce a los menores de edad, y que son plenamente compatibles con las disposiciones constitucionales sobre derechos fundamentales de los niños, y han sido acogidas en múltiples oportunidades por la jurisprudencia constitucional.[2]

Como lo mencionamos, no existe un instrumento internacional que establezca los topes de edades, y ellos deben ser adecuados por el legislador teniendo en cuenta las circunstancias sociales y culturales del respectivo país. Como quiera que no se conoce un estudio empírico e interdisciplinario que demuestre científicamente que los menores de 14 años no poseen capacidad de discernir el contenido de lo lícito y lo ilícito, y de autodeterminarse de acuerdo con ese conocimiento, y lo mismo ocurre con los mayores de 16 y menores de

[2] Ver, por ejemplo, las sentencias C-019 de 1993, M. P. Ciro Angarita Barón; C-817 de 1999, M. P. Carlos Gaviria Díaz, y C-839 de 2001, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

18 años, no se justifica ni con argumentos de validez ni de autoridad el cambio legislativo sugerido, y por ello sería más adecuado mantener los topes señalados en el actual Código Penal.

En efecto, el tratamiento internacional en la regla 4.1 de Beijing, establece:

> En los sistemas jurídicos que reconozcan el concepto de la mayoría de edad penal con respecto a los menores, su comienzo no deberá fijarse a una edad demasiado temprana habida cuenta de las circunstancias que acompañan la madurez emocional, mental e intelectual. ...la edad mínima a efectos de responsabilidad penal varía considerablemente en función de factores históricos y culturales. ...si el comienzo de la mayoría de edad penal se fija a una edad demasiado temprana o si no se establece edad mínima alguna, el concepto de responsabilidad perdería todo sentido.

Así mismo, la Regla 2.2 señala:

> …Cabe señalar que las reglas disponen expresamente que corresponderá a cada sistema jurídico nacional fijar las edades mínima y máxima a estos efectos, respetando así cabalmente los sistemas económico, social, político, cultural y jurídico de los Estados miembros. Ello significa que la noción de «menor» se aplicará a jóvenes de edades muy diferentes, edades que van de los 7 años hasta los 18 años o más. Dicha flexibilidad parece inevitable en vista de la diversidad de sistemas jurídicos nacionales, tanto más cuanto que no restringe los efectos de las Reglas mínimas.

De la orientación de las definiciones relacionadas con los menores, tendientes a evitar la estigmatización del menor

Algunas de las modernas tendencias criminológicas presentan una ruptura del denominado paradigma del consenso para implementar el del conflicto, que presupone que la conducta delictiva es creada en gran media por los mecanismos de control social formal que definen selectivamente qué conductas serán consideradas delictivas y a quiénes se les debe etiquetar como delincuentes;

todo a través de ceremonias de estigmatización (procesos penales) que culminan por crear en la psiquis del individuo la conciencia de que realmente es una persona desviada. Si ello ocurre con los adultos, semejante proceso se puede presentar con los menores, por lo cual se sugiere no utilizar expresiones como "delincuentes", sustituyéndolas por expresiones como infractores de la ley penal, o señalar que ellos no cometen delitos, sino conductas consideradas delictivas por la ley penal.

Posición de quienes defendieron en el grupo mantener la inimputabilidad penal de los menores

Es importante reflexionar sobre el entorno familiar y social de los menores que generalmente infringen las normas penales, en su mayoría pertenecientes a los estratos marginados de la sociedad. De hecho, podemos decir que la historia de la mayoría de los niños y jóvenes que delinquen corre paralela a la de su abandono o maltrato.

No podemos olvidar que los niños y jóvenes son las principales víctimas dentro de la población colombiana marginada, con las necesidades básicas insatisfechas, y sin el goce de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política, en el anterior Código del Menor, en las leyes y en los tratados internacionales; tales derechos, como el derecho a la libertad, a la educación, al respeto, a la dignidad, a tener una familia, deben ser garantizados o restaurados.

Tal desprotección los hace muy atractivos, entre otros, como objetos de explotación sexual desde la más temprana edad, especialmente en la pornografía, prostitución y trata de personas; como objetos de explotación económica o en el mundo del rebusque, dado que su condición de mano de obra barata los convierte en seres más vulnerables al mundo de la delincuencia como medio para sobrevivir ante las pocas o inexistentes alternativas que la sociedad les ofrece. Algunos expertos en el trabajo de calle, con quienes hemos compartido experiencias a lo largo de los años, afirman que con las circunstancias vividas por ellos, las mayores cicatrices que quedan tienen que ver con el aspecto afectivo, el desarraigo, el desamor, la desatención, la desesperanza aprendida y el sentido de no pertenencia.

Los principios que debe materializar el proyecto de ley

Por la obligación que tiene el Estado de proteger el interés superior del menor (art. 20, CP),[3] se debe instar a los jueces y funcionarios administrativos a tener en cuenta los usos y las costumbres propios del medio social y cultural en que el menor se desenvuelve habitualmente (art. 22, Código del Menor), para que un proyecto de ley como el del objeto de estudio aborde el tema penal desde una perspectiva de responsabilidad social, ajustada a la realidad que viven los menores infractores.

En este aspecto, al evaluar el proyecto se puede preguntar hasta dónde se ha estudiado cuidadosamente la capacidad del Estado, dentro del ordenamiento jurídico vigente, para responder a su obligación de proteger el interés superior del menor infractor, y si las instituciones creadas para tal fin han tenido realmente en cuenta la situación del menor antes, durante y después de salir de las instituciones que se han creado con este fin.

Pareciera que en el proyecto de ley, los objetivos de las normas protectoras pasaran a un segundo lugar para privilegiar a las de carácter restrictivo, represivo y carente del componente preventivo, especial, que estipula el Código del Menor vigente (art. 22),[4] sin que medie como eje central de toda la política

---

[3] Vale la pena resaltar las siguientes citas de dos sentencias de los doctores Eduardo Cifuentes Muñoz y Ciro Angarita Barón, que ilustran la prevalencia del interés superior del menor en nuestra Constitución Política:

"En el otorgamiento de este estatus especialísimo del menor seguramente se han tomado en consideración las necesidades específicas de protección derivadas de su falta de madurez física y mental –debilidad–, y la trascendencia de promover decididamente su crecimiento, bienestar y pleno desarrollo de su personalidad. Como el niño no sabe ni puede pedir, la Constitución autoriza a todos a que pidan por él; como el niño no puede hacer que sus derechos se impongan cuando entren en conflicto con los de los demás, la Constitución define directamente su prevalencia". Corte Constitucional, sentencia C-041 del 3 de febrero de 1994, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

"El Código del Menor reconoce que el interés superior del menor habrá de prevalecer sobre toda otra consideración y constituye guía ineludible para la aplicación de sus normas … constituye su razón de ser, la cual debe prevalecer por sobre toda otra consideración en las labores propias de los funcionarios encargados de aplicarlo … el artículo 44 de la Constitución Política concede un tratamiento jurídico privilegiado … un detallado catálogo de derechos fundamentales y las obligaciones de la sociedad y el Estado frente a ellos". Corte Constitucional, sentencia C-019 del 25 de enero de 1993, M. P. Ciro Angarita Barón.

[4] Artículo 22. Interpretación de las Normas. "... la interpretación de las normas contenidas en el presente Código deberá hacerse teniendo en cuenta que su finalidad es la protección del menor ..."

protectora una perspectiva pedagógica dentro de un ambiente acogedor, de afecto, libertad y trabajo productivo para los menores, con la cual se garantice que los derechos de los niños no se queden en letra muerta, y olvidando que los jóvenes son seres humanos en formación y desarrollo.

Una mirada hacia atrás. La experiencia previa a la expedición del Código del Menor

Expedir un nuevo código sin evaluar la experiencia de veinte años a partir de la Ley 75 de 1968, que en su artículo 48 redujo la edad penal de los 18 a los 16 años, y creó los pabellones de menores de las cárceles, hasta la expedición del Decreto 2737 de 1989, sería tanto como retroceder 37 años, haciendo más gravosa la situación de los menores infractores. Se estarían desconociendo los avances normativos y los beneficios que trajo consigo el Código del Menor que, tras estudiar los efectos negativos de reducir la edad penal, volvió a consagrar la mayoría de edad a los 18 años.

Vale la pena entonces también evaluar la eficacia que han tenido los comités técnicos interdisciplinarios existentes, y el enfoque con que éstos deben abordar el problema. En otras palabras, el énfasis del trabajo con los menores infractores debe ser más preventivo y educativo, orientado a su rehabilitación, reeducación y resocialización, estudiando sus condiciones socioeconómicas, el tipo de familia y nivel de educación que tienen.

Sería importante investigar cuántos pasaron por los pabellones 16-18, y cuántos "reincidieron", entre otros, pues hasta el momento no se conocen cifras que permitan diseñar políticas eficaces ajustadas a la realidad. También en este punto se deben evaluar las experiencias educativas de larga trayectoria en la investigación en este campo, y que tienen reconocimiento internacional por su rigor profesional y su eficiencia en el tratamiento de jóvenes víctimas del flagelo social, tales como la del padre Javier de Nicoló, el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron), los Terciarios Capuchinos y la Fundación Luis Amigó, entre otros.

Este tipo de investigación es la que permitiría revelar sus verdaderas necesidades con diagnósticos probados a lo largo de los años sobre la educación y reeducación, tales como que sin libertad y sin crear lazos afectivos no es posible cambiar la conducta de los jóvenes infractores.

El menor infractor es víctima, no responsable, y por tanto debe mantenerse la inimputabilidad para los menores de 18 años, como lo consagraba el Código anterior. El menor infractor, al igual que el menor en el conflicto armado, debe ser tratado como la víctima de una sociedad que no le brinda oportunidades, ni protege a los vulnerables de la violencia social, materializada en el desplazamiento y la marginalidad, y de una familia casi inexistente en donde el afecto es precario o es reemplazado por el abandono o maltrato.

Solamente en casos excepcionales se podría considerar la imputabilidad de los menores desde los 16 años, y tratarse en un establecimiento abierto, distante de las ciudades, dirigido por educadores y demás profesionales expertos en este campo, utilizando las experiencias existentes ya citadas, y teniendo siempre como eje central una pedagogía dirigida a garantizar el interés superior y el derecho prevalente de nuestros niños y jóvenes.

Asuntos procesales[5]

En cuanto a los inspectores de policía

Se propuso unificar la redacción de los artículos que le otorgan competencia subsidiaria al inspector de policía en aquellos municipios en donde no haya ni defensor ni comisario de familia, salvo la atinente a la declaratoria de adoptabilidad la cual, por expresa disposición del inciso final del artículo 95, "corresponde exclusivamente al defensor de familia".

Estas expresas consagraciones legales en lo que respecta a las facultades del inspector de policía le cierran el paso a eventuales criterios discriminatorios acerca de lo que él puede o no puede hacer; evitan que se aleguen nulidades o se planteen innecesarios conflictos amparados en una pretendida falta de competencia y, sobre todo, ponen en contacto directo e inmediato a los justiciables con los derechos que el Código les reconoce, pues todos sabemos que existe un amplio número de poblaciones en las que la única autoridad administrativa que representa al Estado son los mencionados funcionarios.

---

[5] Los números de los artículos referenciados en este aparte corresponden a la numeración del proyecto de ley original. Sin embargo, en el capítulo de "Observaciones particulares", los artículos figuran conforme a la numeración determinada en el texto final de la Ley.

Adicionalmente, el que a los inspectores de policía se les otorgue la facultad de conocer acerca de los reconocimientos voluntarios de paternidad extramatrimonial, en ningún momento puede considerarse como una herejía bajo el prurito de que se trata de un aspecto que tiene que ver con el estado civil, toda vez que ese paradigma tradicional que le atribuía pronunciamientos de esta naturaleza sólo a los jueces, no sólo ha dado lugar a que por esa vía se sacrifique el derecho de muchas personas a conocer su verdadera filiación, sino que además –y por fortuna– está en camino de franca reconsideración normativa, en la medida en que ya existen leyes como la 962 de 2005, que otorga a los notarios la prerrogativa de tramitar procesos de divorcio por mutuo acuerdo de los cónyuges; junto con la Ley 979 del mismo año, que permite a los compañeros permanentes declarar la existencia de la unión marital de hecho que hubiere surgido entre ellos, elevando tal manifestación a escritura pública.

En cuanto al cómputo de términos

Aunque de antaño ya estaban regulados en el artículo 4 del Código de Procedimiento Civil (CPC), el artículo 228 de la Carta amplió los alcances de esa disposición al señalar que: "…Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado". Por ello, en presencia de términos legales que tienen esa connotación, es decir, que son de naturaleza procesal, resulta imperativo acudir al artículo 121 del Código de Procedimiento Civil, que nos dice que, salvo los referidos en meses y años, los cuales se contarán conforme al calendario, los expresados en días tienen que ser hábiles ya que en ese evento "no se tomarán en cuenta los de vacancia judicial, ni aquellos en que por cualquier circunstancia permanezca cerrado el despacho".

Siendo así, no resulta adecuado que en el proyecto se rompa ese esquema y se entre a establecer que la audiencia de conciliación debe efectuarse "dentro de los diez días *calendario* siguientes al conocimiento de los hechos"; o que "el funcionario correrá traslado por cinco días *calendario* a las demás personas interesadas … para que se pronuncien y aporten las pruebas que deseen hacer valer".

Alterar el mecanismo del cómputo de términos, máxime cuando se está discutiendo la presentación de un Código General del Proceso, es obrar en abierta e injustificada oposición a todo un sistema legal que ya ha decantado

la correcta inteligencia de esta figura, por lo que nada justifica que se introduzca una alteración en este sentido. En consecuencia, frente a este tópico opinamos que las respectivas normas deben prescindir del vocablo "calendario", puesto que si contabilizamos días para el ejercicio de un determinado acto procesal, éstos tienen que ser siempre hábiles, especialmente porque se trata de actividades que se surten ante diversos despachos que no trabajan algunos días de la semana.

En cuanto al traslado y el recurso de revisión

Se advierte una serie de incoherencias en el texto de los incisos 2 y 3 del artículo 97, que en aras de la brevedad de este escrito precisaremos así:

a) No se sabe exactamente acerca de qué le van a correr "traslado por cinco días calendario a las demás personas interesadas o implicadas…" en aquellos casos en los que "haya fracasado el intento de conciliación, o transcurrido el plazo previsto en el inciso anterior sin haberse realizado la audiencia, y cuando se trate de asuntos que no la admitan".

   Desde luego que hay claridad acerca del motivo por el que les corren traslado: para que se pronuncien y aporten las pruebas que deseen hacer valer. Sin embargo, lo que no goza de igual diafanidad es: ¿de qué les corren traslado? Ciertamente, ante la ambigüedad de la norma surge el interrogante de si el mencionado traslado es de la solicitud de conciliación que hubiere formulado una cualquiera de las personas habilitadas para ello; o de la providencia en virtud de la cual el funcionario ante el que se inició la actuación avocó el conocimiento del asunto.

   Pese a que en principio pudiera parecer que esta observación no es más que una nimiedad, conociendo cuál va a ser su ámbito de aplicación, y por quiénes (eventualmente comisarios e inspectores de policía), no está demás concretar ese aspecto indicando sin lugar a dudas qué determinación es la que será objeto de publicidad a través del comentado medio.

b) De análoga manera a lo que ocurre con el tratamiento que se da a los términos legales, el proyecto inicial también incurre en otra impropiedad en lo que concierne a las notificaciones y a la forma en que queda ejecutoriada una providencia que ha sido expedida en el transcurso de una audiencia o diligencia.

Para corroborar este aserto, basta tener presente que un proveído dictado en desarrollo de una audiencia queda notificado en estrados al decir del artículo 325 del C PC, y de ahí que mal puede intentarse su impugnación con posterioridad a ese momento, pues ya habrá adquirido firmeza. Por ende, constituye un desatino de la norma que se glosa, el que se diga que el funcionario: "… decretará las pruebas que estime necesarias, fijará audiencia para practicarlas con sujeción a las reglas del procedimiento civil y en ella fallará mediante resolución susceptible de reposición"; y a continuación se consigne que: "Este recurso deberá interponerse verbalmente en la audiencia o por escrito presentado dentro de los cinco días calendario siguientes…"

Como se habrá advertido, este precepto crea un híbrido al mezclar indebidamente y en forma simultánea el sistema de notificaciones que es propio del que se aplica en los estrados, con aquél que impera para las providencias que han sido expedidas por escrito, lo que a todas luces resulta antitécnico desde la perspectiva del derecho procesal.

c) No obstante que no lo dice en forma explícita sino que se vale de una eventual "revisión del fallo", en el fondo lo que contempla el inciso 3 del artículo 97 es un recurso de apelación disfrazado, puesto que la denominada "revisión" sólo es procedente cuando las partes o el Ministerio Público lo soliciten "con expresión de las razones en que se funda la inconformidad".

Así las cosas, se estima que esa determinación no debe ser objeto de ningún tipo de recursos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, o si, a pesar de todo se insiste en ello, entonces se sugiere que sin ambages se consigne que estamos en presencia de la alzada y no de ninguna revisión. De ser así, en este último caso la apelación tendría que interponerse, bien fuera como principal o en subsidio de la reposición, pero en una u otra hipótesis antes de que se cierre la diligencia, precisamente para evitar que la decisión allí tomada adquiera ejecutoria.

En cuanto a la fijación de cuota alimentaria

Por supuesto que estamos analizando una codificación que gira alrededor de unos derechos superiores, como son los de los niños; con todo, ello no obsta para que también se tengan que respetar los de los adultos, lo cual parece que se

quisiera obviar con cánones legales como los del numeral 2 del artículo 108, que permiten que un funcionario administrativo fije una cuota provisional de alimentos cuando se desconozca la dirección en donde puede recibir notificaciones el obligado a suministrarlos.

Esta apreciación se formula amparada en el texto de la citada norma que, de no ser matizada, de seguro dará lugar a que en no pocos casos se manifieste falsamente desconocer el lugar de ubicación del alimentante, con el único propósito de obtener que se señale una cuota provisional, y luego, prevalido de ese documento, se acuda a iniciar el ejecutivo de rigor.

¿Qué podría hacerse para evitar que se consuma una situación como la planteada? Pues sencillamente mantener incólume el artículo 137 del actual Decreto 2737 de 1989, que sobre este particular y en términos muy precisos dispone:

"Artículo 137. Si citada (a conciliación) en dos oportunidades la persona señalada como obligada a suministrar alimentos al menor no compareciere, *habiéndosele dado a conocer el contenido de la petición*, o si fracasare la conciliación, el funcionario fijará prudencial y provisionalmente los alimentos.

El auto que señale la cuota provisional prestará mérito ejecutivo" (énfasis agregado).

Ahora bien, ¿y qué habría que hacer si en verdad se desconoce el paradero del alimentante y por esa razón no es posible provocar un acuerdo conciliado? Simplemente acudir –como ocurre hoy en día– ante el juez de familia a formular la demanda de fijación de alimentos; vincular al demandado a través de curador *ad litem* y solicitar, desde el acto introductorio del proceso, que se fijen unos alimentos provisionales. (De hecho el artículo 148 del Decreto 2737 de 1989 faculta al operador judicial para que al admitir la demanda, oficiosamente ordene que se den alimentos provisionales, si el libelo viene acompañado de prueba siquiera sumaria de la capacidad económica del demandado.)

En conclusión, se estima que el hecho de que durante la conciliación extrajudicial se pueda fijar cuota provisional de alimentos a espaldas del alimentante y con la simple afirmación de que así se hizo porque se desconocía el sitio en donde él recibiría notificaciones, vulnera los derechos del potencial obligado, en la medida en que el artículo 29 de la CP exige el debido proceso para toda clase de actuaciones, sean éstas judiciales o administrativas, lo que a su

vez lleva inmersa la garantía de tener que ser escuchado siempre, bien sea en forma personal o por conducto de curador ad litem.

En cuanto al procedimiento judicial

a) El artículo 118 que le atribuye competencia al juez civil municipal está repetido dos veces, por lo que será menester efectuar la correspondiente corrección.

b) En el inciso 2 del artículo 121 (que vendría a ser el 120 si no hubiera mediado el citado yerro), se regula un tema referido a que el juez deberá pronunciarse "sobre todas las situaciones establecidas en el proceso (…), aunque no hubieren sido alegadas por las partes".

   Esta norma, que le da tratamiento de unidad material al conflicto y evita una respuesta segregada por parte de la administración de justicia, en el fondo lo que hace es modificar –positivamente– el artículo 305 del C PC, pues éste condiciona el contenido de las sentencias al principio de la congruencia en relación con la causa, las pretensiones y los hechos ventilados dentro de la litis.

   Aun así, no sobraría hacer más explícita esta circunstancia debido a que, por un lado, en la práctica forense judicial ya se ha entronizado esta limitante de la congruencia, al extremo de que forma parte del imaginario colectivo de los aplicadores del derecho; y, por el otro, en razón a que el numeral 3º del artículo 82 del CPC faculta la acumulación objetiva de pretensiones, siempre y cuando todas ellas *puedan tramitarse por el mismo procedimiento.*

   Por consiguiente, en una controversia en la que los contendientes judiciales discutan en torno a la fijación de alimentos, el juzgador estaría facultado para extender su fallo a aspectos diversos, tales como la tenencia y custodia del menor, la dirección del hogar y el ejercicio de la patria potestad, pues todas estas vicisitudes se evacuan por el *proceso verbal sumario.* Sin embargo, y aquí está el punto sobre el que se llama la atención, ese mismo juez quizás podría tener dificultades para decidir sobre la privación o la suspensión de la patria potestad, no obstante estar probados los hechos, como quiera que estos dos últimos puntos se dilucidan mediante el *proceso verbal de mayor y menor cuantía.*

c) El artículo 131 sobre alimentos es inconsistente cuando dice que "En el auto que corre traslado de la demanda o del informe del defensor de familia, el juez fijará cuota provisional de alimentos…", porque el numeral 2 del artículo 108

estatuye que si no se puede convocar a una conciliación extrajudicial (por el desconocimiento de la ubicación del alimentante), entonces el funcionario "fijará cuota provisional de alimentos, elaborará informe que suplirá la demanda y lo remitirá al juez de familia para que inicie el respectivo proceso".

Como se desprende de lo transcrito, la inconsistencia radica en que el informe que le envía el defensor de familia al juez ya debe ir acompañado de la cuota provisional de alimentos (art. 108), y de ahí que no se entienda que más adelante el artículo 131 diga que, pese a la existencia previa de dicho informe, sea el juez quien tenga que fijarla.

Otro asunto que tendría que ser objeto de incorporación en el proyecto es la posibilidad de que la presunción acerca de que el demandado devenga al menos un salario mínimo legal, se extienda a la fijación de alimentos provisionales, esto es, aquellos que se fijan desde la admisión de la demanda, de tal suerte que, ante la ausencia de prueba, el juez no tenga que esperar hasta el momento de fallar para establecer la "solvencia económica del alimentante … tomando en cuenta su patrimonio, posición social, costumbres …", etc.

En cuanto a las medidas cautelares

Haciendo un paralelo con los fueros que se conjugan para determinar la competencia por el factor territorial, uno de los cuales es el concurrente, no a elección del demandante sino sucesivamente o, lo que lo mismo, uno a falta de otro, el artículo 132 del proyecto consagra una situación similar al permitir que primero se intente el embargo del salario del demandado, y sólo cuando esto no sea posible, se acuda al embargo de otra clase de bienes.

Lamentablemente, esta segunda opción quedó redactada en términos un tanto confusos, y todo porque en alguna parte del numeral 2 de ese artículo se dijo que "el juez podrá decretar medidas cautelares sobre los bienes muebles o de los otros derechos", cuando habría sido suficiente con que se expresara que: "…el juez podrá decretar medidas cautelares *sobre ellos*, en cantidad suficiente…"

En cuanto a la legitimación especial

De acuerdo con el artículo 137, y con el "propósito de hacer efectivo el pago de la cuota alimentaria", se faculta a una serie de personas para que promuevan

"los procesos que sean necesarios, inclusive los encaminados a la revocación o declaración de la simulación de actos de disposición de bienes del alimentante".

La medida es sana y naturalmente se comparte; sin embargo, hay que hacer claridad en cuanto a que esta legitimación no supone que se puedan acumular pretensiones con base en lo previsto en el artículo 121 del proyecto, ni que el juez resulte competente para que de oficio y en la sentencia se pronuncie sobre revocaciones o actos de simulación del demandado.

La razón de este aserto estriba en que la declaratoria de simulación de un acto o contrato se tramita por la vía del proceso ordinario, mientras que lo atinente al pago de obligaciones alimentarias tiene previsto el camino del proceso verbal sumario, si es un declarativo, o el del ejecutivo de mínima cuantía, cuando de "hacer efectivo el pago de la cuota alimentaria" se trata.

En consecuencia, no sólo no es de recibo intentar acumular pretensiones de esta índole por perentoria prohibición del artículo 82 del CPC sino que, de hacerlo, se configuraría la causal de nulidad insaneable del numeral 4 del artículo 140, *ibídem,* al darle a la eventual demanda un trámite distinto del que legalmente le correspondería.

Observaciones particulares

Luego de analizado por el grupo el proyecto con el debido detalle, se procedió a formular las observaciones que ameritaban cada uno de los artículos del proyecto, entre las cuales podemos mencionar las siguientes, con su correspondiente sustentación:

El término niño, para definir al menor

Aun cuando no consideramos el término niño (niña) como el más apropiado para referirse al menor de edad, ya que tiende a ser utilizado para los menores en sus primeras etapas de vida –de hecho el Código Civil lo reserva para los menores de 7 años–, este es el término adoptado en la Convención Americana de los Derechos Humanos (Ley 16/72) y la Convención Internacional sobre los derechos del niño (Ley 12/91). De igual manera, el término adolescente no es muy apropiado en derecho y se sugería eliminarlo. (Esta observación no fue atendida y se prefirió definir la edad de niño hasta los 12 años y adolescente de allí hasta la mayoría de edad, art. 3 de la Ley.)

Perspectiva de género

Es importante para la sociedad que los menores puedan determinar su condición sexual y, en especial, que sean conscientes de que esta situación no es gravosa ni ventajosa para su desenvolvimiento en el medio social, pero se insistió en que la perspectiva de género debe ir acompasada con el desarrollo físico e intelectual del menor, según su medio cultural. (Esta observación no fue atendida.)

La protección del menor y las tendencias culturales

El grupo fue unánime en considerar que el aspecto cultural no podía ser un impedimento para la aplicación de las reglas protectivas contenidas en el Código del Menor, sin perjuicio de respetar el "modelo" cultural propio de cada comunidad. (Esta observación dio lugar a la reforma del respectivo artículo de proyecto, art. 13 de la Ley.)

Los deberes del menor

Como una de las modalidades propias de la protección del menor se sugirió incluir que no está relevado del cumplimiento de los deberes, no sólo los paterno-filiales de que trata el artículo 250 del Código Civil, sino también los deberes cívicos y sociales propios de su estadio de desarrollo, acentuando de esta forma el carácter pedagógico de la norma. (Esta observación fue acogida.)

El cuidado personal y la protección como derechos

El artículo 17 del proyecto, referente al derecho a la vida y a la calidad de vida, al referirse a esta última hacía mención exclusiva a los elementos materiales para conservarla, pero olvidaba ese elemento esencial de promover la "conservación" de la vida, correspondiente al cuidado y protección. (Esta observación fue acogida, art. 15 del Código.)

La prevención en salud como obligación

Dentro de los deberes de los padres se indicó la necesidad de tomar las medidas sanitarias preventivas primarias como la vacunación, y evitar su contacto con aquellas sustancias que pueden poner en riesgo la salud mental o física del menor –drogas psicoactivas, humo de tabaco, etc.– (Esta observación fue acogida, núm. 14, art. 20 del Código.)

El derecho a tener una familia

Siguiendo los lineamientos trazados por la Corte Constitucional en recientes providencias, se sugirió agregar al inciso final del artículo 21 del proyecto un texto que dejara claro que la situación económica de la familia no puede considerarse en sí misma causal de abandono que dé lugar a las medidas propias de protección como la colocación familiar o la adopción. En esto se tuvo en cuenta que el afecto y la protección familiar son el soporte del menor, de modo que la falta de recursos económicos tendrá que ser suplida por quien corresponda en los términos de la ley. (Esta observación fue acogida, art. 22 del Código.)

El cuidado personal del menor

Aunque parece una observación obvia, se propuso consagrar expresamente la necesidad del cuidado personal del menor por parte de padres y custodios, toda vez

que es frecuente, incluso en familias pudientes, hacer lo que se ha llamado un *abandono impropio*, consistente en dejar el menor a su propia suerte, a pesar de estar integrado en un hogar donde en cierta medida tiene los elementos necesarios de subsistencia, pero carece de la atención personal directa, lo que es tan perjudicial como el propio abandono. (Esta observación fue acogida, art. 23 del Código.)

El derecho de alimentos y la capacidad económica

El grupo recomendó agregar al final del artículo sobre alimentos la frase "de acuerdo con la capacidad económica del alimentante", con lo cual se pretendía corregir una inequidad presente en el artículo 413 del Código Civil, que relaciona los alimentos congruos con la situación social del alimentario, lo cual da lugar a que hijos de un mismo padre puedan recibir un trato diferencial,[6] según una inaceptable estratificación social. (Esta observación, que en un principio no fue acogida, por insistencia del Grupo sobre su necesidad terminó haciendo parte del hoy artículo 24.)

El menor en establecimientos públicos

De los sitios donde socializan los menores que más riesgos tienen, no sólo en lo relacionado con el desarrollo psicosocial sino físico, es en aquellos lugares de esparcimiento, especialmente donde es común que se realicen actividades que inciden negativamente en los hábitos que deben adoptar los menores (en otras palabras, donde el negocio está ligado a los vicios) o se presentan espectáculos públicos masivos. Se consideró prudente llamar la atención de autoridades, custodios y organizadores para que tomen las medidas necesarias a fin de evitar los riesgos. (Esta observación fue acogida, pars. 1° y 2°, art. del Código.)

Derecho a la participación

La participación de los menores en el concierto social se consideró de la mayor trascendencia como medio de adaptación y promoción sana del comportamiento social de los menores, de modo que se sugirió que se precisara que se extiende a

[6] Lo que sin duda es inconstitucional si se atiene a las reglas establecidas en los artículos 13 y 42 de la Carta.

todos los campos de interacción colectiva a nivel familiar, educacional y político en todos sus órdenes. (Esta observación fue acogida, art. 31 del Código.)

La libertad de asociación y sus restricciones

Aun cuando es adecuado consagrar el derecho de asociación amplio como se indicaba en el proyecto de ley, fue conveniente hacer notar que estas asociaciones pueden tener incidencia directa o indirecta en la conducta de los menores y afectarlos negativamente; no son pocas las veces que estas formas de reunión se prestan para dirigir actuaciones de los menores (inmaduros, como su nombre lo indica) de una manera perniciosa (que no necesariamente ilícita), de modo que se consideró necesario que los padres y acudientes tuvieran la posibilidad de valorar su conveniencia y la facultad de impedir esos derechos cuando se afecten los intereses del menor. (Inicialmente no se encontró eco a esta observación, pero a insistencia del grupo quedó consagrada en el art. 32 del Código.)

Derecho a la información

Sin negar la importancia de este derecho, no se puede pasar por alto que hoy hay demasiados elementos de información a la mano del menor que atentan de manera grave contra su condición, por lo que se sugirió que se dejara claro que este derecho no es absoluto, y sólo en la medida en que sea adecuado al desarrollo del menor, éste podrá acceder a esas informaciones (Esta observación fue acogida, art. 34 del Código.)

Actividades no laborales remuneradas

El menor no debe trabajar a menos que se trate de circunstancias muy especiales (algo que no se cumple realmente en nuestro medio), y por eso estuvimos de acuerdo en que el proyecto de Código aumentara la edad a la cual se puede desempeñar el menor como empleado. Sin embargo, hicimos notar que en este mundo moderno existe un considerable número de actividades que el menor puede desempeñar sin que se trate de una situación laboral propiamente dicha (expresión artística, publicidad, deporte, habilidades manuales o físicas), y que generan, además de satisfacciones personales, considerables recursos económicos, y los menores pueden ser expuestos a una gran presión para desarrollarlos,

equiparable a los más exigentes trabajos, llegándose a constituir en algunos casos de explotación del menor. (El Código, con un sano criterio, permitió esas actividades pero limitándolas en su duración a 14 horas semanales, y previó el permiso previo de las autoridades laborales, art. 35 del Código.)

El menor con deficiencia cognitiva

La protección deficiente consagrada en la norma no incluía el derecho a recibir la atención sanitaria, terapéutica y social necesarias para permitir su desenvolvimiento de manera adecuada. Los discapacitados cognitivos pueden ser excluidos de estas ayudas, no tanto como una forma de abandono, sino precisamente porque padres y acudientes consideran como una forma de protección evitarle las molestias que pueden ocasionarle estas actividades (los aíslan para protegerlos), sin tener en cuenta que ésta es una actitud perjudicial. (Esta observación fue acogida, núm. 2, art. 36 del Código.)

El término jurídico para las cargas de la familia

El grupo propuso sustituir el término "obligación" con el que se denominan las actuaciones de los miembros de la sociedad a favor de los menores, por el de deber, tanto para conservar la unidad de denominación con la que trae el Código Civil, como porque en estricto derecho, la obligación es aquella carga jurídica que puede ser pagada, y en general exigida mediante proceso ejecutivo, mientras que el deber que no se cumple da origen a diversas consecuencias jurídicas diferentes a buscar la satisfacción del interés del acreedor como pueden ser las conminaciones acompañadas de cauciones o multas, la pérdida de ventajas, etc. (Esta observación no fue acogida por el legislador que prefirió la denominación obligación.)

Detección y atención en materia de daños del menor

Las instituciones educativas son los medios más apropiados para que la sociedad pueda enterarse de la problemática del menor, por lo que se propuso no sólo que fueran un vehículo de información sino que intentaran, en la medida de sus posibilidades, ser parte de la solución para lo cual se sugería que tuviera el deber de "tomar las medidas a su alcance para combatir estas situaciones, brindar

apoyo y orientación a los afectados; sin perjuicio de su obligación de denunciar ante las autoridades competentes los hechos constitutivos de delito e infracción a los deberes establecidos en esta ley". (Esta observación no fue acogida.)

El asunto de las sanciones

El proyecto proscribe las sanciones crueles, humillantes o degradantes, haciendo especial énfasis en la prohibición del castigo físico o denigrante, lo que el grupo consideró obvio e innecesario toda vez que se trata de un ataque directo a la persona, con carácter delictual, y por ello sugirió que se aprovechara este artículo para indicar que las sanciones contempladas en los regímenes disciplinarios deberían ser "moderadas y correlativas a las condiciones de edad o desarrollo de los menores y con carácter eminentemente pedagógico", que es precisamente donde fallan estas sanciones, que muchas veces tienen connotación de agresión, así no lleguen a ser degradantes. (Esta observación no se atendió y se prefirió el texto original.)

Restablecimiento de los derechos

Se propuso modificar la redacción para consagrar la obligación de restablecer los derechos de los menores en una forma más concreta. Esta observación no fue acogida. (Art. 50 de la Ley.)

Obligación del restablecimiento de los derechos

Se propuso ajustar la redacción tornando un poco más imperativas las obligaciones respecto del restablecimiento de derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. (Esta observación no fue aceptada, art. 51 de la Ley.)

Verificación de la garantía de derechos en las medidas de restablecimiento

La observación giró en torno a la conveniencia de establecer en forma concreta los aspectos que se deben verificar respecto de las garantías de los derechos en el marco de las medidas de restablecimiento. (Esta observación fue acogida, art. 52 de la Ley.)

Medidas de restablecimiento de derechos

Se sugirieron ajustes tanto en la denominación de las medidas de restablecimiento como en su orden, con el fin de guardar concordancia entre la medida y su desarrollo posterior a lo largo del capítulo. Así mismo, se solicitó incluir dentro de estas medidas el tema relacionado con la solidaridad familiar. (Estas observaciones no fueron acogidas, art. 53 de la Ley.)

Amonestación

Se propuso incluir un parágrafo, que corresponde al artículo 67 de la anterior legislación sobre el menor (Decreto 2737/89), con el fin de señalar el procedimiento para hacer efectiva la medida de amonestación. (Esta sugerencia no fue acogida, art. 54 de la Ley.)

Ubicación en hogar de paso

Se propuso modificar la redacción con el ánimo de precisar que durante el término de duración de esta medida, lo que se debe decretar es otra de "restablecimiento de los derechos", no otra "medida de protección", pues con la Ley 1098/06 se eliminó la figura de "medidas de protección". (Esta observación no fue acogida, art. 57 de la Ley.)

Vinculación a programas de atención especializada para el restablecimiento de derechos vulnerados

Se propuso modificar la redacción con el fin de precisar que la protección requerida lo es para el menor que está por nacer, más que para la madre como tal, en atención a que se trata, precisamente, de la legislación integral sobre menores. (Esta sugerencia no fue acogida, art. 60 de la Ley.)

Adopción

Se propuso mantener la redacción del artículo 88 del Decreto 2737 de 1989, la cual, aunque es similar a la propuesta en el proyecto de ley, contiene expresiones que garantizan los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. (Esta propuesta fue acogida, art. 61 de la Ley.)

Procedencia de la adopción

Se propuso unificar en el artículo la adopción de menores de edad y de mayores de edad, que en el proyecto de ley se encontraba separada; así mismo, se propuso mantener la redacción del artículo 92 del Decreto 2737/89 por considerarla más adecuada. (En cuanto a mantener la redacción del artículo 92, se acogió la observación, mas no así en cuanto a la unificación de la regulación de la adopción de los menores y mayores de edad, arts. 62 y 69 de la Ley.)

Efectos jurídicos de la adopción

Se propuso recoger en un solo artículo los efectos jurídicos de la adopción, con los siguientes ajustes: en el numeral 1, mantener la redacción del artículo 97 del Decreto 2737/89; en el numeral 2, dejar claro que los vínculos de parentesco que genera la adopción se extienden en líneas y grados a los consanguíneos, adoptivos y afines; se solicitó suprimir el numeral 3 por cuanto el carácter definitivo de la adopción ya se encontraba previsto en su definición; se sugirió redactar el numeral 4 en el mismo sentido del inciso segundo del artículo 97 del Decreto 2737/89; finalmente, se propuso mantener la redacción de los incisos 1 y 2 del artículo 98 del Decreto 2737/89, en los numerales 5 y 6. (Se acogió la propuesta, salvo lo relacionado con el numeral 6, art. 64 de la Ley.)

Requisitos para adoptar

Se propuso cambiar el orden previsto en el proyecto de ley respecto de las personas aptas para adoptar, con el fin de guardar el orden y la estructura del anterior Código del Menor (Decreto 2737/89). El proyecto reúne los artículos 89, 90 y 91 del anterior Código, incluyendo en forma expresa a los solteros como personas autorizadas para adoptar. En este sentido, se sugirió cambiar la numeración propuesta en el proyecto, para ubicar a los solteros en el último orden de personas aptas para tales efectos. (Esta observación no fue acogida, art. 68 de la Ley.)

Adopción de niños miembros de comunidades indígenas

Se propuso mantener las situaciones reguladas por el artículo 93 del Decreto 2737/89 con el fin de contar con una regulación integral en esta materia. (Esta observación no fue acogida, art. 70 de la Ley.)

Adopción internacional

Se propuso incluir un parágrafo en el que se consagre la posibilidad de suspender temporal o definitivamente las adopciones con países que no ofrezcan garantías para la protección de los niños, las niñas y los adolescentes. (La observación no fue acogida, art. 72 de la Ley.)

Aspectos procesales de la adopción

Se propuso mantener la regulación procesal contenida en los artículos 104 a 117 del anterior Código del Menor (Decreto 2737/89), la cual se consideró adecuada dada la importancia que tiene una medida de esta naturaleza, y en atención a que no se detectaron mayores inconvenientes en la aplicación durante los años de vigencia del citado Decreto. (La observación no fue acogida, arts. 124 a 126 de la Ley.)

Programa de adopción

Se propuso definir que por programas de adopción se entiende el conjunto de actividades tendientes a brindar hogar definitivo a un menor y comprende, principalmente, la recepción y el cuidado del menor, la selección de los eventuales adoptantes, y la presentación de la demanda respectiva, aspecto que se contemplaba en el artículo 118 del anterior Código del Menor. (Esta observación no fue acogida, art. 73 de la Ley.)

Participación del ICBF en las juntas directivas de las instituciones de adopción

Se consideró conveniente mantener la obligación prevista en el artículo 120 del anterior Código del Menor (Decreto 2737/89), en relación con la presencia de un representante del ICBF en las juntas directivas de las instituciones de adopción. (Esta observación fue acogida, par. 2 del art. 73 de la Ley.)

Aplicación del nuevo sistema penal acusatorio para adolescentes

El artículo 4, aplicado en concordancia con el artículo 231, tiene sentido en cuanto a las normas sustanciales que el proyecto establece, pues el objetivo es

mejorar el sistema de protección de los menores de 18 años. Sin embargo, no ocurre lo mismo en cuanto a las normas que en materia de procedimiento penal se consagran, pues éstas ordenan que el sistema con tendencia acusatoria se aplique en todo el territorio nacional, tres meses después de la promulgación de la ley. Este mandato de alguna manera va en contra de la Constitución y del principio de aplicación gradual del sistema acusatorio, lo que posiblemente conlleva consecuencias tales como un colapso del sistema, o la inaplicabilidad del mismo, si antes no se hace una precisión al respecto.

Por tanto, la sugerencia que se hizo fue introducir un inciso que consagre una excepción en cuanto a la aplicación de estos artículos sobre aquellas normas que regulen el procedimiento penal introducido mediante esta ley, teniendo en cuenta la conveniencia tanto económica como jurídica de su aplicación. (Esta observación fue atendida en el art. 216 del texto final en donde se consagró la aplicación gradual de dicho sistema.)

Autoridades competentes para el restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes

Consideramos importante hacer mención a la Fiscalía General de la Nación en el capítulo relacionado con las autoridades competentes para el restablecimiento de derechos, pues por mandato constitucional es obligación de esta entidad velar también por la protección a las víctimas. Y es aún más importante hacer dicha mención, considerando que los menores de edad habitualmente son víctimas de conductas delictivas que atentan gravemente contra su desarrollo e integridad; y en virtud de que la Fiscalía General de la Nación desempeña la actividad investigativa sobre los delitos, es significativo tenerla en cuenta como autoridad competente para el restablecimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes cuando son sujetos pasivos de esta conducta, actividad que se podrá realizar en conjunto con las demás autoridades enunciadas en el proyecto. (Esta observación no fue atendida, art. 11 de la Ley.)

Sistema de responsabilidad penal para adolescentes, niños y niñas víctimas de delitos

La redacción de éste lleva a interpretaciones erradas; si hacemos una lectura literal podemos inferir que se trata de la implementación de un sistema especial

para adolescentes, niños y niñas que, siendo víctimas de delitos, incurren en la comisión de los mismos. El título no hace una distinción clara acerca de las dos temáticas por tratar, las cuales serían el sistema de responsabilidad penal de los menores de 18 años y, a su vez, el sistema de protección de éstos como víctimas de delitos.

Por tanto, consideramos que el título debería tener una redacción más clara en cuanto a las dos situaciones diferentes que regula, las cuales son: el menor como delincuente y el menor como víctima. Por ello se sugirió redactar este título así: "*Sistema de responsabilidad penal para adolescentes, niños y niñas y su protección como víctimas de delitos".* De esta manera, este título introductorio evitaría cualquier problema futuro de interpretación, y de entrada clarificaría cuál es el tema que se debe regular. (Esta observación no fue atendida.)

Distinción entre el sistema de responsabilidad penal para adolescentes y para niños y niñas menores de 12 años

Consideramos de suma importancia hacer la distinción entre el sistema penal de "adolescentes", quienes son los que oscilan entre los 12 y los 18 años, y el sistema penal de los niños y las niñas, que de conformidad con el proyecto son los menores entre los 0 y los 12 años.

Lo anterior, en la medida en que como está redactado el aparte introductorio del artículo 148, éste no clarifica que el artículo contiene el sistema penal de niños y niñas menores de 12 años, simplemente se refiere a "Niños y niñas menores de doce (12) años", por lo cual se sugirió que, como acertadamente se hizo en el artículo 147 "Sistema de responsabilidad penal para adolescentes", el artículo 143 tenga un título introductoria, así: "*Sistema de responsabilidad penal para niños y niñas menores de doce años".* (Esta observación fue aceptada, haciendo la salvedad de que las edades presentadas en el proyecto inicial fueron modificadas en el trámite del Senado de la República, arts. 142 y 143 de la Ley.)

Testimonio de niños, niñas y adolescentes

Este artículo proscribe la declaración de todos los menores de 18 años (pues hace mención a niños, niñas y adolescentes) en casos que se adelanten contra

adultos, y sólo lo permite en presencia del defensor de familia con el cuestionario previamente enviado. Por su parte, el artículo 383 de la Ley 906, únicamente limita el testimonio del menor de doce años de la siguiente manera: no se le recibirá juramento y durante la diligencia, en la medida de lo posible, debe estar acompañado de su representante legal o de pariente mayor de edad. Así mismo, el juez, cuando lo considere conveniente por motivos razonables, podrá hacer la diligencia fuera de la sala, pero siempre con la presencia de las partes que interrogan y contrainterrogan, como si se tratara de un juicio público. La Ley 906 de 2004, no consagra una regulación especial para el adolescente entre los 12 y los 18 años, lo cual implica que se le aplica el régimen común de un testigo adulto.

Es evidente la regulación diferente implantada por cada una de las normas, y en virtud del principio de interpretación, por el que la norma posterior prevalece sobre la anterior, el artículo del presente proyecto estaría derogando tácitamente el artículo 383 de la Ley 906. (La observación fue acogida, art. 150 de la Ley.)

Designación del defensor desde el conocimiento de la noticia criminal

Se crea un problema en la aplicación de la norma, pues a una persona sólo le comunican que la están investigando hasta la formulación de la imputación, y el artículo ordena la presencia de un abogado defensor desde antes de esta imputación.

Las principales dificultades que se presentan son, en primer lugar, exceptuando el caso del artículo 267, ¿cómo hace un adolescente para saber que está siendo investigado si aún no le han informado tal situación mediante la formulación de la imputación, siendo que la norma obliga la presencia de un abogado defensor desde antes de ésta?; o por otro lado, ¿el sentido de la norma es precisamente hacer una excepción consistente en comunicar siempre al investigado, cuando éste sea adolescente, que está siendo investigado por las autoridades, aún antes de la audiencia de formulación de la imputación, y de tal forma podrá cumplir con este mandato designando o solicitando que le designen un defensor?

Éste es un tema de suma importancia debido a que consagra una nueva forma de efectuar la investigación, cual es informar al menor de 18 años de la

investigación en su contra, aun antes de realizarle la imputación. (Esta observación no fue atendida, art. 154 de la Ley.)

Principio de inmediación de la prueba

Respecto a este artículo se consideró que su redacción era muy amplia y podría generar problemas de aplicación práctica. En primer lugar, al consagrar un principio de inmediación diferente al de inmediación consagrado para el sistema acusatorio, en el artículo 16 de la Ley 906. En esta última tal principio se refiere a que sólo se estimará como prueba aquella que sea producida en el juicio oral y público, expuesta ante el juez de conocimiento y con la debida oportunidad de controvertirla por las partes. Por tanto, se desvirtúa el alcance inicial del principio de inmediación.

En segundo lugar, la norma no es clara al referirse al funcionario judicial, pues no específica si es el juez (atendiendo presupuestos del Sistema Mixto), o si es el juez de control de garantías, o el juez de conocimiento, o el fiscal, o la policía judicial, siendo esta última la que ejerce las actividades de indagación en la posible comisión de una conducta punible.

Se sugirió que este principio se consagre en similar sentido que el artículo 16 de la Ley 906, y se limite a la inmediación de la prueba, y por otro lado, consagre un inciso adicional en el cual se cumpla con el fin inicial de esta norma. (La observación fue parcialmente acogida en cuanto a que la aplicación del principio está referida a la etapa del juicio. No fue aceptada en relación con la precisión que solicitamos respecto del término "funcionario judicial", art. 155 de la Ley.)

Cambio de la denominación de la sentencia anticipada

En este artículo hay que tener en cuenta un elemento muy importante y es que si la ley quiere acoplar el procedimiento penal de adolescentes, niños y niñas al sistema acusatorio, no debe olvidar que la figura de la "sentencia anticipada" desapareció con tal denominación con la Ley 906.

Ahora las figuras que se asimilan a ésta, dependiendo de la etapa procesal, son: "el allanamiento a los hechos", cuando acepta su responsabilidad antes o durante la audiencia de formulación de la imputación, y "el allanamiento a los cargos", cuando lo hace durante o después de la audiencia de formulación de la acusación, hasta antes que sea interrogado sobre su responsabilidad en el juicio oral.

Por tanto, sugerimos que el término "sentencia anticipada" fuera cambiado por el de "el allanamiento a los hechos o a los cargos", pues esto iría de acuerdo con el sentido de la norma y, a su vez, con el del sistema acusatorio. (Esta observación fue atendida, art. 157 de la Ley.)

Integración del sistema de responsabilidad penal para adolescentes

La expresión "jueces penales municipales quienes se ocuparán de la dirección de las investigaciones" es completamente antitécnica e inconstitucional, pues la Constitución Política consagra en su artículo 250 que el ente al que le corresponde la dirección de las investigaciones es la Fiscalía General de la Nación.

Así mismo, en los sistemas acusatorios es muy clara la división de roles entre cada uno de los sujetos procesales, correspondiendo a la Fiscalía dirigir y realizar la investigación, al juez realizar una valoración probatoria garantizando de antemano los derechos fundamentales e impartir un juicio de valor respecto de la responsabilidad penal del investigado, y a la defensa velar por la protección y realización de justicia en pro de los derechos del investigado.

Obsérvese que la Ley 906 de 2004 es muy clara en esta división de funciones, y establece en su artículo 200 que le compete a la Fiscalía "realizar la indagación e investigación de los hechos que revistan características de un delito". (La observación fue atendida en el sentido de señalar que es la Fiscalía la encargada de la dirección de estas investigaciones, art. 163 de la Ley.)

Clasificación de los delitos

Se formularon observaciones en el sentido de que se pretendía consagrar modificaciones al sistema penal general por la vía de la creación de tres grados de delito, por lo cual se consideró que era pertinente atenerse a lo dispuesto en la legislación penal vigente. Adicionalmente, se pretendía la inclusión de un nuevo tipo penal, frente a lo cual se sugirió la misma propuesta de mantener lo establecido en la legislación actual. (Esta observación fue atendida en el sentido de eliminar los artículos que consagraban los nuevos grados y tipos de delitos.)

Incorporación de la mediación en el trámite del proceso penal

Se obvia una figura implementada con el sistema acusatorio, que es la mediación. Ésta es también un mecanismo propio de la justicia restaurativa, que propende por una solución alternativa del conflicto, y consiste en que un tercero neutral, ya sea un particular o un servidor público, traten de lograr conversaciones entre la víctima y el imputado o acusado, con el fin de solucionar el conflicto.

Esta figura podrá referirse a la reparación, la restitución o el resarcimiento de perjuicios; la realización o abstención de determinada conducta; la prestación de un servicio a la comunidad, o el pedimento de disculpas.

Consideramos que es una figura acorde con la reforma que se intenta implementar y con los derechos de los menores de edad. (Esta observación no fue atendida, art. 174 de la Ley.)

Prescripción de la acción penal

Se está consagrando una norma especial que, en cierto sentido, modifica lo establecido en el artículo 83 del Código Penal, el cual establece que la acción penal prescribe "un término igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso podrá ser inferior a cinco (5) años, ni excederá de veinte (20) años". (La observación fue atendida en el sentido de eliminar el tema de la prescripción para ciertas categorías de derechos, las cuales también se sugirió eliminar; en ese orden de ideas se mantiene la prescripción como forma de extinción de la acción penal en general, como lo establece la legislación actual.)

Juez de ejecución de las medidas

En el proyecto se pretendía la creación de jueces para la ejecución de las medidas decretadas contra menores. Al respecto se consideró que resultaba pertinente mantener la competencia para tales efectos en los jueces que en el sistema penal general ya se habían creado a fin de atender las medidas contra todo tipo de personas y en los diferentes niveles (municipal, circuito, etc.). (La observación fue acogida, suprimiéndose el artículo.)

Internamiento preventivo

La situación regulada en el artículo alusivo a este tema se conoce en el estatuto procesal para mayores como "medidas de aseguramiento", siendo una de éstas la detención preventiva. Así mismo, también consagra otro tipo de medidas diferentes a la detención preventiva, que consideramos se deben tener en cuenta con el propósito de que esa situación sea más justa y ponderada dependiendo de factores objetivos, como son el tipo de delito, y factores subjetivos como los consagrados en los numerales de este artículo del proyecto. Tales medidas son aquellas que fueron introducidas por la Ley 906 en su artículo 307. (La observación no se acogió, art. 181 de la Ley.)

Imposición de la sanción

El proyecto consagraba que "las medidas o medida definitiva se impondrán en la audiencia de juicio oral que debe ser continua y privada, so pena de nulidad". Esto implica que una vez culminado el juicio oral, inmediatamente el juez debe emitir el sentido del fallo y la sentencia definitiva que contenga la medida o medidas que se deben imponer al menor.

Al respecto se consideró que se trataba de una disposición contraria al procedimiento penal implementado con la Ley 906 de 2004. Las etapas de juicio, pronunciación acerca del sentido del fallo y de emisión de la sentencia no pueden confundirse, y más aún tratándose de un proceso oral. Está bien que se vele por la celeridad del proceso, sin embargo, no pueden consagrarse normas de imposible aplicación práctica, o que conlleven una aplicación con violación de derechos fundamentales.

La distinción entre estas etapas la hacemos en virtud de que el legislador, en pro del debido proceso, de la realización de la justicia y del restablecimiento del derecho, ha proporcionado al juez términos razonables para escuchar el debate oral del caso, posteriormente, estudiar los elementos del mismo, y emitir el sentido del fallo, y finalmente, otro término adicional para pronunciarse de forma definitiva sobre la sanción por imponer considerando una serie de factores objetivos y subjetivos.

Esto también se hizo en virtud del derecho de defensa y de las víctimas, pues en el intervalo de cada una de estas etapas estos sujetos procesales pueden

intervenir para velar por sus derechos. Por ejemplo, una vez emitido el sentido del fallo, y en caso de que éste sea condenatorio, las partes pueden hacer algunas consideraciones respecto a la pena que se debe imponer (por ejemplo, consideraciones respecto a circunstancias individuales, familiares, sociales, acerca del modo de vivir, y antecedentes de quien ha sido condenado). (Esta observación fue acogida, art. 189 de la Ley.)

Detención en flagrancia

Este artículo consagra un procedimiento especial que contraría los preceptos establecidos para un proceso penal acusatorio, y más aún, los deberes consagrados por la Constitución Política para la Fiscalía y el juez de Control de Garantías. Corresponde a la primera realizar la investigación y ejercer la acusación ante el juez de conocimiento, mientras que al segundo le corresponde velar por los derechos fundamentales durante la investigación.

Mediante esta norma, al consagrar que "el juez resolverá en la misma audiencia si convoca directamente a juicio oral dentro de los 10 días hábiles siguientes", se está facultando al juez de control de garantías para decidir de fondo sobre el asunto investigado, algo que está por fuera de su órbita funcional, pues sólo corresponde al juez de conocimiento decidir sobre estos asuntos.

Así mismo, consideramos que se están obviando importantes etapas que permiten la realización de los derechos de defensa y contradicción del investigado. Estas etapas son: la formulación de la imputación y la formulación de la acusación. (Esta observación no fue acogida, art. 191.)

Competencia subsidiaria del inspector de policía

Se propuso unificar la redacción de los artículos que le otorgan competencia subsidiaria al inspector de policía en aquellos municipios en donde no haya defensor ni comisario de familia salvo la atinente a la declaratoria de adoptabilidad la cual, por expresa disposición, "corresponde exclusivamente al defensor de familia".

En efecto, así como se hace un especial énfasis en que el Código cobija a los "niños, niñas y adolescentes", también conviene que se reitere la aludida competencia en cabeza de los inspectores.

A nuestro juicio estas expresas consagraciones legales en lo que respecta a las facultades del inspector de policía le cierran el paso a eventuales criterios discriminatorios acerca de lo que él puede o no puede hacer; evitan que se aleguen nulidades o se planteen innecesarios conflictos amparados en una pretendida falta de competencia y, sobre todo, ponen en contacto directo e inmediato a los justiciables con los derechos que el Código les reconoce, pues todos sabemos que existe un amplio número de poblaciones en las que la única autoridad administrativa que representa al Estado son los mencionados funcionarios. (Esta observación fue acogida, arts. 99, 100, 104 y 109 de la Ley.)

Cómputo de términos

Resulta imperativo acudir al artículo 121 del Código de Procedimiento Civil que nos dice que, salvo los referidos en meses y años, los cuales se contarán conforme al calendario, los expresados en días tienen que ser hábiles ya que en ese evento "no se tomarán en cuenta los de vacancia judicial, ni aquellos en que por cualquier circunstancia permanezca cerrado el despacho". En tal sentido se propone que la redacción se refiera exclusivamente a días, los cuales según la norma citada corresponden a días hábiles. (La observación fue aceptada, art. 100 de la Ley.)

Reglas generales del trámite administrativo

Se propuso realizar algunos ajustes al texto del artículo 100 de la Ley que permitan dar mayor claridad al trámite que allí se regula, en los siguientes aspectos:

- Es importante precisar que el traslado que se corre a las personas implicadas en el procedimiento administrativo está referido a la solicitud de conciliación que hubiere formulado una cualquiera de las personas habilitadas para ello.
- En igual sentido, se debe precisar lo concerniente a las notificaciones y a la forma en que queda ejecutoriada una providencia que ha sido expedida en el transcurso de una audiencia o diligencia, con el fin de evitar que se cree un híbrido al mezclar indebidamente y en forma simultánea el sistema de notificaciones que es propio del que se aplica en los estrados, con aquél que impera para las providencias que han sido expedidas por escrito.

- No obstante que no lo dice en forma explícita sino que se vale de una eventual "revisión del fallo", en el fondo lo que contempla el inciso 3 del artículo 97 es un recurso de apelación disfrazado, puesto que la denominada "revisión" sólo es procedente cuando las partes o el Ministerio Público lo soliciten "con expresión de las razones en que se funda la inconformidad". (La observación fue acogida, art. 100 de la Ley.)

Fijación de la cuota provisional de alimentos en el procedimiento administrativo

Se requiere ajustar el texto del artículo con el fin de garantizar los derechos procesales de los intervinientes, para lo cual estimamos que el hecho de que durante la conciliación extrajudicial se pueda fijar cuota provisional de alimentos a espaldas del alimentante, y con la simple afirmación de que así se hizo porque se desconocía el sitio en donde él recibiría notificaciones, vulnera los derechos del potencial obligado, en la medida en que el artículo 29 de la CP exige el debido proceso para toda clase de actuaciones, sean éstas judiciales o administrativas, lo que a su vez lleva inmersa la garantía de tener que ser escuchado siempre, bien sea en forma personal o por conducto de curador ad litem. (Esta observación fue acogida, núm. 2, art. 111 de la Ley.)

Acumulación de pretensiones y pronunciamiento oficioso

Si bien se comparte la forma en que se regula la acumulación de pretensiones en el trámite judicial, resultaba necesario para garantizar la correcta aplicación de esta norma precisar que dicha acumulación procede siempre que el juez sea competente para conocer de todas las pretensiones, al tiempo que se debe señalar que el mismo puede pronunciarse sobre todas las situaciones que comprometan los intereses de los menores siempre y cuando éstas puedan tramitarse por el mismo procedimiento.

Por consiguiente, en una controversia en la que los contendientes judiciales discutan en torno a la fijación de alimentos, el juzgador estaría facultado para extender su fallo a aspectos diversos, tales como la tenencia y custodia del menor, la dirección del hogar y el ejercicio de la patria potestad, pues todas estas

vicisitudes se evacuan por el proceso verbal sumario. Sin embargo, ese mismo juez quizás podría tener dificultades para decidir sobre la privación o la suspensión de la patria potestad, no obstante estar probados los hechos, como quiera que éstos dos últimos puntos se dilucidan mediante el proceso verbal de mayor y menor cuantía. (Esta observación fue acogida en el art. 122 de la Ley.)

Fijación de la cuota provisional de alimentos en el procedimiento judicial

El artículo que regula la fijación de alimentos en el procedimiento judicial es inconsistente cuando dice que "En el auto que corre traslado de la demanda o del informe del defensor de familia, el juez fijará cuota provisional de alimentos…", porque en norma anterior se estatuye que si no se puede convocar a una conciliación extrajudicial (por el desconocimiento de la ubicación del alimentante), entonces el funcionario "fijará cuota provisional de alimentos, elaborará informe que suplirá la demanda y lo remitirá al juez de familia para que inicie el respectivo proceso".

Como se desprende de lo transcrito, la inconsistencia radica en que el informe que le envía el defensor de familia al juez ya debe ir acompañado de la cuota provisional de alimentos (art. 111), y de ahí que no se entienda que más adelante el artículo 129 diga que, pese a la existencia previa de dicho informe, sea el juez quien tenga que fijarla. (La observación no fue acogida, art. 129 de la Ley.)

Medidas especiales para el cumplimiento de la obligación alimentaria

Haciendo un paralelo con los fueros que se conjugan para determinar la competencia por el factor territorial, uno de los cuales es el concurrente, no a elección del demandante sino sucesivamente o, lo que es lo mismo, uno a falta de otro, el artículo 130 del proyecto consagraba una situación similar al permitir que primero se intente el embargo del salario del demandado, y sólo cuando esto no sea posible, se acuda al embargo de otra clase de bienes.

Lamentablemente esta segunda opción quedó redactada en términos un tanto confusos, y todo porque en alguna parte del numeral 2 de ese artículo se dijo que "el juez podrá decretar medidas cautelares sobre los bienes muebles o de los otros derechos", por lo cual se propuso precisar la redacción en el sentido

de que el juez puede decretar las citadas medidas cautelares "sobre ellos". (Esta observación fue acogida, núm. 2, art. 130.)

Legitimación especial

De acuerdo con el artículo 135, y con el "propósito de hacer efectivo el pago de la cuota alimentaria", se faculta a una serie de personas para que promuevan "los procesos que sean necesarios, inclusive los encaminados a la revocación o declaración de la simulación de actos de disposición de bienes del alimentante".

Sin embargo, hay que hacer claridad en cuanto a que esta legitimación no supone que se puedan acumular pretensiones con base en lo previsto en el artículo 122 del proyecto, ni que el juez resulte competente para que de oficio y en la sentencia se pronuncie sobre revocaciones o actos de simulación del demandado.

La razón de este aserto estriba en que la declaratoria de simulación de un acto o contrato se tramita por la vía del proceso ordinario, mientras que lo atinente al pago de obligaciones alimentarias tiene previsto el camino del proceso verbal sumario, si es un declarativo, o el del ejecutivo de mínima cuantía, cuando de "hacer efectivo el pago de la cuota alimentaria" se trata.

En consecuencia, no sólo no es de recibo intentar acumular pretensiones de esta índole por perentoria prohibición del artículo 82 del CPC, sino que, de hacerlo, se configuraría la causal de nulidad insaneable del numeral 4º del artículo 140, *ibídem,* al darle a la eventual demanda un trámite distinto del que legalmente le correspondería. Para ello se propuso que en el artículo se precise claramente que se pueden promover los procesos que sean necesarios "ante los jueces competentes". (Esta observación fue acogida, art. 135 de la Ley.)

Anexos

Análisis de los antecedentes legislativos del nuevo Código de Infancia y Adolescencia

Revisión desde 1989 hasta 2006, de los proyectos de ley por medio de los cuales se intentó regular temas relacionados con la infancia y la adolescencia

A continuación se expone una relación de los proyectos de ley que fueron presentados al Congreso Nacional, y que procuraron la modificación o regulación de asuntos relacionados con la infancia y la adolescencia. En el cuadro siguiente se encuentra el número de radicación del proyecto de ley, la comisión constitucional en la que se tramitó, el autor de la iniciativa, la legislatura en la que se tramitó y el resultado final del trámite:

Relación de proyectos de ley 1989-1998

No. del Proyecto	Comisión en la que se tramitó	Título del proyecto	Autor del proyecto	Legislatura en la cual se tramitó el proyecto	Resultado del trámite
159/89	Comisión VII	Se prohíbe la fabricación, importación, distribución, venta y uso de juguetes bélicos.	Elvira Berrío de Jaramillo	1989	Archivado
04/91	Comisión VII	Se propone una reestructuración del ICBF.	Regina Betancourt	1992	Archivado
46/92	Comisión VI	Las escuelas, colegios, liceos, academias, institutos oficiales y privados sometidos a vigi-	Edgardo Vives Campo	1992	Archivado

Continúa

No. del Proyecto	Comisión en la que se tramitó	Título del proyecto	Autor del proyecto	Legislatura en la cual se tramitó el proyecto	Resultado del trámite
		lancia del Estado que requieren textos educativos para el cumplimiento de su misión, excluyendo universidades, centros de educación superior y formación tecnológica, deberían trabajar con los mismos textos escolares.			
88/92	Comisión VII	Se prohíbe la venta de alcohol, tabaco y drogas a menores de edad.	Claudia Rodríguez de Castellanos	1992	Archivado
284/93	Comisión VII	Se garantizan los derechos constitucionales a las mujeres embarazadas, niños menores de un año y a las personas de la tercera edad.	José Name Terán	1993	Archivado
342/93	Comisión VI	Creación del carné estudiantil para otorgar beneficios a los estudiantes, representados en descuentos en las distintas entidades en donde el Estado sea el dueño de ellas o aquellas que	Andrés Pastrana	1993	Archivado

Continúa

No. del Proyecto	Comisión en la que se tramitó	Título del proyecto	Autor del proyecto	Legislatura en la cual se tramitó el proyecto	Resultado del trámite
		sean de economía mixta.			
24/93	Comisión I	Se dictan normas respecto de los delitos contra la libertad y el poder sexual en menores.	Edgardo Vives Campo	1993	Archivado
43/93	Comisión VII	Se dictan normas sobre atención gratuita a niños menores de un año - asistencia médica gratuita en todas las instituciones que reciban aportes del Estado.	Edgardo Vives Campo	1993	Archivado
71/93	Comisión VII	Se destinan recursos de la venta de licor a la atención de mujeres indigentes embarazadas y sus hijos.	Samuel Moreno Rojas	1993	Archivado
73/93	Comisión VII	Se destinan rentas del IVA para la salud de los niños.	Daniel Villegas Díaz	1993	Archivado
150/93	Comisión VII	Se crea un Programa de acción nutricional en el territorio nacional.	Alberto Montoya Puyana	1993	Archivado
202/94	Comisión VI	Se desarrolla parcialmente el art. 216 de la CN, con el fin de regular las condiciones para la prestación del servicio militar.	Jorge Valencia, Jose Renan Trujillo. Carlos Otálora	1994	Archivado

Continúa

No. del Proyecto	Comisión en la que se tramitó	Título del proyecto	Autor del proyecto	Legislatura en la cual se tramitó el proyecto	Resultado del trámite
65/94	Comisión VII	Se crea el Consejo Nacional de la Juventud, consejos departamentales y municipales para establecer mecanismos de participación.	Jairo Clopatofsky - Juan Guillermo Ángel	1994	Archivado
138/94	Comisión VI	Por medio de la cual se fijan estímulos para todos los estudiantes del país.	Consuelo Durán de Mustafa	1994	Archivado
220/95	Comisión II	Se establece el servicio social obligatorio para los indígenas de Colombia.	Fabio Valencia Cossio	1995	Archivado
146/95	Comisión VII	Se crea el sistema de información del síndrome del niño maltratado y se crean mecanismos de prevención.	Consuelo Durán de Mustafa	1995	Archivado
245/96	Comisión II	Se establece complemento alimentario en los programas de educación preescolar y básica primaria.		1995	Archivado

Relación proyectos de ley 1999-2006

No. del Proyecto	Comisión en la que se tramitó	Título del proyecto	Autor del proyecto	Legislatura en la cual se tramitó el proyecto	Resultado del trámite
091/99 Senado - 132/01 Cámara	Comisión I	Por la cual se modifican el artículo 1 y el parágrafo 2 del artículo 4 de la Ley 258 de 1996, a fin de dar protección integral a la familia.	Piedad Córdoba	Periodo Legislativo 1999-2000	Archivado
056/00 Senado	Comisión VI	Por medio de la cual Se crean las Escuelas de Liderazgo para Mujeres.	María Cleofe Martínez	Periodo Legislativo 2000-2001	Archivado
127/01 Cámara	Comisión I	Por la cual se crea el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil.	Rómulo González Trujillo (Ministro de Justicia y del Derecho).	Periodo Legislativo 2001-2002	Archivado
132/01 Cámara	Comisión VI	Por medio de la cual se modifica el numeral 4 del artículo 23 de la Ley 115 de 1994 y adicionan 2 parágrafos. (Educación sobre consumo de alcohol, drogas, educación sexual, educación ética, valores humanos y derechos humanos obligatoria).	Samuel Ortegón Amaya	Periodo Legislativo 2001-2002	Archivado
180/01 Senado	Comisión I	Por medio de la cual se dictan normas para la protección y atención integral de los ni-	Rafael Orduz Medina	Periodo Legislativo 2001-2002	Archivado

Continúa

No. del Proyecto	Comisión en la que se tramitó	Título del proyecto	Autor del proyecto	Legislatura en la cual se tramitó el proyecto	Resultado del trámite
		ños, las niñas y los adolescentes reclutados u obligados a participar en hostilidades o acciones armadas o que se hayan desvinculado de los grupos armados que participen en el conflicto armado interno.			
031/02 Cámara	Comisión I	Por medio de la cual se modifica el primer apartado de la Sección Quinta del Decreto 2737 de 1989 (Código del Menor) artículos 101, 102 y 103.	Luis Enrique Moisés Salas	Periodo Legislativo 2002-2003	Archivado
119/02 Senado	Comisión VII	Por medio de la cual se protege la salud de los menores de edad y se dictan otras disposiciones.	Carlos García Orjuela y Ricardo Arias Mora	Periodo Legislativo 2002-2003	Archivado en Comisión
137/02 Senado	Comisión VII	Por la cual se expide el Código del Niño que sustituye el Decreto 2737 de 1989 (Código del Menor) y a los proyectos acumulados 119 de 2002 Senado y 197 de 2003 Senado.	Darío Martínez Betancur y José María Villanueva Ramírez	Periodo Legislativo 2002-2003	Archivado En Comisión

Continúa

No. del Proyecto	Comisión en la que se tramitó	Título del proyecto	Autor del proyecto	Legislatura en la cual se tramitó el proyecto	Resultado del trámite
40/03 Senado	Comisión VII	Por medio de la cual se modifica el artículo 89 del Decreto 2737 de 1989 (Código del Menor)	Leonor Serrano Camargo	Periodo Legislativo 2003-2004	Archivado en Comisión
128/03 Senado	Comisión VI	Por la cual se prohíbe toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de los productos de tabaco y se dictan otras disposiciones.	José Ramiro Luna Conde	Periodo Legislativo 2003-2004	Archivado
197/03 Senado	Comisión VII	Por medio de la cual se prohíbe la venta de cigarrillos y demás productos de tabaco, bebidas alcohólicas y juegos de suerte y azar a menores.	Dilian Toro de Caicedo, Carlos García Orjuela y Ricardo Arias Mora	Periodo Legislativo 2003-2004	Archivado
234/03 Cámara	Comisión I	Por medio de la cual se reforma el artículo 8 de la Ley 679 de 2001 en su numeral 4, "Por medio de la cual se expide un Estatuto para prevenir y contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores, en desarrollo del artículo 44 de la Constitución".	Luis Fernanado Duque García	Periodo Legislativo 2003-2004	Archivado

Continúa

No. del Proyecto	Comisión en la que se tramitó	Título del proyecto	Autor del proyecto	Legislatura en la cual se tramitó el proyecto	Resultado del trámite
32/04 Senado	Comisión I	Por medio de la cual se expide la Ley de Infancia y Adolescencia que deroga el Decreto 2737 de 1989 (Código del Menor).	Dieb Maloof, José María Villanueva, Darío Martínez y Gina Parody	Periodo Legislativo 2004-2005	Archivado en Comisión
090/04 Cámara	Comisión II	Por la cual se declara el 25 de marzo de cada año como Día del Niño por Nacer.		Periodo Legislativo 2004-2005	Archivado
323/05 Cámara - 05/04 Senado (acumulado con el 34/04 Senado - 116/04 Cámara y el 128/04 Senado)	Comisión I	Por medio de la cual se expide el Código de la Niñez y la Juventud, que subroga el Decreto 2737 de 1989 (Código del Menor)	Marino Paz Ospina y José María Imbett	Periodo Legislativo 2004-2005	Archivado
145/04 Senado	Comisión I	Por la cual se reforma el Código Penal para garantizar la protección sexual de los menores de edad, en lo concerniente a la agravación de penas contra la violencia y el abuso sexual a menores de edad y se dictan otras disposiciones.	Alexandra Moreno Piraquive	Periodo Legislativo 2004-2005	Archivado en Comisión a petición de la autora

Continúa

No. del Proyecto	Comisión en la que se tramitó	Título del proyecto	Autor del proyecto	Legislatura en la cual se tramitó el proyecto	Resultado del trámite
146/04 Senado	Comisión VII	Por medio de la cual se expiden normas para la prevención y atención integral del menor abusado sexualmente.	Alexandra Moreno Piraquive	Periodo Legislativo 2004-2005	Archivado
162/04 Cámara	Comisión I	Por medio de la cual se dictan medidas tendientes a erradicar los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales cometidos en menores de edad.	Gina María Parody	Periodo Legislativo 2004-2005	Archivado
402/05 Cámara - 183/04 Senado	Comisión I	Por la cual se reforma el Código Penal para garantizar la protección sexual de los menores de edad, en lo concerniente a la agravación de penas contra la violencia y el abuso sexual a menores de edad y se dictan otras disposiciones	Alexandra Piraquive	Periodo Legislativo 2004-2005	Archivado
227/04 Senado	Comisión VII	Por medio de la cual se prohíbe la venta de cigarrillos y demás productos de tabaco, de bebidas alcohólicas y de juegos de suerte y azar, y se dictan otras disposiciones	Dilian Francisca Toro Torres y Flor Modesta Gnecco	Periodo Legislativo 2004-2005	Archivado

Continúa

No. del Proyecto	Comisión en la que se tramitó	Título del proyecto	Autor del proyecto	Legislatura en la cual se tramitó el proyecto	Resultado del trámite
08/05 Senado	Comisión I	Por la cual se expiden normas para la prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual.	Alexandra Moreno Piraquive	Periodo Legislativo 2005-2006	Archivado en Comisión
097/05 Senado	Comisión I	Por la cual se modifica el artículo 211 del Código Penal Colombiano "Castración química para violadores reincidentes de menores de edad".	Carlos Moreno de Caro	Periodo Legislativo 2005-2006	Archivado en Comisión
062/05 Senado	Comisión VII	Por la cual se expiden normas para la prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual.	Alexandra Moreno Piraquive	Periodo Legislativo 2005-2006	Archivado
096/05 Cámara	Comisión I	Por medio de la cual se expide el Código de la Niñez y la Juventud, que subroga el Decreto 2737 de 1989 (Código del Menor).	Marino Paz Ospina y José María Imbett	Periodo Legislativo 2005-2006	Acumulado al PL 215 de 2006 Senado, 085 de 2005

Continúa

No. del Proyecto	Comisión en la que se tramitó	Título del proyecto	Autor del proyecto	Legislatura en la cual se tramitó el proyecto	Resultado del trámite
187/05 Senado	Comisión I	Por medio del cual se crea la adopción por vía notarial para los casos de embarazos no deseados, acceso carnal violento, acto sexual violento e inseminación artificial no consentida, y se dictan otras disposiciones.	José Ignacio Mesa Betancurt	Periodo Legislativo 2005-2006	Archivado en Comisión
214/05 Senado - 032/05 Cámara	Comisión I Senado	Por medio de la cual se eliminan los beneficios penales y subrogados para los delitos sexuales cometidos en menores de edad.	Nancy Patricia Gutiérrez, Gina Parody, Luis Fernando Velasco y Rafael Pardo Rueda	Periodo Legislativo 2005-2006	Pendiente segundo debate en Senado
240/05 Senado y 117/05 Cámara	Comisión VII	Por medio de la cual se prohíbe la venta de pegantes de contacto o compuesto de tolueno a menores de edad, habitantes de la calle, recicladores, basuriegos e indigentes.	Mario Paz Ospina	Periodo Legislativo 2005-2006	Pendiente ponencia primer debate en Senado
215/06 Senado - 085/05 Cámara	Comisión I	Por medio de la cual se expide la Ley para la Infancia y la Adolescencia, acumulado	Procurador general de la nación, defensor del pueblo,	Periodo Legislativo 2005-2006	Ley 1098 de 2006

Continúa

No. del Proyecto	Comisión en la que se tramitó	Título del proyecto	Autor del proyecto	Legislatura en la cual se tramitó el proyecto	Resultado del trámite
		con el Proyecto de Ley 96 de 2005 Cámara por medio de la cual se expide el Código de la Niñez y la Juventud, que subroga el Decreto 2737 de 1989, Código del Menor	Gina Parody, Claudia Blum y otros congresistas		
291/06 Senado - 119/05 Cámara	Comisión VII	Por medio de la cual se dictan normas para la creación del Sistema Único de Vacunación para los niños menores de cinco (5) años a cargo del Plan Obligatorio de Salud y el Programa Ampliado de Inmunización PAI.	Willinton Ortiz	Periodo Legislativo 2005-2006	Pendiente ponencia primer debate en Senado

Leyes sancionadas en temas relacionados con la infancia y la adolescencia desde el año 1989 hasta el año 2006

La actividad legislativa relacionada con la infancia y la adolescencia no sólo es la que se encuentra finalmente recogida en la ley recientemente aprobada. Por el contrario, encontramos a lo largo de los años múltiples disposiciones que tratan y regulan temas afines, las cuales presentamos en el siguiente cuadro. Allí encontrarán el número de la ley, la fecha de sanción presidencial, el número del *Diario Oficial* en el cual se publicó, el título y un descriptor con los temas de que se ocupa la ley:

No. Ley	Fecha de sanción presidencial (mm/dd/aa)	No. de *Diario Oficial* donde se encuentra publicada	Título de la ley	Descriptor
1008	01/23/06	46160	Por la cual se fijan algunas competencias y procedimientos para la aplicación de convenios internacionales en materia de niñez y de familia.	Competencias y procedimientos para la aplicación de convenios internacionales en materia de niñez y de familia.
985	08/29/05	46015	Por medio de la cual se adoptan medidas contra la trata de personas y normas para la atención y protección de las víctimas de la misma.	Adoptar medidas de prevención, protección y asistencia necesarias para garantizar el respeto de los derechos humanos de las víctimas y posibles víctimas de la trata de personas.
882	06/03/2004	45568	Por medio de la cual se modifica el artículo 229 de la Ley 599 de 2000.	Ley 599 de 2000 por la cual se expide el Código Penal en su artículo 229 que trata sobre violencia intrafamiliar.
880	01/21/04	45437	Por medio de la cual se aprueba la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, suscrita en Montevideo, Uruguay, el quince (15) de julio de mil novecientos ochenta y nueve (1989), en la Cuarta	Asegurar la pronta restitución de menores que tengan residencia habitual en uno de los Estados Parte y hayan sido trasladados ilegalmente desde cualquier Estado a un Estado Parte o que habiendo sido trasladados legalmente

Continúa

No. Ley	Fecha de sanción presidencial (mm/dd/aa)	No. de *Diario Oficial* donde se encuentra publicada	Título de la ley	Descriptor
			Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado.	hubieren sido retenidos ilegalmente.
833	07/14/03	45248	Por medio de la cual se aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, adoptado en Nueva York, el veinticinco (25) de mayo de dos mil (2000).	Adoptarán todas las medidas posibles para que ningún miembro de sus fuerzas armadas menor de 18 años participe directamente en hostilidades.
747	07/19/02	44872	Por medio de la cual se hacen unas reformas y adiciones al Código Penal (Ley 599 de 2000), se crea el tipo penal de trata de personas, y se dictan otras disposiciones.	Se crea el tipo penal de trata de personas y se dictan otras disposiciones.
724	12/30/01	44662	Por la cual se institucionaliza el Día de la Niñez y la Recreación, y se dictan otras disposiciones.	Por la cual se institucionaliza el Día de la Niñez y la Recreación, y se dictan otras disposiciones.
704	11/27/01	44628	Por medio de la cual se aprueba el Convenio 182 sobre la prohibición de las peores	Adoptar medidas inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y la eli-

Continúa

No. Ley	Fecha de sanción presidencial (mm/dd/aa)	No. de *Diario Oficial* donde se encuentra publicada	Título de la ley	Descriptor
			formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, adoptado por la Octogésima Séptima (87a.) Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Ginebra, Suiza, el diecisiete (17) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999).	minación de las peores formas de trabajo infantil.
679	08/04/2001	44509	Por medio de la cual se expide un estatuto para prevenir y contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores, en desarrollo del artículo 44 de la Constitución.	Artículo 44 de la Constitución que trata sobre los derechos fundamentales de los niños.
670	07/30/2001	44503	Por medio de la cual se desarrolla parcialmente el artículo 44 de la Constitución Política para garantizar la vida, la integridad física y la recreación del niño expuesto al riesgo por el manejo de artículos pirotécnicos o explosivos.	Artículo 44 de la Constitución que trata sobre los derechos fundamentales de los niños.

Continúa

No. Ley	Fecha de sanción presidencial (mm/dd/aa)	No. de *Diario Oficial* donde se encuentra publicada	Título de la ley	Descriptor
620	10/27/00	44207	Por medio de la cual se aprueba la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, suscrita en Montevideo, Uruguay, el quince (15) de julio de mil novecientos ochenta y nueve (1989), en la Cuarta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado.	Asegurar la pronta restitución de menores que tengan residencia habitual en uno de los Estados Parte. (fue declarada inexequible, sentencia C-951/01).
575	02/11/2000	43889	Por medio de la cual se reforma parcialmente la Ley 294 de 1996.	Por la cual se desarrolla el artículo de la Constitución Política referente a que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar.
535	11/26/99	43795	Por medio de la cual se aprueba el Acta de Fundación de la Organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ), firmada en Buenos Aires el primero	Acta de Fundación de la Organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ).

Continúa

No. Ley	Fecha de sanción presidencial (mm/dd/aa)	No. de *Diario Oficial* donde se encuentra publicada	Título de la ley	Descriptor
			(1) de agosto de mil novecientos noventa y seis (1996).	
515	08/05/1999	43656	Por medio de la cual se aprueba el Convenio 138 sobre la edad mínima de admisión de empleo, adoptada por la 58a. reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, Suiza, el veintiséis (26) de junio de mil novecientos setenta y tres (1973).	Edad mínima de admisión de empleo.
471	08/11/1998	43360	Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre la obtención de alimentos en el extranjero, hecha en Nueva York, el veinte (20) de junio de mil novecientos cincuenta y seis (1956).	Facilitar a una persona, llamada en lo sucesivo demandante, que se encuentra en el territorio de una de las Partes Contratantes, la obtención de los alimentos que pretende tener derecho a recibir de otra persona.
470	08/11/1998	43360	Por medio de la cual se aprueba la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores, hecha en México, D. F., el die-	Prevención y sanción del tráfico internacional de menores, así como la regulación de los aspectos civiles y penales del mismo.

Continúa

No. Ley	Fecha de sanción presidencial (mm/dd/aa)	No. de *Diario Oficial* donde se encuentra publicada	Título de la ley	Descriptor
			ciocho (18) de marzo de mil novecientos noventa y cuatro (1994).	
468	08/11/1998	43360	Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo sobre asistencia a la niñez entre la República de Colombia y la República de Chile, hecho en Santa Fe de Bogotá, D. C., a los dieciséis (16) días del mes de julio de mil novecientos noventa y uno (1991).	Asistencia a la niñez entre la República de Colombia y la República de Chile.
449	08/11/1998	43360	Por medio de la cual se aprueba la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, hecha en Montevideo, el quince (15) de julio de mil novecientos ochenta y nueve (1989).	Determinación del derecho aplicable a las obligaciones alimentarias.
375	07/09/1997	43079	Por la cual se crea la Ley de la Juventud, y se dictan otras disposiciones.	Establecer el marco institucional y orientar políticas, planes y programas por parte del Estado y la sociedad civil para la juventud.

Continúa

No. Ley	Fecha de sanción presidencial (mm/dd/aa)	No. de *Diario Oficial* donde se encuentra publicada	Título de la ley	Descriptor
311	08/14/96	42855	Por la cual se crea el Registro Nacional de Protección Familiar, y se dictan otras disposiciones.	Se crea el Registro Nacional de Protección Familiar, y se dictan otras disposiciones.
294	07/22/96	42836	Por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar.	Se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política referente a que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad.
265	01/30/96	42703	Por medio de la cual se aprueba el «Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional», suscrito en La Haya, el 29 de mayo de 1993.	Establecer garantías para las adopciones internacionales e instaurar un sistema de cooperación entre los Estados Contratantes que asegure el respeto de dichas garantías.
181	01/18/95	41679	Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física, y se crea el Sistema Nacional del Deporte.	El patrocinio, el fomento, la masificación, la divulgación, la planificación, la coordinación, la ejecución y el asesoramiento de la práctica del deporte.

Continúa

No. Ley	Fecha de sanción presidencial (mm/dd/aa)	No. de *Diario Oficial* donde se encuentra publicada	Título de la ley	Descriptor
124	02/18/94	41230	Por la cual se prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad, y se dictan otras disposiciones.	Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad.
123	02/17/94	41228	Por medio de la cual se excluyen del impuesto sobre las ventas las boletas de entrada a los eventos deportivos y de recreación infantil.	Se excluyen del impuesto sobre las ventas las boletas de entrada a los eventos deportivos y de recreación infantil.
115	02/08/1994	41214	Por la cual se expide la ley general de educación.	Se expide la ley general de educación.
82	11/03/1993	41101	Por la cual se expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia.	Se expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia.
11	07/21/92	40510	Por medio de la cual se aprueba el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I), adoptado en Ginebra, el 8 de junio de 1977.	Protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales.

Continúa

No. Ley	Fecha de sanción presidencial (mm/dd/aa)	No. de *Diario Oficial* donde se encuentra publicada	Título de la ley	Descriptor
12	01/22/91	39640	Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989.	Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
18	01/22/90	39153	Por medio de la cual se prohíbe la fabricación, importación, distribución, venta y uso de juguetes bélicos en el territorio nacional, se adiciona la Ley 42 de 1985 y se dictan otras disposiciones.	Ley 42 de 1985, art. 45 g), velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en literal t) del artículo 13 de la presente Ley y adelantar las investigaciones correspondientes para que el Consejo Nacional de Televisión y el director de Inravisión impongan las sanciones a que hubiere lugar por la infracción de dicha norma.

Finalmente, presentamos los textos que fueron discutidos en el Congreso Nacional a lo largo de los cuatro debates constitucionales, con su respectiva exposición de motivos y los cambios que a nivel normativo se dieron.

Proyecto de Ley Estatutaria Cámara

"por la cual se expide la Ley para la Infancia y la Adolescencia"

Libro I
La protección integral

Título I
Disposiciones generales

Capítulo I: principios y definiciones
Capítulo II: derechos y libertades

Título II
Garantía de derechos y prevención

Capítulo único: obligaciones de la familia, la sociedad y el Estado

Título III
Restablecimiento de derechos y protección

Capítulo I: medidas de restablecimiento de derechos
Capítulo II: autoridades competentes para el restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes
Capítulo III: procedimiento administrativo y reglas especiales
Capítulo IV: procedimiento judicial y reglas especiales

Libro II
De la responsabilidad penal para adolescentes y niños y niñas víctimas de delitos

Título I
Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes

Capítulo I: principios rectores y definiciones del proceso
Capítulo II: las conductas punibles

Capítulo III: autoridades y entidades del sistema
Capítulo IV: reparación del daño
Capítulo V: medidas

Título II
Capítulo único: niños y niñas víctimas de delitos

Libro III
Sistema Nacional de Bienestar Familiar, Políticas Públicas e Inspección, Vigilancia y Control

Capítulo I: sistema nacional de bienestar familiar y políticas públicas de infancia y adolescencia
Capítulo II: inspección, vigilancia y control
Capítulo III: disposiciones finales

Libro I
La protección integral
Título I
Disposiciones generales

Capítulo I. principios y definiciones

Artículo 1. *Finalidad.* Garantizar a los niños, las niñas y los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, en condiciones de dignidad, igualdad y sin discriminación de ninguna índole.

Artículo 2. *Objeto.* La presente ley establece normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, y busca garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como el restablecimiento ante su vulneración. Dicha garantía y protección será obligación de la familia, la sociedad y el Estado.

Artículo 3. *Sujetos titulares de derechos.* Para todos los efectos de esta ley son sujetos titulares de derechos todas las personas menores de edad, esto es menores de 18 años. Dentro de este rango, se entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años, y por adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad.

Artículo 4. *Ámbito de aplicación.* La presente ley se aplica a todos los niños, las niñas y los adolescentes nacionales o extranjeros que se encuentren en el territorio nacional, a los nacionales que se encuentren fuera del país, y a aquellos con doble nacionalidad, cuando una de ellas sea la colombiana.

Artículo 5. *Naturaleza de las normas contenidas en esta ley.* Las normas contenidas en la presente ley son de orden público y, por lo mismo, los principios en ellas consagrados son de carácter irrenunciable y se aplicarán de preferencia a las disposiciones contenidas en otras leyes.

Artículo 6. *Reglas de interpretación y aplicación.* Las normas contenidas en la Constitución Política y en los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos o ratificados por Colombia, harán parte integral de esta Ley. Así mismo, deberán servir de guía para su interpretación y aplicación, en especial la Convención sobre los Derechos del Niño, cuyo cumplimiento es obligatorio. En todo caso, se aplicará siempre la norma más favorable al interés superior del niño, niña o adolescente. La enunciación de los derechos y las garantías contenidos en dichas normas no debe entenderse como negación de otras que, siendo inherentes al niño, niña o adolescente, no figuren expresamente en ellas.

Artículo 7. *Protección integral.* Se entiende por protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y el cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración, y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior.

La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, programas y acciones que se ejecutan en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal con la obligatoria asignación de recursos financieros, físicos y humanos.

Artículo 8. *Interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes.* Se entiende por interés superior del niño, la niña y el adolescente el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes entre sí.

Artículo 9. *Prevalencia de los derechos.* En todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación

con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de éstos, en especial si existe conflicto con los de cualquier otra persona.

En caso de conflicto entre dos o más disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicará la norma más favorable al interés superior del niño, la niña y el adolescente.

Artículo 10. *Corresponsabilidad.* Para los efectos de esta ley, se entiende por corresponsabilidad la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. La familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y protección.

La corresponsabilidad y la concurrencia aplican en la relación que se establece entre todos los sectores e instituciones del Estado.

Artículo 11. *Exigibilidad de los derechos.* Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente el cumplimiento y el restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.

El Estado, en cabeza de todos y cada uno de sus agentes, tiene la responsabilidad inexcusable de actuar oportunamente para garantizar el cumplimiento, la protección y el restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.

Parágrafo. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como ente coordinador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, definirá los lineamientos técnicos que las entidades deben cumplir para garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, y para asegurar su restablecimiento. Así mismo, coadyuvará con los entes nacionales, distritales y municipales en la ejecución de sus políticas públicas, sin perjuicio de las obligaciones que por mandato constitucional y legal le corresponde a cada una de ellas.

Artículo 12. *Perspectiva de género.* Se entiende por perspectiva de género el reconocimiento de las diferencias sociales, biológicas y psicológicas en las relaciones entre las personas según el sexo, la edad, la etnia y el rol que desempeñan en la familia y en el grupo social. Esta perspectiva se debe tener en cuenta en la aplicación de esta ley, en todos los ámbitos en donde se desenvuelven los niños, las niñas y los adolescentes, para alcanzar la equidad.

Artículo 13. *Derechos de los niños, las niñas y los adolescentes de los pueblos indígenas y demás grupos étnicos.* La responsabilidad de la atención,

cuidado y protección de los niños, las niñas y los adolescentes de los grupos étnicos y los pueblos indígenas corresponde a la familia, la comunidad y sus autoridades de acuerdo con sus culturas, organización social y la jurisdicción especial indígena, con la Constitución Política y los instrumentos internacionales de derechos humanos.

En cualquier caso, el Estado debe garantizarles los mismos derechos que a los demás niños, niñas y adolescentes, y prestarles especial atención y protección en los casos en que se requiera, procurando preservar la identidad cultural y la supervivencia de sus comunidades.

Artículo 14. *La responsabilidad parental.* La responsabilidad parental es uno de los elementos de la patria potestad establecida en la legislación civil. Es además, la obligación inherente a la orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de los niños, las niñas y los adolescentes durante su proceso de formación. Esto incluye la responsabilidad compartida y solidaria de padre y madre de asegurarse que los niños, las niñas y los adolescentes puedan lograr el máximo nivel de satisfacción de sus derechos.

En ningún caso el ejercicio de la responsabilidad parental puede conllevar violencia física, psicológica o actos que impidan el ejercicio de sus derechos.

Artículo 15. *Responsabilidad en el ejercicio de los derechos.* Es obligación de la familia, de la sociedad y del Estado, formar a los niños, las niñas y los adolescentes en el ejercicio responsable de los derechos. Las autoridades contribuirán con este propósito a través de decisiones oportunas y eficaces, y con claro sentido pedagógico.

Artículo 16. *Deber de vigilancia del Estado.* Todas las personas naturales o jurídicas, con personería jurídica expedida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o sin ella, que aun con autorización de los padres o representantes legales, alberguen o cuiden niños, niñas o adolescentes, son sujetos de la vigilancia del Estado.

Capítulo II
Derechos y libertades

Artículo 17. *Derecho a la vida, a la calidad de vida y a un ambiente sano.* Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la vida, a una buena

calidad de vida y a un ambiente sano en condiciones de dignidad y goce de todos sus derechos en forma prevalente.

La calidad de vida es esencial para su desarrollo integral acorde con la dignidad del ser humano. Este derecho supone la generación de condiciones que les aseguren desde la primera infancia alimentación nutritiva y equilibrada, acceso a los servicios de salud, educación, vestuario adecuado, recreación y vivienda segura dotada de servicios públicos esenciales en un ambiente sano.

Artículo 18. *Derecho a la integridad personal.* Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra todas las acciones o conductas que causen muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. En especial, tienen derecho a la protección contra el maltrato y los abusos de toda índole por parte de sus padres, de sus representantes legales, de las personas responsables de su cuidado y de los miembros de su grupo familiar, escolar y comunitario.

Para los efectos de esta ley, se entiende por maltrato infantil toda forma de perjuicio, castigo, humillación o abuso físico o psicológico, descuido, omisión o trato negligente, malos tratos o explotación, incluidos los actos sexuales abusivos y el abuso sexual, y en general toda forma de violencia o agresión sobre el niño, la niña o el adolescente por parte de sus padres, representantes legales o cualquier otra persona.

Artículo 19. *Derechos de protección.* Los niños, las niñas y los adolescentes serán protegidos contra:

1. El abandono físico, emocional y psicoafectivo de sus padres, representantes legales o de las personas, instituciones y autoridades que tienen la responsabilidad de su cuidado y atención.
2. La explotación económica por parte de sus padres, representantes legales, quienes vivan con ellos, o cualquier otra persona. Serán especialmente protegidos contra su utilización en la mendicidad.
3. El consumo de sustancias psicoactivas y estupefacientes, y la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños, niñas o adolescentes en actividades de promoción, producción, recolección, tráfico, distribución y comercialización.
4. La violación, la inducción, el estímulo y el constreñimiento a la prostitución; la explotación sexual, la pornografía y cualquier otra conducta que atente contra

la libertad, integridad y formación sexuales de la persona menor de edad.
5. Contra el secuestro, la venta, la trata de personas y el tráfico, y cualquier otra forma contemporánea de esclavitud o de servidumbre.
6. Las guerras y los conflictos armados internos.
7. El reclutamiento y la utilización de los niños, las niñas y los adolescentes por parte de los grupos armados organizados al margen de la ley.
8. La tortura y toda clase de tratos y penas crueles, inhumanos, humillantes y degradantes, la desaparición forzada y la detención arbitraria.
9. La situación de vida en calle de los niños y niñas.
10. Los traslados ilícitos y su retención en el extranjero para cualquier fin.
11. El desplazamiento forzado.
12. El trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo puede afectar la salud, la integridad y la seguridad, o impedir el derecho a la educación.
13. La transmisión del VIH-SIDA y las infecciones de transmisión sexual.
14. Los riesgos y efectos producidos por desastres naturales y demás situaciones de emergencia.
15. Cuando su patrimonio se encuentre amenazado por quienes lo administren.
16. Cualquier otro acto que amenace o vulnere sus derechos.

Artículo 20. *Derecho a la libertad y seguridad personal.* Los niños, las niñas y los adolescentes no podrán ser sometidos a detención o prisión arbitrarias o privados de su libertad, salvo por las causas y con arreglo a los procedimientos previamente definidos en la presente ley.

Artículo 21. *Derecho a tener una familia y a no ser separado de ella.* Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a tener y crecer en el seno de la familia, a ser acogidos y no ser expulsados de ella.

Los niños, las niñas y los adolescentes sólo podrán ser separados de la familia cuando ésta no garantice las condiciones para la realización y el ejercicio de sus derechos conforme a lo previsto en esta ley. En ningún caso la condición económica de la familia podrá dar lugar a la separación.

Artículo 22. *Derecho a la custodia y cuidado personal.* Es la obligación que deben cumplir los padres en forma permanente y solidaria, con el fin de

satisfacer directa y oportunamente las necesidades para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. Esta obligación se extiende a quienes convivan con ellos en los ámbitos familiar, social o institucional, o a los representantes legales, cuando no sean los padres.

Artículo 23. *Derecho a los alimentos.* Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a los alimentos suficientes y demás medios para su desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral y social. Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación o instrucción, y en general todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. Los alimentos comprenden la obligación de proporcionar a la madre los gastos de embarazo y parto.

Artículo 24. *Derecho a la identidad.* Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a tener una identidad y a conservar los elementos que la constituyen como son el nombre, la nacionalidad y filiación conforme a la ley. Para estos efectos deberán inscribirse inmediatamente después de su nacimiento en el registro del estado civil. Tienen derecho a preservar su lengua de origen, su cultura e idiosincrasia.

Artículo 25. *Derecho al debido proceso.* Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a que se les apliquen las reglas del debido proceso en todas las actuaciones administrativas y judiciales en las cuales se encuentren involucrados. El debido proceso es el conjunto de garantías que buscan asegurar al niño, la niña o el adolescente involucrado en cualquier proceso, una recta y cumplida administración de justicia y la debida fundamentación de las decisiones que lo afecten.

Artículo 26. *Derecho a la salud.* Todo niño, niña o adolescente tiene derecho a la salud integral. La salud es un estado de bienestar físico, mental y psicológico, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

Artículo 27. *Derecho a la educación.* Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a educación de calidad. Ésta será obligatoria por parte del Estado en un año de preescolar y nueve de educación básica.

La educación será gratuita en las instituciones estatales de acuerdo con los términos establecidos en la Constitución Política.

Artículo 28. *Derecho a la educación en la primera infancia.* Los niños y las niñas tienen derecho a la educación desde su nacimiento. La educación en la

primera infancia es una etapa con identidad propia que incluye la formación integral del niño y la niña entre los cero (0) y los seis (6) años de edad.

Artículo 29. *Derecho a la recreación.* Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho al descanso y al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su ciclo vital.

Artículo 30. *Derecho a la participación en la vida cultural y en las artes.* Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a participar en la vida cultural y en las artes.

La única limitación al ejercicio de este derecho, es el respeto a la persona, y los derechos y las libertades fundamentales propias y de los demás.

Artículo 31. *Derecho al reconocimiento de la diversidad cultural.* Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a que se les reconozca, respete y fomente el conocimiento y la vivencia de la cultura a la que pertenezcan. En desarrollo de este derecho tendrán acceso a las diferentes manifestaciones culturales, a la participación en las actividades de creación y desarrollo artístico, científico y tecnológico, y a la información necesaria para su desarrollo integral.

Artículo 32. *Derecho de los niños, las niñas y los adolescentes a ser escuchados.* En todo proceso administrativo, judicial o de cualquier otra naturaleza en que estén involucrados los niños, las niñas y los adolescentes, éstos tendrán derecho a ser escuchados y sus opiniones deberán ser tenidas en cuenta.

Artículo 33. *Derecho a la participación de los niños, las niñas y los adolescentes.* Para el ejercicio de los derechos y las libertades consagradas en esta ley es condición indispensable la participación de los niños, las niñas y los adolescentes en las actividades y decisiones que se realicen dentro de la familia, las instituciones educativas y en el conjunto de las relaciones con el Estado que sean de su interés.

El Estado y la sociedad garantizarán su participación activa en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la infancia y la adolescencia.

Artículo 34. *Derecho a la libertad de asociación y a celebrar reuniones pacíficas.* Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho de asociarse libremente con otras personas con fines sociales, culturales, deportivos, recreativos, religiosos, políticos, laborales o de cualquier otra índole, siempre que sean

de carácter lícito y de conformidad con la ley. Este derecho comprende especialmente el de formar parte de asociaciones, incluso de sus órganos directivos, y el de promover y constituir asociaciones conformadas por niños, niñas y adolescentes.

Artículo 35. *Derecho a la intimidad.* Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la intimidad, mediante la protección contra toda injerencia arbitraria o ilegal en su vida privada, la de su familia, domicilio y correspondencia. Así mismo, serán protegidos de toda conducta, acción o circunstancia que afecte su dignidad.

El ejercicio del derecho a la intimidad no podrá constituirse en violatorio de los derechos humanos de los niños, las niñas y los adolescentes.

Artículo 36. *Derecho a la información.* Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas a través de los distintos medios de comunicación de que dispongan.

El ejercicio de este derecho estará sujeto a las restricciones necesarias para asegurar el respeto de los derechos propios y de los demás y para proteger la seguridad, la salud y la moralidad públicas.

Artículo 37. *Derechos de los adolescentes autorizados para trabajar.* Ningún niño, niña o adolescente menor de quince años podrá ser admitido en empleo u ocupación de ninguna índole ni podrá ser trabajador independiente. La autorización para trabajar sólo podrá ser concedida a los adolescentes entre los 15 y 18 años, y de acuerdo con las normas y los criterios establecidos en esta ley.

Los adolescentes requieren autorización de autoridad competente para trabajar como dependientes o independientes y gozarán de los derechos laborales consagrados en el régimen laboral colombiano, las normas que lo complementan, los instrumentos internacionales ratificados por Colombia, la Constitución Política y los derechos y garantías consagrados en esta ley. En todo caso se aplicará siempre la norma más favorable. Los derechos laborales de los adolescentes autorizados para trabajar no podrán ser inferiores a los de los adultos que realicen las mismas actividades.

Los adolescentes autorizados para trabajar tienen derecho a la formación y especialización que los habilite para ejercer libremente una ocupación, arte, oficio o profesión y a recibirla durante el ejercicio de su actividad laboral.

Artículo 38. *Derechos de los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad.* Para los efectos de esta ley, la discapacidad se entiende como una limitación física, cognitiva, mental, sensorial o cualquier otra, temporal o permanente de la persona para ejercer una o más actividades esenciales de la vida cotidiana.

Además de los derechos consagrados en la Constitución Política y en los tratados y convenios internacionales, los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad tienen derecho a gozar de una calidad de vida plena, y a que se les proporcionen las condiciones necesarias para que puedan valerse por sí mismos, e integrarse a la sociedad. Así mismo:

1. Al respeto por la diferencia y a disfrutar de una vida digna en condiciones de igualdad con las demás personas, que les permitan desarrollar al máximo sus potencialidades y su participación activa en la comunidad.
2. A recibir tratamiento especializado en salud, educación y cuidados especiales, y orientación y apoyo a los miembros de la familia o a las personas responsables de su cuidado y atención.
3. A la habilitación y rehabilitación, para eliminar o disminuir las limitaciones en las actividades de la vida diaria.
4. A ser destinatarios de acciones y de oportunidades para reducir su vulnerabilidad y permitir la participación en igualdad de condiciones con las demás personas.

Parágrafo. En el caso de los adolescentes que sufren severa discapacidad mental permanente, sus padres o uno de ellos, o la autoridad competente deberá promover el proceso de interdicción antes de cumplir aquél la mayoría de edad, para que a partir de ésta se le prorrogue indefinidamente su estado de sujeción a la patria potestad por ministerio de la ley.

Artículo 39. *Libertades fundamentales.* Los niños, las niñas y los adolescentes gozan de las libertades consagradas en la Constitución Política y en los tratados internacionales de derechos humanos. Forman parte de estas libertades: el libre desarrollo de la personalidad y la autonomía personal; la libertad de conciencia y de creencias; la libertad de cultos; la libertad de pensamiento; la libertad de locomoción; y la libertad para escoger profesión u oficio.

Título II
Garantía de Derechos y Prevención
Capítulo I.
Obligaciones de la familia, la sociedad y el Estado

Artículo 40. *De las obligaciones de la familia, la sociedad y el Estado.* Además de lo señalado en la Constitución Política y en otras disposiciones legales, serán obligaciones de la familia, la sociedad y el Estado en sus niveles nacional, departamental, distrital y municipal el conjunto de disposiciones que contempla la presente ley.

Artículo 41. *Obligaciones de la familia.* La familia tendrá la obligación de promover la igualdad de derechos, el afecto, la solidaridad y el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y debe ser sancionada. Son obligaciones de la familia para garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes:

1. Protegerles contra cualquier acto que amenace o vulnere su vida, su dignidad y su integridad personal.
2. Participar en los espacios democráticos de discusión, diseño, formulación y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos de interés para la infancia, la adolescencia y la familia.
3. Formarles, orientarles y estimularles en el ejercicio de sus derechos y responsabilidades, y en el desarrollo de su autonomía.
4. Inscribirles desde que nacen en el registro civil de nacimiento.
5. Proporcionarles las condiciones necesarias para que alcancen una nutrición y una salud adecuadas, que les permitan un óptimo desarrollo físico, psicomotor, mental, intelectual, emocional y afectivo, y educarles en la salud preventiva y en la higiene.
6. Promover el ejercicio responsable de los derechos sexuales y reproductivos, y colaborar con la escuela en la educación sobre este tema.
7. Incluirlos en el sistema de salud y de seguridad social desde el momento de su nacimiento, y llevarlos en forma oportuna a los controles periódicos de salud, a la vacunación y demás servicios médicos.

8. Asegurarles desde su nacimiento el acceso a la educación, y proveer las condiciones y medios para su adecuado desarrollo, garantizando su continuidad y permanencia en el ciclo educativo.
9. Abstenerse de realizar todo acto y conducta que implique maltrato físico, sexual o psicológico, y asistir a los centros de orientación y tratamiento cuando sea requerido.
10. Abstenerse de exponer a los niños, las niñas y los adolescentes a situaciones de explotación económica.
11. Decidir libre y responsablemente el número de hijos e hijas a los que pueda sostener y formar.
12. Respetar las manifestaciones e inclinaciones culturales de los niños, las niñas y los adolescentes, y estimular sus expresiones artísticas y sus habilidades científicas y tecnológicas.
13. Brindarles las condiciones necesarias para la recreación y la participación en actividades deportivas y culturales de su interés.
14. Prevenirles y mantenerles informados sobre los efectos nocivos del uso y el consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales.
15. Proporcionar a los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad un trato digno e igualitario con todos los miembros de la familia, y generar condiciones de equidad de oportunidades y autonomía para que puedan ejercer sus derechos. Habilitar espacios adecuados y garantizarles su participación en los asuntos relacionados con su entorno familiar y social.

Parágrafo. En los pueblos indígenas y los demás grupos étnicos las obligaciones de la familia se establecerán de acuerdo con sus tradiciones y culturas, siempre que no sean contrarias a la Constitución Política, la ley y a los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Artículo 42. *Obligaciones de la sociedad.* En cumplimiento de los principios de corresponsabilidad y solidaridad, las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones, las empresas, el comercio organizado, los gremios económicos y demás personas jurídicas, así como las personas naturales, tienen la obligación y la responsabilidad de tomar parte activa en el logro de la vigencia efectiva de los derechos y garantías de los niños, las niñas y los adolescentes. En este sentido, deberán:

1. Conocer, respetar y promover estos derechos y su carácter prevalente.
2. Responder con acciones que procuren la protección inmediata ante situaciones que amenacen o menoscaben estos derechos
3. Participar activamente en la formulación, gestión, evaluación, seguimiento y control de las políticas públicas relacionadas con la infancia y la adolescencia.
4. Dar aviso o denunciar por cualquier medio, los delitos o las acciones que los vulneren o amenacen.
5. Colaborar con las autoridades en la aplicación de las disposiciones de la presente ley.
6. Las demás acciones que sean necesarias para asegurar el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.

Artículo 43. *Obligaciones del Estado.* El Estado es el contexto institucional en el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. En cumplimiento de sus funciones en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal deberá:

1. Garantizar el ejercicio de todos los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.
2. Asegurar las condiciones para el ejercicio de los derechos y prevenir su amenaza o afectación a través del diseño y la ejecución de políticas públicas sobre infancia y adolescencia.
3. Garantizar la asignación de los recursos necesarios para el cumplimiento de las políticas públicas de niñez y adolescencia, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal para asegurar la prevalencia sus derechos.
4. Asegurar la protección y el efectivo restablecimiento de los derechos que han sido vulnerados.
5. Promover la convivencia pacífica en el orden familiar y social.
6. Investigar y sancionar severamente los delitos en los cuales los niños, las niñas y los adolescentes son víctimas, y garantizar la reparación del daño y el restablecimiento de sus derechos vulnerados.
7. Resolver con carácter prevalente los recursos, las peticiones o las acciones judiciales que presenten los niños, las niñas y los adolescentes, su familia o la sociedad para la protección de sus derechos.

8. Promover en todos los estamentos de la sociedad, el respeto a la integridad física, psíquica e intelectual y el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes y la forma de hacerlos efectivos.
9. Formar a los niños, las niñas y los adolescentes y a las familias en la cultura del respeto a la dignidad, el reconocimiento de los derechos de los demás, la convivencia democrática y los valores humanos, y en la solución pacífica de los conflictos.
10. Apoyar a las familias para que estas puedan asegurar a sus hijos e hijas desde su gestación, los alimentos necesarios para su desarrollo físico, psicológico e intelectual, por lo menos hasta que cumplan los 18 años de edad.
11. Garantizar la cobertura y calidad de la atención a las mujeres y las familias gestantes y la atención durante el parto; la atención integral al niño o la niña en los primeros cinco años, y la vacunación en forma permanente.
12. Garantizar la inscripción y el trámite del registro civil de nacimiento mediante un procedimiento eficaz y gratuito, lo más cerca posible al lugar y fecha de su nacimiento.
13. Garantizar que los niños, las niñas y los adolescentes tengan acceso al sistema de seguridad social en salud, de manera oportuna.
14. Reducir la morbilidad y la mortalidad infantil, prevenir y erradicar la desnutrición, especialmente en los menores de cinco años, y adelantar los programas de vacunación y prevención de las enfermedades que afectan a la infancia y a la adolescencia, y de los factores de riesgo de la discapacidad.
15. Asegurar los servicios de salud y subsidio alimentario definidos en la legislación del sistema de seguridad social en salud para mujeres gestantes y lactantes, familias en situación de debilidad manifiesta, y niños, niñas y adolescentes.
16. Prevenir y atender en forma prevalente las diferentes formas de violencia y todo tipo de accidentes que atenten contra el derecho a la vida y la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes.
17. Garantizar las condiciones para que los niños y las niñas, desde su nacimiento, tengan acceso a una educación idónea y de calidad, bien sea en instituciones educativas cercanas a su vivienda, o mediante la utilización de tecnologías que garanticen dicho acceso, tanto en los entornos rurales como urbanos.

18. Asegurar los medios y las condiciones que les garanticen la permanencia en el sistema educativo y el cumplimiento de su ciclo completo de formación.
19. Garantizar un ambiente escolar respetuoso de la dignidad y los derechos humanos de los niños, las niñas y los adolescentes, y desarrollar programas de formación de maestros para la promoción del buen trato.
20. Erradicar del sistema educativo las prácticas pedagógicas discriminatorias o excluyentes, y las sanciones que conlleven maltrato o menoscabo de la dignidad o integridad física, psicológica o moral de los niños, las niñas y los adolescentes.
21. Atender las necesidades educativas específicas de los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad y con capacidades excepcionales.
22. Garantizar la etnoeducación para los niños, las niñas y los adolescentes indígenas y de otros grupos étnicos, de conformidad con la Constitución Política y la ley que regule la materia.
23. Diseñar y aplicar estrategias para la prevención y el control de la deserción escolar y para evitar la expulsión de niños, niñas y adolescentes del sistema educativo.
24. Fomentar el deporte, la recreación y las actividades de supervivencia, y facilitar los materiales y útiles necesarios para su práctica regular y continuada.
25. Fomentar la participación en la vida cultural y en las artes, la creatividad y producción artística, científica y tecnológica de niños, niñas y adolescentes, y consagrar recursos especiales para esto.
26. Prevenir y atender la violencia sexual, las violencias dentro de la familia y el maltrato infantil, y promover la difusión de los derechos sexuales y reproductivos.
27. Prestar especial atención a los niños, las niñas y los adolescentes que se encuentren en situación de riesgo, vulneración o emergencia.
28. Protegerlos contra los desplazamientos arbitrarios que los alejen de su hogar o de su lugar de residencia habitual.
29. Asegurar que no sean expuestos a ninguna forma de explotación económica o a la mendicidad.
30. Protegerlos contra la vinculación y el reclutamiento en grupos armados al margen de la ley.

31. Asegurar alimentos a los niños, las niñas y los adolescentes que se encuentren en procesos de protección y restablecimiento de sus derechos, sin perjuicio de las demás personas que deben prestar alimentos en los términos de la presente ley, y garantizar mecanismos efectivos de exigibilidad y cumplimiento de las obligaciones alimentarias.
32. Erradicar el trabajo de los niños y las niñas menores de quince años, proteger a los adolescentes autorizados para trabajar, y garantizar su acceso y la permanencia en el sistema educativo.
33. Promover estrategias de comunicación educativa para transformar los patrones culturales que toleran el trabajo infantil, y resaltar el valor de la educación como proceso fundamental para el desarrollo de la niñez.
34. Asegurar la presencia del niño, la niña o el adolescente en todas las actuaciones que sean de su interés o que los involucren cualquiera sea su naturaleza, adoptar las medidas necesarias para salvaguardar su integridad física y psicológica y garantizar el cumplimiento de los términos señalados en la ley o en los reglamentos frente al debido proceso. Procurar la presencia en dichas actuaciones de sus padres, de las personas responsables o de su representante legal.
35. Buscar y ubicar a la familia de origen o las personas con quienes conviva a la mayor brevedad posible cuando sean menores de edad no acompañados.
36. Garantizar la asistencia de un traductor o un especialista en comunicación cuando las condiciones de edad, discapacidad o cultura de los niños, las niñas o los adolescentes lo exijan.
37. Promover el cumplimiento de las responsabilidades asignadas en la presente ley a los medios de los medios de comunicación.

Parágrafo. Esta enumeración no es taxativa, y en todo caso el Estado deberá garantizar de manera prevalente el ejercicio de todos los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes consagrados en la Constitución Política, los instrumentos internacionales de derechos humanos y en esta ley.

Artículo 44. *Restricción especial en el ejercicio del derecho a la recreación.* Para armonizar el ejercicio de este derecho con el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes, las autoridades deberán diseñar

mecanismos para prohibir el ingreso a establecimientos destinados a juegos de suerte y azar, venta de licores, cigarrillos o productos derivados del tabaco, y que ofrezcan espectáculos con clasificación para mayores de edad.

Parágrafo. Cuando sea permitido el ingreso a niños y niñas menores de 14 años a espectáculos y eventos públicos masivos, las autoridades deberán ordenar a los organizadores la destinación especial de espacios adecuados para garantizar su seguridad personal.

Artículo 45. *Obligaciones especiales de las instituciones educativas.* Para cumplir con su misión las instituciones educativas tendrán, entre otras, las siguientes obligaciones:

1. Facilitar el acceso de los niños, las niñas y los adolescentes al sistema educativo y garantizar su permanencia.
2. Brindar una educación pertinente y de calidad.
3. Respetar en toda circunstancia la dignidad de los miembros de la comunidad educativa.
4. Facilitar la participación de los estudiantes en la gestión académica del centro educativo.
5. Abrir espacios de comunicación con los padres de familia para el seguimiento del proceso educativo, y propiciar la democracia en las relaciones dentro de la comunidad educativa.
6. Organizar programas de nivelación de los niños y las niñas que presenten dificultades de aprendizaje o estén retrasados en el ciclo escolar, y establecer programas de orientación psicopedagógica y psicológica.
7. Respetar, permitir y fomentar la expresión y el conocimiento de las diversas culturas nacionales y extranjeras, y organizar actividades culturales extracurriculares con la comunidad educativa para tal fin.
8. Estimular las manifestaciones e inclinaciones culturales de los niños, las niñas y los adolescentes, y promover su producción artística, científica y tecnológica.
9. Garantizar la utilización de los medios tecnológicos de acceso y difusión de la cultura, y dotar al establecimiento de una biblioteca adecuada.

10. Organizar actividades conducentes al conocimiento, respeto y conservación del patrimonio ambiental, cultural, arquitectónico y arqueológico nacional.
11. Fomentar el estudio de idiomas nacionales y extranjeros y de lenguajes especiales.
12. Evitar cualquier conducta discriminatoria por razones de sexo, etnia, credo, condición socioeconómica o cualquier otra que afecte el ejercicio de sus derechos.

Artículo 46. *Obligaciones complementarias de las instituciones educativas.* Los directivos y docentes de los establecimientos académicos y la comunidad educativa en general pondrán en marcha mecanismos para:

1. Comprobar la inscripción del registro civil de nacimiento.
2. Establecer la detección oportuna, y el apoyo y la orientación en casos de malnutrición, maltrato, abandono, abuso sexual, violencia intrafamiliar, y explotación económica y laboral, incluidas las formas contemporáneas de servidumbre y esclavitud.
3. Comprobar la afiliación de los estudiantes a un régimen de salud, controlar el esquema de vacunación y colaborar con los centros de salud para la valoración periódica de los niños y las niñas.
4. Identificar a los estudiantes que trabajan y las condiciones en que lo hacen, y adelantar las acciones necesarias para que se garantice el proceso educativo.
5. Prevenir y controlar el tráfico y consumo de sustancias psicoactivas que producen dependencia.
6. Coordinar los apoyos pedagógicos, terapéuticos y tecnológicos necesarios para el acceso y la integración educativa del niño, la niña o el adolescente con discapacidad.
7. Orientar a la comunidad educativa para la formación en la salud sexual y reproductiva y la vida en pareja.

Artículo 47. *Prohibición de sanciones crueles, humillantes o degradantes.* Los directores y educadores de los centros educativos no podrán imponer

sanciones que conlleven maltrato físico o psicológico de los estudiantes a su cargo, o que de alguna manera afecten su dignidad.

Artículo 48. *Obligaciones especiales del sistema de seguridad social en salud.* Son obligaciones especiales del sistema de seguridad social en salud para asegurar el derecho a la salud de los niños, las niñas y los adolescentes, entre otras las siguientes:

1. Diseñar y desarrollar programas de prevención en salud, en especial de vacunación, complementación alimentaria, suplementación nutricional, vigilancia del estado nutricional y mejoramiento de hábitos alimentarios.
2. Diseñar y desarrollar programas de prevención de las infecciones respiratorias agudas, la enfermedad diarreica aguda y otras enfermedades prevalentes de la infancia.
3. Diseñar, desarrollar y promocionar programas que garanticen a las mujeres embarazadas la consejería para la realización de la prueba voluntaria del VIH/SIDA y, en caso de ser positiva, tanto la consejería como el tratamiento antirretroviral y el cuidado y atención para evitar durante el embarazo, parto y posparto la transmisión vertical madre-hijo.
4. Disponer lo necesario para garantizar tanto la prueba VIH/SIDA como el seguimiento y tratamiento requeridos para el recién nacido.
5. Garantizar atención oportuna y de calidad a todos los niños, las niñas y los adolescentes, en especial en los casos de urgencias.
6. Garantizar la actuación inmediata del personal médico y administrativo cuando un niño, niña o adolescente se encuentre hospitalizado o requiera tratamiento o intervención quirúrgica y exista peligro inminente para su vida; carezca de representante legal o éste se encuentre en situación que le impida dar su consentimiento de manera oportuna o no autorice por razones personales, culturales, de credo o sea negligente; en atención al interés superior del niño, la niña o el adolescente, o a la prevalencia de sus derechos.
7. Garantizar el acceso gratuito de los adolescentes a los servicios especializados de salud sexual y reproductiva.
8. Desarrollar programas para la prevención del embarazo no deseado y la protección especializada y apoyo prioritario a las madres adolescentes.

9. Diseñar y desarrollar programas especializados para asegurar la detección temprana y adecuada de las alteraciones físicas, mentales, emocionales y sensoriales en el desarrollo de los niños, las niñas y los adolescentes, para lo cual capacitará al personal de salud en el manejo y aplicación de técnicas específicas para su prevención, detección y manejo, y establecerá mecanismos de seguimiento, control y vigilancia de los casos.
10. Capacitar a su personal para detectar el maltrato físico y psicológico, el abuso, la explotación y la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes, y denunciar ante las autoridades competentes las situaciones señaladas y todas aquéllas que puedan constituir una conducta punible en que el niño, la niña o el adolescente sea víctima.
11. Diseñar y ofrecer programas encaminados a educar a los niños, las niñas y los adolescentes, a los miembros de la familia y a la comunidad en general en prácticas de higiene y sanidad; en el manejo de residuos sólidos, el reciclaje de basuras y la protección del ambiente.

Artículo 49. *Responsabilidades especiales de los medios de comunicación.* Los medios de comunicación tienen una influencia determinante en el desarrollo de la personalidad de los niños, las niñas y los adolescentes, en el ejercicio de su autonomía y demás derechos. Por lo anterior deberán:

1. Promover y difundir los derechos y libertades de los niños, las niñas y los adolescentes, así como la información y los materiales que tengan por finalidad promover su bienestar social, su salud física y mental.
2. Respetar la libertad de expresión y el derecho a la información de los niños, las niñas y los adolescentes.
3. Elaborar códigos de autorregulación que tengan en cuenta el interés superior del niño, y el carácter prevalerte de sus derechos.
4. Promover la divulgación de información que permita la localización de los padres o personas responsables de niños, niñas o adolescentes cuando por cualquier causa se encuentren separados de ellos, se hayan extraviado o sean solicitados por las autoridades competentes.

5. Abstenerse de transmitir mensajes discriminatorios contra la infancia y la adolescencia.
6. Abstenerse de difundir información que incite a la violencia, incluidas las violencias de género, que haga apología del delito o que promueva el consumo de sustancias psicoactivas.
7. Abstenerse de entrevistar, dar el nombre, divulgar datos que identifiquen o que puedan conducir a la identificación de niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas, autores o testigos de hechos delictivos.

Parágrafo primero. Sólo tendrán acceso a la información en los programas de atención especializada del Sistema Nacional de Bienestar Familiar donde se encuentren niños, niñas o adolescentes con autorización del defensor de familia o quien haga sus veces, o con la del juez de control de garantías, y con la debida reserva de identidad, cuando se trate de adolescentes autores, partícipes o víctimas de delitos.

Parágrafo segundo. El incumplimiento de las responsabilidades especiales de los medios de comunicación será sancionado por el respectivo director regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Artículo 50. *Espacios para mensajes de garantía y restablecimiento de derechos.* Los contratos de concesión de los servicios de radiodifusión, televisión y espacios electrónicos incluirán la obligación del concesionario de ceder espacios de su programación para transmitir mensajes de garantía y restablecimiento de derechos que para tal fin determine el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dirigidos a los niños, las niñas y los adolescentes y a sus familias.

Artículo 51. *Obligación de la Comisión Nacional de Televisión.* La Comisión Nacional de Televisión o quien haga sus veces deberá garantizar la preservación y ampliación de las franjas infantiles y juveniles, y el contenido pedagógico de dichas franjas que asegure la difusión y el conocimiento de los derechos y las libertades de los niños, las niñas y los adolescentes.

Título III
Restablecimiento de Derechos y Protección
Capítulo I.
Medidas de restablecimiento de derechos

Artículo 52. *Restablecimiento de los derechos.* Se entiende por restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, la restauración de su dignidad e integridad como sujetos y de la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los derechos que le han sido vulnerados.

Artículo 53. *Obligación del restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.* El restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas o los adolescentes es responsabilidad del Estado en su conjunto a través de las autoridades públicas, quienes tienen la obligación de informar, oficiar o conducir ante la policía, las defensorías de familia, las comisarías de familia o, en su defecto, los inspectores de policía o las personerías municipales o distritales, a todos los niños, las niñas o los adolescentes que se encuentren en condiciones de especial riesgo o vulnerabilidad. Cuando esto ocurra, la autoridad competente deberá asegurarse de que el Sistema Nacional de Bienestar Familiar garantice su vinculación a los servicios sociales.

Artículo 54. *Verificación de la garantía de derechos.* En todos los casos, la autoridad competente deberá realizar de manera inmediata las siguientes acciones:

1. Verificar el estado de cumplimiento de cada uno de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, consagrados en el Título I del Libro I de la presente ley;
2. Verificar:
   a. El Estado de salud física y psicológica.
   b. Estado de nutrición y vacunación.
   c. La inscripción en el registro civil de nacimiento.
   d. La ubicación de la familia de origen.
   e. El estudio del entorno familiar y la identificación tanto de elementos protectores como de riesgo para la vigencia de los derechos.

f. La vinculación al sistema de salud y seguridad social.
g. La vinculación al sistema educativo.

Parágrafo primero. De las anteriores actuaciones se dejará constancia expresa, que servirá de sustento para definir las medidas pertinentes para el restablecimiento de los derechos.

Parágrafo segundo. Si la autoridad competente advierte la ocurrencia de un posible delito, deberá denunciarlo ante la autoridad penal.

Artículo 55. *Medidas de restablecimiento de derechos.* Para el cumplimiento de la función de protección y restablecimiento de los derechos establecidos en esta ley de todas las personas menores de 18 años, sin distinción alguna por edad o sexo, la autoridad competente tomará alguna o varias de las medidas que a continuación se señalan:

1. Amonestación.
2. Retiro inmediato del niño, la niña o el adolescente de la actividad que amenace o vulnere sus derechos, o de las actividades ilícitas en que se pueda encontrar, y ubicación en un programa de atención especializada para el restablecimiento del derecho vulnerado.
3. Ubicación inmediata en medio familiar.
4. Ubicación en centros de emergencia para los casos en que no procede la ubicación en los hogares de paso.
5. La adopción.
6. Además de las anteriores, se aplicarán las consagradas en otras disposiciones legales, o cualquier otra que garantice la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes.
7. Promover las acciones policivas administrativas o judiciales a que haya lugar.

Parágrafo primero. La autoridad competente deberá asegurar que en todas las medidas de restablecimiento de derechos provisionales o definitivas que se decreten, se garantice el acompañamiento a la familia del niño, la niña o el adolescente que lo requiera.

Parágrafo segundo. En el caso de niños, niñas y adolescentes víctimas de desastres naturales u otras situaciones de emergencia, las autoridades tomarán cualquiera de las medidas establecidas en este artículo y las demás que indiquen las autoridades encargadas de la atención de los desastres para la protección sus derechos.

Artículo 56. *Amonestación.* Comprende la orden perentoria de que cesen las conductas que puedan vulnerar o amenazar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, con la obligación de asistir a un curso pedagógico sobre derechos de la niñez, a cargo de la Defensoría del Pueblo, so pena de multa convertible en arresto. La medida de amonestación consiste en la conminación a los padres o a las personas responsables del cuidado del niño, niña o adolescente sobre el cumplimiento de las obligaciones que les corresponden o que la ley les impone.

Artículo 57. *Ubicación en familia de origen o familia extensa.* Es la ubicación del niño, la niña o el adolescente con sus padres o parientes de acuerdo con lo establecido en el artículo 61 del Código Civil, cuando éstos ofrezcan las condiciones para garantizarles el ejercicio de sus derechos.

Si de la verificación del estado de sus derechos se desprende que la familia carece de recursos económicos necesarios para garantizarle el nivel de vida adecuado, la autoridad competente informará a las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, para que le brinden a la familia los recursos adecuados mientras ella puede garantizarlos.

Artículo 58. *Ubicación en hogar de paso.* La ubicación en hogar de paso es la ubicación inmediata y provisional del niño, la niña o el adolescente con familias que forman parte de la red de hogares de paso. Procede la medida cuando no aparezcan los padres, parientes o las personas responsables de su cuidado y atención.

La ubicación en hogar de paso es una medida transitoria, y su duración no podrá exceder de ocho (8) días hábiles, término en el cual la autoridad competente debe decretar otra medida de protección.

Artículo 59. *Red de hogares de paso.* En todos los distritos y municipios del territorio nacional, los gobernadores y los alcaldes, con la asistencia técnica del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, organizarán las redes de hogares de paso y establecerán el registro, el reglamento, los recursos, los

criterios de selección y los controles y mecanismos de seguimiento y vigilancia de las familias, de acuerdo con los principios establecidos en esta ley.

Se entiende por red de hogares de paso el grupo de familias registradas en el programa de protección de los niños, las niñas y los adolescentes que están dispuestas a acogerlos, de manera voluntaria y subsidiada por el Estado, en forma inmediata, para brindarles el cuidado y la atención necesarios.

Artículo 60. *Ubicación en hogar sustituto.* Es una medida provisional que toma la autoridad competente y consiste en la ubicación del niño, la niña o el adolescente en una familia que se compromete a brindarle el cuidado y la atención necesarios en sustitución de la familia de origen.

Esta medida se decretará por el menor tiempo posible de acuerdo con las circunstancias y los objetivos que se persiguen, sin que pueda exceder de cinco (5) meses. En ningún caso podrá otorgarse a personas residentes en el exterior ni podrá salir del país el niño, la niña o el adolescente sujeto a esta medida de protección, sin autorización expresa de la autoridad competente.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar asignará un aporte mensual al hogar sustituto para atender exclusivamente a los gastos del niño, niña o adolescente. Mientras dure la medida el Instituto se subrogará en los derechos contra toda persona que por ley deba alimentos al niño, niña o adolescente. En ningún caso se establecerá relación laboral entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y los responsables del hogar sustituto.

Artículo 61. *Vinculación a programas de atención especializada para el restablecimiento de derechos vulnerados.* Cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de cualquier acto que vulnere sus derechos de protección, de integridad personal, sea víctima de un delito, o se trate de una adolescente o mujer mayor de 18 años embarazada, deberán vincularse a un programa de atención especializada que asegure el restablecimiento de sus derechos.

Parágrafo. La especialización de los programas debe definirse a partir de estudios diagnósticos que permitan determinar la naturaleza y el alcance de los mismos. Los programas deberán obedecer a las problemáticas sociales que afectan a los niños, las niñas y los adolescentes, y ser formulados en el marco de las políticas públicas de infancia y adolescencia dentro del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.

Artículo 62. *La adopción.* La adopción es una medida de protección de carácter irrevocable y definitiva, bajo la vigilancia y el control del Estado en cabeza del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es el ente rector. Su finalidad es garantizar el derecho del niño, niña o adolescente a crecer y desarrollarse de manera integral en el seno de una familia que le ofrezca las condiciones adecuadas para el ejercicio de sus derechos, estableciendo una relación paterno y materno filial entre personas que no la tienen por naturaleza. La adopción requiere sentencia judicial.

Artículo 63. *Procedencia de la adopción.* La adopción procede cuando el Estado ha agotado las posibilidades para lograr el reintegro del niño, niña o adolescente a su familia de origen y se dé una de las siguientes situaciones:

1. Cuando el defensor de familia decrete el estado de adoptabilidad mediante resolución motivada.
2. Cuando se otorgue el consentimiento por quienes ejercen la patria potestad y se dicte resolución motivada de adoptabilidad por parte del defensor de familia, una vez dicho consentimiento se torne irrevocable.
3. Cuando el defensor de familia, a falta del representante legal, autorice la adoptabilidad mediante resolución motivada.

Artículo 64. *Efectos jurídicos de la adopción.* La adopción produce los siguientes efectos:

1. Adoptante y adoptivo adquieren los derechos y las obligaciones de padre, madre e hijo o hija.
2. La adopción crea parentesco civil entre el adoptivo, el adoptante y sus parientes consanguíneos o adoptivos.
3. La adopción es una medida de carácter definitivo.
4. El adoptivo llevará los apellidos del adoptante.
5. El adoptivo deja de pertenecer a su familia consanguínea y pierde con ella todo parentesco. No obstante se mantiene la prohibición matrimonial del ordinal 9 del artículo 140 del Código Civil.

6. Cuando se adopte al hijo del cónyuge o compañero permanente, el adoptivo conservará el vínculo jurídico de consanguinidad con éste y la familia.

Artículo 65. *Acciones de reclamación.* Nadie podrá ejercer acción alguna para establecer la filiación consanguínea de sangre del adoptivo, ni reconocerle como hijo.

Sin embargo, el adoptivo podrá promover en cualquier tiempo las acciones de reclamación del estado civil que le corresponda respecto de sus padres biológicos, únicamente para demostrar que quienes pasaban por tales, al momento de la adopción, no lo eran en realidad.

En el caso previsto en este artículo, la prosperidad de las pretensiones del adoptivo hará que se extingan los efectos de la adopción.

Artículo 66. *Del consentimiento.* El consentimiento es la manifestación informada, libre y voluntaria de dar en adopción a un hijo o hija por parte de quienes ejercen la patria potestad ante el defensor de familia, quien los informará ampliamente sobre sus consecuencias jurídicas y psicosociales. Este consentimiento debe ser válido civilmente e idóneo constitucionalmente.

Es idóneo constitucionalmente cuando quien da el consentimiento ha sido debida y ampliamente informado, asesorado y tiene aptitud para otorgarlo. Se entenderá tener aptitud para otorgar el consentimiento un mes después del día del parto.

A efectos del consentimiento para la adopción, se entenderá la falta del padre o la madre, no solamente cuando ha fallecido, sino también cuando lo aqueja una enfermedad mental o grave anomalía psíquica certificada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

No tendrá validez el consentimiento que se otorgue para la adopción del hijo que está por nacer. Tampoco lo tendrá el consentimiento que se otorgue en relación con adoptantes determinados, salvo cuando el adoptivo fuere pariente del adoptante hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o que fuere hijo del cónyuge o compañero permanente del adoptante.

Quien expresa su consentimiento para la adopción podrá revocarlo dentro del mes siguiente a su otorgamiento.

Los adolescentes deberán recibir apoyo psicosocial especializado por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar u otras organizaciones del Sistema Nacional de Bienestar Familiar para que puedan permanecer con su hijo o hija, o para otorgar el consentimiento libre e informado. El consentimiento del padre o madre menor de dieciocho (18) años tendrá validez si se manifiesta con el lleno de los requisitos establecidos en el presente artículo. En este caso estarán asistidos por sus padres, o personas que los tengan bajo su cuidado y por el Ministerio Público.

Artículo 67. *Solidaridad familiar.* El Estado reconocerá el cumplimiento del deber de solidaridad que ejerce la familia diferente a la de origen, que asume la protección de manera permanente de un niño, niña o adolescente, y le ofrece condiciones adecuadas para el desarrollo armónico e integral de sus derechos. En tal caso no se modifica el parentesco.

Parágrafo. En caso de que dicha familia manifieste su voluntad de adoptarle, se le preferirá frente a cualquier otro postulante.

Artículo 68. *Requisitos para adoptar.* Podrá adoptar quien, siendo capaz, haya cumplido veinticinco (25) años de edad, tenga al menos quince (15) años más que el adoptable, y garantice idoneidad física, mental, moral y social suficiente para suministrar hogar adecuado y estable al niño, niña o adolescente. Estas mismas calidades se exigirán a quienes adopten conjuntamente.

Podrán adoptar:

1. Las personas solteras.
2. Los cónyuges conjuntamente.
3. Los compañeros permanentes conjuntamente que demuestren más de dos años de convivencia en unión marital de hecho.

Esta norma no se aplicará en cuanto a la edad en el caso de adopción por parte del cónyuge o compañero permanente respecto del hijo de su cónyuge o compañero permanente o de un pariente dentro del tercero grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

Parágrafo primero. La existencia de hijos no es obstáculo para la adopción.

Parágrafo segundo. Si el niño, la niña o el adolescente tuviere bienes, la adopción se hará con las formalidades exigidas para los guardadores.

Artículo 69. *Adopción de mayores de edad.* Podrá adoptarse al mayor de edad, cuando el adoptante hubiera tenido su cuidado personal antes de que éste cumpliera dieciocho (18) años.

La adopción de mayores de edad procede por el sólo consentimiento entre el adoptante y el adoptivo. Para estos eventos el proceso se adelantará directamente ante el juez de familia.

Artículo 70. *Adopción de personas menores de dieciocho (18) años indígenas.* Atendiendo las facultades jurisdiccionales de las autoridades indígenas, la adopción de un menor de edad indígena cuando los adoptantes sean miembros de su propia comunidad procederá de acuerdo con sus usos y costumbres.

Cuando los adoptantes sean personas que no pertenecen a la comunidad de la persona menor de dieciocho (18) años, la adopción procederá con el concepto favorable de las autoridades de la comunidad de origen y se realizará de acuerdo con lo establecido en la presente ley.

Artículo 71. *Prelación para adoptantes colombianos.* El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las instituciones autorizadas por éste para adelantar el programa de adopción preferirán, en igualdad de condiciones, las solicitudes presentadas por los y las colombianas, cuando llenen los requisitos establecidos en la presente ley. Si hay una familia colombiana residente en el país o en el exterior y una extranjera, se preferirá a la familia colombiana, y si hay dos familias extranjeras una de un país no adherido a la Convención de La Haya o a otro convenio de carácter bilateral o multilateral en el mismo sentido y otra sí, se privilegiará aquella del país firmante del convenio respectivo.

Artículo 72. *Adopción internacional.* Además de las disposiciones anteriores, la adopción internacional se regirá por los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia sobre esta materia.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como autoridad central, autorizará a los organismos acreditados y agencias internacionales, previo el cumplimiento de los requisitos señalados en la ley y los convenios internacionales ratificados por Colombia y teniendo en cuenta la necesidad del servicio. El Ministerio del Interior y de Justicia reconocerá personería jurídica e inscribirá a sus representantes legales.

Tanto las agencias internacionales como los organismos acreditados deberán renovar la autorización ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cada dos años.

Artículo 73. *Programa de adopción.* Solamente podrán desarrollar el programa de adopción el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las instituciones debidamente autorizadas por éste. Para efecto de lo dispuesto en el presente artículo, por programa de adopción se entiende el conjunto de actividades tendientes a restablecer el derecho del niño, la niña o el adolescente a tener una familia.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las instituciones autorizadas tendrán un Comité de Adopciones que será el responsable de la selección de las familias adoptantes y de la asignación de los niños, las niñas y los adolescentes beneficiarios de la adopción.

Artículo 74. *Prohibición de pago.* Ni el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ni las instituciones autorizadas por éste para desarrollar el programa de adopción podrán cobrar directa o indirectamente retribución alguna por la entrega de un niño, niña o adolescente para ser adoptado. En ningún caso podrá darse recompensa a los padres por la entrega que hagan de sus hijos para ser dados en adopción ni ejercer sobre ellos presión alguna para obtener su consentimiento.

Parágrafo. Sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar, el incumplimiento de esta disposición acarreará la destitución del funcionario infractor, o la cancelación de la autorización para adelantar el programa de adopción si el hecho se hubiere cometido por una institución autorizada.

Artículo 75. *Reserva.* Todos los documentos y las actuaciones administrativas o jurisdiccionales propios del proceso de adopción serán reservados por el término de treinta (30) años a partir de la ejecutoria de la sentencia judicial. De ellos sólo se podrá expedir copia de la solicitud que los adoptantes hicieren directamente, a través de su apoderado o del defensor de familia o del adoptivo que hubiere llegado a la mayoría de edad.

Parágrafo. El adoptado, no obstante, podrá acudir ante el Tribunal Superior correspondiente, mediante apoderado o asistido por el defensor de familia, según el caso, para solicitar que se ordene el levantamiento de la reserva y el acceso a la información.

Artículo 76. *Derecho del adoptado a conocer familia y origen.* Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, todo adoptado tiene derecho a conocer su origen y el carácter de su vínculo familiar. Los padres juzgarán el momento y las condiciones en que no resulte desfavorable para el niño, la niña o el adolescente conocer dicha información.

Artículo 77. *Sistema de información de restablecimiento de derechos.* Crease el sistema de información de restablecimiento de derechos a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que tiene como finalidad llevar el registro de los niños, las niñas y los adolescentes cuyos derechos se denuncian como amenazados o vulnerados. Dicho registro incluirá la medida de restablecimiento adoptada, el funcionario que adelantó la actuación, el término de duración del proceso y la medida adoptada.

Este sistema tendrá un registro especial para el desarrollo del programa de adopción.

Capítulo II
Autoridades competentes para el restablecimiento de los Derechos de los niños, las niñas y los adolescentes

Artículo 78. *Defensorías de Familia.* Son dependencias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de naturaleza multidisciplinaria, encargadas de prevenir, garantizar y restablecer los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.

Las Defensorías de Familia contarán con equipos técnicos interdisciplinarios integrados, por lo menos, por un psicólogo, un trabajador social y un nutricionista.

Los conceptos emitidos por cualquiera de los integrantes del equipo técnico tendrán el carácter de dictamen pericial.

Artículo 79. *Calidades para ser defensor de familia.* Para ser defensor de familia se requieren las siguientes calidades:

1. ser abogado en ejercicio;
2. no estar incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad;
3. las demás que le asigne la ley.

Parágrafo. Los defensores de familia y comisarios de familia deberán vincularse previo proceso de selección.

Artículo 80. *Funciones del defensor de familia.* Corresponde al defensor de familia:

1. Adelantar, aun de oficio, las actuaciones necesarias para garantizar, proteger y restablecer los derechos de los niños, las niñas o los adolescentes, cuando tenga información sobre su vulneración a amenaza.
2. Adoptar las medidas de restablecimiento establecidas en la presente ley para detener la violación o amenaza de los derechos de los niños, las niñas o los adolescentes.
3. Emitir los conceptos ordenados por la ley, en las actuaciones judiciales o administrativas.
4. Ejercer las funciones de policía señaladas en esta ley.
5. Dictar las medidas de restablecimiento de los derechos para los niños y las niñas menores de doce (12) años que cometan delitos.
6. Asumir la asistencia y protección del adolescente responsable de haber infringido la ley penal ante el juez penal para adolescentes.
7. Conceder permiso para salir del país a los niños, las niñas y los adolescentes, cuando no sea necesaria la intervención del juez.
8. Promover la conciliación extrajudicial en los asuntos relacionados con derechos y obligaciones entre cónyuges, compañeros permanentes, padres e hijos, miembros de la familia o personas responsables del cuidado del niño, la niña o el adolescente
9. Aprobar las conciliaciones en relación con la asignación de la custodia y el cuidado personal del niño, el establecimiento de las relaciones materno o paterno filiales, la determinación de la cuota alimentaria, la fijación provisional de residencia separada, la suspensión de la vida en común de los cónyuges o compañeros permanentes, la separación de cuerpos y de bienes del matrimonio civil o religioso, las cauciones de comportamiento conyugal, la disolución y liquidación de sociedad conyugal por causa distinta de la muerte del cónyuge y los demás aspectos relacionados con el régimen económico del matrimonio y los derechos sucesorales, sin perjuicio de la competencia atribuida por la ley a los notarios.

10. Citar al presunto padre con miras al reconocimiento voluntario del hijo extramatrimonial y, en caso de producirse, extender el acta respectiva y ordenar la inscripción o corrección del nombre en el registro del estado civil.
11. Promover los procesos o trámites judiciales a que haya lugar en defensa de los derechos de los niños, las niñas o los adolescentes, e intervenir en los procesos en que se discutan derechos de éstos, sin perjuicio de la actuación del Ministerio Público y de la representación judicial a que haya lugar.
12. Representar a los niños, las niñas o los adolescentes en las actuaciones judiciales o administrativas, cuando carezcan de representante, o éste se halle ausente o incapacitado, o sea el agente de la amenaza o vulneración de derechos.
13. Fijar cuota provisional de alimentos, siempre que no se logre conciliación.
14. Declarar la situación de adoptabilidad en que se encuentre el niño, la niña o el adolescente.
15. Autorizar la adopción en los casos previstos en la ley.
16. Formular denuncia penal cuando advierta que el niño, la niña o el adolescente ha sido víctima de un delito.
17. Ejercer las funciones atribuidas por el artículo 71 de la Ley 906 de 2004.
18. Asesorar y orientar al público en materia de derechos de la infancia, la adolescencia y la familia.
19. Las demás que expresamente señale la ley.

Artículo 81. *Comisarías de Familia.* Son entidades distritales o municipales o intermunicipales de carácter administrativo e interdisciplinario, que forman parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, cuya misión es prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar y las demás establecidas por la ley.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como entidad coordinadora del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, será el encargado de dictar la línea técnica a las Comisarías de Familia en todo el país.

Artículo 82. *Creación, composición y reglamentación.* Todos los municipios contarán al menos con una Comisaría de Familia según la densidad de la población y las necesidades del servicio. Su creación, composición y organización corresponde a los Concejos Municipales.

Las Comisarías de Familia estarán conformadas como mínimo por un abogado, quien asumirá la función de Comisario, un psicólogo, un trabajador social y un médico en los municipios de mediana y mayor densidad de población. Las Comisarías tendrán el apoyo permanente de la Policía Nacional. El gobierno nacional reglamentará la materia con el fin de determinar dichos municipios**.**

En los municipios en donde no fuere posible garantizar el equipo mencionado en el inciso anterior, la Comisaría estará apoyada por los profesionales que trabajen directa o indirectamente con la infancia y la familia, como los profesores y psicopedagogos de los colegios, los médicos y las enfermeras del hospital, y los funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Parágrafo primero. Las entidades territoriales podrán suscribir convenios de asociación con el objeto de adelantar acciones de propósito común para garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, de acuerdo con lo previsto en las leyes 136 de 1994 y 715 de 2001, o las que las modifiquen.

Parágrafo segundo. Los municipios tendrán un término improrrogable de un (1) año a partir de la vigencia de esta ley, para crear la Comisaría de Familia. El incumplimiento de esta obligación será causal de mala conducta sancionada de acuerdo con lo establecido en el Código Único Disciplinario.

Artículo 83. *Calidades para ser comisario de familia.* Para ser comisario de familia se requieren las mismas calidades que para ser defensor de familia.

Artículo 84. *Funciones del comisario de familia.* Corresponde al comisario de familia:

1. Garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar.
2. Atender y orientar a los niños, las niñas y los adolescentes y demás miembros del grupo familiar en el ejercicio y restablecimiento de sus derechos.
3. Recibir denuncias y adoptar las medidas de emergencia y de protección necesarias en casos de delitos contra los niños, las niñas y los adolescentes.
4. Recibir denuncias y tomar las medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar.

5. Definir provisionalmente sobre la custodia y el cuidado personal, la cuota de alimentos y la reglamentación de visitas, la suspensión de la vida en común de los cónyuges o compañeros permanentes, y fijar las cauciones de comportamiento conyugal en las situaciones de violencia intrafamiliar.
6. Practicar rescates para conjurar las situaciones de peligro en que pueda encontrarse un niño, niña o adolescente, cuando la urgencia del caso lo demande.
7. Desarrollar programas de prevención en materia de violencia intrafamiliar y delitos sexuales.
8. Adoptar las medidas de restablecimiento de derechos en los casos de maltrato infantil y denunciar el delito.
9. Aplicar las medidas policivas que correspondan en casos de conflictos familiares, conforme a las atribuciones que les confieran los Concejos Municipales.

Artículo 85. *Horarios permanentes.* Los horarios de atención de las defensorías de familia y comisarías de familia serán permanentes y continuos, a fin de asegurar a los niños, las niñas y los adolescentes la protección y restablecimiento de sus derechos. El Estado deberá desarrollar todos los mecanismos que se requieran para dar cumplimiento a esta disposición.

Artículo 86. *Misión de la Policía Nacional.* La Policía Nacional es una entidad que integra el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Su misión como miembro del Sistema es garantizar la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes en el marco de las competencias y funciones que le asigna la ley. Tendrá como cuerpo especializado a la Policía de Infancia y Adolescencia que reemplazará a la Policía de Menores.

Artículo 87. *Funciones de la Policía Nacional para garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.* Sin perjuicio de las funciones atribuidas en otras leyes en relación con los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, la Policía Nacional, y en especial la Policía de Infancia y Adolescencia, tendrán las siguientes funciones:

1. Cumplir y hacer cumplir las normas y decisiones que para la protección de los niños, las niñas y los adolescentes impartan los organismos del Estado.

2. Diseñar y ejecutar programas y campañas de educación, prevención, garantía y restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes en todo el territorio nacional.
3. Adelantar labores de vigilancia y control en los lugares de recreación y deporte y demás espacios públicos en donde habitualmente concurran niños, niñas y adolescentes y a la entrada de los establecimientos educativos de su jurisdicción.
4. Adelantar labores de vigilancia a fin de controlar e impedir el ingreso de los niños, las niñas y los adolescentes a los lugares de diversión destinados al consumo de bebidas alcohólicas y cigarrillos y hacer cumplir la prohibición de venta de estos productos.
5. Adelantar labores de vigilancia a fin de controlar e impedir el ingreso de niños, niñas y adolescentes a los lugares en donde se ejerza la explotación sexual, se realicen espectáculos no aptos para niños, niñas o adolescentes, a salas de juegos de azar y lugares públicos o privados de alto riesgo que ofrezcan peligro para su integridad física o moral, y tomar las medidas a que haya lugar.
6. Adelantar labores de vigilancia a fin de prevenir, controlar e impedir la entrada de menores de catorce (14) años a las salas de juegos electrónicos.
7. Controlar e impedir el ingreso de niños, niñas y adolescentes a salas de cine, teatros o similares donde se presenten espectáculos con clasificación para mayores y el alquiler de películas de video clasificadas para adultos.
8. Adelantar labores de vigilancia a fin de controlar el porte de armas de fuego o corto-punzantes, bebidas embriagantes, pólvora, estupefacientes y material pornográfico, por parte de niños, niñas o adolescentes, así como de elementos que puedan atentar contra su integridad, y proceder a su incautación.
9. Diseñar programas de prevención para los adultos sobre el porte y uso responsable de armas de fuego, de bebidas embriagantes, de pólvora, de juguetes bélicos y de cigarrillos cuando conviven o están acompañados de niños, niñas o adolescentes.
10. Brindar apoyo a los defensores y comisarios de familia, personeros municipales e inspectores de policía en las acciones de policía y protección de los niños, las niñas y los adolescentes y de su familia, y trasladarlos cuando sea

procedente, a los hogares de paso o a los lugares en donde se desarrollen los programas de atención especializada, de acuerdo con la orden emitida por estas autoridades. Es obligación de los centros de atención especializada recibir a los niños, las niñas o los adolescentes que sean conducidos por la Policía.

11. Apoyar al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), y demás autoridades competentes, en la vigilancia permanente del tránsito de niños, niñas y adolescentes en terminales de transporte terrestre, aéreo y marítimo.
12. Realizar labores de inteligencia para combatir las redes dedicadas a la producción, tráfico o comercialización de sustancias psicoactivas ilegales que produzcan dependencia, a la distribución y comercialización de pornografía infantil a través de Internet, al tráfico o a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, o a cualquier otra actividad que atente contra sus derechos.
13. Adelantar acciones para la detección de niños, niñas y adolescentes que realicen trabajos prohibidos o estén en situación de explotación y riesgo, y denunciar el hecho ante la autoridad competente.
14. Recibir las quejas y denuncias de la ciudadanía sobre amenazas o vulneraciones de los derechos del niño, la niña o el adolescente, actuar de manera inmediata para garantizar los derechos amenazados y para prevenir su vulneración cuando sea del caso, o correr traslado a las autoridades competentes.
15. Garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes en todos los procedimientos policiales.

Artículo 88. *Obligación en formación y capacitación.* La Dirección General de la Policía Nacional creará e integrará en el programa académico de las escuelas de formación de la Policía, para ingreso y ascensos, con carácter obligatorio, la formación y capacitación en derechos de la infancia y la adolescencia, desarrollo infantil, normas nacionales e internacionales relacionadas y procedimientos de atención y protección integral a los niños, las niñas y los adolescentes.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en coordinación con la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional organizará los cursos necesarios para capacitar los miembros de la Policía de Infancia y Adolescencia.

La Policía Nacional capacitará a la Policía de Infancia y Adolescencia en formación de Policía Judicial con el objeto de que éstos asesoren y apoyen a las autoridades cuando los niños, las niñas y los adolescentes se encuentren incursos en algún hecho delictivo, de acuerdo con las necesidades del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes vigente.

Artículo 89. *Organización.* El Director General de la Policía Nacional definirá la estructura de la Policía de Infancia y Adolescencia, que en todo caso deberá tener un encargado que dependerá directamente de la Dirección de Protección y Servicios Especiales que a su vez dependerá del Subdirector General, y con presencia efectiva en los comandos de departamento, metropolitanas, estaciones y organismos especializados.

Artículo 90. *Calidades de la Policía de Infancia y Adolescencia.* Además de los requisitos establecidos en la ley y en los reglamentos, el personal de la Policía de Infancia y Adolescencia deberá tener estudios profesionales en áreas relacionadas con las ciencias humanas y sociales, tener formación y capacitación en derechos humanos de la infancia y la adolescencia, en procedimientos de atención y en otras materias que le permitan la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes.

Salvo circunstancias excepcionales determinadas por la Dirección General de la Policía, los miembros de la Policía de Infancia y Adolescencia que hayan sido seleccionados y capacitados en la especialidad, no podrán ser destinados a actividades diferentes a las señaladas en la presente ley.

Parágrafo. La Policía de Infancia y Adolescencia deberá asesorar a los mandos policiales sobre el comportamiento de la institución, desempeño y cumplimiento en los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, y proponer alternativas de mejoramiento particular y general, de acuerdo con las funciones asignadas en esta ley.

Artículo 91. *Control disciplinario.* Sin perjuicio de la competencia preferente de la Procuraduría General de la Nación consagrada en el artículo 277 de la Constitución Política, y de las acciones penales a que haya lugar, la Inspección General de la Policía Nacional se encargará de adelantar los procesos disciplinarios relacionados con faltas a lo dispuesto en esta ley y la vulneración de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes cometidos por los miembros de la Policía Nacional.

Artículo 92. *Prohibiciones especiales.* Se prohíbe la conducción de niños, niñas y adolescentes mediante la utilización de esposas o cualquier otro medio que atente contra su dignidad.

Igualmente, se prohíbe el uso de armas para impedir o conjurar la evasión del niño, la niña o el adolescente que es conducido ante autoridad competente, salvo que se las utilice con el fin de defensa de grave e inminente peligro para la integridad física del encargado de su conducción.

La infracción a esta disposición será causal de mala conducta.

Artículo 93. *El Ministerio Público.* El Ministerio Público está integrado por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, y las personerías municipales y distritales, y tendrán a su cargo, además de las señaladas en la Constitución Política y en la ley, las siguientes:

1. Promover, divulgar, proteger y defender los derechos humanos de la infancia en las instituciones públicas y privadas con énfasis en el carácter prevalente de sus derechos, de su interés superior y sus mecanismos de protección frente a amenazas y vulneraciones.
2. Promover el conocimiento y la formación de los niños, las niñas y los adolescentes para el ejercicio responsable de sus derechos.
3. Tramitar de oficio o por solicitud de cualquier persona, las peticiones y quejas relacionadas con amenazas o vulneraciones de derechos de los niños, las niñas y los adolescentes y su contexto familiar, y abogar en forma oportuna, inmediata e informal, porque la solución sea eficaz y tenga en cuenta su interés superior y la prevalencia de los derechos.
4. Hacer las observaciones y recomendaciones a las autoridades y a los particulares en caso de amenaza o violación de los derechos humanos de los niños, las niñas y los adolescentes.

Parágrafo. Las personerías distritales y municipales deberán vigilar y actuar en todos los procesos judiciales y administrativos de restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, en aquellos municipios en los que no haya procuradores judiciales de familia. Así mismo deberán inspeccionar, vigilar y controlar a los alcaldes para que dispongan en sus planes de

desarrollo, el presupuesto que garantice los derechos y los programas de atención especializada para su restablecimiento.

Capítulo III
Procedimiento administrativo y reglas especiales

Artículo 94. *Autoridades competentes.* Corresponde a los defensores de familia y comisarios de familia procurar y promover la realización y el restablecimiento de los derechos que la presente ley reconoce a los niños, las niñas y los adolescentes.

Artículo 95. **Competencia territorial.** Será competente la autoridad del lugar donde se encuentre el niño, la niña o el adolescente.

Artículo 96. **Competencia subsidiaria.** En los municipios donde no haya defensor de familia, las funciones que esta ley le atribuye serán cumplidas por el comisario de familia. En ausencia de este último, las funciones asignadas al defensor y al comisario de familia corresponderán al inspector de policía a prevención.

Parágrafo. Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, la declaratoria de adoptabilidad del niño, niña o adolescente corresponde exclusivamente al defensor de familia.

Artículo 97. **Iniciación de la actuación administrativa.** El representante legal del niño, la niña o el adolescente, o la persona que lo tenga bajo su cuidado o custodia, podrá solicitar, ante el defensor o comisario de familia, la protección de los derechos de aquél. También podrá hacerlo directamente el niño, la niña o el adolescente.

Cuando el defensor o el comisario de familia tenga conocimiento de la inobservancia, vulneración o amenaza de alguno de los derechos que esta ley reconoce a los niños, las niñas y los adolescentes, abrirá la respectiva investigación, siempre que sea de su competencia; en caso contrario avisará a la autoridad competente.

En la providencia de apertura de investigación se deberá ordenar:

1. La identificación y notificación de los representantes legales del niño, la niña o el adolescente, de las personas con quienes conviva o sean responsables de su cuidado, o de quienes de hecho lo tuvieren a su cargo, y de los implicados en la violación o amenaza de los derechos.

2. Las medidas provisionales de urgencia que requiera la protección integral del niño, la niña o el adolescente.
3. La práctica de las pruebas que estime necesarias para establecer los hechos que configuran la presunta vulneración o amenaza de los derechos del niño, la niña o el adolescente.

Artículo 98. *Trámite.* Cuando se trate de asuntos que puedan conciliarse, el defensor o el comisario de familia citará a las partes, por el medio más expedito, a audiencia de conciliación que deberá efectuarse dentro de los diez días calendario siguientes al conocimiento de los hechos. Si las partes concilian se levantará acta y en ella se dejará constancia de lo conciliado y de su aprobación.

Cuando haya fracasado el intento de conciliación, o transcurrido el plazo previsto en el inciso anterior sin haberse realizado la audiencia, y cuando se trate de asuntos que no la admitan, el funcionario correrá traslado por cinco días calendario a las demás personas interesadas o implicadas, para que se pronuncien y aporten las pruebas que deseen hacer valer. Vencido el traslado decretará las pruebas que estime necesarias, fijará audiencia para practicarlas con sujeción a las reglas del procedimiento civil, y en ella fallará mediante resolución susceptible de reposición. Este recurso deberá interponerse verbalmente en la audiencia o por escrito presentado dentro de los cinco días calendario siguientes, con expresión de las razones de inconformidad.

Resuelto el recurso de reposición o vencido el término para interponerlo, el expediente deberá ser remitido al juez de familia para la revisión del fallo, si dentro de los cinco días calendario siguientes a su ejecutoria alguna de las partes o el Ministerio Público lo solicita con expresión de las razones en que se funda la inconformidad, el juez resolverá de plano.

Parágrafo primero. Cuando lo estime aconsejable para la averiguación de los hechos, el defensor de familia y el comisario de familia podrán ordenar que el equipo técnico interdisciplinario de la defensoría o de la comisaría, o alguno de sus integrantes, rinda dictamen pericial.

Parágrafo segundo. En todo caso, la actuación administrativa deberá resolverse dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud o a la apertura oficiosa de la investigación, y el recurso de reposición

que contra el fallo se presente deberá ser resuelto dentro de los diez días calendario siguientes al vencimiento del término para interponerlo. Vencido el término para fallar o para resolver el recurso de reposición sin haberse emitido la decisión correspondiente, la autoridad administrativa perderá competencia para seguir conociendo del asunto y remitirá inmediatamente el expediente al juez de familia para que, de oficio, adelante el proceso respectivo. Cuando el juez reciba el expediente deberá informarlo a la Procuraduría General de la Nación para que se promueva la investigación disciplinaria a que haya lugar.

Excepcionalmente, y por razones que deberá justificar de manera inmediata ante el director regional, el término para resolver la actuación administrativa se ampliará por dos meses más, contados a partir del vencimiento de los cuatro meses iniciales, sin que exista en ningún caso nueva prórroga.

Artículo 99. *Contenido del fallo.* La resolución deberá contener una síntesis de los hechos en que se funda, el examen crítico de las pruebas y los fundamentos jurídicos de la decisión. Cuando contenga una medida de restablecimiento deberá señalarla concretamente, explicar su justificación e indicar su forma de cumplimiento, la periodicidad de su evaluación y los demás aspectos que interesen a la situación del niño, la niña o el adolescente.

La resolución obliga a los particulares y a las autoridades prestadoras de servicios requeridos para la ejecución de la medida.

Artículo 100. *Notificaciones.* La notificación de la providencia de apertura de investigación se practicará en la forma prevista en el Código de Procedimiento Civil para la notificación personal, pero cuando se ignore el nombre o la dirección de las personas citadas, la notificación se entenderá surtida una vez vencido el término del emplazamiento y no habrá lugar a designar curador *ad litem*.

Las providencias que se dicten en el curso de las audiencias y diligencias se consideran notificadas en estrados inmediatamente después de proferidas, aunque las partes o los interesados no hayan concurrido.

Las demás notificaciones se surtirán mediante aviso que se remitirá por medio de servicio postal autorizado, acompañado de una copia de la providencia correspondiente. Cuando se desconozca la dirección de quien debe ser notificado, los datos necesarios para identificar la providencia y el expediente se insertarán en un listado que se fijará por cinco días hábiles en lugar visible del respectivo despacho, y la notificación se entenderá surtida al vencimiento de dicho término.

Artículo 101. *Carácter transitorio de las medidas.* La autoridad administrativa que haya adoptado las medidas de protección previstas en esta ley podrá modificarlas o suspenderlas cuando esté demostrada la alteración de las circunstancias que dieron lugar a ellas. La resolución que así lo disponga se notificará en la forma prevista en el inciso tercero del artículo anterior, y estará sometida a la impugnación y al control judicial establecidos para la que impone las medidas.

Este artículo no se aplicará cuando se haya homologado por el juez la declaratoria de adoptabilidad o decretado la adopción.

Artículo 102. *Comisión y poder de investigación.* Con miras a la protección de los derechos reconocidos en este código, los defensores y comisarios de familia podrán comisionar a las autoridades administrativas que cumplan funciones policivas, para la práctica de pruebas fuera de su sede, en la forma prevista en el Código de Procedimiento Civil.

Con el mismo propósito los defensores y comisarios de familia también podrán solicitar información al respectivo pagador y a la Dirección de Impuestos Nacionales sobre la solvencia de las personas obligadas a suministrar alimentos.

Parágrafo. El defensor de familia y el comisario de familia podrán sancionar con multa de uno a tres salarios mínimos mensuales a los particulares que rehúsen o retarden el trámite de las solicitudes formuladas en ejercicio de las funciones que esta ley les atribuye. Si el renuente fuere servidor público, además se dará aviso al respectivo superior y a la Procuraduría General de la Nación.

Artículo 103. *Citación a interesados.* Cuando se investigue la situación de vulneración de derechos en que se halle un niño, niña o adolescente, deberá citarse a quienes de acuerdo con la ley deban asumir su cuidado personal, o a quienes de hecho lo tuvieren a su cargo, si se conociere su identidad y el lugar donde pueden ser notificados; en caso contrario, la citación se hará mediante publicación o transmisión en un medio masivo de comunicación, local y nacional, que incluirá una fotografía del niño, si fuere posible.

Siempre que sea posible, el defensor de familia entrevistará al niño, la niña o el adolescente para establecer sus condiciones individuales y las circunstancias que lo rodean.

Artículo 104. *Allanamiento y rescate.* Siempre que el defensor o el comisario de familia tengan indicios de que un niño, niña o adolescente se

halla en situación de peligro, procederá a su rescate con el fin de prestarle la protección necesaria. Cuando las circunstancias lo aconsejen practicará allanamiento al sitio donde el niño, la niña o el adolescente se encuentre, siempre que le sea negado el ingreso después de haber informado sobre su propósito, o no haya quien se lo facilite. Es obligación de la fuerza pública prestarle el apoyo que para ello solicite.

De lo ocurrido en la diligencia deberá levantarse acta.

Parágrafo. Se entiende que el niño, la niña o el adolescente está en situación de peligro cuando se encuentre comprometida su vida o su integridad personal.

Artículo 105. *Contenido de la declaratoria de adoptabilidad o de vulneración de derechos.* En la resolución que declare la situación de adoptabilidad o de vulneración de derechos de un niño, una niña o un adolescente, se ordenarán una o varias de las medidas de restablecimiento consagradas en esta ley.

En la misma resolución se indicará la cuota mensual que deberán suministrar los padres o las personas de quienes dependa el niño, la niña o el adolescente para su sostenimiento mientras se encuentre bajo una medida de restablecimiento, cuando a ello haya lugar.

Parágrafo primero. Dentro de los veinte días calendario siguientes a la ejecutoria de la resolución que declara la adoptabilidad podrán oponerse las personas a cuyo cargo estuviere el cuidado, la crianza y educación del niño, la niña o el adolescente, aunque no lo hubieren hecho durante la actuación administrativa. Para ello deberán expresar las razones en que se fundan y aportar las pruebas que sustentan la oposición.

Parágrafo segundo. Para garantizar la adecuada atención del niño, la niña o el adolescente en el seno de su familia, el defensor de familia podrá disponer que los padres o las personas a cuyo cargo se encuentre, cumplan algunas de las siguientes actividades:

a) Asistencia a un programa oficial o comunitario de orientación o de tratamiento familiar.
b) Asistencia a un programa de asesoría, orientación o tratamiento de alcohólicos o adictos a sustancias que produzcan dependencia.
c) Asistencia a un programa de tratamiento psicológico o psiquiátrico.

d) Cualquiera otra actividad que contribuya a garantizar el ambiente adecuado para el desarrollo del niño, la niña o el adolescente.

Artículo 106. *Homologación de la declaratoria de adoptabilidad.* Cuando se declare la adoptabilidad de un niño, una niña o un adolescente, habiendo existido oposición en la actuación administrativa, y cuando la oposición se presente en la oportunidad prevista en el parágrafo primero del artículo anterior, el defensor de familia deberá remitir el expediente al juez de familia para su homologación.

En los demás casos la resolución que declare la adoptabilidad producirá, respecto de los padres, la terminación de la patria potestad del niño, la niña o el adolescente adoptable y deberá ser inscrita en el libro de varios de la notaría o de la oficina de registro civil.

Artículo 107. *Reconocimiento de paternidad.* Cuando el padre extramatrimonial reconozca, ante el defensor de familia, la paternidad de un niño, una niña o un adolescente, se levantará acta y se ordenará su inscripción en el registro del estado civil.

Artículo 108. *Permiso para salir del país.* La autorización para la salida del país otorgado por el defensor de familia para un niño, una niña o un adolescente, cuando carezca de representante legal, se desconozca su paradero o no se encuentre en condiciones de otorgarlo se sujetará a las siguientes reglas:

1. Legitimación. La solicitud podrá ser formulada por el representante legal o por quien tenga el cuidado personal del niño, la niña o el adolescente.
2. Requisitos de la solicitud. La solicitud deberá señalar los hechos en que se funda y el tiempo de permanencia del niño, la niña o el adolescente en el exterior. Con ella deberá acompañarse el registro civil de nacimiento y la prueba de los hechos alegados.
3. Trámite. Presentada la solicitud, el defensor de familia ordenará citar a los padres o al representante legal que no la haya suscrito.

Si dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación o al emplazamiento ninguno de los citados se opone, el funcionario practicará las pruebas que estime necesarias, si a ello hubiere lugar, y decidirá sobre el permiso solicitado.

En firme la resolución que concede el permiso, el defensor de familia remitirá copia de ella al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la División de Extranjería del Departamento Administrativo de Seguridad. El permiso tendrá vigencia por sesenta hábiles contados a partir de su ejecutoria.

En caso de que oportunamente se presente oposición a la solicitud de permiso, el defensor de familia remitirá el expediente al juez de familia, y por medio de telegrama avisará a los interesados para que comparezcan al juzgado que corresponda por reparto.

Parágrafo. Cuando un niño, una niña o un adolescente vaya a salir del país con uno de los padres o con una persona distinta a los representantes legales deberá obtener previamente el permiso de aquel con quien no viajare o el de aquellos, debidamente autenticado ante notario o autoridad consular. Dicho permiso deberá contener el lugar de destino, el propósito del viaje y la fecha de salida e ingreso de nuevo al país.

No se requerirá autorización de los padres a quienes se les haya suspendido o privado de la patria potestad.

Artículo 109. *Alimentos.* Para la fijación de cuota alimentaria se observarán las siguientes reglas:

1. La mujer grávida podrá reclamar alimentos a favor del hijo que está por nacer, respecto del padre legítimo o del extramatrimonial que haya reconocido la paternidad.
2. Siempre que se conozca la dirección donde puede recibir notificaciones el obligado a suministrar alimentos, el defensor o comisario de familia lo citará a audiencia de conciliación. En caso contrario fijará cuota provisional de alimentos, elaborará informe que suplirá la demanda y lo remitirá al juez de familia para que inicie el respectivo proceso. Lo mismo deberá hacer cuando habiendo sido debidamente citado a la audiencia el obligado no haya concurrido, o habiendo concurrido no se haya logrado la conciliación, pero sólo se remitirá el informe al juez si alguna de las partes lo solicita dentro de los cinco días hábiles siguientes.
3. Cuando se logre conciliación se levantará acta en la que se indicará: el monto de la cuota alimentaria y la fórmula para su reajuste periódico; el lugar y la

forma de su cumplimento; la persona a quien debe hacerse el pago, los descuentos salariales, las garantías que ofrece el obligado y demás aspectos que se estimen necesarios para asegurar el cabal cumplimiento de la obligación alimentaria. De ser el caso, la autoridad promoverá la conciliación sobre custodia, régimen de visitas y demás aspectos conexos.

4. Lo dispuesto en este artículo se aplicará también al ofrecimiento de alimentos a niños, niñas o adolescentes.

Artículo 110. *Restitución internacional de niños, niñas o adolescentes.* Los niños, las niñas o los adolescentes indebidamente retenidos por uno de sus padres, o por personas encargadas de su cuidado o por cualquier otro organismo en el exterior o en Colombia, serán protegidos por el Estado colombiano contra todo traslado ilícito u obstáculo indebido para regresar al país. Para tales efectos se dará aplicación a la Ley 173 de 1994 aprobatoria del Convenio sobre aspectos civiles del secuestro internacional de niños, suscrito en La Haya el 25 de octubre de 1980, y a la Ley 620 de 2000 aprobatoria de la Convención Interamericana sobre restitución internacional de menores, suscrita en Montevideo el 15 de julio de 1989.

Para los efectos de este artículo actuará como autoridad central el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La autoridad central, por intermedio del defensor de familia, adelantará las actuaciones tendientes a la restitución voluntaria del niño, la niña o el adolescente, y decretará las medidas de restablecimiento de derechos a que haya lugar.

Artículo 111. *Adolescentes autorizados para trabajar.* Los adolescentes autorizados para trabajar gozan de los derechos laborales consagrados en el Código Sustantivo del trabajo, las normas que lo complementan, los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, la Constitución Política y los derechos y garantías consagrados en esta ley. En todo caso se aplicará siempre la norma más favorable al adolescente autorizado para trabajar.

Artículo 112. *Autorización para trabajar.* La autorización para que un adolescente pueda trabajar será expedida por el inspector de trabajo. Se requiere autorización escrita del inspector del trabajo y a falta de éste por el alcalde municipal.

La autorización estará sujeta a las siguientes reglas:

1. Deberá tramitarse conjuntamente entre el empleador y el adolescente.
2. La solicitud contendrá los datos generales de identificación del adolescente y del empleador, los términos del contrato de trabajo, la actividad que va a realizar, la jornada laboral y el salario.
3. El funcionario que concedió el permiso deberá efectuar una visita para determinar las condiciones de trabajo y la seguridad para la salud del trabajador.
4. Para obtener la autorización se requiere la presentación del certificado de escolaridad del adolescente y, si éste no ha terminado su formación básica, el empleador procederá a inscribirlo y, en todo caso, a facilitarle el tiempo necesario para continuar el proceso educativo o de formación, teniendo en cuenta su orientación vocacional.
5. El empleador debe obtener un certificado de estado de salud del adolescente trabajador.
6. La autorización de trabajo o empleo para adolescentes indígenas será conferida por las autoridades tradicionales de la respectiva comunidad teniendo en cuenta sus usos y costumbres. En su defecto, la autorización será otorgada por el inspector del trabajo o por la primera autoridad del lugar.
7. El empleador debe dar aviso inmediato a la autoridad que confirió la autorización, cuando se inicie y cuando termine la relación laboral.

Parágrafo. La autorización para trabajar podrá ser negada o revocada en caso de que no se den las garantías mínimas de salud, seguridad social y educación del adolescente.

Artículo 113. *Jornada de trabajo.* La duración máxima de la jornada laboral de los adolescentes autorizados para trabajar se sujetará a las siguientes reglas:

1. Los adolescentes mayores de 15 y menores de 17 años, sólo podrán trabajar en jornada diurna máxima de seis horas diarias y treinta horas a la semana y hasta las 6:00 de la tarde.
2. Los adolescentes de diecisiete (17) años, sólo podrán trabajar en una jornada máxima de ocho horas diarias y 40 horas a la semana y hasta las 8:00 de la noche.

Artículo 114. *Salario.* Los adolescentes autorizados para trabajar tendrán derecho a un salario de acuerdo con la actividad desempeñada y proporcional al tiempo trabajado. En ningún caso la remuneración podrá ser inferior al salario mínimo legal vigente.

Artículo 115. *Derechos en caso de maternidad.* Sin perjuicio de los derechos consagrados en el Capítulo V del Título VIII del Código Sustantivo del Trabajo, la jornada de la adolescente mayor de quince (15) y menor de dieciocho (18) años, no podrá exceder de cuatro horas diarias a partir del séptimo mes de gestación y durante la lactancia, sin disminución de su salario y prestaciones sociales.

Artículo 116. *De los trabajadores independientes.* Los adolescentes que pretendan desarrollar trabajos en forma independiente requerirán la autorización del defensor de familia en los términos establecidos en esta ley.

Las Empresas Promotoras de Salud prestarán los servicios al adolescente autorizado para trabajar en forma independiente, y cuando fuere necesario, efectuará el cobro a los padres.

El adolescente autorizado para trabajar, beneficiario del régimen subsidiado, mantendrá o recuperará su condición de afiliado, cuando el ingreso percibido no le permita cotizar al régimen contributivo.

Artículo 117. *Prohibición de realizar trabajos peligrosos y nocivos.* Ninguna persona menor de 18 años podrá ser empleada o realizar trabajos que impliquen peligro o que sean nocivos para su salud e integridad física o psicológica o los considerados como peores formas de trabajo infantil. El Ministerio de la Protección Social, en colaboración con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, establecerá la clasificación de dichas actividades de acuerdo con el nivel de peligro y nocividad que impliquen para los adolescentes autorizados para trabajar y la publicarán cada dos años periódicamente en distintos medios de comunicación.

Para la confección o modificación de estas listas, el Ministerio consultará y tendrá en cuenta a las organizaciones de trabajadores y de empleadores, así como a las instituciones y asociaciones civiles interesadas, teniendo en cuenta las recomendaciones de los instrumentos e instancias internacionales especializadas.

Artículo 118. *Garantías especiales para el adolescente indígena autorizado para trabajar.* En los procesos laborales en que sea demandante un adoles-

cente indígena será obligatoria la intervención de las autoridades de su respectivo pueblo. Igualmente, se informará a la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior o a la dependencia que haga sus veces.

Capítulo IV.
Procedimiento judicial y reglas especiales

Artículo 119. *Competencia del juez de familia en única instancia.* Sin perjuicio de las competencias asignadas por otras leyes, corresponde al juez de familia, en única instancia:

1. La homologación de la resolución que declara la adoptabilidad de niños, niñas o adolescentes.
2. La revisión de las decisiones administrativas proferidas por el defensor de familia o el comisario de familia, en los casos previstos en esta ley.
3. De la restitución internacional de niños, niñas y adolescentes.
4. Resolver sobre el restablecimiento de derechos cuando el defensor o el comisario de familia haya perdido competencia.

Parágrafo. En los casos de que trata el numeral 4, el juez deberá proferir la decisión dentro de los dos meses siguientes al recibo del expediente. El incumplimiento de dicho término constituye causal de mala conducta.

Artículo 120. *Competencia del juez de familia en primera instancia.* Además de los asuntos atribuidos por otras leyes, los jueces de familia conocerán en primera instancia de la restitución internacional de niños, niñas y adolescentes.

Artículo 121. *Competencia del juez municipal.* El juez civil municipal o promiscuo municipal conocerá de los asuntos que la presente ley atribuye al juez de familia, en única instancia en los lugares donde no exista éste.

Artículo 122. *Iniciación del proceso y adopción de medidas urgentes.* Los procesos a que se refiere esta ley se iniciarán a instancia del defensor de familia, del representante legal del niño, niña o adolescente, o de la persona que lo tenga bajo su cuidado. El juez podrá iniciarlos también de oficio.

Al momento de iniciar el proceso el juez deberá adoptar las medidas de urgencia que la situación amerite para proteger los derechos del niño, la niña o el adolescente.

Artículo 123. *Trámite.* Las controversias que esta ley asigna al juez de familia se someterán al trámite del proceso verbal sumario regulado en el Código de Procedimiento Civil, o al trámite que lo sustituya, y en ellos se observarán las reglas del presente título.

Los asuntos que no contengan controversia seguirán el trámite de jurisdicción voluntaria previsto en el Código de Procedimiento Civil.

Cuando quien deba ser oído en el proceso haya sido debidamente citado a audiencia de conciliación ante el defensor de familia, no será necesario notificarle personalmente el auto que ordene correrle traslado del informe; dicho auto se le notificará por aviso.

Artículo 124. *Acumulación de pretensiones y pronunciamiento oficioso.* Podrán acumularse en una misma demanda pretensiones relacionadas con uno o con varios niños, niñas o adolescentes, respecto de los mismos padres, representante legales, o personas que los tengan bajo su cuidado.

El juez deberá pronunciarse sobre todas las situaciones establecidas en el proceso que comprometan los intereses del niño, niña o adolescente, aunque no hubieren sido alegadas por las partes.

Artículo 125. *Homologación de la declaratoria de adoptabilidad.* La sentencia de homologación de la declaratoria de adoptabilidad se dictará de plano; producirá, respecto de los padres, la terminación de la patria potestad del niño, la niña o el adolescente adoptable, y deberá ser inscrita en el libro de varios de la notaría o de la oficina de registro del estado civil.

Si el juez advierte la omisión de alguno de los requisitos legales, ordenará devolver el expediente al defensor de familia para que lo subsane.

Artículo 126. *Adopción.* Es competente para conocer del proceso de adopción el juez del domicilio de la persona o entidad a cuyo cargo se encuentre el niño, la niña o el adolescente. La demanda sólo podrá ser formulada por los interesados en ser declarados adoptantes.

Artículo 127. *Anexos de la demanda.* A la demanda se acompañarán los siguientes documentos:

1. El consentimiento para la adopción, si fuere el caso.
2. El registro civil de nacimiento de los adoptantes y el del niño, la niña o el adolescente.

3. El registro civil de matrimonio o la prueba de la convivencia extramatrimonial de los adoptantes.
4. La copia de la declaratoria de adoptabilidad o de la autorización para la adopción, según el caso.
5. La certificación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o de una entidad autorizada para el efecto, sobre la idoneidad física, mental, social y moral de los adoptantes, expedida con antelación no superior a seis meses, y la constancia de la entidad respectiva sobre la integración personal del niño, la niña o el adolescente con el adoptante o adoptantes.
6. El certificado vigente de antecedentes penales o policivos de los adoptantes.
7. La certificación actualizada sobre la vigencia de la licencia de funcionamiento de la institución donde se encuentre albergado el niño, la niña o el adolescente, expedida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Parágrafo. La convivencia a que se refiere el numeral 3 podrá demostrarse por cualquiera de los siguientes medios:

a) Con testimonios extraprocesales, practicados con citación del defensor de familia.
b) Con la inscripción del compañero permanente en los registros de las cajas de compensación familiar o de las instituciones de seguridad o previsión social.
c) Con el acta de matrimonio celebrado ante la autoridad competente de otro país.
d) Con la inscripción en el libro de varios de la notaría del domicilio de la pareja, con antelación no menor de tres años.
e) Con el registro civil de nacimiento de los hijos habidos por la pareja, nacidos en los últimos dos años.

Artículo 128. *Requisitos adicionales para adoptantes extranjeros.* Cuando los adoptantes sean extranjeros que residan fuera del país, deberán aportar, además, los siguientes documentos:

1. Certificación expedida por la entidad gubernamental o privada oficialmente autorizada, donde conste el compromiso de efectuar el seguimiento del niño,

la niña o el adolescente adoptable hasta su nacionalización en el país de residencia de los adoptantes.
2. Autorización del gobierno del país de residencia de los adoptantes para el ingreso del niño, la niña o el adolescente adoptable.
3. Concepto favorable a la adopción, emitido por el defensor de familia con base en la entrevista que efectúe con los adoptantes y el examen de la documentación en que la entidad autorizada para efectuar programas de adopción recomienda a los adoptantes.

Artículo 129. *Traslado y trámite.* De la demanda se correrá traslado por tres días hábiles al defensor de familia. Cuando no sea necesario practicar pruebas, la sentencia deberá ser dictada dentro de los diez días hábiles siguientes, por fuera de audiencia; en caso contrario el juez fijará audiencia para practicarlas y proferir el fallo.

Artículo 130. *Notificación de la sentencia.* Por lo menos uno de los adoptantes deberá concurrir personalmente al juzgado a recibir notificación de la sentencia.

Artículo 131. *Contenido y efectos de la sentencia.* La sentencia que decrete la adopción deberá contener los datos necesarios para que su inscripción en el registro civil constituya el acta de nacimiento y reemplace la de origen, la cual se anulará. Una vez en firme se inscribirá en el registro del estado civil y producirá todos los derechos y las obligaciones propios de la relación paterno o materno filial, desde la fecha de presentación de la demanda. En todo caso, en la sentencia deberá omitirse mencionar el nombre de los padres de sangre.

La sentencia que decreta la adopción hace tránsito a cosa juzgada, sin perjuicio del recurso extraordinario de revisión.

Artículo 132. *Terminación anticipada del proceso.* Cuando falleciere el solicitante de la adopción antes de proferirse la sentencia el proceso terminará.

Si la solicitud de adopción fuere conjunta y uno de los adoptantes falleciere antes de proferirse la sentencia, el proceso terminará, a menos que el sobreviviente manifieste su interés de persistir en ella, caso en el cual la sentencia que se profiera sólo producirá efectos respecto de éste.

Artículo 133. *Requisito para la salida del país.* El niño, la niña o el adolescente adoptado sólo podrá salir del país cuando la sentencia que decrete la

adopción esté ejecutoriada. Las autoridades de emigración exigirán copia de la providencia con la constancia de ejecutoria.

Artículo 134. *Alimentos.* En el auto que corre traslado de la demanda o del informe del defensor de familia, el juez fijará cuota provisional de alimentos, siempre que haya prueba del vínculo que origina la obligación alimentaria. Si no tiene la prueba sobre la solvencia económica del alimentante, el juez podrá establecerlo tomando en cuenta su patrimonio, posición social, costumbres y en general todos los antecedentes y circunstancias que sirvan para evaluar su capacidad económica. En todo caso se presumirá que devenga al menos el salario mínimo legal.

La sentencia podrá disponer que los alimentos se paguen y aseguren mediante la constitución de un capital cuya renta los satisfaga. En tal caso, si el obligado no cumple la orden dentro de los diez días hábiles siguientes, el juez procederá en la forma indicada en el inciso siguiente.

El juez deberá adoptar las medidas necesarias para que el obligado cumpla lo dispuesto en el auto que fije la cuota provisional de alimentos, en la conciliación o en la sentencia que los señale. Con dicho fin decretará embargo, secuestro, avalúo y remate de los bienes o derechos de aquél, los cuales se practicarán con sujeción a las reglas del proceso ejecutivo. El embargo se levantará si el obligado paga las cuotas atrasadas y presta caución que garantice el pago de las cuotas correspondientes a los dos años siguientes.

Cuando se trate de arreglo privado o de conciliación extrajudicial, con la copia de aquél o del acta de la diligencia el interesado podrá adelantar proceso ejecutivo ante el juez de familia para el cobro de las cuotas vencidas y las que en lo sucesivo se causen.

Cuando se tenga información de que el obligado a suministrar alimentos ha incurrido en mora de pagar la cuota alimentaria por más de un mes, el juez que conozca o haya conocido del proceso de alimentos o el que adelante el ejecutivo dará aviso al Departamento Administrativo de Seguridad ordenando impedirle la salida del país hasta tanto preste garantía suficiente del cumplimiento de la obligación alimentaria y será reportado a las centrales de riesgo.

La cuota alimentaria fijada en providencia judicial, en audiencia de conciliación o en acuerdo privado se entenderá reajustada a partir del primero de

enero siguiente y anualmente en la misma fecha, en porcentaje igual al índice de precios al consumidor, sin perjuicio de que el juez, o las partes de común acuerdo, establezcan otra fórmula de reajuste periódico.

Con todo, cuando haya variado la capacidad económica del alimentante o las necesidades del alimentario, las partes de común acuerdo podrán modificar la cuota alimentaria, y cualquiera de ellas podrá pedirle al juez su modificación. En este último caso el interesado deberá aportar con la demanda por lo menos una copia informal de la providencia, del acta de conciliación o del acuerdo privado en que haya sido señalada.

Mientras el deudor no cumpla o se allane a cumplir la obligación alimentaria que tenga respecto del niño, la niña o el adolescente, no será escuchado en la reclamación de su custodia y cuidado personal ni en ejercicio de otros derechos sobre él o ella.

Lo dispuesto en este artículo se aplicará también al ofrecimiento de alimentos a niños, niñas o adolescentes.

El incumplimiento de la obligación alimentaria genera responsabilidad penal.

Artículo 135. *Medidas especiales para el cumplimiento de la obligación alimentaria.* Sin perjuicio de las garantías de cumplimiento de cualquier clase que convengan las partes o establezcan las leyes, el juez tomará las siguientes medidas durante el proceso o en la sentencia, tendientes a asegurar la oportuna satisfacción de la obligación alimentaria:

1. Cuando el obligado a suministrar alimentos fuere asalariado, el juez podrá ordenar al respectivo pagador o al patrono descontar y consignar a órdenes del juzgado, hasta el cincuenta por ciento (50%) de lo que legalmente compone el salario mensual del demandado, y hasta el mismo porcentaje de sus prestaciones sociales, luego de las deducciones de ley. El incumplimiento de la orden anterior hace al empleador, o al pagador en su caso, responsable solidario de las cantidades no descontadas. Para estos efectos, previo incidente dentro del mismo proceso, en contra de aquél o de éste se extenderá la orden de pago.
2. Cuando no sea posible el embargo del salario y de las prestaciones, pero se demuestre el derecho de dominio sobre bienes muebles o inmuebles, o la

titularidad sobre bienes o derechos patrimoniales de cualquier otra naturaleza, en cabeza del demandado, el juez podrá decretar los bienes muebles o de los otros derechos, en cantidad suficiente para garantizar el pago de la obligación y hasta el cincuenta por ciento (50%) de los frutos que ellos produzcan. Del embargo y secuestro quedarán excluidos los útiles e implementos de trabajo de la persona llamada a cumplir con la obligación alimentaria.

Artículo 136. *Acumulación de procesos de alimentos.* Si los bienes de la persona obligada o sus ingresos se hallaren embargados por virtud de una acción anterior fundada en alimentos o afectos al cumplimiento de una sentencia de alimentos, el juez, de oficio o a solicitud de parte, al tener conocimiento del hecho en un proceso concurrente, asumirá el conocimiento de los distintos procesos para el sólo efecto de señalar la cuantía de las varias pensiones alimentarias, tomando en cuenta las condiciones del alimentante y las necesidades de los diferentes alimentarios.

Artículo 137. *Continuidad de la obligación alimentaria.* Cuando a los padres se imponga la sanción de suspensión o pérdida de la patria potestad, no por ello cesará la obligación alimentaria. Esta obligación termina cuando el niño, la niña o el adolescente es entregado en adopción.

Artículo 138. *Prohibiciones en relación con los alimentos.* El derecho de pedir alimentos no puede transmitirse por causa de muerte, ni venderse o cederse de modo alguno, ni renunciarse. El que debe alimentos no puede oponer al demandante en compensación lo que el demandante le deba a él.

No obstante lo anterior, las pensiones alimentarias atrasadas podrán renunciarse o compensarse, y el derecho de demandarlas podrá transmitirse por causa de muerte, venderse o cederse, con autorización judicial, sin perjuicio de la prescripción que compete alegar al deudor.

Artículo 139. *Prelación de los créditos por alimentos.* Los créditos por alimentos a favor de los niños, las niñas y los adolescentes gozan de prelación sobre todos los demás.

Artículo 140. *Legitimación especial.* Con el propósito de hacer efectivo el pago de la cuota alimentaria, cualquiera de los representantes legales del niño, la niña o el adolescente o el defensor de familia podrán promover los procesos

que sean necesarios, incluso los encaminados a la revocación o declaración de la simulación de actos de disposición de bienes del alimentante.

Artículo 141. *Privación de la administración de los bienes del niño, la niña o el adolescente.* En el proceso para la privación de la administración de los bienes del niño, la niña o el adolescente, el juez podrá decretar la suspensión provisional de las facultades de disposición y de administración de los bienes y la designación de uno nuevo.

Artículo 142. *Restitución internacional de niños, niñas o adolescentes.* Con el informe del defensor de familia sobre el desacuerdo para la restitución internacional del niño, la niña o el adolescente, el juez de familia iniciará el proceso.

El defensor de familia intervendrá en representación del interés del niño, la niña o el adolescente retenido ilícitamente, sin perjuicio de la actuación del apoderado de la parte interesada.

Artículo 143. *Obligación especial para las autoridades competentes de restablecimiento de derechos.* En todos los casos y de manera inmediata a su conocimiento, la autoridad competente deberá realizar la verificación de la garantía de derechos ordenada en el artículo 54 de esta Ley.

Libro II
Sistema de responsabilidad penal para adolescentes y niños y niñas víctimas de delitos
Título I
Sistema de responsabilidad penal para adolescentes
Capítulo I
Principios rectores y definiciones del proceso

Artículo 144. *Sistema de responsabilidad penal para adolescentes.* El sistema de responsabilidad penal para adolescentes es el conjunto de principios, normas generales y específicas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación, procesamiento, sentencia y de las medidas complementarias y de las decisiones frente a los delitos definidos en la legislación cometidos por las personas entre doce (12) y menos de dieciocho (18) años al momento de cometer el hecho punible aunque en el transcurso del proceso alcancen los dieciocho (18) años.

Artículo 145. *Finalidad del sistema de responsabilidad penal para adolescentes.* En materia de responsabilidad penal para adolescentes tanto el proceso como las medidas que se tomen son de carácter pedagógico, específico y diferenciado respecto del sistema de adultos, conforme a la protección integral. El proceso deberá garantizar la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño.

En todo caso, ante equívocos o conflictos normativos entre las disposiciones de esta ley y entre ésta y otras leyes, así como para todo efecto hermenéutico, las autoridades judiciales deberán siempre privilegiar el interés superior del niño y orientarse por los principios de la protección integral, así como los pedagógicos, específicos y diferenciados que rigen este sistema.

Parágrafo. En ningún caso, la protección integral puede servir de excusa para violar los derechos y las garantías de los niños, las niñas y los adolescentes.

Artículo 146. *Principios del sistema de responsabilidad penal para adolescentes.* Los principios y las definiciones consagrados en la Constitución Política, en los instrumentos internacionales de derechos humanos y en la presente ley se aplicarán en el Sistema de Responsabilidad para Adolescentes.

Artículo. 147 *Exclusión de la responsabilidad penal para adolescentes.* Sin perjuicio de la responsabilidad civil de los padres o representantes legales, así como la responsabilidad penal consagrada en el numeral 2 del artículo 25 del Código Penal, las personas menores de doce (12) años no serán juzgadas ni declaradas responsables penalmente, privadas de libertad, bajo denuncia o sindicación de haber cometido una conducta punible. El niño o la niña menor de doce (12) años deberán ser conducidos inmediatamente por la policía de infancia y adolescencia ante la autoridad competente para la verificación de la garantía de sus derechos de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de esta ley. La policía procederá a su identificación y a la recolección de los datos de la conducta punible.

Así mismo no serán juzgadas, declaradas penalmente responsables ni sometidas a sanciones penales las personas mayores de doce (12) años y menores de dieciocho (18) años con discapacidad psíquica o mental o con trastorno mental. Estas situaciones deben probarse debidamente en el proceso, siempre y cuando la conducta punible guarde relación con la discapacidad.

Artículo 148. *Niños y niñas menores de doce (12) años.* Cuando un niño o niña incurra en la comisión de un delito sólo se le aplicarán medidas de

verificación de la garantía de derechos y de restablecimiento, de acuerdo con lo previsto en esta ley.

Si un niño o una niña es sorprendido en flagrancia por una autoridad de policía, ésta lo pondrá inmediatamente o a más tardar en el término de la distancia a disposición de las autoridades competentes de protección y restablecimiento de derechos. Si es un particular quien lo sorprende, deberá ponerlo de inmediato a disposición de la autoridad policial para que ésta proceda en la misma forma.

Parágrafo. Cuando del resultado de una investigación o juicio surjan serias evidencias de la concurrencia de un niño o una niña en la comisión de un delito, se remitirá copia de lo pertinente a las autoridades competentes de protección y restablecimiento de derechos.

Artículo 149. *Procedimiento aplicable.* Salvo las reglas especiales de procedimiento definidas en el presente libro, el procedimiento del sistema de responsabilidad penal para adolescentes se regirá por las normas consagradas en el Código de Procedimiento Penal vigente, exceptuando aquellas que sean contrarias al interés superior del adolescente.

Artículo 150. *Policía judicial en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes.* En los procesos en que estén involucrados niños, niñas o adolescentes como autores o participes de un delito, o como víctimas de los mismos, hará las veces de policía judicial la Policía de Infancia y Adolescencia, o en su defecto los miembros de la policía judicial que sean capacitados en derechos humanos y de infancia.

Artículo 151. *El defensor de familia en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes.* En todas las actuaciones del proceso, desde el reporte de la noticia criminal a la policía judicial, y en las etapas de indagación y de juicio, el adolescente deberá estar acompañado por el defensor de familia, quien verificará la garantía de los derechos del adolescente.

Artículo 152. *Audiencias en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes.* Las audiencias que se surtan en el proceso de responsabilidad penal para adolescentes ante los jueces de control de garantías y ante los jueces de conocimiento, serán cerradas al público. En ellas solamente podrán intervenir los sujetos procesales, las autoridades responsables de la política criminal y los organismos de control. Las instituciones académicas o científicas podrán asistir, previa autorización del juez respectivo y con el acuerdo del adolescente.

Artículo 153. *Carácter especializado.* La aplicación de esta ley, tanto en el proceso como en la ejecución de medidas por responsabilidad penal para adolescentes, estará a cargo de autoridades y órganos especializados en materia de infancia y adolescencia.

Artículo 154. *Presunción de edad.* Cuando exista duda en relación con la edad del adolescente, y mientras la autoridad pericial competente lo define, se presume que es menor de 18 años.

Artículo 155. *Prohibición de testimonios.* Los niños, las niñas y los adolescentes podrán ser citados como testigos en los procesos penales que se adelanten contra los adultos. Sus declaraciones sólo las podrá tomar el defensor de familia con cuestionario enviado previamente por el fiscal o el juez. El defensor sólo formulará las preguntas que no sean contrarias a su interés superior.

Excepcionalmente, el juez podrá intervenir en el interrogatorio del niño, la niña o el adolescente para conseguir que éste responda a la pregunta que se le ha formulado o que lo haga de manera clara y precisa. Dicho interrogatorio se llevará a cabo fuera del recinto de la audiencia y en presencia del defensor de familia, siempre respetando sus derechos prevalentes.

Artículo 156. *Derecho al debido proceso y a las garantías procesales.* Los adolescentes que cometan delitos tienen derecho al debido proceso penal, a las garantías procesales básicas tales como: la presunción de inocencia, el derecho a ser notificado de las acusaciones, el derecho de defensa y de contradicción, el derecho al asesoramiento, el derecho a la presencia de los padres o tutores, el derecho a guardar silencio, el derecho a la confrontación con los testigos e interrogar a éstos, el derecho de apelación ante autoridad superior, y las demás garantías consagradas en la Constitución, la ley y los tratados internacionales.

En todos los casos los derechos de los que goza un adolescente indagado, investigado o juzgado bajo el presente sistema son, como mínimo, los previstos por la Ley 906 de 2004.

Artículo 157. *Principio de legalidad.* Ningún adolescente podrá ser investigado acusado, ni juzgado por acto u omisión que, al momento de la comisión del delito, no esté previamente definido en la ley penal vigente, de manera expresa e inequívoca.

El adolescente declarado responsable por la autoridad judicial de la comisión de un delito sólo podrá ser sancionado con la imposición de las medidas definidas en la presente ley.

Artículo 158. *Reserva de las diligencias.* Manteniendo la debida reserva de identidad, las actuaciones procesales adelantadas en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, sólo podrán ser conocidos por las partes, sus apoderados, los organismos de control y las autoridades públicas responsables de la política criminal en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal.

En la audiencia cerrada, previa información y aceptación por parte del adolescente, la comunidad científica, académica y las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos debidamente acreditados y expertos en infancia y adolescencia, podrán observar las actuaciones procesales con la autorización del juez de conocimiento, quien verificará que dicha observancia beneficie el interés superior del adolescente,

Queda prohibido revelar la identidad o imagen que permita la identificación de las personas procesadas.

Artículo 159. *Derecho de defensa.* El adolescente durante toda la actuación procesal y aún antes de la imputación deberá tener un apoderado que adelante su defensa técnica. Ninguna actuación procesal tendrá validez si no está presente su apoderado. El adolescente podrá designar apoderado, quien tendrá derecho a revisar las diligencias y a actuar desde el momento de la noticia criminal.

En caso de no contar con apoderado, el mismo adolescente o la policía judicial solicitarán la asignación de un defensor del Sistema de Defensoría Pública de la Defensoría del Pueblo.

Artículo 160. *Principio de inmediación.* Ninguna actuación tendrá validez si no es adelantada directamente por el funcionario judicial. La violación de este principio será causal de destitución del cargo.

Artículo 161. *Adolescentes indígenas.* Los adolescentes pertenecientes a las comunidades indígenas serán juzgados según las normas y los procedimientos de sus propias comunidades conforme a la legislación especial indígena consagrada en el artículo 246 de la Constitución Política, los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia y la ley.

Parágrafo. Los niños, las niñas y los adolescentes que se encuentren fuera del ámbito de su comunidad y que cometan delitos, serán sometidos al

sistema de responsabilidad penal adolescente, si han perdido el vínculo con sus comunidades de origen y no quieren retornar a ellas.

Artículo 162. *Prohibiciones especiales.* En los procesos por responsabilidad penal para adolescentes no proceden el juzgamiento a través de jurados de conciencia, la sentencia anticipada y los acuerdos entre la fiscalía y la defensa.

Artículo 163. *Prohibición de juzgamiento en ausencia.* Los adolescentes sometidos a procesos judiciales por responsabilidad penal no serán juzgados en su ausencia. En caso de no lograrse su comparecencia se continuará la investigación y el defensor público o apoderado asumirá plenamente su defensa hasta la acusación o la preclusión. Si hay acusación, se notificará al defensor público o apoderado y al defensor de familia. El proceso se suspenderá mientras se logra la comparecencia del procesado. En estos eventos la prescripción de la acción penal se aumentará en una tercera parte.

Artículo 164. *Prohibición de antecedentes.* Únicamente las sentencias proferidas en procesos por responsabilidad penal para adolescentes tendrán el carácter de antecedente judicial. Estos registros son reservados y podrán ser utilizados por las autoridades judiciales competentes para definir las medidas aplicables cuando se trate de establecer la naturaleza y gravedad de los hechos y la proporcionalidad e idoneidad de la medida.

Las entidades competentes deberán hacer compatibles los sistemas de información para llevar el registro de los adolescentes que han cometido delitos, con el objeto de definir los lineamientos de la política criminal para adolescentes y jóvenes.

Artículo 165. *Concepto de la privación de la libertad.* Se entiende por privación de la libertad toda forma de internamiento en un establecimiento público o privado del que no se permita salir por su propia voluntad al niño, la niña o el adolescente, dictada por orden de autoridad judicial.

Artículo 166. *Excepcionalidad de la privación de libertad.* Para los efectos de la responsabilidad penal para adolescentes, la privación de la libertad sólo procede para las personas que hayan cumplido quince (15) años y sean menores de dieciocho (18) años. La privación de la libertad sólo procederá como medida pedagógica en casos de delitos graves, y de especial gravedad, y en caso de segunda reincidencia por la comisión de delitos de gravedad intermedia.

Los delitos consagrados en el Título XVIII del Código Penal no tendrán medida de privación de libertad.

Artículo 167. *Separación de los adolescentes privados de la libertad.* La privación de la libertad de adolescentes, en los casos que proceda, se ejecutará en establecimientos de atención especializada en programas del Sistema Nacional de Bienestar Familiar siempre separados de los adultos.

En tanto no existan establecimientos especiales separados de los adultos para recluir a los adolescentes privados de la libertad, el funcionario judicial procederá a otorgarles libertad provisional o internación domiciliaria.

Capítulo II
Las conductas punibles

Artículo 168. *Clasificación de los delitos.* Para los efectos de este Estatuto y de la responsabilidad penal para adolescentes, los delitos se clasifican en delitos de especial gravedad, delitos graves, delitos de gravedad intermedia y delitos leves.

Artículo 169. *Delitos de especial gravedad.* Para los efectos de la responsabilidad penal para adolescentes, son delitos de especial gravedad aquellos que atentan contra la vida y la integridad personal, los delitos contra las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, los delitos contra la libertad individual y otras garantías, y los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, y que tengan establecida en el Código Penal una pena de prisión mínima que equivalga o supere los quince (15) años o ciento ochenta (180) meses de cárcel.

Artículo 170. *Delitos graves.* Para los efectos de la responsabilidad penal para adolescentes son delitos graves los delitos contra el patrimonio económico como el hurto calificado y el hurto en que se ejerza con violencia contra las personas y que tienen contemplada en el Código Penal una pena de prisión mínima equivalente a seis (6) años o setenta y dos (72) meses y hasta ciento setenta y nueve (179) meses.

Artículo 171. *Delitos de gravedad intermedia.* Para efectos de la responsabilidad penal para adolescentes, son delitos de gravedad intermedia aquellos que tienen definida en el Código Penal una pena superior a los tres (3) años y seis (6) meses o a cuarenta y dos (42) meses y hasta noventa y cinco (95) meses.

Artículo 172. *Delitos leves.* Son delitos leves para efectos de la responsabilidad penal para adolescentes aquellos cuya pena mínima en el Código Penal sea inferior a los tres (3) años y seis (6) meses de prisión y los que requieren querella de parte.

Capítulo III
Autoridades y entidades del sistema

Artículo 173. *Integración.* Forman parte del sistema de responsabilidad penal para adolescentes:

1. Los fiscales delegados ante los jueces penales para adolescentes, los jueces promiscuos de familia, y los jueces municipales quienes se ocuparán de la dirección de las investigaciones en las cuales se encuentren presuntamente comprometidos adolescentes, como autores o partícipes de conductas delictivas.
2. Los jueces penales para adolescentes, promiscuos de familia y los municipales quienes adelantarán las actuaciones y funciones judiciales que les asigna la ley.
3. Las Salas Penales y de Familia de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial que integrarán la Sala de Asuntos Penales para adolescentes en los mismos tribunales, ante quienes se surtirá la segunda instancia.
4. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, ante la cual se tramitará el recurso extraordinario de casación.
5. La Policía Judicial y el Cuerpo Técnico Especializado adscritos a la Fiscalía delegada ante los jueces penales para adolescentes juveniles y promiscuos de familia.
6. La Policía Nacional con su personal especializado quien deberá apoyar las acciones de las autoridades judiciales y entidades del sistema.
7. Los defensores públicos del Sistema Nacional de Defensoría Pública de la Defensoría del Pueblo, quienes deben asumir la defensa técnica del proceso, cuando el niño, la niña o el adolescente carezca de apoderado.
8. Las Defensorías de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y las Comisarías de Familia, o los inspectores de policía, cuando deban tomar las medidas para la verificación de la garantía de derechos, y las medidas para su restablecimiento.

9. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar quien responderá por los lineamientos técnicos para la ejecución de las medidas pedagógicas dispuestas en este Libro.
10. Las demás instituciones que formen parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.

Parágrafo primero. Cada responsable de las entidades que integran el Sistema de Responsabilidad Penal para adolescentes deberá garantizar la provisión o asignación de los cargos que se requieran para su funcionamiento y la especialización del personal correspondiente.

Parágrafo segundo. La designación de quienes conforman el sistema de responsabilidad penal para adolescentes deberá recaer en personas que demuestren conocimiento calificado de derecho penal, y de infancia y familia, y de las normas internas e internacionales relativas a derechos humanos.

Artículo 174. *Los juzgados penales para adolescentes.* Créanse en todo el territorio nacional dentro de la jurisdicción penal ordinaria, los juzgados penales para adolescentes.

Parágrafo. El Congreso de la República, el gobierno nacional y el Consejo Superior de la Judicatura tomarán las medidas necesarias para garantizar la creación y el funcionamiento de los juzgados penales para adolescentes en todo el país.

Artículo 175. *Competencia de los jueces penales para adolescentes.* Los jueces penales para adolescentes conocerán del juzgamiento de las personas menores de 18 años y mayores de 12 acusadas de violar la ley penal. Igualmente conocerán de la función de control de garantías en procesos de responsabilidad penal para adolescentes que no sean de su conocimiento.

Parágrafo. La designación de jueces penales para adolescentes deberá recaer en personas que demuestren conocimiento calificado de derecho penal, y de infancia y familia, y de las normas internas e internacionales relativas a los derechos humanos.

Artículo 176. *Competencia de los jueces promiscuos de familia en materia penal.* En los sitios en los que no hubiera un juez penal para adolescentes el Consejo de la Judicatura competente dispondrá que los jueces promiscuos de familia cumplan las funciones definidas para los jueces penales para adolescen-

tes en el artículo anterior relativas al juzgamiento y control de garantías en procesos de responsabilidad penal para adolescentes. A falta de juez penal para adolescentes o promiscuo de familia, el juez municipal conocerá de los procesos por responsabilidad penal para adolescentes.

Parágrafo transitorio. La competencia de los jueces promiscuos de familia en esta materia se mantendrá hasta que se establezcan los juzgados penales para adolescentes necesarios a fin de atender los procesos de responsabilidad penal para adolescentes.

Artículo 177. *Composición y competencias de las Salas de Asuntos Penales para adolescentes.* Los Tribunales Superiores de Distrito Judicial contarán con Salas de Asuntos Penales para adolescentes, especializadas en los asuntos que versen sobre responsabilidad penal adolescente. Estas Salas estarán integradas por un (1) magistrado de la Sala Penal y dos (2) magistrados de la Sala de Familia o, en su defecto, de la Sala Civil, del respectivo Tribunal Superior.

En los procesos de responsabilidad penal para adolescentes la segunda instancia se surtirá ante las Salas de Asuntos Penales de Adolescentes de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia conocerá de la acción de revisión contra sentencias.

Parágrafo. El Congreso de la República, el gobierno nacional y el Consejo Superior de la Judicatura garantizarán los recursos para la conformación de las Salas de Asuntos Penales para Adolescentes con magistrados especializados en el tema de la responsabilidad penal adolescente.

Capítulo IV
Reparación del daño

Artículo 178. *De la responsabilidad penal.* Las conductas punibles realizadas por personas mayores de doce (12) años y que no hayan cumplido los dieciocho (18) años de edad, dan lugar a responsabilidad penal y civil, conforme a las normas consagradas en la presente ley.

Artículo 179. *Incidente de reparación.* Los padres, o representantes legales, son solidariamente responsables, y en tal calidad deberán ser citados o acudir al incidente de reparación a solicitud de la víctima del condenado o su defensor. Esta citación deberá realizarse en la audiencia que abra el trámite del incidente.

Artículo 180. *De la acción penal.* La acción penal por delitos definidos como graves, de especial gravedad y de gravedad intermedia será oficiosa. En los delitos leves sólo se procederá mediante querella.

Artículo 181. *Desistimiento.* Los delitos leves contemplados en la presente ley y los consagrados como querellables en el Código de Procedimiento Penal, admiten desistimiento.

Artículo 182. *Extinción de la acción penal.* La acción penal se extingue por muerte, desistimiento, prescripción, conciliación y reparación integral de los daños cuando haya lugar, aplicación del principio de oportunidad, y en los demás casos contemplados en esta ley y en el Código de Procedimiento Penal.

Artículo 183. *Del principio de oportunidad, la conciliación y la reparación integral de los daños.* Las autoridades judiciales deberán facilitar en todo momento el logro de acuerdos que permitan la conciliación y la reparación de los daños y la aplicación del principio de oportunidad. Éstas se realizarán con el consentimiento de ambas partes y se llevarán a cabo con una visión pedagógica y formativa mediante la cual el niño, la niña o el adolescente pueda tomar conciencia de las consecuencias de su actuación delictiva y de las responsabilidades que de ella se derivan. Así mismo, el conciliador buscará la reconciliación con la víctima.

En los delitos leves y de gravedad intermedia la conciliación y aplicación del principio de oportunidad terminan el proceso. En los delitos graves y de especial gravedad sólo podrá utilizarse la conciliación para determinar la indemnización de perjuicios, para ser considerada positivamente en la definición de la medida aplicable y para buscar la reconciliación con la víctima.

Artículo 184. *El principio de oportunidad en los procesos seguidos a los adolescentes como partícipes de los delitos cometidos por grupos armados al margen de la ley.* La Fiscalía General de la Nación podrá renunciar a la persecución penal, en los casos en que los adolescentes, en cualquier condición hayan hecho parte de grupos armados al margen de la ley, o hayan participado directa o indirectamente en las hostilidades o en acciones armadas, o por los delitos consagrados en el Título XVIII del Código Penal, relativos a la rebelión, sedición, asonada, conspiración, seducción, usurpación o retención ilegal del mando, cuando:

1. Se establezca que adolescente tuvo como fundamento de su decisión las condiciones sociales, económicas y culturales de su medio para haber estimado como de mayor valor la pertenencia a un grupo armado al margen de la ley.
2. Se establezca que la situación de marginamiento social, económico y cultural no le permitían al adolescente contar con otras alternativas de desarrollo de su personalidad.
3. Se establezca que el adolescente no estaba en capacidad de orientar sus esfuerzos a conocer otra forma de participación social.

En todos los casos tendrán que ser remitidos a un programa de atención especializada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Artículo 185. *Condiciones para cumplir durante el periodo de prueba.* El fiscal fijará el periodo de prueba, el cual no podrá ser superior a seis meses, y determinará una o varias de las condiciones que deberá cumplir el imputado, entre las siguientes:

1. Residir en un lugar determinado e informar al fiscal cualquier cambio del mismo.
2. No poseer ni portar armas de fuego.
3. La realización de actividades a favor de la recuperación de las víctimas.
4. La dejación efectiva de las armas y la manifestación expresa de no participar en actos delictuales.
5. La manifestación pública de arrepentimiento por el hecho que se le imputa.

Artículo 186. *Prohibición especial.* Sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar, queda prohibida la entrevista militar y la utilización en actividades de inteligencia de los niños, las niñas y los adolescentes desvinculados de los grupos armados al margen de la ley por parte de autoridades de la fuerza pública. El incumplimiento de esta disposición será sancionado con la destitución del cargo.

Artículo 187. *Prescripción de la acción.* La acción penal por los delitos graves y de especial gravedad prescribe en cinco años; en los delitos de gravedad intermedia y delitos leves en seis meses.

En las conductas de ejecución instantánea la prescripción empezará a contarse desde el momento de la comisión del hecho; en las de ejecución permanente o en la tentativa, el término comenzará a correr a partir de la realización del último acto, y en las omisivas empezará a correr cuando haya cesado el deber de actuar.

Capítulo V
Medidas

Artículo 188. *Medidas.* Son medidas pedagógicas aplicables a los adolescentes a quienes se les haya comprobado su participación en el acto delictivo y se haya declarado su responsabilidad:

1. Amonestación.
2. Amonestación extensiva a los padres, representantes legales o personas con quienes conviva el adolescente.
3. Reglas de conducta.
4. Prestación de servicios a la comunidad.
5. Libertad asistida.
6. Medio semi-cerrado.
7. Privación de libertad.

Parágrafo primero. Para la aplicación de todas las medidas la autoridad judicial deberá asegurar que el adolescente esté vinculado a un centro educativo. Los defensores de familia deberán controlar el cumplimiento de esta obligación y verificar la garantía de sus derechos.

Artículo. 189. *Finalidad de las medidas.* Las medidas señaladas en el artículo anterior tienen una finalidad protectora, educativa y restaurativa, y se complementarán con el apoyo de la familia y de especialistas.

Artículo 190. *Juez de ejecución de las medidas.* Son competentes para controlar la ejecución de las medidas impuestas por los jueces penales para adolescentes, los jueces penales municipales. En aquellos municipios en donde sólo haya juez municipal o promiscuo municipal, será responsable de la ejecución de las medidas por reparto aquel que no ha conocido del caso.

Artículo 191. *Criterios para la definición de las medidas.* Para definir las medidas aplicables se deberá tener en cuenta:

1. La naturaleza y gravedad de los hechos.
2. La proporcionalidad e idoneidad de la medida.
3. La edad del adolescente.

Parágrafo. Al computar la medida de privación de libertad, la autoridad judicial deberá considerar el periodo de internamiento preventivo al que haya sido sometido el adolescente.

Artículo 192. *Derechos de los adolescentes durante la ejecución de las medidas.* Durante la ejecución de las medidas el adolescente tiene los siguientes derechos, además de los consagrados en la Constitución Política y en la presente ley:

1. a ser mantenido preferentemente en su medio familiar siempre y cuando éste reúna las condiciones requeridas para su desarrollo;
2. a recibir información sobre el programa de atención especializada en el que se encuentre vinculado, durante las etapas previstas para el cumplimiento de la medida;
3. a recibir servicios sociales y de salud por personas con la formación profesional idónea, y continuar su proceso educativo de acuerdo con su edad y grado académico;
4. a comunicarse reservadamente con su apoderado o defensor público, con el defensor de familia, con el Fiscal y con la autoridad judicial;
5. a presentar peticiones ante cualquier autoridad y a que se le garantice la respuesta;
6. a comunicarse libremente con sus padres, representantes o responsables, salvo prohibición expresa de la autoridad judicial;
7. a que su familia sea informada sobre los derechos que a ella le corresponden y respecto de la situación y los derechos del adolescente.

Artículo 193. *Internamiento preventivo.* En cualquier momento del proceso, y antes de la audiencia de juicio, el juez de control de garantías, como último recurso, podrá decretar la detención preventiva cuando exista:

1. Riesgo razonable de que el adolescente evadirá el proceso.
2. Temor fundado de destrucción u obstaculización de pruebas.
3. Peligro grave para la víctima, el denunciante o el testigo.

Parágrafo primero. El internamiento preventivo no procederá sino en los casos en que, conforme a la gravedad del delito, sería admisible la privación de libertad como medida. Se ejecutará en centros de internamiento especializados donde los adolescentes procesados deben estar separados de los ya sentenciados.

Parágrafo segundo. El internamiento preventivo no podrá exceder de un mes, prorrogable con motivación, por un mes más. Si cumplido este término el juicio no ha concluido por sentencia condenatoria, el juez que conozca del mismo la hará cesar, sustituyéndola por otra medida.

Artículo 194. *La amonestación.* Es la recriminación que la autoridad judicial le hace al adolescente sobre las consecuencias del hecho delictivo y la exigencia de la reparación del daño. En todos los casos deberá asistir a un curso educativo sobre respeto a los derechos humanos y convivencia ciudadana que estará a cargo del Instituto de Estudios del Ministerio Público

En caso de condena al pago de perjuicios, el funcionario judicial exhortará al niño, la niña o el adolescente, y a sus padres a su pago en los términos de la sentencia.

Artículo 195. *Amonestación extensiva a los padres, representantes legales o personas con quienes conviva el adolescente.* En caso de hacerse extensiva a los padres, representantes legales o personas con quienes conviva el niño, la niña o el adolescente, se dejará expresa constancia de tal circunstancia, advirtiéndoles que en el caso de nuevos incumplimientos de sus obligaciones, el juez les impondrá multa de diez (10) a doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes. De la diligencia se levantará un acta que suscribirán quienes intervengan.

Artículo 196. *Las reglas de conducta.* Es la imposición de la autoridad judicial al adolescente de obligaciones o prohibiciones para regular su modo de vida, así como promover y asegurar su formación. Esta medida no podrá exceder los dos años.

Artículo 197. *La prestación de servicios sociales a la comunidad.* Es la realización de tareas de interés general que el adolescente debe realizar, en forma gratuita, por un periodo que no exceda de seis meses, durante una jornada máxima de ocho horas semanales, preferentemente los fines de semana y festivos o en días hábiles pero sin afectar su jornada escolar.

Artículo 198. *La libertad vigilada.* Es la concesión de la libertad que da la autoridad judicial al adolescente con la condición obligatoria de someterse a la supervisión, la asistencia y la orientación de un programa de atención especializada. Esta medida no podrá durar más de dos años.

Artículo 199. *Medio semi-cerrado.* Es la vinculación del adolescente a un programa de atención especializada al cual deberá asistir obligatoriamente entre las 7 de la noche y las 6 de la mañana o, durante los fines de semana. La autoridad judicial definirá el número de noches, y la medida no podrá ser superior a un año.

Artículo 200. *La privación de libertad.* Es la internación del adolescente en un centro de atención especializada del cual sólo podrá salir por orden de la autoridad judicial. Esta medida está sujeta a los principios de excepcionalidad y de respeto a la condición de persona menor de dieciocho (18) años.

Parágrafo. No podrá exceder en ningún caso los cinco (5) años y sólo procede para delitos graves y de especial gravedad, y para adolescentes entre quince (15) y dieciocho (18) años de edad.

Artículo 201. *Derechos de los adolescentes privados de libertad.* Además de los derechos consagrados en la Constitución Política y en la presente Ley, el adolescente privado de libertad tiene los siguientes derechos:

1. Permanecer internado en la misma localidad, municipio o distrito o en la más próxima al domicilio de sus padres, representantes o responsables.
2. Que el lugar de internamiento satisfaga las exigencias de higiene, seguridad y salubridad, cuente con acceso a los servicios públicos esenciales y sea adecuado para lograr su formación integral.

3. Ser examinado por un médico inmediatamente después de su ingreso al programa de atención especializada, con el objeto de comprobar anteriores vulneraciones a su integridad personal y verificar el estado físico o mental que requiera tratamiento.
4. Continuar su proceso educativo de acuerdo con su edad y grado académico.
5. Que se le mantenga en cualquier caso separado de los adultos.
6. Participar en la elaboración del plan individual para la ejecución de la medida.
7. Recibir información sobre el régimen interno de la institución, especialmente sobre las medidas disciplinarias que puedan serle aplicables, y sobre los procedimientos para imponerlas y ejecutarlas.
8. No ser trasladado arbitrariamente del programa donde cumple la medida. El traslado sólo podrá realizarse por una orden escrita de la autoridad judicial.
9. No ser sometido a ningún tipo de aislamiento.
10. Mantener correspondencia y comunicación con sus familiares y amigos, y recibir visitas por lo menos una vez a la semana.
11. Tener acceso a la información de los medios de comunicación.

Artículo 202. *Imposición de la medida.* Las medidas o medida definitiva se impondrán en la audiencia de juicio oral que debe ser continua y privada, so pena de nulidad. Si la audiencia de juicio no puede realizarse en una sola jornada, continuará durante todas las audiencias consecutivas que fueren necesarias hasta su conclusión. Se podrá suspender por un plazo máximo de 10 días hábiles y la interrupción por más tiempo conlleva la nueva realización del debate desde su inicio.

Artículo 203. *Detención en flagrancia.* El adolescente detenido en flagrancia será conducido de inmediato ante el fiscal delegado para la autoridad judicial, quien dentro de las 36 horas siguientes lo presentará al juez de control de garantías y le expondrá cómo se produjo la aprehensión. El juez resolverá en la misma audiencia si convoca directamente a juicio oral dentro de los 10 días hábiles siguientes. El fiscal presentará la acusación directamente en la audiencia de juicio oral, y se seguirá en lo demás el procedimiento penal vigente, con las reglas especiales del proceso para adolescentes establecidas en el presente libro.

Título II
Capítulo único
Niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos

Artículo 204. *Delito de maltrato infantil.* El que cause lesiones físicas o psicológicas no culposas que produzcan daño sobre la integridad de un niño, una niña o un adolescente, incurrirá en prisión de cinco (5) a diez (10) años.

Artículo 205. *Derechos especiales de los niños, las niñas y los adolescentes víctimas de delitos.* En los procesos por delitos en los cuales los niños, las niñas o los adolescentes sean víctimas el funcionario judicial tendrá en cuenta los principios del interés superior del niño, la prevalencia de sus derechos, la protección integral y los derechos consagrados en los convenios internacionales ratificados por Colombia, en la Constitución Política y en esta Ley.

Artículo 206. *Criterios para el desarrollo del proceso judicial de delitos en los cuales son víctimas los niños, las niñas y los adolescentes.* Con el fin de hacer efectivos los principios previstos en el artículo anterior y garantizar el restablecimiento de los derechos, en los procesos por delitos en los cuales sean víctimas los niños, las niñas y los adolescentes la autoridad judicial tendrá en cuenta los siguientes criterios específicos:

1. Dará prioridad a las diligencias, pruebas, actuaciones y decisiones que se han de tomar.
2. Citará a los padres, representantes legales o a las personas con quienes convivan, cuando no sean éstos los agresores, para que lo asistan en la reclamación de sus derechos. Igualmente, informará de inmediato a la Defensoría de Familia, a fin de que se tomen las medidas de verificación de la garantía de derechos y restablecimiento pertinentes, en los casos en que el niño, la niña o el adolescente víctima carezca definitiva o temporalmente de padres, representante legal, o éstos sean vinculados como autores o partícipes del delito.
3. Prestará especial atención para la sanción de los responsables, la indemnización de perjuicios y el restablecimiento pleno de los derechos vulnerados.
4. Decretará de oficio o a petición de los niños, las niñas y los adolescentes víctimas de delitos, de sus padres, representantes legales, del defensor de familia o del Ministerio Público, la práctica de las medidas cautelares autori-

zadas por la ley para garantizar el pago de perjuicios y las indemnizaciones a que haya lugar. En estos casos no será necesario prestar caución.

5. Tendrá especial cuidado para que en los procesos que terminan por conciliación, desistimiento o indemnización integral, no se vulneren los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes víctimas del delito.
6. Se abstendrá de aplicar el principio de oportunidad y la condena de ejecución condicional cuando los niños, las niñas o los adolescentes sean víctimas del delito, a menos que aparezca demostrado que fueron indemnizados.
7. Pondrá especial atención para que en todas las diligencias en que intervengan niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos se les tenga en cuenta su opinión, su calidad de niños, se les respete su dignidad, intimidad y demás derechos consagrados en esta Ley. Igualmente velará por que no se les estigmatice, ni se les generen nuevos daños con el desarrollo de proceso judicial de los responsables.
8. Tendrá en cuenta la opinión de los niños, las niñas y los adolescentes víctimas de delitos en los reconocimientos médicos que deban practicárseles. Cuando no la puedan expresar, el consentimiento lo darán sus padres, representantes legales o en su defecto el defensor de familia o la Comisaría de Familia. A falta de estas autoridades el personero o el inspector de policía.
9. Ordenará a las autoridades competentes la toma de medidas especiales para garantizar la seguridad de los niños, las niñas y los adolescentes víctimas o testigos de delitos y de su familia, cuando a causa de la investigación del delito se hagan necesarias.
10. Informará y orientará a los niños, las niñas y los adolescentes víctimas de delitos, a sus padres, representantes legales o personas con quienes convivan sobre la finalidad de las diligencias del proceso, el resultado de las investigaciones y la forma como pueden hacer valer sus derechos.
11. Se abstendrá de decretar la detención domiciliaria en los casos en que el imputado es miembro del grupo familiar del niño, la niña o el adolescente víctima del delito.
12. En los casos en que un niño, una niña o un adolescente deba rendir testimonio deberá estar acompañado de autoridad especializada o por un psicólogo, de acuerdo con las exigencias contempladas en la presente ley.

13. En las diligencias en que deba intervenir un niño, una niña o un adolescente, la autoridad judicial se asegurará de que esté libre de presiones o intimidaciones.

Artículo 207. *Audiencia en los procesos penales.* Las audiencias en las que se investiguen y juzguen delitos cuya víctima sea una persona menor de dieciocho (18) años, serán privadas. En ellas sólo podrán estar las partes, la autoridad judicial, el defensor de familia, los organismos de control y el personal científico que deba apoyar al niño, la niña o el adolescente.

Artículo 208. *Facultades del defensor de familia en los procesos penales.* En los procesos penales por delitos en los cuales sea víctima un niño, una niña o un adolescente, el defensor de familia podrá solicitar información sobre el desarrollo de la investigación, para efectos de tomar las medidas de verificación de la garantía de derechos y restablecimiento pertinentes.

Artículo 209. *Funciones del representante legal de la víctima.* Los padres o el representante legal de la persona menor de edad están facultados para intervenir en los procesos penales en que se juzgue un adulto por un delito en el cual sea víctima un niño, una niña o un adolescente como representante de éste, en los términos establecidos en el Código de Procedimiento Penal y para iniciar el incidente de reparación integral de perjuicios.

Artículo 210. *Incidente de reparación integral en los procesos en que los niños, las niñas y los adolescentes son víctimas.* En los procesos penales en que se juzgue un adulto por un delito en el cual sea víctima un niño, una niña o un adolescente, el incidente de reparación integral de perjuicios se iniciará de oficio si los padres, representantes legales o el defensor de familia no lo hubieren solicitado dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia.

Artículo 211. *Programas de atención especializada para los niños, las niñas y los adolescentes víctimas de delitos.* En gobierno nacional, departamental, distrital, y municipal, bajo la supervisión de la entidad coordinadora del Sistema Nacional de Bienestar Familiar diseñará y ejecutará programas de atención especializada para los niños, las niñas y los adolescentes víctimas de delitos, que respondan a la protección integral, al tipo de delito, a su interés superior y a la prevalencia de sus derechos.

Artículo 212. *Caducidad de la querella.* En los delitos en los que los niños, las niñas o los adolescentes sean víctimas, no se aplicarán los términos de caducidad para la querella ni para el incidente de reparación integral de perjuicios.

Artículo 213. *Beneficios y subrogados penales.* Salvo en casos consagrados en la Constitución Política, no se podrán conceder beneficios o subrogados penales a los adultos que incurran en delitos no culposos realizados contra personas menores de dieciocho (18) años.

Artículo 214. *Aumento de penas.* Las penas mínimas y máximas consagradas en el Código Penal vigente se aumentarán en tres (3) años para los delitos que no sean culposos, cuya víctima sea una persona menor de dieciocho (18) años.

Libro III
Sistema Nacional de Bienestar Familiar, Políticas Públicas e Inspección, Vigilancia y Control
Capítulo I
Sistema Nacional de Bienestar Familiar y Políticas Públicas de Infancia y Adolescencia

Artículo 215. *Definición de políticas públicas de infancia y adolescencia.* Para los efectos de esta ley, se entienden por políticas públicas de infancia y adolescencia el conjunto de acciones que adelanta el Estado, con la participación de la sociedad y de la familia, para garantizar la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes.

Las políticas públicas se ejecutan a través de la formulación, implementación, evaluación y seguimiento de planes, programas, proyectos y estrategias.

Artículo 216. *Objetivos de las políticas públicas.* Son objetivos de las políticas públicas, entre otros, los siguientes:

1. Orientar la acción y los recursos del Estado hacia el logro de condiciones sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales, que hagan posible el desarrollo de las capacidades y las oportunidades de los niños, las niñas y los adolescentes, como sujetos en ejercicio responsable de sus derechos.

2. Mantener actualizados los sistemas y las estrategias de información que permitan fundamentar la toma de decisiones adecuadas y oportunas sobre la materia.
3. Diseñar y poner en marcha acciones para lograr la inclusión de la población infantil más vulnerable a la vida social en condiciones de igualdad.
4. Fortalecer la articulación interinstitucional e intersectorial

Artículo 217. *Principios rectores de las políticas públicas.* Las políticas públicas de infancia, adolescencia y familia como políticas de Estado se regirán como mínimo por los siguientes principios:

1. El interés superior del niño, la niña o el adolescente.
2. La prevalencia de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.
3. La protección integral.
4. La equidad.
5. La integralidad y articulación de las políticas.
6. La solidaridad.
7. La participación social.
8. La prioridad de las políticas públicas sobre niñez y adolescencia.
9. La complementariedad.
10. La prioridad en la inversión social dirigida a la niñez y la adolescencia.
11. La financiación, gestión y eficiencia del gasto y la inversión pública.
12. La perspectiva de género.

Artículo 218. *Responsables de las políticas públicas de infancia y adolescencia.* Son responsables del diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas de infancia y adolescencia en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal, el presidente de la república, los gobernadores y los alcaldes. Su incumplimiento será sancionado disciplinariamente como causal de mala conducta. La responsabilidad es indelegable y conlleva la rendición pública de cuentas.

Parágrafo. Los organismos de control garantizarán el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley.

Artículo 219. *Sistema Nacional de Bienestar Familiar.* El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como coordinador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, tiene a su cargo la articulación de las entidades responsables de la garantía de los derechos, la prevención de su vulneración, la protección y el restablecimiento de los mismos, en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal.

Artículo 220. *Consejo Nacional de Política Social.* El Consejo Nacional de Política Social es el ente responsable de diseñar la política pública, movilizar y apropiar los recursos presupuestales y dictar las líneas de acción para garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, y asegurar su protección y restablecimiento en todo el territorio nacional.

El Consejo estará integrado por:

1. El presidente de la república o el vicepresidente, quien lo presidirá.
2. Los ministros de la Protección Social, Interior y Justicia, Educación, Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Cultura, Comunicaciones, o los viceministros.
3. El director del Departamento Nacional de Planeación o el subdirector.
4. El director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien hará la secretaría técnica.
5. Un gobernador en representación de los gobernadores.
6. Un alcalde en representación de los alcaldes.

Parágrafo. El Consejo deberá sesionar dos veces al año.

Artículo 221. *Consejos departamentales y municipales de política social.* En todos los departamentos y municipios deberán sesionar Consejos de Política Social, presididos por el gobernador y el alcalde quienes no podrán delegar ni su participación, ni su responsabilidad so pena de incurrir en causal de mala conducta. Tendrán las mismas funciones que el nacional en sus ámbitos territoriales, deberán tener participación de la sociedad civil organizada y definirán su propio reglamento y composición. En todo caso deberán formar parte del Consejo las autoridades competentes para el restablecimiento de los derechos y el Ministerio Público.

En los municipios en los que no exista un centro zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la coordinación del sistema de bienestar familiar la ejercerán los Consejos de Política Social.

Los Consejos deberán sesionar como mínimo cuatro veces al año, y deberán rendir informes periódicos a las Asambleas Departamentales y a los Concejos Municipales.

Capítulo II
Inspección, vigilancia y control

Artículo 222. *Definición.* Para los efectos de esta ley se entiende por vigilancia y control las acciones de supervisión, policivas, administrativas y judiciales encaminadas a garantizar el cumplimiento de las funciones y obligaciones para la garantía y el restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes y su contexto familiar, y prevenir su vulneración a través del seguimiento de las políticas públicas y de la evaluación de la gestión de los funcionarios y de las entidades responsables.

Artículo 223. *Objetivo general de la inspección, la vigilancia y el control.* El objetivo de la inspección, la vigilancia y el control es asegurar que las autoridades competentes cumplan sus funciones en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal para:

1. Garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, y su contexto familiar.
2. Asegurar que reciban la protección integral necesaria para el restablecimiento de sus derechos.
3. Disponer la adecuada distribución y utilización de los recursos destinados al cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de infancia, adolescencia y familia.
4. Verificar que las entidades responsables de garantizar y restablecer los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes cumplan de manera permanente con el mejoramiento de su calidad de vida y las de sus familias.

Artículo 224. *Autoridades competentes de inspección, vigilancia y control.* De conformidad con las competencias que les asignan la Constitución y las leyes, ejercerán la función de inspección, vigilancia y control:

1. La Procuraduría General de la Nación
2. La Contraloría General de la República
3. La Defensoría del Pueblo
4. Las personerías distritales y municipales
5. Las entidades administrativas de inspección y vigilancia
6. La sociedad civil organizada, en desarrollo de los artículos 40 y 103 de la Constitución Política

Artículo 225. *Funciones de la Procuraduría General de la Nación.* La Procuraduría General de la Nación ejercerá las funciones asignadas en este capítulo anterior por intermedio de la Procuraduría Delegada para la Defensa del Menor y la Familia, que a partir de esta ley se denominará la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, la cual a través de las procuradurías judiciales ejercerá las funciones de vigilancia superior, de prevención, control de gestión y de intervención ante las autoridades administrativas y judiciales tal como lo establece la Constitución Política y la ley.

Artículo 226. *Funciones de la Contraloría General de la República.* La Contraloría General de la República ejercerá las funciones a que hace referencia este título mediante el control posterior y selectivo del manejo de las finanzas, la gestión y los resultados de las políticas, programas y proyectos relacionados con la infancia, la adolescencia y la familia de conformidad con los objetivos y principios de esta ley.

Artículo 227. *Funciones de la Defensoría del Pueblo.* La Defensoría del Pueblo ejercerá las funciones a que hace referencia este título a través de la Defensoría Delegada para los derechos de la niñez, la juventud y las mujeres mediante la divulgación, protección, promoción de derechos y el seguimiento a las políticas públicas que comprometan derechos humanos de los niños, las niñas y los adolescentes, como lo establece la Constitución Política y la ley.

Artículo 228. *Participación de la sociedad.* En desarrollo del principio de corresponsabilidad, las organizaciones sociales especializadas, como las veedurías ciudadanas, o cualquier otra forma de organización de la ciudadanía, participarán en el seguimiento y vigilancia de las políticas públicas y de las acciones y decisiones de las autoridades competentes. Las autoridades nacionales y territoriales deben garantizar que esta función se cumpla.

Capítulo III
Disposiciones finales

Artículo 229. *Reglamentación.* Las normas definidas en esta ley serán reglamentadas por el gobierno nacional bajo la dirección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Artículo 230. *Presupuesto y financiación.* El gobierno nacional, el Congreso de la República, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura dispondrán la asignación, reorganización y redistribución de los recursos presupuestales, financieros, físicos y humanos para el cumplimento de la presente ley, bajo la coordinación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Artículo 231. *Vigencia.* La presente Ley entrará en vigencia tres (3) meses después de su promulgación.

Artículo 232. *Derogatoria.* La presente Ley deroga el Decreto 2737 de 1989 o Código del Menor.

_____	_____
Procurador General de la Nación	Defensor del Pueblo
_____	_____
Gina María Parody D´Echeona Representante a la Cámara	Claudia Blum de Barberi Senadora de la República
Continúan firmas.	
Lorenzo Almendra Velasco	Dieb Maloof Cuse
José Luis Arcila Córdoba	Claudia Wilches
Roberto Camacho Weverberg	Rafael Pardo Rueda
Sandra Ceballos	Andrés González Díaz

Javier Ramiro Devia Arias
Ivan Díaz Mateus
Ramón Elejalde Arbeláez
Eduardo Enríquez Maya
José Luis Flórez Rivera
Jesús Ignacio García Valencia
Jorge Homero Giraldo
Nancy Patricia Gutiérrez
Adalberto Jaimes Ochoa
Jorge Eliécer Arango Palacio
Tony Jozame Amar
Rosmery Martínez Rosales
Reginaldo Montes Álvarez
Carlos Germán Navas Talero
Myriam Alicia Paredes Aguirre
Telésforo Pedraza Ortega
Carlos Arturo Piedrahíta Cárdenas
Clara Isabel Pinillos Abozaglo
Griselda Yaneth Restrepo Gallego
Milton Arlex Rodríguez Sarmiento
Zamir Eduardo Silva Amín
Dixon Ferney Tapasco Treviño
German Varón Cotrino
Luis Fernando Velasco Chaves
William Vélez Mesa
Guillermo Rivera
Jairo Martínez
Adriana Gutiérrez
Manuel Enríquez Rosero
María Isabel Urrutia
Zulema Jattin Corrales
Venus Albeiro Silva
Edgar Fandiño
Juan Hurtado

Bogotá D.C. agosto 17 de 2005

Doctor
Julio Eugenio Gallardo Archbold
Presidente
Honorable Cámara de Representantes
Ciudad

En un esfuerzo mancomunado entre la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y el grupo de senadores y representantes a la Cámara que suscribimos esta iniciativa, y en uso del derecho que consagran los artículos 154, 156 y el núm. 6 del artículo 282 de la CP nos permitimos poner a consideración del H. Congreso, el presente proyecto de ley estatutaria "Por la cual se expide la Ley para la Infancia y la Adolescencia".

La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo apoyan la presente iniciativa legislativa, reservándose algunas observaciones complementarias que se harán en el trámite legislativo en temas como alimentos, adopción, políticas públicas y responsabilidad penal juvenil, en razón de la trascendencia que estos temas tienen para la niñez y la adolescencia colombiana.

Exposición de motivos

Antecedentes

En 1994 se integró, mediante decreto presidencial, una Comisión Interinstitucional asesora del Ministro de Justicia y del Derecho que tenía como tarea actualizar el Código del Menor expedido en 1989, a los principios de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ratificada por el Estado colombiano con la Ley 12 de 1991. Esta comisión de la que hicieron parte entidades del gobierno, del Estado y de la sociedad civil, dio como resultado un proyecto de ley de protección integral, que a los pocos días de haber sido radicado para estudio en el Congreso de la República, fue retirado por el mismo gobierno por inconveniencia.

Posteriormente, bajo el liderazgo de la Fundación Restrepo Barco y de Unicef se integró el Grupo de Reflexión sobre niñez, el cual consolidó una

propuesta de ley de reforma integral, la que por carencia de iniciativa legislativa no pudo llegar a estudio del Congreso de la República y fue solamente publicada para consulta.

En 1999 la Defensoría del Pueblo, con el apoyo de Unicef convocó a una Mesa de Trabajo Interinstitucional en la que participaron entidades del gobierno, del Estado y de la sociedad civil, con el fin de estructurar en una propuesta legislativa un sistema de responsabilidad penal juvenil, nuevamente con el objeto de actualizar y adecuar la legislación colombiana en materia de debido proceso, a los imperativos de la Convención sobre los Derechos del Niño y a las reglas y directrices que las Naciones Unidas han consolidado para guiar las legislaciones de los Estados.

En esta ocasión se decidió por consenso que ante el fracaso de impulsar iniciativas de ley integrales, es decir, que contuvieren en un solo texto los elementos de la protección integral y los de responsabilidad penal juvenil, era mejor intentar dos iniciativas separadas. Por ello se trabajó primero la de intervención penal. El proceso tuvo dos años de concertación con los diferentes actores responsables, y cuando se estaba en la etapa final de consolidación, sucedieron los eventos del 11 de septiembre en Nueva York, ante lo cual el gobierno nacional presentó el proyecto del ley al Congreso con un aumento severo en el tiempo de la sanción para los adolescentes y jóvenes que cometieran delitos, y lo anunció como la estrategia de Colombia contra el terrorismo.

El proyecto, que tuvo ponencia favorable y pliego de modificaciones en el que se bajó el quantum de la sanción al del proyecto inicial, fue debatido una sola vez en la Comisión Primera de la Cámara, y para el siguiente debate se consideró que era mejor su archivo, con la finalidad de diseñar una nueva iniciativa legislativa que incorporara normas de protección integral y de responsabilidad penal juvenil, y en efecto el proyecto fue archivado.

Mientras ello sucedía, un grupo de instituciones privadas nacionales e internacionales, y del sistema de Naciones Unidas que desarrollan trabajo por la protección de los derechos de los niños y las niñas en Colombia, se propusieron conformar la Alianza por una Política Pública de Infancia, con el objeto de apoyar el diseño de un nuevo proyecto de ley integral de niñez y adolescencia, y de afirmar las iniciativas regionales que habían comenzado a diseñar y ejecutar

políticas públicas de infancia bajo el nuevo paradigma de la protección integral impulsado por la Convención sobre los Derechos del Niño.

A dicho grupo de instituciones se sumaron entidades del gobierno como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidades territoriales como el Departamento Administrativo de Bienestar Social de Bogotá y observadores como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, unión que dio como resultado la Alianza por la Niñez Colombiana integrada, además de las señaladas, por: Unicef, Unfpa, Unodc, OIM, OMS-OPS, OIT-IPEC, Save the Children, Plan Internacional, Cinde, Sense Internacional, Facultad de Psicología de la Universidad Javeriana, Observatorio de Infancia de la Universidad Nacional, Red Antioqueña de Niñez, PCAA, Tierfund, Visión Mundial, entre otras.

Sin embargo, mientras se consolidaba la Alianza, un grupo de congresistas liderados por José Maria Villanueva, Darío Martínez y Dieb Malof, presentaron a consideración de la Comisión Séptima del Senado un proyecto de ley para reformar en su integridad el Código del Menor colombiano. Por su parte, la representante a la Cámara Gina Parody había radicado otro proyecto sobre la creación de un sistema de responsabilidad penal juvenil. Ante estos importantes esfuerzos, se tomó la decisión de acumular el proyecto presentado por el Senado, el de la Cámara y el trabajo que ya había comenzado a organizar el grupo de entidades de la Alianza. Para tal fin se contrató para su redacción a Ligia Galvis Ortiz y a Jesús Antonio Muñoz, y se elaboró un nuevo proyecto de ley integral de infancia y adolescencia, el cual fue el resultado de un año y medio de trabajo continuo bajo el liderazgo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, proyecto que fue radicado como ley estatutaria en la Comisión Primera del Senado de la República, con el número 032 en el mes de diciembre de 2004.

En el mismo periodo fue radicada otra iniciativa en el Senado, el proyecto 116 de 2004, texto que se acumuló al citado proyecto 032 de Senado, al que le fueron designados como ponentes los doctores Andrés González Díaz, Germán Vargas Lleras y la doctora Claudia Blum de Barbieri. El proyecto tuvo ponencia favorable y fue presentado al estudio de la Comisión Primera de Senado, instancia que decidió retirarlo por solicitud de los autores, dado que como se trataba de una ley estatutaria, no alcanzaba el tiempo de legislatura para que diera su debate correspondiente. De este proyecto, la Procuraduría General de la Nación hizo

un estudio detallado y juicioso de la totalidad del articulado, aporte que fue tenido en cuenta en la elaboración del presente proyecto, incluyendo la necesidad de reducir el articulado para hacerlo operativo.

Fue entonces cuando el grupo de senadores citados y la representante a la Cámara, además de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, se unieron con la Alianza por la Niñez Colombiana, para que conjuntamente se hiciera una exhaustiva revisión de la ponencia sobre el proyecto 032, tarea que en efecto se realizó y es el resultado del presente proyecto de Ley Estatutaria de Infancia y Adolescencia.

El proyecto actual

Con los antecedentes mencionados, la Alianza por la Niñez Colombiana designó, desde el mes de enero de 2005, un grupo de trabajo técnico que denominó Grupo de Ley de Infancia para iniciar la revisión de la ponencia al proyecto de Ley 032 de Senado, con miras a ajustarla, revisarla y estructurar nuevamente otro proyecto de Ley. Esta tarea fue motivada por los representantes a la Cámara y los senadores, tanto autores como ponentes, quienes asumieron el compromiso ante el país de adelantar los trámites para tener una ley de protección integral para niños, niñas y adolescentes.

A las entidades de la Alianza y a los miembros del Congreso se sumó la motivación de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, con el fin de que bajo una sola iniciativa legislativa conjunta, se rehiciera la ley con algunos aspectos que era necesario ajustar, pero manteniendo la filosofía jurídica y política que inspiró el anterior proyecto 032.

La Secretaría Técnica de la Alianza integró un comité técnico (ICBF, OIM, Secretaría) que se puso como tarea la revisión total de la estructura y la adecuación de definiciones, de procedimientos (la Fundación Restrepo Barco contrató a un abogado procesalista, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, para que creara las reglas especiales de los procedimientos administrativos y judiciales), de las políticas públicas, de las medidas de restablecimiento, de la responsabilidad penal para adolescentes, y de los elementos de inspección, vigilancia y control.

Este trabajo se realizó con la convocatoria a tres mesas de trabajo y concertación a todas las personas e instituciones públicas y privadas que tienen relación con los temas de niñez y adolescencia, las que funcionaron así:

• *Mesa de trabajo No. 1.* Tema de discusión: principios, definiciones, derechos, prevención y garantía de derechos y políticas públicas. Participaron del trabajo en una jornada de tres días, bajo la coordinación del equipo técnico: el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Unicef, OIT, OIM, la Policía de Menores, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior y de Justicia, la Asociación de Defensores de Familia del ICBF, el Departamento Administrativo de Bienestar Social del Distrito de Bogotá y la facultad de psicología de la Universidad Javeriana.

• *Mesa de trabajo No. 2.* Tema de discusión: protección y restablecimiento de derechos, y medidas de restablecimiento entre las que está la adopción. Participaron del trabajo en una jornada de tres días: el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Unicef, OIT, OIM, representantes de las instituciones autorizadas para desarrollar programas de adopción, Cinde, la Policía de Menores, la Defensoría del Pueblo, el Departamento Administrativo de Bienestar Social del Distrito de Bogotá y la Facultad de Psicología de la Universidad Javeriana, Ministerio del Interior y de Justicia y la Asociación de Defensores de Familia del ICBF.

• *Mesa de trabajo No. 3.* Tema de discusión: responsabilidad penal para adolescentes. Participaron del trabajo en una jornada de tres días: el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Unicef, Unodc, OIM, Cinde, Visión Mundial, la Policía de Menores, la Defensoría del Pueblo, el Departamento Administrativo de Bienestar Social del Distrito de Bogotá y la Asociación de Defensores de Familia del ICBF.

El destacado trabajo de participación, concertación y consensos sobre temas críticos que realizaron todas las personas que representaron las citadas instituciones permitió al comité técnico legal de la Alianza, estructurar y ensamblar un nuevo proyecto de ley de infancia y adolescencia para ser presentado a estudio del Congreso de la República por parte de un importante grupo de parlamentarios, del gobierno nacional y de los organismos de control del Estado en la presente legislatura.

La necesidad del cambio

El Estado colombiano ratificó en 1991 la Convención sobre los Derechos del Niño que lo obliga a adecuar las legislaciones nacionales a los nuevos paradigmas de dicho instrumento jurídico vinculante. Para ese entonces, Colombia con-

taba con un Código del Menor expedido en 1989 enfocado a atender a los menores de 18 años que incurrieran en una de las nueve **(sólo enumera 6)** situaciones irregulares que el mismo señaló taxativamente, como son menor abandonado o expósito, que carezca de representante legal, al que se le amenace su patrimonio, el que sea trabajador no autorizado, el adicto a sustancias que produzcan dependencia y el infractor a la ley penal, listado que deja por fuera de la atención integral a todo el universo de niños, y la consagración de las garantías suficientes para evitar la vulneración de derechos y el restablecimiento, más aun con las violaciones de los derechos humanos de los niños, las niñas y los adolescentes que ha presenciado el país en los últimos años.

Por orden de la Convención, los Estados deben someterse al examen del Comité de los Derechos del Niño creado precisamente en dicha Convención. Este Comité, luego de analizar los informes presentados por Colombia, ha elevado recomendaciones que siguen siendo desconocidas de manera sistemática por el Estado colombiano, siendo una de ellas y la más aguda la que se refiere al retraso injustificado de la actualización de la legislación interna.

El Comité de los Derechos del Niño es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño por sus Estados Partes. El Comité también supervisa la aplicación de los dos protocolos facultativos de la Convención, relativos a la participación de niños en los conflictos armados y a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.

Luego de recorrer un largo camino, la situación de los derechos humanos de la niñez colombiana, como se verá en el siguiente punto, desborda cualquier previsión normativa vigente. Por ello, se requiere un cambio contundente no sólo para seguir atendiendo de manera integral al millón y medio de niños y niñas en los programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que se atienden en la actualidad, sino para ampliar la cobertura en prevención y garantía de derechos de los restantes 16'500.000 menores de 18 años, ya que para éstos no se destina ni siquiera la provisión de una política pública. Es necesario incluirlos en una legislación en la que todas las personas sean reconocidas desde su nacimiento como iguales ante la ley. Una ley de infancia no puede legislar para atender un reducido número de niños y niñas pobres, desvalidos o

infractores, sino que tiene que prever la garantía de los derechos de 18'000.000 millones de niños, niñas y adolescentes que demandan con urgencia políticas de desarrollo integral.

Además del cambio político que demanda la nueva estructura legal, es imperativo atender los compromisos internacionales que el Estado colombiano ha adquirido con la adhesión a los tratados, convenciones y pactos, documentos de política y de doctrina internacional sobre derechos humanos de la niñez, cuerpo normativo que es de obligatorio acatamiento, que integra el paradigma de la *protección integral*, y que debe ser incorporado en la legislación nacional.

El imperativo del cambio normativo

El marco jurídico internacional

1. Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948:
   - Toda persona tiene todos los derechos y las libertades sin distinción alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
   - La infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales.
2. Otros instrumentos
   - Declaración de Ginebra de 1924 sobre los derechos del niño.
   - Declaración de los Derechos del Niño de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1959.
   - Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966, artículos 23 y 24.
   - Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 10.
3. La Convención sobre los Derechos del Niño, Asamblea General de las Naciones Unidas, 19 de noviembre de 1989.
   - Artículo 1º. Para los efectos de la presente Convención se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años.
   - Artículo 3º. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas, se atenderá el interés superior del niño.
4. Convenio sobre aspectos civiles del secuestro internacional de niños, suscrito en La Haya, octubre de 1980.

- El Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional de mayo de 1993.

5. El Convenio 132 de la OIT de 1998 sobre la edad mínima para el trabajo, y el Convenio 182 de 1999 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación.
6. Protocolos facultativos a la Convención sobre los Derechos del Niño.
   - Relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía de 2000.
   - Relativo a la participación de niños en los conflictos armados.
6. Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños de 2000, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada.
7. Estatuto de la Corte Penal Internacional. Crimen de guerra y de lesa humanidad: reclutar a menores de 15 años para participar en conflictos armados.
8. Convención de La Haya sobre adopciones nacionales e internacionales.
9. Convención de La Haya sobre restitución internacional de niños.

El marco político internacional

1. "Un mundo más justo para los niños y las niñas", Asamblea General, Sesión Especial de las Naciones Unidas, Nueva York, 2002. Principios del plan de acción.
   1. Poner a los niños siempre primero.
   2. Erradicar la pobreza: invertir en la infancia.
   3. No permitir que ningún niño quede postergado.
   4. Cuidar de todos los niños.
   5. Educar a todos los niños.
   6. Proteger a los niños de la violencia y la explotación.
   7. Proteger a los niños de la guerra.
   8. Luchar contra el VIH/SIDA.
   9. Escuchar a los niños y asegurar su participación.
   10. Proteger a la tierra para los niños.

El marco conceptual de los derechos humanos de la niñez

1. Convención sobre los Derechos del Niño. Artículo 4º. Los Estados adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan.
2. La Conferencia Mundial de Viena. Artículo 5. Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes, y están relacionados entre sí.
3. Constitución Política. Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos.

Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores.

Los documentos jurídicos, políticos y conceptuales relacionados han guiado la elaboración del proyecto de ley que se presenta a consideración y estudio del Congreso, por lo que es de suma importancia su observancia y desarrollo.

La situación de los derechos humanos de la niñez en Colombia

1. Derecho a la vida[1]

   En Colombia mueren en forma violenta un promedio de 11 niños y niñas al día.

   - Al año 4.015.
   - Cinco son asesinados.
   - Uno se suicida.
   - Tres mueren en accidentes de tránsito.
   - Dos mueren en otros accidentes.

[1] Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Estadísticas, 2002.

- Tasa de mortalidad infantil en Colombia:
  28 por 1000 nacidos vivos.
- La mortalidad hasta los 5 años es de 36 por mil.
- La tasa de mortalidad por área de residencia:
  - ✓ Urbana, 21,3.
  - ✓ Rural o marginal, 31,1.
- La tasa de mortalidad por grado de instrucción:
  - ✓ Sin instrucción, 42,3.
  - ✓ Sólo primaria, 28,2.
  - ✓ Secundaria y más, 19,6.
- Tasa de mortalidad materna: en la región es de 190 por 100.000 nacidos vivos; en Colombia la tasa es de 67,7 por 100.000 (Cepal, 2004).

2. Derecho a la integridad personal
   El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses dictaminó para el año 2003 un total de 14.208 casos por violencia sexual:
   - 71,5% contra niñas.
   - 13% contra niños.
   - Cada 40 minutos es violado un menor de edad en Colombia.

   En el mismo sentido, la Fiscalía General de la Nación reporta más de 21.000 casos denunciados por violencia sexual al año.
   El Instituto de Medicina Legal dictaminó para el año 2003 un total de 62.431 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales 61% fueron por maltrato conyugal; 23% por violencia entre otros familiares, y 16% por maltrato infantil.
   - Maltrato conyugal o de pareja contra mujeres, 33.628 casos.
   - Contra hombres, 4.324.
     - ✓ 89% de los casos se dieron en zona urbana.
     - ✓ 6% en zona rural.
     - ✓ 5% en otra zona.
3. Derecho a la alimentación equilibrada
   Según la Encuesta de Demografía y Salud de Profamilia, 2000, el 13,5% de los niños y las niñas menores de 5 años padece desnutrición crónica.
4. Derecho a no ser explotados económicamente

- Según estudio del DANE (2003), cerca de 1'567.000 niños y niñas trabajan en Colombia, en diferentes modalidades. Aproximadamente 50.000 niños y niñas trabajan en labores del procesamiento de la coca; cerca de 100.000 en oficios como la minería; 325.000 en trabajo doméstico en hogares de terceros, y el resto en diferentes oficios, laborando por más de 16 horas diarias (Save the Children).

5. Derecho a la educación[2]
   - Más de 2'500.000 niños y niñas en edad escolar están por fuera del sistema.
   - 42 de 100 niños y niñas en edad de preescolar ingresan a grado (0).
   - Solamente 60 de cada 100 estudiantes terminan el ciclo básico de primaria.
   - El analfabetismo en áreas urbanas es de 11%.
   - El analfabetismo en zonas rurales es de 30%.
   - Sólo 62 de cada 100 niños entre los 12-17 años ingresa a secundaria.
   - 30 de 100 estudiantes terminan 9º grado.

6. Derecho a la libertad[3]
   Año 2000: 330 niños y niñas secuestrados.
   Año 2001: 303 niños y niñas secuestrados
   - En promedio es secuestrado un niño al día.

7. Derecho al cuidado[4]
   Los delitos de mayor ocurrencia en Colombia son la inasistencia alimentaria y la violencia intrafamiliar (solamente en Bogotá se registran más de 60.000 casos).

8. Derecho a tener una familia y no ser separado de ella[5]
   - En 2002 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar registró 56.322 historias activas de niños abandonados en el país, de los cuales:

---

[2] Ministerio de Educación Nacional.
[3] Fuente: Fundación País Libre, 2000-2001.
[4] Fiscalía General de la Nación.
[5] Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2002.

- 4.529 fueron declarados en abandono.
- 25.691 en peligro.
- 23.732 historias sin información.
- 2.706 entregados en adopción.

9. Niños y niñas víctimas de desplazamiento forzado[6]
   En los últimos 15 años se han desplazado más de 1'100.000 niños y niñas.

10. Niños, niñas y adolescentes víctimas de minas antipersonal[7]
    - En Colombia hay sembradas más de 70.000 minas en 105 municipios.
    - En los últimos 8 años han muerto 5.500 niños y niñas por causa de las minas.

11. Niñez y adolescencia víctimas del reclutamiento y la utilización por parte de grupos armados al margen de la ley[8]
    - 70% niños, 30% niñas.
    - 70% se entregan voluntariamente.
    - 85% ingresa voluntariamente forzado por las circunstancias del entorno.
    - El promedio de escolaridad con el que llegan es de 3,5 grado.
    - El promedio de edad de ingreso es 13,7 años.
    - Las niñas son obligadas a responder por la planificación familiar.

12. Derechos sexuales y reproductivos
    - La encuesta de Profamilia, Demografía y Salud de 2000, registran que el 19% de las adolescentes entre 10 y 19 años han tenido un embarazo.
    - La encuesta sobre la Situación de las Mujeres en zonas marginales y asentamientos de población desplazada registra que en las áreas rurales y marginales el embarazo en adolescentes asciende a 30%.

---

[6] Consejería de Derechos Humanos para los Desplazados (Codhes).
[7] Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República.
[8] Unicef-Defensoría del Pueblo, Boletín No. 8, 2002.

Éstos son solamente algunos datos de contexto que permiten mostrar el grave problema de la carencia de sistemas de información actualizados que permitan tanto al gobierno nacional como a los gobiernos regionales emprender acciones de política pública para prevenir y restablecer los derechos más vulnerados. De allí la necesidad de actualizar la legislación para que no solamente se apunte a proteger a los niños y las niñas que tipifican las nueve situaciones irregulares del Código del Menor vigente, sino para garantizar el restablecimiento de todos y cada uno de los derechos amenazados o vulnerados.

La estructura del proyecto de ley

El proyecto contiene una estructura de tres libros:

- Libro I. Protección integral
- Libro II. Sistema de responsabilidad penal para adolescentes
- Libro III. Inspección, vigilancia y control

Libro I. Protección integral

- Título I. Disposiciones generales
  Capítulo I. Principios y definiciones
  - ✓ Finalidad
  - ✓ Objeto
  - ✓ Sujetos titulares de derechos
  - ✓ Ámbito de aplicación
  - ✓ Naturaleza de las normas
  - ✓ Reglas de interpretación y aplicación
  - ✓ Protección integral
  - ✓ Interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes
  - ✓ Prevalencia de los derechos
  - ✓ Corresponsabilidad
  - ✓ Exigibilidad de los derechos
  - ✓ Perspectiva de género
  - ✓ Derechos de niños y niñas indígenas
  - ✓ Responsabilidad parental
  - ✓ Responsabilidad en el ejercicio de los derechos

Capítulo II. Derechos y libertades

- ✓ Derecho a la vida y a la calidad de vida
- ✓ Derecho a la integridad personal
- ✓ Derechos de protección (derecho a ser protegidos contra el abandono, la explotación económica, el consumo de estupefacientes, la violación, la inducción y el constreñimiento a la prostitución, la pornografía, el secuestro, la explotación sexual, la venta, la trata de personas y cualquier forma contemporánea de esclavitud, el reclutamiento y utilización por parte de grupos armados al margen de la ley, la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, la desaparición forzada y la detención arbitraria, la situación de vida en la calle, los traslados ilícitos y su retención en el extranjero, al trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo puede dañar la salud, la seguridad o la moralidad. Los riesgos y efectos producidos por desastres naturales, y cualquier otro acto que vulnere sus derechos).
- ✓ Derecho a la libertad y seguridad personal
- ✓ Derecho a la familia y a no ser separado de ella
- ✓ Derecho a la custodia y al cuidado personal
- ✓ Derecho a la alimentación
- ✓ Derecho a la identidad
- ✓ Derecho al debido proceso
- ✓ Derecho a la salud
- ✓ Derecho a la educación
- ✓ Derecho a la educación inicial
- ✓ Derecho a la recreación
- ✓ Derecho a la participación en la vida cultural y en las artes
- ✓ Derecho al reconocimiento de la diversidad cultural
- ✓ Derecho a la participación
- ✓ Derecho a ser escuchados
- ✓ Derecho a la libertad de asociación y a celebrar reuniones pacíficas
- ✓ Derecho a la intimidad
- ✓ Derecho a la información
- ✓ Derecho de los adolescentes autorizados para trabajar
- ✓ Derecho a la formación y a la profesionalización del trabajo

- ✓ Derechos de los niños y las niñas con discapacidad
- ✓ Libertades fundamentales (libre desarrollo de la personalidad y autonomía, libertad de conciencia y de creencias, de cultos, de pensamiento, de locomoción y para escoger profesión u oficio)

- Título II. Garantía de derechos y prevención
  Capítulo I. Obligaciones de la familia, la sociedad y el Estado
  - ✓ Restricción especial al ejercicio del derecho a la recreación
  - ✓ Responsabilidad de los medios de comunicación
  - ✓ Obligaciones de las instituciones educativas
  - ✓ Obligaciones especiales del sistema de seguridad social
  - ✓ Responsabilidades especiales de los medios de comunicación.
  - ✓ Restricciones especiales para anunciantes y agencias de publicidad

  Capítulo II. Políticas públicas de infancia y adolescencia
  - ✓ Definición
  - ✓ Objetivos
  - ✓ Principios rectores
  - ✓ Entes responsables de las políticas
  - ✓ Principios relativos a la institucionalidad
  - ✓ Entidad coordinadora del Sistema de Bienestar Familiar

- Título III. Restablecimiento de derechos y protección
  Capítulo I. Medidas de restablecimiento de derechos:
  1. Amonestación con obligación de curso sobre derechos de la niñez
  2. Retiro inmediato del niño, la niña o el adolescente de la actividad que amenace o vulnere sus derechos o de las actividades ilícitas en que se pueda encontrar, y ubicación en un programa de atención especializada para el restablecimiento del derecho vulnerado.
  3. Ubicación inmediata en medio familiar. Sea en hogar de origen, familia extensa, hogar de paso u hogar sustituto.
  4. Ubicación en centros de emergencia para los casos en que no procede la ubicación en los hogares de paso.
  5. La adopción.

6. Además de las anteriores, se aplicarán las consagradas en otras disposiciones legales, o cualquier otra que garantice la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes.
7. Promover las acciones administrativas o judiciales a que haya lugar.

Capítulo II. Autoridades competentes

- ✓ Defensorías de Familia
- ✓ Comisarías de Familia
- ✓ Inspectores de Policía
- ✓ Personeros municipales y distritales
- ✓ Policía Nacional
- ✓ Procuraduría General de la Nación
- ✓ Defensoría del Pueblo

Capítulo III. Procedimiento administrativo para el restablecimiento de los derechos

Capítulo IV. Procedimiento judicial

Libro II. Sistema de responsabilidad penal para adolescentes

- Título I. Disposiciones generales

  Capítulo I. Principios rectores y definiciones del proceso de responsabilidad penal para adolescentes.
  - ✓ Sistema de responsabilidad penal para adolescentes
  - ✓ Finalidad
  - ✓ Principios del sistema
  - ✓ Niños y niñas menores de 12 años
  - ✓ Derecho al debido proceso
  - ✓ Principio de legalidad
  - ✓ Reserva de las diligencias
  - ✓ Derecho de defensa
  - ✓ Principio de inmediación
  - ✓ Adolescentes indígenas
  - ✓ Carácter especializado

- ✓ Prohibiciones especiales
- ✓ Prohibición de juzgamiento en ausencia
- ✓ Prohibición de antecedentes
- ✓ Exclusión de la responsabilidad penal
- ✓ Concepto de privación de libertad y procedencia
- ✓ Excepcionalidad de la medida de privación de libertad
- ✓ Separación de los adolescentes privados de libertad

Capítulo II. De las conductas punibles

- ✓ Clasificación de los delitos
- ✓ Delitos de especial gravedad
- ✓ Delitos graves
- ✓ Delitos de gravedad intermedia
- ✓ Delitos leves
- ✓ Participación de adolescentes en delitos cometidos por grupos armados al margen de la ley
- ✓ Procedimiento aplicable
- ✓ Policía judicial en el proceso penal para adolescentes
- ✓ El defensor de familia en el proceso
- ✓ Audiencias en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes
- ✓ Presunción de edad
- ✓ Prohibición de testimonios

Capítulo III. Autoridades y entidades del sistema de responsabilidad penal para adolescentes.

- ✓ Integración
- ✓ Juzgados penales para adolescentes
- ✓ Competencias de los jueces penales
- ✓ Competencias de los jueces promiscuos de familia
- ✓ Salas de asuntos penales para adolescentes

Capítulo IV. De la reparación del daño

- ✓ Incidente de reparación
- ✓ La acción penal

- ✓ Desistimiento
- ✓ Extinción de la acción penal
- ✓ Conciliación y principio de oportunidad
- ✓ Prescripción de la acción

Capítulo V. Las medidas

1. Amonestación con curso pedagógico sobre derechos humanos.
2. Amonestación extensiva a los padres, representantes legales o personas de quien dependa.
3. Reglas de conducta.
4. Prestación de servicios a la comunidad.
5. Libertad asistida.
6. Medio semi-cerrado.
7. Privación de libertad.
    - ✓ Finalidad de las medidas
    - ✓ Criterios para su definición
    - ✓ Derechos de los adolescentes durante la ejecución de las medidas
    - ✓ Imposición de la medida
    - ✓ Conducción en flagrancia

Capítulo VI. Niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos

- ✓ Delito de maltrato infantil
- ✓ Derechos especiales de los niños, las niñas y los adolescentes víctimas de delitos
- ✓ Criterios para el desarrollo del proceso judicial para niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos
- ✓ Audiencias en los procesos penales con niños, niñas y adolescentes.
- ✓ Facultades del defensor de familia
- ✓ Incidente de reparación
- ✓ Programas de atención especializada para niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos
- ✓ Caducidad de la querella
- ✓ Beneficios y subrogados penales
- ✓ Aumento de penas

Libro III. Inspección, vigilancia y control

El sistema de responsabilidad penal para adolescentes

La Corte Constitucional profirió la sentencia C-203 de 2005 en la cual se pronuncia de fondo en relación con la responsabilidad penal que el Estado debe exigir a las personas menores de 18 años que cometen delitos, además de reiterar la viabilidad constitucional del artículo del Código Penal que ordenó la conformación de una comisión para la creación de un sistema de responsabilidad penal juvenil.

Es importante recordar en este documento algunos apartes de dicha sentencia que confirman la necesidad de actualizar las normas del Código del Menor a los postulados jurídicos internacionales, a más de recordar que Colombia es el único país de la región de América Latina y el Caribe que aún no actualiza su legislación de infancia a los mandatos internacionales de derechos humanos.

> …En la presente sección, la Corte recapitulará las distintas normas aplicables al tema del procesamiento jurídico-penal de los menores de edad, para efectos de ilustrar que (i) es jurídicamente admisible, a nivel de la Constitución Política, del derecho internacional y del derecho comparado, que a los menores acusados de violar la ley penal se les tenga como responsables dentro de un sistema específico y diferente de responsabilidad, y (ii) en todo caso de procesamiento de menores de edad acusados de violar la ley penal, han de respetarse de manera estricta ciertas garantías mínimas consagradas en la Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos.
>
> …tanto el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho comparado, como la ley colombiana, la jurisprudencia constitucional y la jurisprudencia penal de la Corte Suprema de Justicia, junto con la doctrina especializada en la materia, coinciden en una premisa básica: los menores de edad que han cometido conductas constitutivas de violaciones de la ley penal son responsables frente al Estado y frente a la sociedad por sus acciones, y dicha responsabilidad se ha de traducir en la adopción de medidas de tipo judicial y administrativo que sean apropiadas en su naturaleza, características y objetivos a la condición de los menores en tanto sujetos de especial protección, que se orienten a promover su interés superior y prevaleciente y el respeto pleno de sus derechos fundamentales, que no obedezcan a un enfoque

> punitivo sino a una aproximación protectora, educativa y resocializadora, y que sean compatibles con las múltiples garantías reforzadas de las que los menores de edad son titulares a todo nivel por motivo de su especial vulnerabilidad.
>
> 4.5.3. Disposiciones relevantes del Código Penal
>
> 4.5.3.1. El Código Penal vigente, Ley 599 de 2000, establece que los menores de 18 años que cometan infracciones del ordenamiento penal serán sometidos al Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil. En efecto, el último inciso del artículo 33 que se cita ordena que "los menores de dieciocho (18) años estarán sometidos al Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil". En la sentencia C-839 de 2001 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra) la Corte avaló la constitucionalidad de la creación legal de dicho sistema de responsabilidad penal…

Una vez resuelto el tema por la Corte Constitucional en el sentido de que los adolescentes sí son sujetos de responsabilidad penal, bajo la consideración de que son además menores de 18 años y que, por tanto, su proceso es estrictamente de carácter educativo, protectivo, especial y diferenciado del de los adultos, se hace necesario hacer uso del sistema penal vigente establecido en la Constitución Política, pero con unas reglas especiales para el proceso, con autoridades judiciales especialmente preparadas para el trato con adolescentes, con imposición de medidas educativas en programas de atención especializada.

Pero en especial, lo importante de un sistema de responsabilidad penal para adolescentes es que su investigación y juzgamiento debe basarse en la gravedad de la conducta cometida por el adolescente, independiente de su situación personal, familiar y social, como sucede con el Código del Menor vigente, norma que priva de libertad a quienes son pobres, criminalizando la pobreza.

Niños y niñas desvinculados de grupos armados al margen de la ley

En la misma sentencia C-203 de 2005 citada en el punto anterior, la Corte se pronuncia en relación con el tratamiento judicial que debe darse a los niños, las niñas y los adolescentes que abandonen los grupos armados irregulares. En ese sentido, la Corte considera que este grupo infantil que se ha vinculado de cualquier forma con los grupos armados, debe ser tratado teniendo en cuenta tres condiciones que deben ser aplicadas de manera simultánea, que son: ser

personas menores de 18 años, haber sido víctimas del delito de reclutamiento ilícito y ser infractores de la ley penal. Ninguno de los tres aspectos puede aplicarse solo, es decir, que un niño, una niña o un adolescentes no puede ser juzgado sólo como infractor de la ley penal, ni sólo como desvinculado de un grupo armado, ni sólo como menor de edad, sino que las tres consideraciones determinan que su caso debe ser tratado de manera especial, distinta al proceso para menores infractores, y que en todo caso deben ser vinculados a los programas especializados para tal efecto que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha puesto en funcionamiento.

Por ello el proyecto de ley, acogiendo las observaciones de la Corte Constitucional, ha previsto una norma especial en la que los diferencia de los demás infractores de la ley penal, para agregarles la situación de haber sido víctimas penales, por lo que su investigación y juzgamiento sólo procederá por los delitos de rebelión, sedición o asonada, a los cuales se les prohíbe expresamente la medida de privación de libertad, y se remiten a un programa de atención especializada.

Insiste la Corte en que la razón para el tratamiento de carácter especial y diferenciado se sustenta en la ratificación por parte del Estado colombiano de dos instrumentos jurídicos de derechos humanos: el Convenio 182 de la OIT y el Protocolo Adicional a la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación de niños en conflictos armados, los cuales por sí mismos exigen de los Estados la provisión de medidas especiales.

Además de lo anterior, es importante reiterar la importancia que este tema tiene para la comunidad de naciones, particularmente para el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, instancia que aprobó por unanimidad la protección para los niños en conflictos armados. Esta resolución incluye eventuales sanciones contra los responsables de la violencia, tanto gobiernos como grupos insurgentes. Este cuerpo de 15 miembros acordó establecer el primer sistema global de control e información para registrar las violaciones de los derechos de los niños soldados, incluida su muerte, mutilación, reclutamiento como soldados, violación, violencia sexual, secuestro o negación del acceso a ayuda humanitaria.

Por primera vez, la Organización de las Naciones Unidas establece un régimen de cumplimiento formal y estructurado, asignado a un grupo de tareas de la ONU.

Los niños y las niñas víctimas de delitos

En los últimos años la violencia contra la niñez en Colombia se ha agudizado, pero sobre todo cada día se ejerce con mayor crueldad y severidad. Se matan y maltratan niñas y niños por deudas de sus padres, se les violenta sexualmente con la complicidad de todos, se les explota y obliga a conseguir el sustento para sus familias, y cada día la agresión verbal y física cobra un mayor número de víctimas en hospitales y cementerios, ante la mirada pasiva de toda la sociedad y del Estado.

Pero lo más increíble es que en Colombia la conducta de maltrato infantil está solamente prevista en el Código del Menor con la sanción del pago de multas. No existe como tal el delito de maltrato infantil aun cuando el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño ordena que: "Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas para proteger al niño contra toda forma de violencia, perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación incluido el abuso sexual", y aun cuando el artículo 44 de la Constitución Política ordena la prevalencia de los derechos de los niños y la obligación de protegerlos contra toda forma de violencia física o moral.

Por ello el país tiene una deuda con los niños y las niñas que son víctimas de los vejámenes más atroces, lo que hace necesario proveer normas persuasivas que impongan sanciones severas contra los adultos que los maltraten y que cometan delitos contra ellos y ellas.

En aras de la prevalencia de los derechos de los niños se hace imperativo aumentar las penas de los delitos en los que haya una víctima menor de edad, así como negar los beneficios jurídicos establecidos en la ley penal, salvo los de orden constitucional, para quienes cometan delitos contra los niños y las niñas.

Sin lugar a dudas, el hecho de contar con una legislación que contemple sanciones para quienes ejerzan castigos corporales o maltrato infantil, por sí mismo no soluciona el problema. Sin embargo, conseguir su aplicación es en sí una manera de educar a la sociedad y de caminar hacia los cambios culturales que tanto requiere esta sociedad deprimida.

Procedimientos

Desde hace tiempo hay un clamor colectivo por la simplificación de los procedimientos en todas la áreas. Y tratándose de un tema relacionado con la niñez no

puede ser de otra manera, pues es ella la que mayor urgencia demanda en el tratamiento de los asuntos que le aquejan.

El procedimiento para investigar y resolver los temas relacionados con la niñez debe ser de tal sencillez que no plantee mayores dudas de interpretación a sus operadores, y que en cambio les deje un amplio campo de acción para solucionar como mejor corresponda las dificultades y situaciones que puedan presentarse.

De ahí que los trámites aquí diseñados luzcan simples, sin mayores peculiaridades, sin trámites accesorios rígidos y sin demasiados medios de impugnación. Se estima que esto facilitará la actividad del operador jurídico, y le permitirá resolver con tanta presteza como el tema concreto lo permita. Pero también le evitará enredarse en la interpretación de procedimientos y le facilitará dedicarse a estudiar el fondo de cada asunto.

El procedimiento diseñado en este proyecto establece mecanismos idóneos, como la pérdida de competencia, para garantizar la eficiencia de los funcionarios en el tratamiento de los asuntos de la niñez, y elimina el desgaste inútil de la función administrativa en que se ha convertido el recurso de apelación en vía gubernativa como presupuesto para acudir a la jurisdicción. A cambio de ello se instituye un control judicial directo que se erige en una verdadera garantía de juridicidad de los actos administrativos, sobre todo si se tiene en cuenta que va a estar radicado en cabeza del juez especializado en derecho de familia en lugar de aquel especializado en administración.

En cuanto al trámite judicial, se ha diseñado un procedimiento sencillo de única instancia, sin perjuicio del recurso extraordinario de revisión previsto en el Código de Procedimiento Civil, que pretende la resolución definitiva de los asuntos que comprometen a la niñez en tiempo razonable, a partir de la confianza social en la rectitud e idoneidad de los funcionarios judiciales colombianos que en la actualidad es destacable en el contexto latinoamericano.

Por si alguna duda pudiera surgir en torno a la constitucionalidad de los procesos de única instancia, vale la pena recordar que en las oportunidades que ha tenido la Corte Constitucional de pronunciarse sobre el tema ha recalcado sin titubeos que el legislador tiene plena libertad para determinar cuáles procesos han de tener dos instancias y cuáles sólo una, destacando que el derecho internacional de los derechos humanos y la Constitución Política no hacen

obligatoria en forma absoluta la doble instancia, sino la previsión de un mecanismo de impugnación, que en los procesos de única instancia lo constituye el recurso extraordinario de revisión.

De otro lado, el proyecto apunta a garantizar que a partir de su entrada en vigor en cualquier lugar del territorio nacional la niñez cuente con una autoridad encargada de protegerlo y de restablecerle sus derechos. Por ello atribuye competencia subsidiaria a autoridades municipales en ausencia de la autoridad nacional instituida genuinamente para la protección de los niños. De esa manera se asegura la cobertura nacional inmediata del sistema de protección.

En suma, el procedimiento diseñado está inspirado en el propósito de hacer eficaz la actividad administrativa y judicial en la protección de los derechos de la niñez.

Aspectos presupuestales y políticas públicas

Si bien esta ley contiene previsiones de creación y mantenimiento de autoridades competentes, tales como defensorías de familia, comisarías de familia, jueces penales para adolescentes y salas penales para adolescentes en los tribunales superiores de distrito judicial, el proyecto prevé que mientras se proveen los cargos requeridos, otras autoridades de naturaleza similar hagan las veces de las autoridades competentes lo que significa que, para su vigencia, es posible adecuar los marcos institucionales a fin de que pueda darse entera aplicación a la ley.

Además de ello, uno de los aspectos más importantes del cambio legislativo radica en que la entidad coordinadora del sistema de bienestar familiar ya no debe asumir la carga presupuestal, ni la responsabilidad exclusiva de la garantía de los derechos y su protección para todos los niños y las niñas del país, sino que mediante la obligación que el proyecto de ley le establece a los niveles nacionales, departamentales, municipales y distritales de diseñar y ejecutar las políticas públicas de garantía y restablecimiento de derechos con la consecuente oferta de programas de atención especializada, el ente rector será el articulador de un conjunto de entidades que sí son las responsables directas de garantizar los derechos y las condiciones para su ejercicio para todos los niños y las niñas que habitan en el territorio nacional.

Y este ejercicio ya no es una utopía. La Procuraduría General de la Nación ha desarrollado y ejecutado un proyecto de monitoreo y seguimiento de todos y cada uno de los planes de desarrollo municipales, en los cuales pudo establecer que las entidades regionales no carecen de presupuesto para garantizar y restablecer los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, sino que alcaldes y gobernadores han privilegiado el gasto en obras de infraestructura y otros, en cambio de destinarlos a la verdadera inversión social que son los derechos de los niños y las niñas.

Este esfuerzo estatal, que no es otra cosa que el cumplimiento de deberes constitucionales, ha dado el marco general de análisis para asignar efectivamente en esta ley la tarea del diseño y ejecución de las políticas públicas regionales, que deberán además ser construidas con base en los problemas que más afectan el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes de cada región o municipio en particular.

Se trata de hacer un trabajo pedagógico desde la ley en el sentido de que las autoridades políticas velen por que los recursos que se destinen a garantizar y restablecer los derechos para los niños, las niñas y los adolescentes se entiendan no como un gasto, sino como una inversión, para lo cual es necesario que se readecuen los presupuestos públicos en todos los niveles a fin de que otros gastos –esos sí gastos– no sean la prioridad, sino que se racionalicen y atiendan la prevalencia de los derechos de los niños consagrada en el artículo 44 de la Constitución Política.

_____	_____
Procurador General de la Nación	Defensor del Pueblo
_____	_____
Gina María Parody D´echeona Representante a la Cámara	Claudia Blum de Barberi Senadora de la República

Lorenzo Almendra Velasco
José Luis Arcila Córdoba
Claudia Wilches
Roberto Camacho Weverberg
Sandra Ceballos
Andrés González Díaz
Javier Ramiro Devia Arias
Ivan Díaz Mateus
Ramón Elejalde Arbélaez
Eduardo Enríquez Maya
José Luis Flórez Rivera
Jesús Ignacio García Valencia
Jorge Homero Giraldo
Nancy Patricia Gutiérrez
Adalberto Jaimes Ochoa
Jorge Eliécer Arango Palacio
Tony Jozame Amar
Rosmery Martínez Rosales
Reginaldo Montes Álvarez
Carlos Germán Navas Talero
Myriam Alicia Paredes Aguirre
Telésforo Pedraza Ortega
Carlos Arturo Piedrahíta Cárdenas
Clara Isabel Pinillos Abozaglo
Griselda Yaneth Restrepo Gallego
Milton Arlex Rodríguez Sarmiento
Zamir Eduardo Silva Amín
Dixon Ferney Tapasco Treviño
German Varón Cotrino
Luis Fernando Velasco Chaves
William Vélez Mesa
Guillermo Rivera
Dieb Maloof Cuse
Rafael Pardo Rueda

Jairo Martínez
Adriana Gutiérrez
Manuel Enríquez Rosero
María Isabel Urrutia
Zulema Jattin Corrales
Venus Albeiro Silva
Edgar Fandiño
Juan Hurtado

Ponencia para primer debate en Cámara al Proyecto de Ley 085 de 2005 Cámara, acumulado 096 de 2005 Cámara

Bogotá, 26 de octubre de 2005

Honorable representante
Gina Parody D'echeona
Presidenta
Comisión Primera Constitucional Permanente
Cámara de Representantes

Referencia: proyectos de ley acumulados: Proyecto de Ley Estatutaria núm. 085-2005, Cámara, "Por la cual se expide la ley de la infancia y la adolescencia"; y Proyecto de Ley núm. 096 de 2005, Cámara, "Por la cual se expide el Código de la Niñez y la Juventud, que subroga el Decreto 2737 de 1989, Código del Menor".

Ponencia para primer debate

Respetada señora presidenta
Honorables representantes

En los siguientes términos rendimos informe de ponencia sobre los Proyectos de Ley de la referencia:

1. Origen y contenido de los proyectos

Se trata de dos Proyectos de Ley que, aunque de origen diverso, comparten el mismo objeto, y han sido acumulados por decisión de la mesa directiva de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

1.1 Primer proyecto: Proyecto de Ley núm. 85 de 2005 (Cámara)

El Proyecto de Ley núm. 85 de 2005 (Cámara) fue presentado por el señor procurador general de la nación, y el señor defensor del pueblo; por los representantes Gina Parody, Carlos Arturo Piedrahíta Cárdenas, Juan Hurtado Cano, William Vélez Mesa, Luis Fernando Velasco, Jorge Eliécer Arango, Iván Díaz Mateus, Zamir Silva Amín, Clara Pinillos, Sandra Ceballos, Telésforo Pedraza, Guillermo Rivera, Tony Jozame, José Luis Arcila, María Isabel Urrutia, Venus Alveiro Silva Gómez, Edgar Fandiño, Rosmery Martínez, Sulema Jatin, Roberto Camacho, Yaneth Restrepo Gallego, Ramón Elejalde, Eduardo Enríquez Maya, Adriana Gutiérrez, Jesús Ignacio García y Lorenzo Almendra; y por la senadora Claudia Blum de Barbieri. En su elaboración colaboraron algunas organizaciones nacionales e internacionales especializadas en asuntos de la infancia, tales como Unicef y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Dicha iniciativa se anuncia desde su acápite como "Proyecto de Ley Estatutaria", cuyo objeto es expedir una "ley de la infancia y la adolescencia", aunque no se anuncia como un proyecto de Código.

El contenido de este Proyecto es amplio y variado, y abarca todos los temas relevantes en materia de infancia y adolescencia. En esencia, pretende sustituir en su integridad el actual Código del Menor y, al mismo tiempo, adicionar otros temas conexos con él. Las materias básicas que dicho Proyecto aborda en forma profusa son:

- Un grupo normativo inicial sobre finalidad, objeto de la ley y definiciones.
- El Libro I, bajo el acápite de "la protección integral", incorpora un conjunto de disposiciones de dos tipos:
  a) Principios y normas de carácter puramente declarativas en relación con:
     - ✓ titulares de derechos, pautas y directrices generales sobre el alcance de los derechos de los niños y los adolescentes;
     - ✓ garantías de los derechos y medidas de prevención;
     - ✓ obligaciones genéricas y específicas de la familia, la sociedad, el Estado y las instituciones educativas frente al menor;
     - ✓ responsabilidades de los medios de educación frente al menor;

b) Conjunto de medidas de protección tendientes al restablecimiento de los derechos de los niños y los adolescentes en situaciones de vulnerabilidad. Allí se señalan competencias administrativas y judiciales, y los procedimientos para adoptar tales medidas. Entre tales medidas sobresalen:
   - ✓ amonestación, ubicación en la familia de origen o la familia extensa;
   - ✓ ubicación en hogar de paso y hogar sustituto, vinculación a programas de atención especializada y adopción.

Cabe resaltar en el Título I la regulación integral de la institución de la adopción en sus fases administrativa y judicial: requisitos, consentimiento, trámite ante el Instituto Colombiano Bienestar Familiar (ICBF), adopción internacional, etc.

El Título I también merece mencionar la regulación sobre las instituciones administrativas competentes para las medidas de protección a los menores, a saber:

- defensor de familia, comisaría de familia, policía del menor;
- competencias de estas autoridades, procedimiento para adoptar las medidas de protección (allanamiento y rescate de menores);
- declaratoria de adoptabilidad;
- permiso para salir del país, reconocimiento de paternidad;
- fijación de alimentos;
- restitución internacional de niños;
- trabajo de menores de edad: autorización a los menores para trabajar, jornada de trabajo y salario del menor;
- protección en caso de maternidad, etc.

Finalmente, el Título I regula algunas competencias y procedimientos judiciales para la protección de los niños y los adolescentes. Entre otros, regula:

- el procedimiento de adopción en su fase jurisdiccional;
- las reclamaciones judiciales de obligaciones alimentarias frente a menores;
- los permisos para salir del país;
- la privación de la administración de los bienes del menor.

- El Libro II, bajo el acápite de "De la responsabilidad penal juvenil y de los niños y niñas víctimas de delitos", establece una serie de reglas sobre:
  - ✓ el sistema de responsabilidad penal juvenil;
  - ✓ los hechos punibles;
  - ✓ las medidas "de protección" para menores de doce años que infrinjan la ley penal, y medidas punitivas "pedagógicas" para los adolescentes (entre 12 y 18 años) que cometan delitos;
  - ✓ las autoridades competentes para imponerlas;
  - ✓ los procedimientos penales y la reparación del daño por delitos cometidos por adolescentes.

Sobresalen en dicho Libro II las disposiciones acerca de:

- las finalidades del sistema de responsabilidad penal del adolescente;
- la remisión al Código de Procedimiento Penal vigente como la fuente principal de normas procesales penales en los juzgamientos a los niños, las niñas y los adolescentes;
- la fijación de una edad mínima de responsabilidad penal (12 años) y las medidas "de restablecimiento" que deben adoptarse para corregir y reeducar a los adolescentes autores de conductas punibles;
- aspectos procesales especiales tales como el sistema de audiencias, la intervención del defensor de familia en el proceso penal, garantías del debido proceso y de defensa en el proceso, causales para la medida de privación precautelativa de la libertad a los menores imputados;
- clasificación de los delitos cometidos por menores (delitos de gravedad especial, graves, de gravedad intermedia y leves);
- competencias de las autoridades en el proceso penal de adolescentes, competencia de los jueces penales para adolescentes y las salas penales para adolescentes;
- reparación de los daños e incidente de reparación;
- medidas punitivas reeducativas, que incluyen: amonestación, amonestación extensiva a los padres, representantes legales o personas con quienes conviva el adolescente, reglas de conducta, prestación de servicios a la comunidad, libertad asistida, medio semi-cerrado, y privación de libertad;

- los criterios para la escogencia de la medida para cada caso y los derechos de los menores frente a tales medidas.

Termina este Título II con un conjunto de disposiciones sobre niños víctimas de delitos: tipificación y penalización del delito de maltrato infantil y reglas especiales para los procesos penales en que es víctima un niño, una niña o un adolescente.

El Libro III, bajo el acápite "Sistema nacional de bienestar familiar, políticas públicas e inspección, vigilancia y control", contiene, en primer lugar, un conjunto de pautas normativas generales sobre políticas de bienestar social familiar. En segundo lugar prevé algunas garantías y mecanismos de control para asegurar la eficacia de las normas de este código. Establece, entre otras materias, las competencias de los órganos de control y las organizaciones de la sociedad civil material respecto.

Este Libro III termina con mandatos sobre destinación de partidas presupuestales para el cumplimiento de la Ley y normas sobre su vigencia.

Un análisis detenido del texto del Proyecto permite deducir que aunque no se autodefine como Código, en realidad su propósito no es otro que proveer a nuestro ordenamiento jurídico de un corpus integral, omnicomprensivo y sistemático de normas jurídicas sobre la problemática de la niñez y la adolescencia. Estamos frente a un verdadero proyecto de Código del Niño y del Adolescente, que busca reemplazar en su totalidad al actual Código del Menor o Decreto Ley 2737 de 1989. De allí que el Proyecto incluya regulaciones sobre muy variados temas relativos a los derechos, deberes y responsabilidades de los menores de edad en asuntos civiles, penales y administrativos. Y por ello mismo, el artículo 221 del Proyecto, relativo a la vigencia, expresamente deroga el Decreto 2737 de 1989.

1.2 Segundo proyecto: Proyecto de Ley núm. 096-2005 Cámara

El Proyecto de Ley núm. 096-2005 Cámara, presentado por el Representante a la Cámara por el Valle del Cauca, doctor Marino Paz Ospina, tiene como objeto expedir un "Código de la niñez y la juventud", es decir, derogar el actual Código del Menor, Decreto 2737 de 1989.

En su Título Preliminar, el artículo 1° del Proyecto anuncia el objeto y los contenidos esenciales del nuevo Código que propone expedir:

> Artículo 1°. *Objeto.* El objeto de este Código es determinar los principios rectores que regulan la protección integral de los niños, la responsabilidad compartida de la familia, la sociedad y el Estado en su protección preventiva y especial, sus derechos fundamentales, así como sus deberes u obligaciones, las competencias, procedimientos y medidas de protección, las relaciones personales y patrimoniales entre padres e hijos y la estructura básica de los organismos de protección al niño dentro del sistema nacional de bienestar familiar.

Este Título Preliminar consigna los principios rectores de orden filosófico, ético y jurídico que han de orientar la interpretación del Código de la Niñez y la Juventud y la acción del Estado frente a estos grupos de la sociedad. Allí se consignan, entre otros, los postulados de la dignidad humana y los principios de prevalencia de los derechos de los menores de edad, prevalencia del derecho internacional, prevalencia de la interpretación más favorable al menor, respeto al derecho internacional humanitario, carácter de orden público de esta normatividad, etc.

El Título I enuncia de manera genérica el contenido abstracto de los derechos básicos del niño y el adolescente a la vida, a la igualdad, a las libertades de expresión, religión y desarrollo de la personalidad, a un trato digno, a la protección especial contra peligros, a la recreación, a la educación, al debido proceso en caso de recriminación, etc. Igualmente, en este Título I se propone un conjunto de enunciados genéricos sobre deberes y responsabilidades de los niños y adolescentes, como desarrollo de los deberes constitucionales de las personas.

El Título II se refiere a las instituciones de familia y define al núcleo familiar y sus integrantes, señala los deberes y derechos recíprocos de los miembros de una familia, régimen de bienes de la unidad familiar, medidas de protección del patrimonio del menor, la emancipación y suspensión de la autoridad parental, cuidado personal de los menores ("unión parento-filial"), permiso para salir del país, derecho a reclamar alimentos por el menor, procedimiento y criterios para la fijación provisional y definitiva de cuotas alimentarias.

El Título III desarrolla el concepto de "Protección integral" del niño y el adolescente, mediante un repertorio variado de "medidas de protección" tendientes a prevenir o corregir situaciones de vulneración o amenaza de derechos de

los niños. Tales situaciones se presentan –según el Proyecto– por omisión de la familia o del Estado de sus obligaciones, por abuso contra el menor, o por conducta del menor que resulte violatoria de los derechos de los demás. Ante ellas se respondería con medidas tales como:

- Allanamiento y rescate del menor por orden del defensor de familia.
- La colocación familiar.
- La ubicación en un medio comunitario.
- La ubicación residencial comunitaria.
- La atención integral al niño en un centro de protección.
- La declaratoria de adoptable del niño.
- Cualesquiera otra cuya finalidad sea la de garantizar el desarrollo integral del niño.

Para los padres y custodios las medidas son:

- La fijación de una cuota de sostenimiento y apoyo a la colocación familiar o institucional.
- La asistencia a cursos o programas de orientación, ayuda y asesoría sobre la forma de ejercer sus responsabilidades.
- La vinculación a programas destinados a la protección integral de la familia.
- El tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico o terapéutico.
- Cualesquiera otras cuya finalidad sea la de garantizar el desarrollo integral del niño.

En este Título III, el Proyecto dedica especial cuidado a la regulación del procedimiento de adopción en sus diferentes fases.

El Título IV desarrolla el concepto de "Protección a poblaciones vulnerables", en el cual se prevén medidas para restablecer a menores de edad que han sido enviados ilegalmente al exterior, bajo influencia de grupos armados ilegales, víctimas del desplazamiento forzado y miembros de grupos étnicos.

2. Naturaleza de la ley que se propone crear en el Proyecto

En este aparte surge la pregunta: ¿se trata de una ley ordinaria o de una ley estatutaria?

El acápite del Proyecto 085 de 2005 (Cámara) se anuncia como "Proyecto de Ley Estatutaria", no así el Proyecto 096 de 2005 (Cámara) que se anuncia como un proyecto de ley-código.

Siguiendo la más rigurosa jurisprudencia de la Corte Constitucional, no hay duda de que la mayoría de los contenidos esenciales de ambos proyectos son propios de una ley ordinaria. La parte más sustantiva de ambas iniciativas se encamina a modificar ámbitos normativos propios de la legislación civil y procesal civil tales como la adopción, los alimentos, la administración de los bienes del menor, el permiso para salir del país; o de la legislación penal sustantiva y procesal tales como la responsabilidad penal del menor, las medidas reeducativas y los procedimientos para aplicarlas, los delitos contra los niños (delito de maltrato infantil) y procedimiento para sancionarlos; o de la legislación labora tales como la autorización de trabajo del menor, jornada laboral especial; o de la organización administrativa: órganos y competencias en asuntos de menores de edad (defensor de familia, comisario de familia, policía de menores, etc.).

Ninguna de estas materias enunciadas requiere ley estatutaria. Sin embargo, hay temas en ambos proyectos que suscitan algunas dudas. En algunos preceptos de la parte general y puramente declarativa de tales proyectos encontramos normas que se refieren a la configuración y el contenido de algunos derechos fundamentales de los niños.

Para esclarecer tan complejo tema vale la pena recordar el significado que tiene la ley estatutaria en nuestro ordenamiento.

Según la caracterización que de tal categoría normativa han elaborado la Corte Constitucional y la doctrina colombiana, encontramos:

> Se trata de una ley dotada de estatus privilegiado y rango superior a las demás leyes, en cuanto su objeto es desarrollar una institución constitucional en la cual se pone en juego el modelo político mismo informador de la Carta. Son leyes destinadas a completar la obra del constituyente en ciertas áreas particularmente estratégicas en la definición del régimen político. Su jerarquía

> (condicionante de la validez de otras leyes) consiste en que su aprobación requiere de un trámite más complejo y exigente que la ley común y la ley orgánica. En rigor, que las leyes estatutarias tengan un rango superior significa que las materias enumeradas en el art. 152, todas ellas vitales para la real vigencia de un orden democrático y garantista, están sometidas a una competencia especial, la del legislador estatutario, a título de garantía institucional o salvaguardia contra cualquier distorsión o negación de los principios políticos axiales de nuestra Carta por parte del poder legislativo. La garantía consiste en una *reserva, la reserva de ley estatutaria*.[7]

Se trata, entonces, de leyes que completan la Constitución en cuanto al diseño y configuración de instituciones esenciales de un Estado democrático de derecho. Por ello, este mecanismo legislativo es excepcional respecto a las modalidades para expresarse el poder normativo del Congreso. Está reservado a ciertos temas e instituciones vitales del modelo político constitucional, lo cual excluye, de entrada, toda la inconmensurable materia objeto del poder legislativo ordinario.

Siguiendo la doctrina española, en el fondo la reserva de ley estatutaria representa una garantía reforzada que protege ciertos principios axiales frente al poder de la mayoría; ella asegura que el pluralismo político, los derechos de esa minoría mínima que es el individuo y los derechos de las minorías políticas, y el derecho a un juez imparcial e independiente (garantía de todas las garantías), no serán borrados de un plumazo por la mayoría parlamentaria.

Según la jurisprudencia constitucional, ¿qué materias deben regularse por medio de ley estatutaria?

Nuestra jurisprudencia constitucional ha sido uniforme al señalar que por tratarse de una modalidad legislativa excepcional (en relación con la ley común que es la regla general), la interpretación del catálogo de materias que según el artículo 152 deben ser objeto de regulación, ha de hacerse con un criterio hermenéutico restrictivo. Tal es la posición adoptada en principio por la Corte Constitucional en las sentencias C-012 de 1993, C-145 de 1994, C-252

[7] Constitución Política de Colombia Comentada por la Comisión Colombiana de Juristas, Título VI, *De la Rama Legislativa*, Bogotá, 1998, pp. 176-180.

de 1994, C-408 de 1994 y la C-311 de 1994, con la única salvedad de la materia electoral, tema éste en el cual se plantea una interpretación amplia y extensiva de la materia de ley estatutaria.

Una postura tan restrictiva sobre la materia propia de la ley estatutaria se fundamenta en que en la democracia representativa la soberanía popular expresada de modo permanente en el poder de las mayorías parlamentarias se concreta en el poder de la *mayoría relativa*, como regla general, la cual asegura una expedita y fluida manifestación de la decisión política, asegurándose así la eficacia conformadora del orden social y de la prestación de los servicios públicos. En este sentido, dice la Corte Constitucional:

> ...sobre el ámbito material regulable por ley estatutaria debe efectuarse una interpretación restrictiva de la reserva de la ley estatutaria, porque una interpretación extensiva convertiría la excepción –las leyes estatutarias basadas en mayorías calificadas y procedimiento más rígido– en regla, en detrimento del principio de mayoría simple, que es el consagrado por la Constitución.[8]

Siguiendo esta línea conceptual en relación con los proyectos de ley en estudio, sólo serían un posible objeto de ley estatutaria aquellas normas que se refieren a derechos fundamentales de los niños y sus mecanismos de protección (art. 152, literal a, CP) y a la administración de justicia (art. 152, literal b, CP).

Respecto al primer aspecto, nuestra jurisprudencia ha seguido una línea constante en cuanto a cuáles son los derechos fundamentales cuya reglamentación exige el procedimiento legislativo de la ley estatutaria. Puede sintetizarse así:

Mientras en materia de derechos tutelables la Corte Constitucional ha asumido una definición amplia de los derechos fundamentales –todos los derechos que realicen la dignidad humana, la libertad, la igualdad u otro valor constitucional y los conexos con aquellos (sentencias T-002 de 1992, T-406 de 1992 y T-426 de 1992)– en cambio, en materia de derechos cuya regulación debe

[8] Sentencia C-145 del 23 de marzo de 1994. En igual sentido ver la sentencia C-013 de 1994.

hacerse por la vía estatutaria esa corporación ha tomado un camino discursivo muy distinto para arribar a una definición bastante restrictiva: los derechos fundamentales objeto de ley estatutaria no son otros que los derechos individuales contemplados en el Capítulo 1 del Título II de la Carta, es decir, los estrictamente denominados así por la Constitución y ubicados en el apartado capitular bautizado con la expresión "De los derechos fundamentales".[9]

En este sentido, el constituyente de 1991 mostró una coherencia lógica entre los artículos 152 y 377 al establecer este último un mecanismo protector extraordinario a favor de los derechos del Capítulo 1 del Título II de la Constitución frente al poder reformatorio de la Carta cuyo titular es el Congreso. Tanto el artículo 152 sobre leyes estatutarias como el 377 sobre defensa de los derechos fundamentales frente al poder constituyente secundario, prevén talanqueras de la misma estirpe: defensa de los derechos inalienables frente a la tendencia a limitarlos, tendencia propia de las mayorías coyunturales e intempestivas en la democracia representativa. Y ello por cuanto en la regulación de tales derechos se juega el pilar mismo de la democracia constitucional.

Tan restrictiva tesis se sustenta también en la consideración de que, en estricto rigor, sólo los derechos individuales de primera generación (derechos de libertad, garantías judiciales y derechos de participación) poseen un *contenido esencial*, es decir, un ámbito mínimo e irreductible que no puede ser tocado cuando se regula el ejercicio del derecho, cuando se restringe, limita o condiciona su ejercicio. Este contenido esencial –núcleo esencial lo llama nuestra jurisprudencia– es anterior al legislador, se impone al legislador de modo que éste no puede desconocerlo so pena de hacer nugatorio el derecho. El núcleo esencial de un derecho no depende del legislador y, antes bien, constituye el límite a los límites que el legislador quiera imponerle al derecho que es objeto de su regulación.

En este orden de ideas, la Corte Constitucional ha encontrado que la regulación de derechos de naturaleza asistencial, como el derecho a la salud y a la

[9] Posición ésta que se halla delineada en las sentencias C-012 de 1993, C-145 de marzo 25 de 1994, C-252 de 26 de mayo de 1994, C-408 de 15 de septiembre de 1994 y la C-311 de junio 7 de 1994, y que coincide con la concepción que en materia de ley orgánica profesan el Tribunal Constitucional de Alemania y su homólogo de España.

seguridad social, no requieren de trámite estatutario. Al decidir sobre la validez formal de la Ley 100 de 1993 sobre la seguridad social concluyó:

> la normatividad sobre la seguridad social no debe ser objeto de reglamentación mediante la vía exceptiva de las leyes estatutarias por no corresponder a los elementos de derechos fundamentales que quiso el Constituyente someter a dicha categoría legal, por tratarse de elementos de tipo asistencial que provienen, en oportunidades, de la existencia de una relación laboral, y en otras, de la simple participación en el cuerpo social, y derechos gratuitos en oportunidades y onerosos en la mayoría de los casos.[10]

Una buena razón para ello es que no puede ser del ámbito estatutario aquello que por naturaleza pertenece al campo de las regulaciones ágiles, de la escogencia de la mejor opción para solucionar carencias sociales. Poner tales decisiones en manos de la mayoría absoluta, antes que beneficiar su eficacia protectora la perjudica.

Y respecto al derecho a la educación, a propósito de la Ley 115 de 1994, o Ley General de Educación, la Corte ha dicho que su realización efectiva como derecho social se lleva a cabo a través del servicio público de la educación, asunto éste cuya regulación ha de hacerse por la vía de ley ordinaria.[11] Y ello no obstante que el propósito de tal Ley es precisamente garantizar el derecho a la educación de niños y jóvenes.

También ha dicho la Corte, al hacer el control constitucional sobre la ley de extinción de dominio, que las regulaciones al derecho de propiedad no requieren de ley estatutaria, pues no es éste un derecho fundamental per se (sentencia C-374/97).

Circunscribiéndonos al campo de los derechos propiamente fundamentales, según la Corte Constitucional no toda ley que se refiera a tales derechos fundamentales o que busque de alguna forma protegerlos tiene el carácter de ley

---

[10] Sentencia C-408 del 15 de septiembre de 1994, M. P. Fabio Morón.

[11] Sentencia C-311 del 7 de junio de 1994 sobre la Ley 115 de 1993, Ley General de la Educación.

estatutaria. Únicamente poseen naturaleza estatutaria aquellas regulaciones que tienen por objeto definir el *núcleo esencial* de un derecho constitucional fundamental o limitar su ejercicio. También tienen esa naturaleza las leyes que regulan los procedimientos de rango constitucional encaminados específicamente a tutelar dicho núcleo o contenido esencial del derecho contra actos de violación actual o inminente (sentencia C-252 de 1994).

En este orden de ideas, la Corte Constitucional expresamente ha excluido la expedición de *leyes que reformen o deroguen disposiciones de los códigos penal, civil, laboral y de procedimientos*, del trámite de la ley estatutaria. Así lo ha dejado sentado en la sentencia C-013 de 1993, cuando conceptuó que: "las leyes estatutarias sobre derechos fundamentales tienen por objeto desarrollarlos y complementarlos. Esto no supone que toda regulación en la cual se toquen aspectos relativos a un derecho fundamental deba hacerse por vía de ley estatutaria". De sostenerse la tesis contraria –argumenta la Corte– se vaciaría la competencia del legislador ordinario. Y añade:

> La misma Carta autoriza al Congreso para expedir, por la vía ordinaria, códigos en todos los ramos de la legislación. El Código Penal regula facetas de varios derechos fundamentales cuando trata de las medidas de detención preventiva, penas y medidas de seguridad imponibles, etc. Los códigos de procedimiento sientan las normas que regulan el debido proceso. El Código Civil se ocupa de la personalidad jurídica y de la capacidad de las personas. En resumen, mal puede sostenerse que toda regulación de estos temas haga forzoso el procedimiento previsto para las leyes estatutarias.[12]

Como se observa, ninguno de los contenidos de los proyectos en estudio apunta a trazar el núcleo de los derechos fundamentales de los niños y adolescentes. Menos aún apuntan a establecer limitaciones, restricciones o condicionamientos a su ejercicio.

---

[12] En este punto la doctrina colombiana se distancia de la española que considera que la expedición de leyes penales debe someterse a la reserva de ley orgánica, ya que con tal regulación se está limitando el derecho fundamental de libertad personal.

En cuanto al segundo aspecto de los proyectos, es decir, en lo relativo a la administración de justicia, la sentencia C-037 de 1996 sobre la Ley Estatutaria de la Justicia sólo admite como estatutarias las leyes que regulan la estructura básica y los principios fundamentales de esa rama, pero no lo relativo a competencias, procedimientos y asuntos judiciales comunes.

El objeto explícito del Proyecto 085 en estudio, "protección integral de los niños, niñas y adolescentes", se concreta en un conjunto de principios sobre políticas públicas (programas, asignación de recursos presupuestales) de la nación y las entidades territoriales, para lo cual la ley estatutaria es un mecanismo ajeno y hasta contraindicado. Por ello, no podrían ser objeto de ley estatutaria el Capítulo II del Título II del Libro I de este Proyecto sobre políticas públicas, como tampoco la regulación de procedimientos administrativos y judiciales sobre adopción, responsabilidad penal de menores, alimentos, custodia, etc.

Los mecanismos protectores de los niños y adolescentes, previstos en ambos proyectos, encuadran más bien como desarrollo del artículo 89 de la Carta: "Además de los consagrados en los artículos anteriores, la ley establecerá los demás recursos, las acciones, y los procedimientos necesarios para que puedan propugnar por la protección de sus derechos individuales, de grupos o colectivos, frente a la acción o la omisión de las autoridades públicas".

Por esta razón, el Congreso no ha encontrado necesario acudir al trámite de ley estatutaria para expedir las leyes de protección contra la violencia intrafamiliar –Ley 294 de 1996 y Ley 575 de 2000–, aunque ambas establecen mecanismos de protección urgente de los derechos fundamentales de los niños en cuanto éstos hacen parte del grupo familiar (orden de protección). Tampoco utilizó ese procedimiento legislativo especial para expedir la Ley 258 de 1996 que protege su derecho a tener una casa de habitación y a evitar ser despojado de ella por padres irresponsables.

En resolución, existen serios argumentos para optar por un trámite de ley ordinaria en la aprobación de los dos Proyectos objeto de estudio en esta ponencia. Si alguna duda pudiera surgir ella se referiría sólo respecto a aquellos artículos que abarcan la parte inicial de ambos proyectos dedicados y que se ocupan de formulaciones generales, pautas orientadoras puramente declarativas en materia de derechos fundamentales y directrices abstractas sobre políticas

públicas para la niñez y la adolescencia. En cambio, hay plena certeza de que la parte sustantiva, estrictamente normativa y con alcances institucionales prácticos de las dos iniciativas –las relativas a medidas de protección, procedimientos de adopción, deberes alimentarios, responsabilidad penal del menor, trabajo de menores, etc.–, deben recibir el trámite de una ley ordinaria.

De otro lado, desde una perspectiva práctica, optar en este caso por el procedimiento de ley estatutaria perjudicaría el buen suceso de los proyectos, toda vez que por las especiales circunstancias de éste y el siguiente periodo de sesiones del Congreso, es muy probable que no se termine el trámite legislativo completo antes del 20 de junio de 2006, lo cual hundiría tan valiosas iniciativas.

Ahora, si el supremo juez de constitucionalidad pronunciara la inexequibilidad de las normas de la parte declarativa de los proyectos (sobre derechos fundamentales de los niños), entonces nada lamentable habría sucedido, pues se excluiría la parte declarativa pero se habría salvado lo sustantivo y procesal de la ley.

3. Sobre la iniciativa legislativa

Aunque ambos proyectos son de origen parlamentario, el contenido de los mismos no genera vicios en cuanto a la facultad de iniciativa legislativa. Al examinar los contenidos esenciales de las dos iniciativas no se advierte que algunas de las reformas sugeridas tengan un origen reservado al gobierno en los términos del artículo 154 constitucional. Es cierto que la implementación práctica de algunos de los preceptos propuestos puede implicar erogaciones del erario. Pero esta circunstancia, por sí misma, no excluye a tales propuestas de la iniciativa parlamentaria.

Al respecto, cabe anotar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional en esta materia es abundante y sólo bastaría citar la más reciente, la sentencia C-554 de 2005, en la cual se "reafirmó la competencia del Congreso para decretar los gastos públicos (art. 150, numeral 11), quien es el que tiene por regla general la iniciativa en materia de gasto y excepcionalmente el gobierno nacional".

Por ello, no se sustraen de la iniciativa congresal los preceptos que en el citado Proyecto 085 se refieren a la obligación de crear una comisaría de familia en cada municipio (art. 82), la creación del sistema nacional de bienestar familiar (esquema de cooperación y armonización de entidades públicas dedicadas a la familia, según el Libro III), especialización de los fiscales y jueces competentes

para determinar la responsabilidad penal de los menores y creación de tales cargos (arts. 153, 173, 174, 175 y 177). Si bien tales propuestas implican un gasto para el Estado –casi toda ley lo implica–, lo cierto es que ninguna de ellas hace parte de los temas que taxativamente se excluyen del origen parlamentario de las leyes.

4. Audiencia ciudadana y aportes de otras organizaciones

4.1. Audiencia

Con fundamento en el Reglamento del Congreso el 14 de septiembre se llevó a cabo la correspondiente audiencia de participación ciudadana. En ella tomaron parte las siguientes entidades y personas:

- Beatriz Londoño, directora Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
- Manuel Manríquez, representante legal de Unicef Colombia
- Janni Jalal Espitia, directora nacional de Fiscalías
- Beatriz Linares, consultora de la Organización Internacional de la Mujer
- Alejandro Venegas Franco, decano de la Facultad de Jurisprudencia, Universidad del Rosario
- Mario Gómez Jiménez, director social Fundación Restrepo Barco
- Miguel Rojas, Instituto Colombiano de Derecho Procesal
- Clemencia Tamayo Gómez, Casita de Nicolás
- Carlos Fradique, Instituto Colombiano de Derecho Procesal
- Adriana Zárate, representante instituciones autorizadas para desarrollar programas de adopción
- María Cristina Hurtado, representante del señor defensor del pueblo
- Mónica Sierra
- Coronel Fortunato Marín
- Julieta López, de la Asociación Colombiana de Defensoría de Familia
- Luzmila Flórez, en representación del señor ministro de la Protección Social
- Edwin Rodríguez, Asociación Colombiana de Defensoría de Familia
- Alonso Castellanos, padre adoptante
- Juan Carlos Arias López, juez quinto de menores

- Ana María Jiménez, Comisión Colombiana de Juristas
- Amalia Erazo, Coalición por la Infancia
- María Victoria Forero, sindicato del ICBF
- Consuelo Herrera, Fundación Creciendo Unidos
- Fernando Sabogal Báez, Defensoría de Niños y Niñas Internacional de Colombia
- Camilo Galindo, Colectivo de Abogados

Los aportes presentados por estas personas los hemos resumido y clasificado de la siguiente manera para su estudio y evaluación:

a) Generales
   - El proyecto de ley de infancia-adolescencia está dirigido a cerca del 40% de la población colombiana, contiene la definición de principios, alcance y contenido de derechos, libertades, garantías, las medidas de restablecimiento, el procedimiento aplicable administrativo y judicial, autoridades competentes, la responsabilidad penal para adolescentes y los principios relativos a la atención de niños, niñas y víctimas de los delitos; contiene además un libro relativo a las políticas públicas que deben diseñarse y ejecutarse para prevenir, garantizar y restablecer los derechos en los niveles nacional, departamental y municipal, y las reglas que rigen el sistema nacional de Bienestar Familiar, así como las normas de orden general sobre inspección, vigilancia y control (Beatriz Londoño directora Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).
   - El Código del Menor actualmente vigente se sustenta en un enfoque de situaciones irregulares para lo cual define nueve, en función de las cuales un menor de edad puede ser atendido por el Estado, esto significa que da cobertura, previniendo situaciones y protegiendo a alrededor de dos millones de niños y niñas, mientras que este proyecto de ley ofrece garantía de derechos a cerca de diecisiete millones de colombianos y colombianas. En otras palabras, consagra los derechos de todos los niños y las niñas que viven en nuestro territorio (Manuel Manríquez, representante Legal de Unicef Colombia).

- Si bien es cierto que en Colombia existe una amplia legislación sobre el menor y la familia, se debe adecuar la legislación actual al mandato constitucional, desarrollar la Convención sobre los Derechos del Niño e incorporar las reglas de Beijín, las directrices Riat y las reglas de las Naciones Unidas (Janni Jalal Espitia, directora nacional de Fiscalías).
- El proyecto debería incluir una regulación correspondiente al sistema colombiano de bienestar familiar, y sería deseable que esa integración del sistema colombiano de bienestar familiar hiciera referencia a la concreción de protección integral de menores y adolescentes y de políticas de programas de los diferentes entes territoriales (Alejandro Venegas Franco, decano de la Facultad de Jurisprudencia, Universidad del Rosario).
- El proyecto da una preponderancia excesiva a la protección de los niños, circunstancia que podría llevar a un trato discriminatorio contra el resto de la familia. Deberían establecerse también deberes para los niños, las niñas y los adolescentes (Instituto Colombiano de Derecho Procesal).
- Necesidad de implementar una política para prevenir el embarazo irresponsable dentro del proyecto (Instituto Colombiano de Derecho Procesal).
- Necesidad de realizar políticas públicas que, guiadas por el interés superior del niño, articulen las instancias nacionales y locales, ya que se ha podido comprobar que en estas últimas el balance no es muy satisfactorio (Defensoría del Pueblo).
- El Código actual no viola los derechos de los niños, porque a pesar de que fue redactado antes de la Convención, sus principios se encuentran incorporados (Asociación Colombiana de Defensoría de Familia y sindicato ICBF).
- ¿Cuáles son las verdaderas causas de la situación de la infancia en Colombia? ¿es porque el Código del Menor no le garantiza sus derechos, o son las políticas sociales las que no le garantizan los derechos? (sindicato ICBF).
- Es importante observar que al Decreto 2737 se le han venido incorporando las reglas de los tratados internacionales como las Regla de Beijing, que son las reglas mínimas de las Naciones Unidas, las cuales se han venido aplicando en materia de la niñez (juez 5 de menores).

- En la parte donde se habla de los sistemas de bienestar familiar o los sistemas de salud, es importante que se pueda contextualizar mucho más el concepto de protección social y dentro de esto el sistema de protección social, esto para una mejor definición y hacer más claridad a nivel del ordenamiento sectorial (Ministerio de la Protección Social).
- A lo largo de la ponencia hay varias remisiones a la jurisdicción indígena que exige que se establezcan unos criterios que orienten a las autoridades para que tengan suficientes elementos de juicio a fin de remitir los casos a dicha jurisdicción de manera eficaz (Comisión Colombiana de Juristas).

b) Protección integral y medidas

- La propaganda de bebidas alcohólicas y de cigarrillo debería ser regulada de tal forma que no se haga en horarios de audiencia infantil (Instituto Colombiano de Derecho Procesal).
- Se recomienda la introducción de una asignatura relacionada con familia, infancia y adolescencia en las facultades de derecho (Instituto Colombiano de Derecho Procesal).
- Revisar el tema de patria potestad, artículo 14 (Instituto Colombiano de Derecho Procesal).
- Dado que la adopción es, según el proyecto de ley, una medida subsidiaria, deben verificarse las condiciones en que se entrega al niño a la familia biológica, pues deben tenerse en cuenta los riesgos de peligro físico o moral en que puede llegar a encontrarse en ese núcleo familiar que en últimas fue el que lo desprotegió, lo maltrató o lo abandonó (IAPA).
- El consentimiento no debe supeditarse, como lo hace el artículo 63 del proyecto, a la búsqueda por todos los medios de reintegrar al niño, la niña o el adolescente al núcleo familiar biológico, situación que se ve agravada si se insiste en la expedición de resolución motivada de adoptabilidad una vez se ha otorgado el consentimiento, pues esto conllevaría demorar el proceso con un evidente perjuicio para el niño o la niña (IAPA).
- Tener en cuenta el artículo 31 del Código del Menor, donde señala siete causales que hacen referencia a la "protección", en el sentido de que las

autoridades administrativas hagan una buena interpretación del derecho. A su vez, se señalan las mismas causales en el artículo 19 en tanto el artículo 16 dice cualquier otra (Asociación Colombiana de Defensoría de Familia).

- Artículos 27, 45, 46. El derecho a la educación se ve gravemente limitado en el proyecto de ley. Teniendo en cuenta la relación entre escuela y conflicto armado se considera que el artículo 46 del proyecto debería incluir con precisión algunos mecanismos de protección de los establecimientos educativos y de las y los alumnos con respecto a las consecuencias el conflicto armado (Comisión Colombiana de Juristas).

c) Adopción
   - La solución a los problemas de adopción está en el diseño de trámites más fáciles y rápidos (Casita de Nicolás).
   - Es necesario la legalización de la adopción entre padres e hijos de crianza (Instituto Colombiano de Derecho Procesal).

d) Cuestiones procesales y trámites judiciales
   - Dentro del marco del Estado social de derecho se hace necesaria la elaboración de trámites sencillos que impulsen la protección efectiva de derechos. El proyecto de ley en cuestión va en dicha vía. Así por ejemplo, se elimina del mecanismo innecesario de la impugnación (recurso de apelación) y se opta por un control judicial de las actuaciones administrativas. Resulta poco beneficioso crear nuevos trámites (Instituto Colombiano de Derecho Procesal).
   - El procedimiento para investigar y resolver los temas relacionados con la niñez no debe permitir la ambigüedad, debe dejar un amplio campo de acción para solucionar como mejor corresponde a las dificultades, pero con los trámites ya diseñados, las peculiaridades particulares no deben generar ni rigidez y tampoco debe haber pasos excesivos para la impugnación (Beatriz Londoño, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).
   - El proyecto de ley asume la postura de la Convención sobre los Derechos del Niño y del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966, y define un

sistema de responsabilidad penal dejando intacta la edad de imputabilidad penal; a partir de los dieciocho años cumplidos serán juzgados como adultos (Beatriz Linares, consultora de la Organización Internacional de la Mujer).

- Se recomienda que se asignen facultades al juez para que pueda decidir extrapetita y así poder tomar medidas en un mismo proceso sobre tenencia, visitas, alimentos, salidas del país (Instituto Colombiano de Derecho Procesal).
- El unificar en un sólo procedimiento todas las acciones que realiza el defensor de familia, el comisario u otras autoridades es muy complicado por haber como mínimo dos tipos de actuaciones totalmente diferentes. Una que se denomina actualmente *protección especial*, que son aquellos casos en los que es necesario aplicar una medida de protección de las que trae el proyecto en el artículo 54 que amerita una investigación exhaustiva, completa, y otras que son *simples diligencias*. Se propone crear mínimo dos procedimientos de éstos, uno dirigido a la protección de las medidas del artículo 54, y el siguiente para la conciliación (Asociación Colombiana de Defensoría de Familia).
- Se propone: 1) que las autoridades competentes para temas conciliables tengan la posibilidad de tomar medidas provisionales en el mismo sentido que lo establece el artículo 277, numeral 4 del Código actual, y, éstas sean por término indefinido lo cual evitaría llenar a la Rama Jurisdiccional de tantas demandas; 2) establecer dentro del proyecto la condición de inimputable, dado que este proyecto obvió dicha condición en el menor infractor, ya que actualmente se le está dando aplicación al sistema acusatorio, pues al menor se le debe garantizar su protección con las medidas educativas, y más aún cuando las medidas que se aplican actualmente resultan ser de carácter represivo (Asociación Colombiana de Defensoría de Familia).

e) Responsabilidad penal juvenil

- En cuanto a la responsabilidad penal juvenil, que es un punto que puede generar el mayor debate, cabe anotar que la Corte Constitucional acaba

de proferir la sentencia 203 en la cual se pronuncia de fondo en relación con la responsabilidad penal que el Estado debe exigir a las personas menores de dieciocho años que cometen delitos, además que reitera la viabilidad constitucional en el artículo del Código Penal que ordenó la conformación de una comisión para la creación de un sistema de responsabilidad penal juvenil (Beatriz Londoño, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

- En materia de responsabilidad penal juvenil, hay que superar los conceptos que parten de la inimputabilidad de los jóvenes, de la ausencia de comprensión, de la ilicitud en la realización de determinadas conductas; entendemos que los jóvenes y adolescentes conocen sus derechos y sus libertades, que son ellos conscientes de esos derechos y libertades, y del privilegio afortunado que la Constitución Política consagra cuando señala que los niños y las niñas tienen primero derechos y los derechos de ellos valen más que cualquier otro derecho de cualquier otro ciudadano en Colombia. Pero por la misma razón entendemos que cuando se infringe la legislación colombiana, ellos pueden entender el alcance y la comprensión de que sus conductas de alguna manera pueden transgredir determinados deberes y en esa medida entendemos que debe haber un juicio garantista pleno de derechos humanos del que hoy carecen (Mario Gómez Jiménez, director social Fundación Restrepo Barco).
- Con la ley penal se observa que el proceso judicial que se desarrolla en nuestro país en relación con el niño infractor se tramita sin tener en cuenta la normatividad internacional que regula esta clase de situaciones, donde los adolescentes deben enfrentarse a un proceso sin garantías judiciales mínimas, ya que no tienen la posibilidad de apelar la sentencia, no existen causales taxativas para determinar cuándo y bajo qué parámetros procede la privación de la libertad, las diferentes medidas y el cambio de las mismas. Debe ser una jurisdicción especial –así como está establecido en el proyecto de ley–, con autoridades judiciales especiales, la que se encargue de investigar los delitos cometidos por el menor infractor, donde se respeten las garantías procesales, se le interrogue de una manera adecuada, y se respete el derecho a la apelación

en una instancia superior (Janni Jalal Espitia, directora nacional de Fiscalías).

- Dentro del marco de proyecto de ley bajo estudio se sugiere adoptar una decisión legislativa que determine la orientación del régimen por aplicarse, esto es entrar a establecer una de las siguientes alternativas: la primera de ellas consiste en acogerse al régimen general de responsabilidad previsto, el cual debe estar acorde con el sistema penal acusatorio y, así mismo, deberá estar claramente determinado. La segunda de ellas es crear un régimen especial de responsabilidad penal basado en el tratamiento rehabilitador, el cual deberá consultar la realidad de los menores sujetos de aplicación, partiendo de la base de oír a las personas que trabajen el tema, es decir, acudir a instituciones propicias y adecuadas para brindar un verdadero tratamiento orientado a la prevención y, a su vez, a la rehabilitación del menor que incurra en alguna conducta delictiva (Alejandro Venegas Franco, decano de la Facultad de Jurisprudencia, Universidad del Rosario).
- La privación de la libertad debe ser una medida excepcional por ser una herramienta que no aporta beneficios al niño, la niña o el adolescente (IAPA).
- Las disposiciones del Código vigente no contemplan garantías judiciales mínimas, debido proceso, segunda instancia, enumeración taxativa de parámetros para aplicar la privación de la libertad. La Defensoría se inclina por aceptar una responsabilidad penal para adolescentes entre los 12 y 18 años, que comprende la privación excepcional de la libertad por un tiempo máximo de cinco años sólo para los casos de delitos graves y de especial gravedad (Defensoría del Pueblo).
- Es importante analizar el artículo 149, que simplemente remite al artículo 203, complementándolo, pero dicho complemento resulta ser más caótico que la misma inclusión, porque en él desmiembra todo el sistema acusatorio del actual procedimiento penal a la Ley 906, se establece una clara definición de los roles que le corresponden a la Fiscalía, y a ésta, como sujeto procesal, le corresponde hacer la investigación y presentar la respectiva acusación (juez 5 de menores).

- El sistema de responsabilidad penal juvenil planteado "no logra establecer un procedimiento distinto al de los adultos y contiene disposiciones que afectan el desarrollo adecuado de los niños y de las niñas infractores de la ley penal", específicamente:

  - ✓ Artículo 144. "Particularmente el *establecimiento de la edad de imputabilidad penal* de los 12 años a los 18 resulta extremadamente grave por dos razones, a saber: i) la edad mínima de responsabilidad penal ... debe tener coherencia con otro tipo de edades fijadas en la ley para que niños y niñas adquieran responsabilidades sociales; ii) el desarrollo psicosocial de los niños dentro de este rango de edad es determinante para el resto de sus vidas, y iii) desconoce las recomendaciones y los tratados internacionales que han señalado que no se debe fijar este límite a una edad temprana".
  - ✓ Artículo 166. Se propone que en el artículo se señale expresamente que la privación de la libertad debe decidirse como último recurso, limitándose a casos excepcionales.
  - ✓ Artículo 200. "*El periodo máximo de cinco años* para la pena privativa de la libertad es nocivo y genera un grave impacto en los derechos humanos del niño. Durante la ejecución de la condena, derechos fundamentales como la libertad de expresión y de circulación, derecho a la familia y a la cultura, entre otros, se ven limitados".
  - ✓ Capítulo I, Título I. Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Recomiendan "que se verifiquen aquellas etapas procesales, autoridades y facultades, entre otras *disposiciones del sistema acusatorio* que pueden afectar derechos de los niños y las niñas, para que se corrijan y se adapten a la protección especial que éstos requieran" (Comisión Colombiana de Juristas).

- El artículo 164 dice que únicamente las sentencias proferidas dentro de procesos de responsabilidad penal juvenil crearán antecedentes; esto significa un retroceso jurídico de más de dos décadas, colocándonos frente a la ya presuntamente desaparecida institución de la peligrosidad (san-

ción al delincuente de acuerdo con su conducta pasada) (Fundación Creciendo Unidos).

- Las sanciones deben ser establecidas por tiempo determinado en función del hecho cometido (Fundación Creciendo Unidos).
- A fin de que se hagan efectivos los principios de excepcionalidad y brevedad de la privación de la libertad, deben establecerse supuestos paliativos de aplicación que remitan a los delitos cuya gravedad se expresa en que están reprimidos con penas severas en el Código Penal; debe eliminarse el supuesto de incumplimiento de otras sanciones (Fundación Creciendo Unidos).
- Debe establecerse un máximo de duración de la privación de la libertad en centros especializados que no exceda el mínimo previsto para los delitos graves. La ley debe aportar mecanismos eficaces de protección integral del menor y afianzar mecanismos para prevenir la delincuencia juvenil y disminuir los efectos nocivos sobre la sociedad y las víctimas (Fundación Creciendo Unidos).

f) Conflicto armado

- Respecto a lo que concierne a los grupos y a los niños vinculados a los grupos armados irregulares, existe una duda acerca del programa al cual deben ser remitidos, ya que aunque la Corte señala que estos niños deben ser remitidos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a un programa especializado, en este momento se cuenta con dos, y no hay claridad sobre cuál es el indicado para atenderlos, si el creado para las víctimas de la violencia política, o el de reeducación, que es para infractores de la ley penal (Beatriz Londoño, directora Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).
- Los niños, las niñas y los adolescentes desvinculados del conflicto deben tratarse como víctimas. La Defensoría avala la posibilidad contenida en el proyecto de ley consistente en la aplicación del principio de oportunidad en estos casos con lo cual la autoridad encargada se abstiene de iniciar la investigación penal (Defensoría del Pueblo).
- Existe un desequilibrio entre los sujetos activos del delito de reclutamiento ilícito de niños y niñas, y los sujetos pasivos del mismo, pues según la

ley de justicia y paz los beneficios de aquellos son superiores a los de las víctimas del delito, aspecto que se hace más evidente ahora que los niños y las niñas han sido considerados infractores de la ley penal según pronunciamiento de la Corte Constitucional (Defensoría del Pueblo).

- Frente a la utilización de niños y niñas en actividades de inteligencia militar, la Defensoría avala la prohibición de la entrevista militar y su vinculación en dichas actividades por parte de la fuerza pública (autoridades militares, de policía y de seguridad).
- Artículo 42 (6) (30). "*Con relación a los niños y las niñas vinculados al conflicto armado*, sujetos pasivos de delito de reclutamiento ilícito, la respuesta estatal debe ser perseguir, investigar y sancionar a los adultos autores de este delito, y no judicializar a los niños y las niñas por hechos que se vieron forzados a cometer como víctimas de este delito" (Derecho a no participar en la guerra) (Comisión Colombiana de Juristas).
- Preocupaciones sobre las propuestas de criminalizar a los niños y las niñas desvinculados del conflicto. En diversas ocasiones las instituciones del Estado se han opuesto a la judicialización de la niñez víctima del conflicto (Alcaldía de Bogotá, Defensoría del Pueblo). El ICBF ha afirmado que no deben juzgarse bajo ningún régimen penal sino protegidos integralmente. Según la Procuraduría, los niños no deben ser sometidos a proceso de responsabilidad penal juvenil por delitos como rebelión, asonada, porte ilegal de armas, participación en secuestros, torturas, masacres, etc. (Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia).
- Se plantean diferencias frente a la judicialización de los niños en el conflicto armado. Si bien bajo la redacción de este proyecto habría 2 mil niños privados de la libertad (bajo el actual Código habría 18 mil), habría 11 mil vinculados al conflicto. El Estado debe adoptar medidas para impedir su reclutamiento y prestar asistencia para su recuperación. Se hace referencia a dos artículos: 1) el artículo 166 exonera de la medida de privación de la libertad sólo por los delitos estrictamente políticos (Título XVIII, Código Penal: rebelión, sedición, asonada, conspiración, seducción, usurpación o retención ilegal del mando); y 2) el artículo 184

sobre aplicación del principio de oportunidad. Concluyen que quienes cometan infracciones al DIH no serán objeto de finalización a la persecución penal dado que dicho artículo no las estipula explícitamente; y en tanto que el 184 excluye del principio de oportunidad las acciones cometidas en contra del DIH, se entiende que sus autores no son beneficiarios de la remisión a un programa de atención especializada en el ICBF (Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo).

- El proyecto contempla en su lista de delitos de especial gravedad una serie de conductas que en muchas ocasiones los niños vinculados se ven forzados a cometer. Por tanto, es necesario insistir en el enfoque sobre la situación de los niños en el conflicto como víctimas, no para subvalorarlos o descalificarlos, sino para señalar la responsabilidad del Estado y los grupos armados. En conclusión: frente a niños y niñas desvinculados, sujetos pasivos del delito de reclutamiento ilícito, la respuesta debe ser perseguir, investigar y sancionar a los adultos autores del delito y no judicializar a los menores por hechos que se vieron forzados a cometer. Deben ser atendidos independientemente de los hechos que hayan cometido por un programa especializado del ICBF (Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo).

g) Trabajo infantil y juvenil

- Artículo 116, se considera que el inciso primero de este artículo debe suprimirse o sino complementarse debido a que como está redactado excluye al Ministerio de la Protección Social, en su competencia de prevención, inspección, vigilancia y control con respecto a la autorización de los permisos para el trabajador adolescente. El Ministerio debe estar presente y continuar con esta responsabilidad (Ministerio de la Protección Social).
- Es importante definir dentro del presente articulado qué se entiende por trabajador adolescente independiente, dado que nuestros niños, niñas y adolescentes están siendo vulnerables en todo lo que respecta a estas actividades del sector informal y lamentablemente no cuentan con los mecanismos para controlar este flagelo (Ministerio de la Protección Social).

- En cuanto a la prestación de servicios sociales a la comunidad, consideramos importante que se establezcan restricciones y controles puntuales que impidan que esta clase de medidas dé lugar a abusos y excesos en contra de los niños y las niñas a quienes se imponga, ya que como está descrito en el proyecto de ley, éste constituye trabajo infantil no remunerado (Comisión Colombiana de Juristas).
- Artículo 113. *Trabajo infantil.* El proyecto de ley avala el derecho al trabajo. No están en contra de la Convención ni de la OIT pero insisten en que en nuestra sociedad hay mucha miseria, y en muchas ocasiones los niños tienen que trabajar y ayudar a sus familias. No están de acuerdo con la edad mínima de 15 años para trabajar (Fundación Creciendo Unidos).
- La Defensoría Internacional de Niños y Niñas Colombia propone:

  - ✓ Más de dos millones y medio de niños trabajan en Colombia, es una práctica sociocultural que merece que se inscriba en un capítulo especial (en el Título III, Libro I) y no como está planteado. Existe una confusión, falta de conocimiento de la problemática y posiciones ideológicas que desvirtúan su verdadera naturaleza. Se toma al trabajo como el culpable para que no asistan a la escuela, pero en realidad obedece a la inequidad y falta de garantías de derechos económicos, sociales y culturales. Se confunde con la explotación sexual y participación en el conflicto, los cuales en realidad son delito y violación al DIH respectivamente.
  - ✓ El artículo 32 de la Convención invita a que el Estado, la sociedad y la familia protejan a todos los niños y adolescentes contra las formas de explotación laboral y económica, servidumbre, esclavitud y actividades que afecten su desarrollo físico, mental, moral o espiritual. Deben fijarse edades mínimas, reglamentación de horarios, condiciones, penalidad y sanciones.
  - ✓ Proponen un capítulo especial sobre trabajo doméstico como una de las peores formas de vulneración de derechos (casi esclavitud) desde los 7 años. Debe quitársele el nombre de doméstico.

- ✓ Deben garantizarse los *derechos de asociación y participación* de adolescentes trabajadores.
- ✓ Proponen un capítulo especial sobre trabajo formativo para incluir prácticas socioculturales tradicionales, dado que es un trabajo que potencia el desarrollo integral del niño.

h) Otros

- Se propone incluir dentro de la ley un acápite que contemple las sanciones con multas, con el fin de sancionar a las personas que directa o indirectamente vulneren los derechos fundamentales de los niños, las niñas y los adolescentes, como se encuentra en el Capítulo III del actual Código del Menor y los dineros recaudados deben ser destinados a los programas de atención especializada, los cuales en el momento no existen (Policía Nacional).

4.2. Aportes de otras organizaciones y personas

La Organización Internacional del Trabajo, a través de la señora Liliana Obregón Espinal, coordinadora nacional de IPEC-OIT, dirigió a los suscritos coordinadores de ponentes una serie de importantes observaciones sobre la situación del menor trabajador y algunas sugerencias sobre mejoras a los proyectos.

La señora Nora Sanín Posada, directora de Andiarios, formuló algunas propuestas sobre la responsabilidad de los medios de comunicación en relación con los menores de edad. Específicamente, planteó algunas sugerencias en cuanto a la competencia deseablemente judicial para aplicar las condignas sanciones por violación de esa responsabilidad.

5. Evaluación general de los proyectos

El Código del Menor, adoptado mediante Decreto Ley 2737 de 1989, constituyó un gran avance en la legislación colombiana sobre la materia. En él se recogieron los principios universales sobre los derechos del niño. Dicho Código encierra en su amplia normatividad muchos aciertos éticos y sociales, y grandes virtudes en lo técnico. La doctrina evalúa la mayoría de sus regulaciones como una buena obra jurídica, que ha redundado en protección para el menor de edad, aunque

una buena parte de sus preceptos no hayan logrado un alto grado de eficacia real por falta de voluntad política y de recursos presupuestales.

Sin embargo, dicho Código del Menor acusa algunas falencias, a saber:

- Como legislación preconstitucional necesita una labor de adecuación a la concepción de la Constitución de 1991 y a la Convención sobre los Derechos del Niño.
- En materia de responsabilidad penal del menor presenta un cierto desfase y ciertos vacíos en relación con las duras realidades de la criminalidad juvenil de los tiempos recientes, y en cuanto a la nueva estructura del proceso penal.
- Amerita una actualización de carácter sustantivo y técnico en temas muy sensibles, tales como la adopción, el menor trabajador, bienes del menor, competencias de algunos órganos protectores del menor, etc.
- En cuanto a la responsabilidad penal de los niños y adolescentes, es preciso poner la legislación a tono con el nuevo sistema procesal penal establecido en el Acto Legislativo 3 de 2002, que entronizó el sistema acusatorio pleno y la oralidad en la investigación y el juzgamiento de delitos.

Observaciones sobre la adopción

Si bien es cierto que en materia de adopción el actual Código del Menor es susceptible, como cualquier ordenamiento legal, de algunas modificaciones indispensables para ponerlo a tono con la evolución de la sociedad, ello no amerita cambiar radicalmente la legislación actual, y menos cuando la mayor parte de sus normas ha venido funcionando bien. Se requieren sí unos cuantos ajustes de técnica y de fondo.

En el Proyecto 085 la institución de la adopción se regula en los artículos 62 a 76, y aunque avanza en algunos aspectos de fondo, su mejor virtud reside en las mejoras de orden técnico.

Sobre responsabilidad penal del adolescente

En ésta hay que partir de un hecho contundente: aunque el actual Código del Menor tiene algunas virtudes en el tratamiento penal del adolescente, la ineficacia de sus normas lo condena al fracaso. Y la ineficacia se origina, ante todo, en la carencia o

insuficiencia de los establecimientos para las medidas de reeducación del menor que ha incurrido en actos delictivos. Más que la norma legal, lo que ha fallado es la voluntad política y administrativa de las entidades estatales responsables de la rehabilitación ética del menor delincuente. Así, encontramos que los municipios carecen de los Centros Especializados de Recepción que exige el artículo 183 del actual Código del Menor para albergar a los menores capturados en estado de flagrancia. O donde se cuenta con tales centros, son totalmente insuficientes.

Para muestra un botón: en Medellín el Centro Especializado de Recepción ubicado en el barrio La Floresta sólo cuenta con un total de 28 cupos, mientras los juzgados de menores están iniciando unos cinco mil expedientes por año. Como consecuencia, en la mayoría de los casos el menor capturado debe ser puesto en libertad. En cuanto a la medida de *ubicación institucional* de régimen *semicerrado*, a la cual alude el artículo 204 del Código del Menor en su núm. 3, en relación con el artículo 208 del mismo, cabe anotar que en todo el territorio nacional no más de siete ciudades cuentan con esta institución. En Antioquia el único Centro es la Institución Educativa de Trabajo San José, y sus cupos son insuficientes.

El problema medular ha sido la carencia de establecimientos adecuados. La experiencia demuestra que, gracias a la medida de *internamiento de régimen semicerrado*, los despachos judiciales han visto formarse a cientos de jóvenes durante la vigencia del actual Código del Menor; y que muchos de ellos han llegado a ser personas socialmente productivas, con familias bien organizadas, gracias a los conocimientos adquiridos y a la formación lograda.

Un sólo dato puede corroborarlo: el año anterior, la mencionada Institución Educativa de Trabajo San José fue convocada a las Olimpiadas Deportivas del Municipio de Bello, con participación de los establecimientos educativos de esa ciudad y le fue concedido el trofeo al "juego limpio". Es innegable que ese prodigio se debe a la consagrada labor de personas experimentadas en un trato digno a los jóvenes, en este caso a religiosos terciarios capuchinos, cuyo liderazgo en reeducación es reconocido a nivel mundial.

En la nueva normatividad propuesta debemos destacar su propósito de superar la actual concepción del Código del Menor que asume el problema

del menor infractor como una "situación irregular". Ahora se propone todo un "sistema de responsabilidad penal juvenil", en el cual el adolescente es asumido como un sujeto de deberes y responsabilidades. Para ello se crea una jurisdicción penal juvenil, con sus fiscales y jueces especializados.

6. Algunas recomendaciones y propuestas para el primer debate

6.1 Propuesta metodológica

6.1.1 Texto que servirá como base al pliego de modificaciones

Aunque ambos proyectos contienen virtudes que los hacen meritorios, hemos preferido adoptar como texto de referencia para la discusión y el pliego de modificaciones que proponemos, el primero de ellos, es decir, el Proyecto 085 de 2005 (Cámara), por encontrarlo temáticamente más completo y omnicomprensivo.

6.1.2 ¿Ley código o simple ley?

En este punto, como se anotó, difieren los dos proyectos acumulados. Sin entrar en la compleja discusión académica de qué ha de entenderse por ley-código, la verdad es que en ambos proyectos nos encontramos frente a una propuesta de legislación integral, armónica, coherente y sistemática, que reemplace al actual Código del Menor. Aunque no se propone como Código, el Proyecto 085 en su artículo 232 sobre vigencia termina con un mandato derogatorio del actual Decreto 2737 de 1989. Todo parece indicar, entonces, que es conveniente darle ese carácter de codificación a la ley en cierne, por lo cual recomendamos adoptar parcialmente como título de la ley el que propone el Proyecto 096: "por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia".

Por ello deberá variar también parcialmente el texto de los artículos 1º y 2º.

6.2 Sobre la parte declarativa, de definiciones y de principios

Artículo 5. No es afortunado el nuevo alcance que se le pretende dar a la naturaleza de "orden público" de las normas de familia. En la jurisprudencia colombia-

na, que la ley sea de orden público (y no de orden privado) significa que no puede ser derogada por vía particular y de vigencia general inmediata, conforme a la Ley 153 de 1887. Es mucho más técnica la definición que de la naturaleza de orden público ofrece el artículo 18 del actual Código del Menor cuando reza: "los principios y reglas en ellas consagrados son de carácter irrenunciable y se aplicarán de preferencia a disposiciones contenidas en otras leyes". Este sentido técnicamente afortunado lo mantiene el Proyecto 096. En cambio, el concepto de "aplicación inmediata" que trae el Proyecto 085 es irrelevante para la idea jurídica que se quiere transmitir.

6.3 Obligación de calidad ética de las instituciones educativas

Es necesario y urgente que el legislador adopte medidas para prevenir y erradicar un fenómeno grave que viene azotando de manera constante y progresiva la armoniosa convivencia en establecimientos educativos de primaria y secundaria. Se trata de una desbordada violencia en el trato mutuo entre niños y adolescentes que comparten la cotidianidad del mismo plantel (a veces, incluso, se ha extendido a conflictos con estudiantes de planteles distintos).

El fenómeno asume la forma de agresión física –en ocasiones llega hasta el empleo de armas corto-punzantes–, agresión psicológica, agresión verbal (palabras ofensivas), humillaciones graves y discriminaciones ejercidas en forma sistemática y continua contra otros niños y adolescentes, sin que las víctimas encuentren protección o correctivo para impedir que continúen tales maltratos graves, sistemáticos y continuados.

Esta preocupante manifestación de la violencia entre los niños y adolescentes constituye un grave atentado a la dignidad humana, traduce una actitud de intolerancia hacia las diferencias humanas, y va asentando en los educandos una mentalidad cruel con los demás, especialmente con los más débiles. Como fenómeno psicosocial ya ha sido registrado por recientes estudios en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Se le conoce actualmente con la palabra anglosajona *bullying*, y ha sido excelentemente descrito en el libro *Guerra en las aulas*, cuya autora es Nora Rodríguez. Según esta autora, el *bullying* puede caracterizarse así: "acoso psicológico, moral y/o físico, llevado a cabo en los

centros educativos, donde un alumno ejerce poder sobre otro, de un modo sistemático y con la intención de dañarlo".[13]

La palabra *bullying* proviene del inglés *bull*, neologismo que alude a "un problema de abuso e intimidación sistemática por parte de un niño hacia otro que no tiene la posibilidad de defenderse".[14]

Sobre los factores que contribuyen a generar tal actitud violenta dice la citada autora: "…sus semillas germinan donde ha habido un aprendizaje de violencia, *donde la institución escolar no se compromete*, y donde no hay intervención de un adulto" (énfasis agregado).[15]

Las autoridades escolares no han asumido con el debido compromiso la lucha contra esta especie de acoso escolar (de similar naturaleza al acoso laboral). Por el contrario, se observa tolerancia, permisión cercana a la complicidad. Por ello, queremos proponer una nueva normatividad que imponga este deber específico a los establecimientos educativos y se les sancione con la no certificación por parte de la ciudadanía.

En este orden de ideas, en el pliego de modificaciones anexo propondremos insertar un nuevo artículo que obligue a los centros educativos a garantizar un trato digno y respetuoso entre los niños y adolescentes que comparten un espacio pedagógico. Proponemos que en el reglamento interno y en el currículo académico de cada escuela o colegio se inserten programas educativos en convivencia respetuosa y no violenta. Igualmente, se obliga a prever e implementar medidas preventivas, disuasorias, reeducativas y correctivas para garantizar esa convivencia armónica y evitar las agresiones y humillaciones entre los alumnos. Para "darle dientes" a estas obligaciones proponemos que la Secretaría de Educación de cada departamento realice una evaluación periódica de su cumplimiento que denominamos de *calidad ética* del plantel educativo, y que sólo se otorgue la certificación o acreditación educativa a un determinado centro docente si se éste demuestra progresos en esa materia.

---

[13] Nora Rodríguez, *Guerra en las aulas*, Madrid, Ediciones Temas, 2003 (reeditado en Argentina, 2004), p. 16.

[14] Ibíd., p. 20.

[15] Ibíd., p. 16.

6.4 Sobre adopción

En el pliego de modificaciones sugeriremos algunas modificaciones de fondo y de orden técnico, para lo cual en el pliego que se anexa insertaremos un articulado que sustituye en forma integral los del Proyecto 085.

En esta materia sería necesario, en primer lugar, adecuar la normatividad existente a las orientaciones trazadas por la Corte Constitucional, especialmente la sentencia T-510 de 2003 en cuanto al "consentimiento idóneo constitucionalmente" de quienes ejercen la patria potestad del menor en proceso de adopción.

En cuanto a la fase administrativa del procedimiento, sugerimos conservar la procedencia de la adopción cuando se otorgue el consentimiento por quienes ejercen la patria potestad, sin necesidad de resolución motivada por parte del defensor de familia, ya que éste no requiere de ningún acto que lo refrende. Basta entonces que el consentimiento sea válido civilmente e idóneo constitucionalmente.

De otra parte, debería posibilitarse la opción del cambio de nombre del menor adoptable, dentro del mismo proceso judicial de adopción.

6.5 Administración de los bienes del menor

Consideramos importantes y afortunados los aportes que en esta materia específica trae el Proyecto 096, razón por la cual en el Pliego de Modificaciones proponemos adicionar algunas de sus sugerencias. Particularmente interesantes son las relativas a:

- Supresión del engorroso e inútil proceso judicial de designación de curador para el menor de edad, cuando uno de los cónyuges ha de contraer segundas nupcias. Vale la pena conservarlo cuando se deba salvaguardar un patrimonio significativo.
- En el evento de segundas nupcias, obligación de rendir inventario privado de bienes del menor si el monto de éstos no fuere significativo.
- Mantener la exigencia de proceso de jurisdicción voluntaria para autorizar los actos de disposición de los bienes del menor.

6.6 Responsabilidad penal del menor

Proponemos mejoras a los proyectos en algunos aspectos puntuales, especialmente con las siguientes sugerencias:

- Las instituciones, para cumplir las medidas de reeducación, deben ser manejadas por personal especializado y con amplia experiencia en pedagogía reeducativa.
- Como garantía procesal, el juez que ejerció el control de garantías respecto de un determinado hecho punible no debe ser el mismo que realiza el juzgamiento.
- Garantizar medidas de protección para el adolescente y su familia cuando de la aplicación del principio de oportunidad se deriven riesgos para su vida o su integridad física.
- Es necesario llenar un vacío legal existente hoy sobre responsabilidad contravencional de los adolescentes. A diario se registran casos en que los niños y adolescentes incurren en ciertas contravenciones, tales como infracciones de tránsito, ocupación ilegal de espacio público, etc. Sin embargo, no hay norma que establezca qué naturaleza tiene esta responsabilidad, la autoridad competente y el procedimiento para hacer valer esa responsabilidad. Tampoco los proyectos en estudio lo contemplan. Para llenar este vacío proponemos la responsabilidad administrativa de los adolescentes en algunas áreas, verbigracia las contravenciones de tránsito, y la responsabilidad de los padres y custodios para las contravenciones sancionadas con multas.

7. Pliego de modificaciones a los proyectos de ley acumulados: Proyecto de Ley Estatutaria 085 de 2005 Cámara, "Por la cual se expide la ley de la infancia y la adolescencia", y Proyecto de Ley 096 de 2005 Cámara, "Por la cual se expide el Código de la Niñez y la Juventud, que subroga el Decreto 2737 de 1989, Código del Menor"

(Con referencia al texto y la nomenclatura del Proyecto 085 de 2005 Cámara)

7.1 Para título de la ley

"Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia"

7.2 El artículo 1 quedará así:

"Artículo 1. Finalidad: *Este Código tiene por finalidad* garantizar a los niños, niñas y adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. *Prevalecerá el respeto a la igualdad y a la dignidad humana, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo o inclinación sexual, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico, posición económica, impedimentos físicos; o por su condición social o familiar*".

Se cambia la expresión "ley" por "código" y se establecen de manera taxativa los principios que lo orientan.

7.3 El artículo 2 quedará así:

"Artículo 2. Objeto: *El presente código tiene por objeto* establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento ante su vulneración. Dicha garantía y protección será obligación de la familia, la sociedad y el Estado".

Se cambia la expresión "la presente ley" por "el presente código".

7.4 El artículo 3 quedará así:

"Artículo 3. Sujetos titulares de derechos: para todos los efectos de este código son sujetos titulares de derechos todas las personas menores de 18 años. *Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Código Civil*, se entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años, y por adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad.

Parágrafo 1°. En caso de duda sobre la mayoría o minoría de edad, se presumirá ésta. En caso de duda sobre la edad del niño o niña se presumirá la edad inferior. Las autoridades judiciales y administrativas ordenarán la práctica de las pruebas para la determinación de la edad, y una vez establecida, confirmarán o revocarán las medidas y ordenarán los correctivos necesarios para la adecuada aplicación de la ley.

Parágrafo 2°. En el caso de los pueblos indígenas, la capacidad para el ejercicio de derechos, se regirá por sus propios sistemas normativos, los cuales deben guardar plena armonía con la Constitución Política".

Se establece a favor del niño o la niña la presunción de la edad inferior, así mismo se respeta la autonomía de las comunidades indígenas, dentro de lo establecido por la Constitución Política.

Se indica que el rango diferencial entre adolescente y niño se establece sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Código Civil.

7.5 El artículo 4º quedará así:

"Artículo 4. Ámbito de aplicación. El presente Código se aplica a todos los niños, niñas y adolescentes nacionales o extranjeros que se encuentren en el territorio nacional, a los nacionales que se encuentren fuera del país y a aquellos con doble nacionalidad, cuando una de ellas sea la colombiana".

Se cambia la expresión "la presente ley" por "el presente Código".

7.6 El artículo 5º quedará así:

"Artículo 5. Naturaleza de las normas contenidas en este Código. Las normas *sobre los niños, niñas y los adolescentes son de carácter irrenunciable*, y los principios y reglas en ellas consagrados se aplicarán de preferencia a disposiciones contenidas en otras leyes".

No es afortunado el nuevo alcance que se le pretende dar a la naturaleza de "orden público" de las normas de familia. En la jurisprudencia colombiana que la ley sea de orden público (y no de orden privado) significa que no puede ser derogada por vía particular y de vigencia general inmediata, conforme a la Ley 153 de 1887. Es mucho más técnica la definición que de la naturaleza de orden público ofrece el artículo 18 del actual Código del Menor cuando reza: "los principios y reglas en ellas consagrados son de carácter irrenunciable y se aplicarán de preferencia a disposiciones contenidas en otras leyes". Este sentido técnicamente afortunado lo mantiene el Proyecto 096. En cambio, el concepto de "aplicación inmediata" que trae el Proyecto 085 es irrelevante para la idea jurídica que se quiere transmitir, por lo que se asumió la expresión contenida en el 096.

7.7 El artículo 6º quedará así:

"Artículo 6. Reglas de interpretación y aplicación. *Las normas contenidas en la Constitución Política y en los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos o ratificados por Colombia, en especial la Convención sobre los Derechos del Niño, cuyo cumplimiento es obligatorio, harán parte integral de este Código, deberán servir de guía para la interpretación y aplicación del presente código.* En todo caso, se aplicará siempre la norma más favorable al interés superior del niño, niña o adolescente.

La enunciación de los derechos y garantías contenidos en dichas normas, no debe entenderse como negación de otras que, siendo inherentes al niño, niña o adolescente, no figuren expresamente en ellas".

Se modificó la redacción por técnica jurídica.

7.8 El artículo 9º quedará así:

"Artículo 9. Prevalencia de los derechos. En todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, niñas y adolescentes, prevalecerán los derechos de éstos, en especial si existe conflicto *entre sus derechos fundamentales* con los de cualquier otra persona.

En caso de conflicto entre dos o más disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicará la norma más favorable al interés superior del niño, niña y adolescente".

Se da mayor claridad a la preponderancia de los derechos fundamentales de los niños.

7.9 El artículo 11º quedará así:

"Artículo 11. Exigibilidad de los derechos. *Salvo las normas procesales sobre legitimidad en la causa para incoar las acciones judiciales o procedimientos administrativos a favor de los menores de edad, cualquier persona puede exigir de la autoridad competente el cumplimiento y el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.*

El Estado en cabeza de todos y cada uno de sus agentes tiene la responsabilidad inexcusable de actuar oportunamente para garantizar *la realización*, protección y el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Parágrafo. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como ente coordinador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, definirá los lineamientos técnicos que las entidades deben cumplir para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y para asegurar su restablecimiento. Así mismo coadyuvará a los entes nacionales, *departamentales,* distritales y municipales en la ejecución de sus políticas públicas, sin perjuicio de las obligaciones que por mandato constitucional y legal le corresponde a cada una de ellas".

Se aclara la redacción del artículo con el fin de excluir las normas procesales sobre legitimación.

7.10 El artículo 13 quedará así:

"Artículo 13. Derechos de los niños, niñas y adolescentes de los pueblos indígenas y demás grupos étnicos. *Los niños, niñas y adolescentes de los pueblos indígenas y demás grupos étnicos, gozarán de los derechos consagrados en la Constitución Política, los instrumentos internacionales de derechos humanos y el presente código, sin perjuicio de los principios que rigen sus culturas y organización social".*

La protección al menor, como se concibe hoy en día, es fruto de un desarrollo cultural de muchos años. Hasta hace relativamente poco tiempo se consideraba una intromisión ilegítima del Estado impedir o exigir a los padres adoptar conductas sobre educación, castigo, normatividad en el hogar, donde se daban de continuo situaciones que los pueblos civilizados de hoy no permitirían. Por eso, dar prevalencia al sistema cultural en el caso del tratamiento a los menores (reconociendo facultades a pueblos indígenas de manejar bajo sus reglas el sistema) puede ser una franca contradicción con el propósito de la norma, porque se trata de normas protectoras "aculturales", y precisamente para corregir las fallas propias de las culturas menos desarrolladas.

Por otra parte, el reconocimiento de una cultura como condicionante de la norma, llevaría a que en estas materias cualquiera pueda escudarse en su propia cultura para realizar actuaciones contrarias al Código y hacer perder eficacia al sistema.

El Código del Menor tiene que ser el motor del desarrollo educativo para todos los sujetos sin distinción, de modo que adapten sus comportamientos a lo que la sociología, la psicología y la ciencia actual nos muestran como lo mejor

para los menores. En todo caso, el funcionario de familia tendrá que tener facultades para imponerse a padres, acudientes y maestros, cuando el medio en que se desenvuelve el menor entre en contradicción con la norma por razones de religión, política, costumbres, etc.

7.11 El artículo 15º quedará así:

"Artículo 15. Ejercicio de los derechos y responsabilidades. Es obligación de la familia, de la sociedad y del Estado, formar a los niños, *niñas y adolescentes* en el ejercicio responsable de los derechos. Las autoridades contribuirán con este propósito a través de decisiones oportunas y eficaces, y con claro sentido pedagógico.

El niño, niña y adolescente tendrá y deberá cumplir las obligaciones cívicas y sociales que correspondan a un individuo de su desarrollo.

En las decisiones jurisdiccionales o administrativas, sobre el ejercicio de los derechos o la infracción de los deberes se tomarán en cuenta los dictámenes de especialistas".

Se establece la obligación de los niños, las niñas y los adolescentes de cumplir deberes.

7.12 El artículo 17º quedará así:

"Artículo 17. Derecho a la vida y a la calidad de vida y a un ambiente sano. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida, a una buena calidad de vida y a un ambiente sano en condiciones de dignidad y goce de todos sus derechos en forma prevalente.

La calidad de vida es esencial para su desarrollo integral acorde con la dignidad del ser humano. Este derecho supone la generación de condiciones que les aseguren desde la primera infancia, *cuidado, protección,* alimentación nutritiva y equilibrada, acceso a los servicios de salud, educación, vestuario adecuado, recreación y vivienda segura dotada de servicios públicos esenciales en un ambiente sano".

Se incluyen los términos "cuidado" y "protección" para ampliar el objetivo del artículo.

7.13 El artículo 19º quedará así:

"Artículo 19. Derechos de protección. Los niños serán protegidos contra:

1. El abandono físico, emocional y psicoafectivo de sus padres, representantes legales o de las personas, instituciones y autoridades que tienen la responsabilidad de su cuidado y atención.
2. La explotación económica por parte de sus padres, representantes legales, quienes vivan con ellos, o cualquier otra persona. Serán especialmente protegidos contra su utilización en la mendicidad.
3. El consumo de sustancias psicoactivas y estupefacientes y la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños en actividades de promoción, producción, recolección, tráfico, distribución y comercialización.
4. La violación, la inducción, el estímulo y el constreñimiento a la prostitución; la explotación sexual, la pornografía y cualquier otra conducta que atente contra la libertad, integridad y formación sexuales de la persona menor de edad.
5. Contra el secuestro, la venta, la trata de personas y el tráfico y cualquier otra forma contemporánea de esclavitud o de servidumbre.
6. Las guerras y los conflictos armados internos.
7. El reclutamiento y la utilización de los niños por parte de los grupos armados organizados al margen de la ley.
8. La tortura y toda clase de tratos y penas crueles, inhumanos, humillantes y degradantes, la desaparición forzada y la detención arbitraria.
9. La situación de vida en la calle de los niños y niñas.
10. Los traslados ilícitos y su retención en el extranjero para cualquier fin.
11. El desplazamiento forzado.
12. El trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo es probable que pueda afectar la salud, la integridad y la seguridad o impedir el derecho a la educación.
13. Las peores formas de trabajo infantil conforme a lo establecido en el Convenio 182 de la OIT.
14. El contagio de enfermedades infecciosas prevenibles durante la gestación o después de nacer, o la exposición durante la gestación a alcohol o cualquier tipo de sustancia psicoactiva que pueda afectar su desarrollo físico, mental o su expectativa de vida.
15. Los riesgos y efectos producidos por desastres naturales y demás situaciones de emergencia.

16. Cuando su patrimonio se encuentre amenazado por quienes lo administren.
17. Las minas antipersonal.
18. Cualquier otro acto que amenace o vulnere sus derechos".

El catálogo de las posibles enfermedades que pueden ser transmitidas resulta algo restringido, razón por la cual se realiza el cambio en el numeral 14; así mismo, se acoge la sugerencia de la OIT referente a la protección que debe darse a los niños frente a las peores formas de trabajo infantil. También se recoge la sugerencia de Acnur sobre establecer protección contra las minas antipersonal.

7.14 El artículo 23 quedará así:

"Artículo 23. Derecho a los alimentos. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a los alimentos suficientes y demás medios para su desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral y social. Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación o instrucción, y en general todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Los alimentos comprenden la obligación de proporcionar a la madre los gastos de embarazo y parto.

El mayor de edad que reclame alimentos por su condición de estudiante deberá demostrar un desempeño apropiado en sus estudios y estar cursando educación media, carrera profesional o técnica".

Se establece que el mayor de edad que reclama alimentos por estar estudiando debe tener un desempeño apropiado en sus estudios y estar cursando carrera profesional o técnica, para evitar que los alimentos sean un premio a la falta de esfuerzo.

7.15 El artículo 25 quedará así:

"Artículo 25. Derecho al debido proceso. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se les apliquen las reglas del debido proceso en todas las actuaciones administrativas y judiciales en las cuales se encuentren involucrados. El debido proceso es el conjunto de garantías que buscan asegurar al niño, niña o adolescente involucrado en cualquier proceso, una recta y cumplida administración de justicia y la debida fundamentación de las decisiones que lo afecten.

En toda actuación administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza en que estén involucrados los niños, niñas o adolescentes, estos tendrán derecho a ser escuchados y sus opiniones deberán ser tenidas en cuenta".

Se unifica la disposición que se encontraba consagrada en el artículo 32 del proyecto referente al derecho a ser escuchado.

7.16 El artículo 29 quedará así:

"Artículo 29. Derecho *a la recreación*, a la participación en la vida cultural y en las artes. Los niños tienen derecho *al descanso, esparcimiento, al juego y actividad recreativa propia de su ciclo vital y a participar en la vida cultural y las artes.*

Igualmente, tienen derecho a que se les reconozca, respete, y fomente el conocimiento y la vivencia de la cultura a la que pertenezcan.

Parágrafo 1º. Para armonizar el ejercicio de este derecho con el desarrollo integral de los niños, las autoridades deberán diseñar mecanismos para prohibir el ingreso a establecimientos destinados a juegos de suerte y azar, venta de licores, cigarrillos o productos derivados del tabaco y que ofrezcan espectáculos con clasificación para mayores de edad.

Parágrafo 2º. Cuando sea permitido el ingreso a niños menores de 14 años a espectáculos y eventos públicos masivos, las autoridades deberán ordenar a los organizadores, la destinación especial de espacios adecuados para garantizar su seguridad personal".

Se unifican los artículos 29, 30 y 31 ya que buscan una misma protección en el campo de la recreación y de la diversidad cultural, igualmente se establecen mecanismos de protección para prohibir el ingreso de niños, niñas y adolescentes en lugares que afecten su desarrollo integral.

7.17 El artículo 30 se elimina por unificación en el artículo 29.

7.18 El artículo 31 se elimina por unificación en el artículo 29.

7.19 El artículo 32 se elimina por unificación en el artículo 25.

7.20 El artículo 33, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 30 y quedará así:
"Artículo 30. Derecho a la participación de los niños, niñas y adolescentes. Para el ejercicio de los derechos y las libertades consagradas en este código, los niños, niñas y adolescentes *podrán* participar en las actividades que se realicen en la familia, las instituciones educativas, *las asociaciones, los programas estatales, departamentales, distritales y municipales que sean de su interés.*

El Estado y la sociedad *propiciarán* la participación activa en organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, *cuidado* y educación de la infancia y la adolescencia".

Se precisa la redacción para hacerla acorde con el artículo 45 de la Constitución Política.

7.21 El artículo 35, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 32 y quedará así:
"Artículo 32. Derecho a la intimidad. Los niños, *niñas y adolescentes* tienen derecho a la *intimidad personal, familiar y a su buen nombre y serán protegidos contra conducta, acción o circunstancia que afecte su dignidad*".

Se ajusta al precepto consagrado en la Constitución Política.

7.22 El artículo 36, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 33 y quedará así:
"Artículo 33. Derecho a la información. *Sujeto a las restricciones necesarias para asegurar el respeto de sus derechos y el de los demás y para proteger la seguridad, la salud y la moral, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas a través de los distintos medios de comunicación de que dispongan*".

Se realiza un cambio de redacción para garantizar que este derecho no sea utilizado en contra de los propios niños, por ejemplo utilizarlos en pornografía, etc.

7.23 El artículo 37, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 34 y quedará así:
"Artículo 34. Derechos de los adolescentes autorizados para trabajar. *Los adolescentes entre los 15 y 18 años tienen derecho a trabajar, para lo cual requieren autorización de autoridad competente y gozarán de los derechos laborales consagrados en el régimen laboral colombiano, las normas que lo complemen-*

tan, los instrumentos internacionales ratificados por Colombia, la Constitución Política y los derechos y garantías consagrados en este Código. En todo caso se aplicará siempre la norma más favorable al adolescente autorizado para trabajar.

Los derechos laborales de los adolescentes autorizados para trabajar no podrán ser inferiores a los de los adultos que realicen las mismas actividades.

Los adolescentes autorizados para trabajar tienen derecho a la formación y especialización que los habilite para ejercer libremente una ocupación, arte, oficio o profesión y a recibirla durante el ejercicio de su actividad laboral.

Parágrafo: los niños menores de quince años podrán desempeñar actividades artísticas, culturales, recreativas y deportivas siempre y cuando no se afecte su ciclo educativo y no superen las veinte (20) horas semanales. Para la realización de estas actividades deberá contarse con autorización expresa de sus padres o representantes legales".

Se ajusta la redacción del artículo para hacerlo más claro, igualmente se adiciona un parágrafo que permite a los niños menores de quince años desempeñarse en actividades culturales, artísticas y deportivas.

7.24 El artículo 38, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 35 y quedará así:
"Artículo 35. Derechos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Para los efectos de este Código, la discapacidad se entiende como una limitación física, cognitiva, mental, sensorial o cualquier otra, temporal o permanente de la persona para ejercer una o más actividades esenciales de la vida cotidiana.

Además de los derechos consagrados en la Constitución Política y en los tratados y convenios internacionales, los niños, niñas y adolescentes con discapacidad tienen derecho a gozar de una calidad de vida plena, y a que se les proporcionen las condiciones necesarias para que puedan valerse por sí mismos, e integrarse a la sociedad. Así mismo:

1. Al respeto por la diferencia y a disfrutar de una vida digna en condiciones de igualdad con las demás personas, que les permitan desarrollar al máximo sus potencialidades y su participación activa en la comunidad.

2. *Todo niño, niña o adolescente que presente anomalías congénitas o algún tipo de discapacidad, tendrá derecho a recibir atención, diagnóstico, tratamiento especializado y rehabilitación, cuidados especiales en salud*, educación, orientación y apoyo a los miembros de la familia o a las personas responsables de su cuidado y atención.
3. A la habilitación y rehabilitación para eliminar o disminuir las limitaciones en las actividades de la vida diaria.
4. A ser destinatarios de acciones y de oportunidades para reducir su vulnerabilidad y permitir la participación en igualdad de condiciones con las demás personas.

Parágrafo**.** En el caso de los adolescentes que sufren severa discapacidad *cognitiva* permanente, sus padres o uno de ellos, deberá promover el proceso de interdicción ante la autoridad competente, antes de cumplir aquel la mayoría de edad, para que a partir de esta se le prorrogue indefinidamente su estado de sujeción a la patria potestad por ministerio de la ley".

Resulta pertinente que el numeral 2 de este artículo sea modificado, con el fin de lograr una mayor cobertura y tener un marco más amplio de aplicación, así mismo se sustituye la palabra "mental" por "cognitiva".

7.25 El artículo 43, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 40 y quedará así:
"Artículo 40. Obligaciones del Estado. El Estado es el contexto institucional en el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. En cumplimiento de sus funciones en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal, deberá:
(…)

1. Garantizar el ejercicio de todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
2. Asegurar las condiciones para el ejercicio de los derechos y prevenir su amenaza o afectación a través del diseño y la ejecución de políticas públicas sobre infancia y adolescencia.
3. Garantizar la asignación de los recursos necesarios para el cumplimiento de las políticas públicas de niñez y adolescencia, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal para asegurar la prevalencia sus derechos.

4. Asegurar la protección y el efectivo restablecimiento de los derechos que han sido vulnerados.
5. Promover la convivencia pacífica en el orden familiar y social.
6. Investigar y sancionar severamente los delitos en los cuales los niños, niñas y adolescentes son víctimas, y garantizar la reparación del daño y el restablecimiento de sus derechos vulnerados.
7. Resolver con carácter prevalente los recursos, peticiones o acciones judiciales que presenten los niños, niñas y adolescentes, su familia o la sociedad para la protección de sus derechos.
8. Promover en todos los estamentos de la sociedad, el respeto a la integridad física, psíquica e intelectual, y el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes y la forma de hacerlos efectivos.
9. Formar a los niños, las niñas y los adolescentes y a las familias en la cultura del respeto a la dignidad, el reconocimiento de los derechos de los demás, la convivencia democrática y los valores humanos y en la solución pacífica de los conflictos.
10. Apoyar a las familias para que éstas puedan asegurar a sus hijos e hijas desde su gestación, los alimentos necesarios para su desarrollo físico, psicológico e intelectual, por lo menos hasta que cumplan los 18 años de edad.
11. Garantizar y proteger la cobertura y calidad de la atención a las mujeres gestantes y durante el parto; de manera integral y con inclusión del núcleo familiar durante los primeros cinco (5) años de vida del niño, mediante servicios y programas de atención gratuita de calidad, incluida la vacunación obligatoria contra toda enfermedad prevenible, con agencia de responsabilidad familiar.
12. Garantizar la inscripción y trámite del registro civil de nacimiento mediante un procedimiento eficaz y gratuito, lo más cerca posible al lugar y fecha de su nacimiento.
13. Garantizar que los niños, niñas y adolescentes tengan acceso al Sistema de Seguridad Social en Salud de manera oportuna. Este derecho se hará efectivo mediante afiliación inmediata del recién nacido a uno de los regímenes de Ley.
14. Reducir la morbilidad y la mortalidad infantil, prevenir y erradicar la desnutrición, especialmente en los menores de cinco años, y adelantar los progra-

mas de vacunación y prevención de las enfermedades que afectan a la infancia y a la adolescencia y de los factores de riesgo de la discapacidad.

15. Asegurar los servicios de salud y subsidio alimentario definidos en la legislación del sistema de seguridad social en salud para mujeres gestantes y lactantes, familias en situación de debilidad manifiesta y niños, niñas y adolescentes.
16. Prevenir y atender en forma prevalente, las diferentes formas de violencia y todo tipo de accidentes que atenten contra el derecho a la vida y la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes.
17. Garantizar las condiciones para que los niños y niñas desde su nacimiento, tengan acceso a una educación idónea y de calidad, bien sea en instituciones educativas cercanas a su vivienda, o mediante la utilización de tecnologías que garanticen dicho acceso, tanto en los entornos rurales como urbanos.
18. Asegurar los medios y condiciones que les garanticen la permanencia en el sistema educativo y el cumplimiento de su ciclo completo de formación.
18. Garantizar un ambiente escolar respetuoso de la dignidad y los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, y desarrollar programas de formación de maestros para la promoción del buen trato.
20. Erradicar del sistema educativo las prácticas pedagógicas discriminatorias o excluyentes y las sanciones que conlleven maltrato, o menoscabo de la dignidad o integridad física, psicológica o moral de los niños, niñas y adolescentes.
21. Atender las necesidades educativas específicas de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad y con capacidades excepcionales.
22. Garantizar la etnoeducación para los niños, niñas y adolescentes indígenas y de otros grupos étnicos, de conformidad con la Constitución Política y la ley que regule la materia.
23. Diseñar y aplicar estrategias para la prevención y el control de la deserción escolar y para evitar la expulsión de los niños, niñas y adolescentes del sistema educativo.
24. Fomentar el deporte, la recreación y las actividades de supervivencia, y facilitar los materiales y útiles necesarios para su práctica regular y continuada.
25. Fomentar la participación en la vida cultural y en las artes, la creatividad y producción artística, científica y tecnológica de niños, niñas y adolescentes y consagrar recursos especiales para esto.

26. Prevenir y atender la violencia sexual, las violencias dentro de la familia y el maltrato infantil, y promover la difusión de los derechos sexuales y reproductivos.
27. Prestar especial atención a los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de riesgo, vulneración o emergencia.
28. Protegerlos contra los desplazamientos arbitrarios que los alejen de su hogar o de su lugar de residencia habitual.
29. Asegurar que no sean expuestos a ninguna forma de explotación económica o a la mendicidad.
30. Protegerlos contra la vinculación y el reclutamiento en grupos armados al margen de la ley.
31. Asegurar alimentos a los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en procesos de protección y restablecimiento de sus derechos, sin perjuicio de las demás personas que deben prestar alimentos en los términos del presente Código, y garantizar mecanismos efectivos de exigibilidad y cumplimiento de las obligaciones alimentarias.
32. Erradicar el trabajo de los niños y niñas menores de quince años, proteger a los adolescentes autorizados para trabajar, y garantizar su acceso y la permanencia en el sistema educativo.
33. Promover estrategias de comunicación educativa para transformar los patrones culturales que toleran el trabajo infantil y resaltar el valor de la educación como proceso fundamental para el desarrollo de la niñez.
34. Asegurar la presencia del niño, niña o adolescente en todas las actuaciones que sean de su interés o que los involucren cualquiera sea su naturaleza, adoptar las medidas necesarias para salvaguardar su integridad física y psicológica y garantizar el cumplimiento de los términos señalados en la ley o en los reglamentos frente al debido proceso. Procurar la presencia en dichas actuaciones de sus padres, de las personas responsables o de su representante legal.
35. Buscar y ubicar a la familia de origen o las personas con quienes conviva a la mayor brevedad posible cuando sean menores de edad no acompañados.
36. Garantizar la asistencia de un traductor o un especialista en comunicación cuando las condiciones de edad, discapacidad o cultura de los niños, niñas o adolescentes lo exijan.

37. Promover el cumplimiento de las responsabilidades asignadas en el presente Código a los medios de comunicación.

Parágrafo. Esta enumeración no es taxativa y en todo caso el Estado deberá garantizar de manera prevalente, el ejercicio de todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes consagrados en la Constitución Política, los instrumentos internacionales de derechos humanos y en este Código".

Por sugerencia de la Procuraduría General de la Nación se extienden las obligaciones del Estado establecidas en los numerales 11 y 13.

7.26 El artículo 44 fue eliminado por unificarse en el artículo 29.

7.27 Se adiciona un artículo nuevo que en la nueva numeración corresponde al artículo 42, y quedará así:

"Artículo 42. Obligación ética fundamental de los establecimientos educativos. Las instituciones de educación primaria y secundaria, públicas y privadas, tendrán la obligación fundamental de garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. Para tal efecto, deberán:

Formar a los niños, niñas y adolescentes en el respeto por los valores fundamentales de la dignidad humana, los derechos humanos, la aceptación, la tolerancia hacia las diferencias entre personas. Para ello deberán inculcar un trato respetuoso y considerado hacia los demás, especialmente hacia quienes presentan discapacidades, especial vulnerabilidad o capacidades sobresalientes.

Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de maltrato, agresión física o psicológica, humillación, discriminación o burla de parte de los demás compañeros y de los profesores.

Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter disuasivo, correctivo y reeducativo para impedir la agresión física o psicológica, los comportamientos de burla, desprecio y humillación hacia niños y adolescentes con dificultades en el aprendizaje, en el lenguaje o hacia niños y adolescentes con capacidades sobresalientes o especiales.

Parágrafo 1. Corresponde a la respectiva Secretaría de Educación Departamental o Distrital de Educación, o la entidad que haga sus veces, realizar una evaluación anual de cada una de las instituciones educativas públicas y privadas, a efectos de otorgar o denegar la certificación de calidad ética a cada una de ellas. La calidad ética se medirá según el cumplimiento de las obligaciones previstas en este artículo y tomará en cuenta las quejas debidamente demostradas que se hayan recibido y los logros obtenidos en esta materia.

Parágrafo 2. En los tres últimos meses de cada año escolar la correspondiente Secretaría de Educación Departamental o Distrital expedirá, renovará o negará para el año siguiente a cada institución escolar la certificación de calidad ética a que se refiere este artículo.

Parágrafo 3. La calidad ética hará parte del Proyecto Educativo de cada centro educativo a que se refiere el artículo 73 de la Ley 115 de 1994, y la certificación ética o negación de la misma será registrada en el Sistema Nacional de Información a que se refieren los artículos 75 y 151 de la Ley 115 de 1994. Las autoridades departamentales publicarán anualmente la lista de las instituciones educativas no certificadas en calidad ética, impondrán las sanciones legales a que haya lugar, y concederán los estímulos previstos en la Ley General de Educación para premiar la calidad ética educativa".

Proponemos insertar el presente artículo que se obligue a los centros educativos a garantizar un trato digno y respetuoso entre los niños y adolescentes que comparten un espacio pedagógico. Proponemos que en el reglamento interno y en el currículo académico de cada escuela o colegio se inserten programas educativos en convivencia respetuosa y no violenta. Igualmente, se obliga a diseñar e implementar medidas preventivas, disuasorias, reeducativas y correctivas para garantizar esa convivencia armónica y evitar las agresiones y humillaciones entre los alumnos. Para "darle dientes" a estas obligaciones proponemos que la Secretaría de Educación de cada departamento realice una evaluación periódica del cumplimiento de las mismas, que denominamos de *calidad ética* del plantel educativo, y que sólo se otorgue la certificación o acreditación educativa a un determinado centro docente si éste demuestra progresos en la materia.

7.28 El artículo 46, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 43 y quedará así:
"Artículo 43. Obligaciones complementarias de las instituciones educativas. Los directivos y docentes de los establecimientos académicos y la comunidad educativa en general pondrán en marcha mecanismos para:

1. Comprobar la inscripción del registro civil de nacimiento.
2. Establecer la detección oportuna y el apoyo y la orientación en casos de malnutrición, maltrato, abandono, abuso sexual, violencia intrafamiliar, y explotación económica y laboral, *incluidas las peores formas de trabajo infantil.*
3. Comprobar la afiliación de los estudiantes a un régimen de salud, controlar el esquema de vacunación y colaborar con los centro de salud para la valoración periódica de los niños y las niñas.
4. Identificar a los estudiantes que trabajan y las condiciones en que lo hacen, y adelantar las acciones necesarias para que se garantice el proceso educativo.
5. Prevenir y controlar el tráfico y consumo de sustancias psicoactivas que producen dependencia.
6. Coordinar los apoyos pedagógicos, terapéuticos y tecnológicos necesarios para el acceso y la integración educativa del niño, niña o adolescente con discapacidad.
7. Reportar a las autoridades competentes, las situaciones de abuso, maltrato o peores formas de trabajo infantil detectadas en niños, niñas y adolescentes.
8. Orientar a la comunidad educativa para la formación en la salud sexual y reproductiva y la vida en pareja".

Por sugerencia de la OIT se establece la obligación de las instituciones educativas de reportar las peores formas de trabajo infantil, así como la de situaciones de abuso o maltrato.

7.29 El artículo 49, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 46 y quedará así:
"Artículo 46. Responsabilidades especiales de los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen una influencia determinante en el desarrollo de

la personalidad de los niños, niñas y adolescentes, en el ejercicio de su autonomía y demás derechos. Por lo anterior deberán: (…)

1. Promover y difundir los derechos y libertades de los niños, niñas y adolescentes, así como la información y los materiales que tengan por finalidad promover su bienestar social, su salud física y mental.
2. Respetar la libertad de expresión y el derecho a la información de los niños, niñas y adolescentes.
3. Elaborar códigos de autorregulación que tengan en cuenta el interés superior del niño y el carácter prevalente de sus derechos.
4. Promover la divulgación de información que permita la localización de los padres o personas responsables de niños, niñas o adolescentes cuando por cualquier causa se encuentren separados de ellos, se hayan extraviado o sean solicitados por las autoridades competentes.
5. Abstenerse de transmitir mensajes discriminatorios contra la infancia y la adolescencia.
6. Abstenerse de difundir información que incite a la violencia, incluidas las violencias de género, que haga apología del delito o que promueva el consumo de sustancias psicoactivas.
7. Abstenerse de trasmitir publicidad de cigarrillos y alcohol en horarios catalogados como franja infantil y familiar.
8. Abstenerse de entrevistar, dar el nombre, divulgar datos que identifiquen o que puedan conducir a la identificación de niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas, autores o testigos de hechos delictivos.

Parágrafo 1. *Sólo tendrán acceso a la información en los programas de atención especializada del sistema nacional de bienestar familiar donde se encuentren niños, niñas o adolescentes con autorización del defensor de familia o quien haga sus veces, o con la del juez de control de garantías, y con la debida reserva de identidad, cuando se trate de adolescentes autores, partícipes o víctimas de delitos.*

Parágrafo 2. *El incumplimiento de las responsabilidades especiales de los medios de comunicación, será sancionado por el respectivo director*

regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El gobierno nacional reglamentará la materia".

Se establece la obligación de los medios de comunicación de abstenerse de trasmitir publicidad de cigarrillos y alcohol en horarios de franja infantil y franja familiar, así mismo se remite a reglamentación del gobierno nacional el tema de sanciones.

7.30 El artículo 50, al ser renumerado, pasa a ser el 47 y quedará así:

"Artículo 47. Espacios para mensajes de garantía y restablecimiento de derechos. Los contratos de concesión de los servicios de radiodifusión, televisión y espacios *electromagnéticos* incluirán la obligación del concesionario de ceder espacios de su programación para transmitir mensajes de garantía y restablecimiento de derechos que para tal fin determine el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dirigidos a los niños, niñas y adolescentes y a sus familias".

Se ajusta el término para hacerlo acorde a la Constitución.

7.31 El artículo 53, que al ser renumerado pasa a ser el artículo 50, quedará así:

"Artículo 50. Obligación del restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El restablecimiento de los derechos de los niños, niñas o adolescentes es responsabilidad del Estado en su conjunto a través de las autoridades públicas, quienes tienen la obligación de informar, oficiar o conducir ante la policía, las defensorías de familia, las comisarías de familia o en su defecto, los inspectores de policía o las personerías municipales o distritales, a todos los niños, niñas o adolescentes que se encuentren en condiciones de riesgo o vulnerabilidad. Cuando esto ocurra, la autoridad competente deberá asegurarse de que el Sistema Nacional de Bienestar Familiar garantice su vinculación a los servicios sociales".

Se elimina la palabra especial como calificativo de riesgo o vulnerabilidad.

7.32 El artículo 54, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 51 y quedará así:

"Artículo 51. Verificación de la garantía de derechos. En todos los casos, la autoridad competente deberá de manera inmediata, verificar el estado de cumplimiento de cada uno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, consagrados en el Título I del Libro I *del presente Código;*

Se deberá verificar:

1. El Estado de salud física y psicológica
2. Estado de nutrición y vacunación
3. La inscripción en el registro civil de nacimiento
4. La ubicación de la familia de origen
5. El estudio del entorno familiar y la identificación tanto de elementos protectores como de riesgo para la vigencia de los derechos
6. La vinculación al sistema de salud y seguridad social
7. La vinculación al sistema educativo

Parágrafo 1. De las anteriores actuaciones se dejará constancia expresa, que servirá de sustento para definir las medidas pertinentes para el restablecimiento de los derechos.

Parágrafo 2. Si la autoridad competente advierte la ocurrencia de un posible delito, deberá denunciarlo ante la autoridad penal".

Se ajusta la redacción del artículo para hacerlo más claro.

7.33 El artículo 55, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 52 y quedará así:
"Artículo 52. Medidas de restablecimiento de derechos. *Son medidas de restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes las que a continuación se señalan. Para el restablecimiento de los derechos establecidos en este código, la autoridad competente tomará alguna o varias de las siguientes medidas:*

1. Amonestación *con asistencia obligatoria a curso pedagógico.*
2. Retiro inmediato del niño, niña o adolescente de la actividad que amenace o vulnere sus derechos o de las actividades ilícitas en que se pueda encontrar y ubicación en un programa de atención especializada para el restablecimiento del derecho vulnerado.
3. Ubicación inmediata en medio familiar.
4. Ubicación en centros de emergencia para los casos en que no procede la ubicación en los hogares de paso.

5. La adopción.
6. Además de las anteriores, se aplicarán las consagradas en otras disposiciones legales, o cualquier otra que garantice la protección integral de los niños, niñas y adolescentes.
7. Promover las acciones policivas administrativas o judiciales a que haya lugar.

Parágrafo 1°. La autoridad competente deberá asegurar que en todas las medidas *provisionales o definitivas de restablecimiento de derechos* que se decreten se garantice el acompañamiento a la familia del niño, niña o adolescente que lo requiera.

Parágrafo 2. En el caso de niños, niñas y adolescentes víctimas de desastres naturales u otras situaciones de emergencia, las autoridades tomarán cualquiera de las medidas establecidas en este artículo y las demás que indiquen las autoridades encargadas de la atención de los desastres para la protección sus derechos".

Se señala que la medida de amonestación deberá decretarse con asistencia obligatoria a curso pedagógico, y se mejora la redacción del artículo para mayor claridad.

7.34 El artículo 56, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 53 y quedará así:

"Artículo 53. Amonestación. La medida de amonestación consiste en la conminación a los padres, a las personas responsables del cuidado del niño, niña o adolescente sobre el cumplimiento de las obligaciones que les corresponden o que la ley les impone.

Comprende la orden perentoria de que cesen las conductas que puedan vulnerar o amenazar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, con la obligación de asistir a un curso pedagógico sobre derechos de la niñez, a cargo de la Defensoría del Pueblo, so pena de multa convertible en arresto".

Se mejora la redacción para mayor claridad.

7.35 Se adiciona un artículo nuevo que al numerarse es el artículo 54:

"Artículo 54. Incumplimiento de la medida. *El incumplimiento de las obligaciones impuestas en la diligencia de amonestación, acarreará a los infractores la sanción*

de multa equivalente al valor de uno (1) a cien (100) salarios mínimos diarios legales, convertibles en arresto a razón de un (1) día por cada salario diario mínimo legal de multa. Esta sanción será impuesta por el Defensor de Familia".

Se establece una sanción al incumplimiento de la medida de amonestación.

7.36 El artículo 59, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 57 y quedará así:

"Artículo 57. Red de Hogares de Paso. *Se entiende por red de hogares de paso el grupo de familias registradas en el programa de protección de los niños que están dispuestas a acogerlos, de manera voluntaria y subsidiada por el Estado, en forma inmediata, para brindarles el cuidado y atención necesarios.*

En todos los distritos y municipios del territorio nacional, los gobernadores y los alcaldes, con la asistencia técnica del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, organizarán las redes de hogares de paso y establecerán el registro, el reglamento, los recursos, los criterios de selección y los controles y mecanismos de seguimiento y vigilancia de las familias, de acuerdo con los principios establecidos en este Código".

Se mejora la redacción para hacer mayor claridad.

7.37 El artículo 62, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 60:

"Artículo 60. La adopción. La adopción es una medida de protección de carácter irrevocable y definitiva, bajo la vigilancia y control del Estado en cabeza del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, *como ente rector de esa materia*. Su finalidad es garantizar el derecho del niño, niña o adolescente a crecer y desarrollarse de manera integral en el seno de una familia que le ofrezca las condiciones adecuadas para el ejercicio de sus derechos, estableciendo una relación paterno y materno filial entre personas que no la tienen por naturaleza. La adopción requiere sentencia judicial".

Se adiciona la expresión "como ente rector de esa materia", para dar mayor claridad al artículo.

7.38 Artículo nuevo, al ser numerado pasa a ser el artículo 61:

"Artículo 61. La autoridad central en materia de adopción. *Es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a través del grupo de Adopciones o quien haga sus veces.*

Solamente podrán desarrollar programas de adopción, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las instituciones debidamente autorizadas por éste".

Se establece que el ICBF es la única autoridad para desarrollar programas de adopción.

7.39 El artículo 63, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 62 y quedará así:

"Artículo 62. Procedencia de la adopción. La adopción procede cuando el Estado ha agotado las posibilidades para lograr el reintegro del niño, niña o adolescente a su familia de origen y se dé una de las siguientes situaciones:

1. Cuando el defensor de familia decrete el estado de adoptabilidad mediante resolución motivada.
2. Cuando se otorgue el consentimiento por quienes ejercen la patria potestad y se dicte resolución motivada de adoptabilidad por parte del defensor de familia, una vez dicho consentimiento se torne irrevocable".

Se elimina el numeral tercero por coincidir en el texto con el primero.

7.40 El artículo 65 se renumera y queda como artículo 64:

"Artículo 64. Acciones de reclamación. Nadie podrá ejercer acción alguna para establecer la filiación consanguínea de sangre del adoptivo, ni reconocerle como hijo.

Sin embargo, el adoptivo podrá promover en cualquier tiempo las acciones de reclamación del estado civil que le corresponda respecto de sus padres biológicos, únicamente para demostrar que quienes pasaban por tales, al momento de la adopción, no lo eran en realidad.

La prosperidad de las pretensiones del adoptivo en este caso, no extinguirá los efectos de la adopción, *salvo declaración judicial que la ordene y previo el consentimiento del adoptivo. El adoptante deberá ser oído en el proceso*".

Se modifica la redacción para aclarar el sentido del artículo, y se establece la salvedad para la declaración judicial en materia de extinción de efectos de la adopción y el consentimiento del adoptivo.

7.41 El artículo 67, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 66 y quedará así:
"Artículo 66. Solidaridad familiar. El Estado reconocerá el cumplimiento del deber de solidaridad que ejerce la familia diferente a la de origen, que asume la protección de manera permanente de un niño, niña o adolescente y le ofrece condiciones adecuadas para el desarrollo armónico e integral de sus derechos. En tal caso no se modifica el parentesco.

Parágrafo. En caso de que dicha familia manifieste su voluntad de adoptarle, se le preferirá frente a cualquier otro postulante".

Se elimina la expresión "En tal caso no se modifica el parentesco" porque no hay lugar a la modificación de parentesco.

7.42 El artículo 68, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 67 y quedará así:
"Artículo 67. Requisitos para adoptar. Podrá adoptar quien, siendo capaz, haya cumplido 25 años de edad, tenga al menos 15 años más que el adoptable, y garantice idoneidad física, mental, moral y social suficiente para suministrar una familia adecuada y estable al niño, niña o adolescente. Estas mismas calidades se exigirán a quienes adopten conjuntamente.

Podrán adoptar:

1. Las personas solteras
2. Los cónyuges conjuntamente
3. Conjuntamente los compañeros permanentes, que demuestren una convivencia ininterrumpida de por lo menos dos (2) años. *Este término se contará a partir de la sentencia de divorcio, si con respecto a quienes conforman la pareja o a uno de ellos, hubiera estado vigente un vínculo matrimonial anterior.*
4. El guardador al pupilo o ex pupilo una vez aprobadas las cuentas de su administración.
5. El cónyuge o compañero permanente, al hijo del cónyuge o compañero, que demuestre una convivencia ininterrumpida de por lo menos dos (2) años.

Esta norma no se aplicará en cuanto a la edad en el caso de adopción por parte del cónyuge o compañero permanente respecto del hijo de su cónyuge

o compañero permanente o de un pariente dentro del tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

Parágrafo 1. La existencia de hijos no es obstáculo para la adopción.

Parágrafo 2. Si el niño, niña o adolescente tuviere bienes, la adopción se hará con las formalidades exigidas para los guardadores".

Se amplían los requisitos para adoptar a fin de dar seguridad a la figura de la adopción.

7.43 El artículo 69, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 68 y quedará así:

"Artículo 68. Adopción de mayores de edad. Podrá adoptarse al mayor de edad, cuando el adoptante hubiera tenido su cuidado personal *por lo menos dos años* antes de que éste cumpliera dieciocho (18) años.

La adopción de mayores de edad procede por el sólo consentimiento entre el adoptante y el adoptivo. Para estos eventos el proceso se adelantará directamente ante el juez de familia".

El cuidado personal debe haberse prodigado, mínimo por dos años, antes de que el adoptado cumpla los dieciocho (18) años.

7.44 El artículo 70, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 69 y quedará así:

"Artículo 69. Adopción de niño, niña o adolescente indígena. Atendiendo las facultades jurisdiccionales de las autoridades indígenas, la adopción de *un niño, niña o adolescente* indígena cuando los adoptantes sean miembros de su propia comunidad procederá de acuerdo con sus usos y costumbres.

Cuando los adoptantes sean personas que no pertenecen a la comunidad del niño, niña o adolescente indígena, la adopción procederá con el concepto favorable de las autoridades de la comunidad de origen y se realizará de acuerdo con lo establecido en el presente Código".

Se cambia el término de menor de dieciocho años por "niño, niña o adolescente".

7.45 El artículo 73, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 72 y quedará así:
"Artículo 72. Programa de adopción. Por programa de adopción se entiende el conjunto de actividades tendientes a restablecer el derecho del niño, niña o adolescente a tener una familia.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las instituciones autorizadas, tendrán un Comité de Adopciones que será el responsable de la selección de las familias adoptantes y de la asignación de los niños, niñas y adolescentes beneficiarios de la adopción".

Se elimina el primer inciso por estar consagrado en el artículo 61 de este proyecto.

7.46 El artículo 75, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 74 y quedará así:
"Artículo 74. Reserva. Todos los documentos y actuaciones administrativas o *judiciales* propios del proceso de adopción, serán reservados por el término de *veinte (20) años* a partir de la ejecutoria de la sentencia judicial. De ellos sólo se podrá expedir copia de la solicitud que los adoptantes hicieren directamente, a través de su apoderado o del defensor de familia o del adoptivo que hubiere llegado a la mayoría de edad *o de la Procuraduría General de la Nación para efectos de las investigaciones a que hubiere lugar.*

Parágrafo 1. El adoptado, no obstante, podrá acudir ante el Tribunal Superior correspondiente, mediante apoderado o asistido por el defensor de familia, según el caso, para solicitar que se ordene el levantamiento de la reserva y el acceso a la información.

Parágrafo 2*. El funcionario que viole la reserva, permita el acceso o expida copia a personas no autorizadas, incurrirá en causal de mala conducta".*

Se recoge del actual Código del Menor la posibilidad de que la Procuraduría General de la Nación pueda solicitar la expedición de copias para efectos de la investigación. Así mismo, se establece una sanción al funcionario que viole la reserva de que trate el presente artículo.

7.47 El artículo 77, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 76 y quedará así:
"Artículo 76. Sistema de información de restablecimiento de derechos. Créase el sistema de información de restablecimiento de derechos a cargo del Instituto

Colombiano de Bienestar Familiar que tiene como finalidad llevar el registro de los niños, niñas y adolescentes cuyos derechos se denuncian como amenazados o vulnerados. Dicho registro incluirá la medida de restablecimiento adoptada, el funcionario que adelantó la actuación, el término de duración del proceso.

Este sistema tendrá un registro especial para el desarrollo del programa de adopción".

Se elimina la expresión "medida adoptada" por estar ya incluida.

7.48 El artículo 79, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 78 y quedará así:
"Artículo 78. Calidades para ser defensor de familia. Para ser defensor de familia se requieren las siguientes calidades:

1. ser abogado titulado y en ejercicio;
2. no estar incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad;
3. acreditar título de posgrado en derecho de familia, derecho civil, derecho administrativo, derecho constitucional, derecho procesal, derechos humanos, o en ciencias sociales siempre y cuando en este último caso el estudio de la familia sea un componente currículum (sic) del programa.

Parágrafo. Los defensores de familia y comisarios de familia deberán vincularse previo proceso de selección".

Se exige título de posgrado para ejercer como defensor de familia.

7.49 El artículo 80, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 79 y quedará así:
"Artículo 79. Funciones del defensor de familia. Corresponde al defensor de familia:

1. Adelantar, aun de oficio, las actuaciones necesarias para garantizar, proteger y restablecer los derechos de los niños, niñas o adolescentes, cuando tenga información sobre su vulneración o amenaza.
2. Adoptar las medidas de restablecimiento establecidas en el presente Código para detener la violación o amenaza de los derechos de los niños, niñas o adolescentes.

3. Emitir los conceptos ordenados por la ley, en las actuaciones judiciales o administrativas.
4. Ejercer las funciones de policía señaladas en este Código.
5. Dictar las medidas de restablecimiento de los derechos para los niños y niñas menores de doce (12) años que cometan delitos.
6. Asumir la asistencia y protección del adolescente responsable de haber infringido la ley penal ante el juez penal para adolescentes.
7. Conceder permiso para salir del país a los niños, niñas y adolescentes, cuando no sea necesaria la intervención del juez.
8. Promover la conciliación extrajudicial en los asuntos relacionados con derechos y obligaciones entre cónyuges, compañeros permanentes, padres e hijos, miembros de la familia o personas responsables del cuidado del niño, niña o adolescente.
9. Aprobar las conciliaciones en relación con la asignación de la custodia y cuidado personal del niño, el establecimiento de las relaciones materno o paterno filiales, la determinación de la cuota alimentaria, la fijación provisional de residencia separada, la suspensión de la vida en común de los cónyuges o compañeros permanentes, la separación de cuerpos y de bienes del matrimonio civil o religioso, las cauciones de comportamiento conyugal, la disolución y liquidación de sociedad conyugal por causa distinta de la muerte del cónyuge y los demás aspectos relacionados con el régimen económico del matrimonio y los derechos sucesorales, sin perjuicio de la competencia atribuida por la ley a los notarios.
10. Citar al presunto padre con miras al reconocimiento voluntario del hijo extramatrimonial y, en caso de producirse, extender el acta respectiva y ordenar la inscripción o corrección del nombre en el registro del estado civil.
11. Promover los procesos o trámites judiciales a que haya lugar en defensa de los derechos de los niños, niñas o adolescentes, e intervenir en los procesos en que se discutan derechos de éstos, sin perjuicio de la actuación del Ministerio Público y de la representación judicial a que haya lugar.
12. Representar a los niños, niñas o adolescentes en las actuaciones judiciales o administrativas, cuando carezcan de representante, o éste se halle ausente o incapacitado, o sea el agente de la amenaza o vulneración de derechos.

13. Fijar cuota provisional de alimentos, siempre que no se logre conciliación.
14. Declarar la situación de adoptabilidad en que se encuentre el niño, niña o adolescente.
15. Autorizar la adopción en los casos previstos en la ley.
16. Formular denuncia penal cuando advierta que el niño, niña o adolescente ha sido víctima de un delito.
17. Ejercer las funciones atribuidas por el artículo 71 de la Ley 906 de 2004.
18. Asesorar y orientar al público en materia de derechos de la infancia, la adolescencia y la familia.

Se elimina el numeral 19 que señalaba: "las demás que expresamente señale la ley".

7.50 El artículo 85, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 84 y quedará así:
"Artículo 84. Atención permanente. Los horarios de atención de las defensorías de familia y comisarías de familia serán permanentes y continuos, a fin de asegurar a los niños, niñas y adolescentes la protección y restablecimiento de sus derechos. El Estado deberá desarrollar todos los mecanismos que se requieran para dar cumplimiento a esta disposición".

Se cambia la expresión horario permanente por atención permanente al ser más técnico.

7.51 El artículo 87, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 86 y quedará así:
"Artículo 86. Funciones de la Policía Nacional para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Sin perjuicio de las funciones atribuidas en otras leyes en relación con los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, la Policía Nacional, y en especial la Policía de Infancia y Adolescencia, tendrán las siguientes funciones:

1. Cumplir y hacer cumplir las normas y decisiones que para la protección de los niños, niñas y adolescentes impartan los organismos del Estado.
2. Diseñar y ejecutar programas y campañas de educación, prevención, garantía y restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en todo el territorio nacional.

3. Adelantar labores de vigilancia y control en los lugares de recreación y deporte y demás espacios públicos en donde habitualmente concurran niños, niñas y adolescentes y a la entrada de los establecimientos educativos de su jurisdicción.
4. Adelantar labores de vigilancia a fin de controlar e impedir el ingreso de los niños, niñas y adolescentes a los lugares de diversión destinados al consumo de bebidas alcohólicas y cigarrillos y hacer cumplir la prohibición de venta de estos productos.
5. Adelantar labores de vigilancia a fin de controlar e impedir el ingreso de niños, niñas y adolescentes a los lugares en donde se ejerza la explotación sexual, se realicen espectáculos no aptos para niños, niñas o adolescentes, a salas de juego de azar y lugares públicos o privados de alto riesgo que ofrezcan peligro para su integridad física y o moral y tomar las medidas a que haya lugar.
6. Adelantar labores de vigilancia a fin de prevenir, controlar e impedir la entrada de menores de catorce (14) años a las salas de juegos electrónicos.
7. Controlar e impedir el ingreso de niños, niñas y adolescentes a salas de cine, teatros o similares donde se presenten espectáculos con clasificación para mayores y el alquiler de películas de video clasificadas para adultos.
8. Adelantar labores de vigilancia a fin de controlar el porte de armas de fuego o corto-punzantes, bebidas embriagantes, pólvora, estupefacientes y material pornográfico, por parte de niños, niñas o adolescentes, así como de elementos que puedan atentar contra su integridad, y proceder a su incautación.
9. Diseñar programas de prevención para los adultos sobre el porte y uso responsable de armas de fuego, de bebidas embriagantes, de pólvora, de juguetes bélicos y de cigarrillos cuando conviven o están acompañados de niños, niñas o adolescentes.
10. Brindar apoyo a los defensores y comisarios de familia, personeros municipales e inspectores de policía en las acciones de policía y protección de los niños, niñas y adolescentes y de su familia, y trasladarlos cuando sea procedente, a los hogares de paso o a los lugares en donde se desarrollen los programas de atención especializada, de acuerdo con la orden emitida por

estas autoridades. Es obligación de los centros de atención especializada recibir a los niños, niñas o adolescentes que sean conducidos por la Policía.

11. Apoyar al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y demás autoridades competentes, en la vigilancia permanente del tránsito de niños, niñas y adolescentes en terminales de transporte terrestre, aéreo y marítimo.
12. Realizar labores de inteligencia para combatir las redes dedicadas a la producción, tráfico o comercialización de sustancias psicoactivas ilegales que produzcan dependencia, a la distribución y comercialización de pornografía infantil a través de Internet, al tráfico o a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, o a cualquier otra actividad que atente contra sus derechos.
13. Adelantar acciones para la detección de niños, niñas y adolescentes que realicen trabajos prohibidos, *cualesquiera de las peores formas de trabajo infantil*, o que estén en situación de explotación y riesgo, y denunciar el hecho ante la autoridad competente.
14. Recibir las quejas y denuncias de la ciudadanía sobre amenazas o vulneraciones de los derechos del niño, niña o adolescente, actuar de manera inmediata para garantizar los derechos amenazados y para prevenir su vulneración cuando sea del caso, o correr traslado a las autoridades competentes.
15. Garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en todos los procedimientos policiales".

Se agrega la expresión "cualesquiera de las peores formas de trabajo infantil" para hacerlo acorde con la Convención 182 de la OIT.

7.52 El artículo 90, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 89 y quedará así:
"Artículo 89. Calidades de la Policía de Infancia y Adolescencia. Además de los requisitos establecidos en la ley y en los reglamentos, el personal de la Policía de Infancia y Adolescencia deberá tener estudios profesionales en áreas relacionadas con las ciencias humanas y sociales, tener formación y capacitación en derechos humanos *y legislación* de la infancia y la adolescencia, en procedimientos de atención y en otras materias que le permitan la protección integral de los niños, niñas y adolescentes.

Salvo circunstancias excepcionales determinadas por la Dirección General de la Policía, los miembros de la Policía de Infancia y Adolescencia que hayan sido seleccionados y capacitados en la especialidad, no podrán ser destinados a actividades diferentes a las señaladas en el presente Código.

Parágrafo. La Policía de Infancia y Adolescencia deberá asesorar a los mandos policiales sobre el comportamiento de la institución, desempeño y cumplimiento en los derechos de los niños, niñas y adolescentes y proponer alternativas de mejoramiento particular y general, de acuerdo a las funciones asignadas en este Código".

Se precisa que la capacitación de los miembros de la Policía de infancia y adolescencia debe ser en legislación de infancia y adolescencia.

7.53 El artículo 94, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 93 y quedará así:
"Artículo 93. Autoridades competentes. Corresponde a los defensores de familia y comisarios de familia procurar y promover la realización y restablecimiento de los derechos reconocidos *en los tratados internacionales, en la Constitución Política y en el presente Código".*

Se hace una precisión para darle mayor alcance al artículo.

7.54 El artículo 96, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 95 y quedará así:
"Artículo 95. Competencia subsidiaria. En los municipios donde no haya defensor de familia, las funciones que este Código le atribuye serán cumplidas por el comisario de familia. En ausencia de este último, las funciones asignadas al defensor y al comisario de familia corresponderán al inspector de policía.

La declaratoria de adoptabilidad del niño, niña o adolescente corresponde exclusivamente al defensor de familia".

Se elimina el término "prevención" porque este sólo se utiliza para significar que son simultáneamente competentes diversas autoridades. En este caso la única autoridad competente en defecto del defensor o comisario de familia es el inspector de policía. El parágrafo se deja como inciso.

7.55 El artículo 98, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 97 y quedará así:
"Artículo 97. Trámite. Cuando se trate de asuntos que puedan conciliarse, el defensor o el comisario de familia citará a las partes, por el medio más expedito,

a audiencia de conciliación que deberá efectuarse dentro de los diez días calendario siguientes al conocimiento de los hechos. Si las partes concilian se levantará acta y en ella se dejará constancia de lo conciliado y de su aprobación.

Cuando haya fracasado el intento de conciliación, o transcurrido el plazo previsto en el inciso anterior sin haberse realizado la audiencia, y cuando se trate de asuntos que no la admitan, el funcionario correrá traslado por cinco días calendario a las demás personas interesadas o implicadas, para que se pronuncien y aporten las pruebas que deseen hacer valer. Vencido el traslado decretará las pruebas que estime necesarias, fijará audiencia para practicarlas con sujeción a las reglas del procedimiento civil y en ella fallará mediante resolución susceptible de reposición. Este recurso deberá interponerse verbalmente en la audiencia o por escrito presentado dentro de los cinco días calendario siguientes, con expresión de las razones de inconformidad.

Resuelto el recurso de reposición o vencido el término para interponerlo, el expediente deberá ser remitido al juez de familia para la revisión del fallo, si dentro de los cinco días calendario siguientes a su ejecutoria alguna de las partes o el Ministerio Público lo solicita con expresión de las razones en que se funda la inconformidad. El juez resolverá de plano.

Parágrafo 1. Cuando lo estime aconsejable para la averiguación de los hechos, el defensor de familia y el comisario de familia podrán ordenar que el equipo técnico interdisciplinario de la Defensoría o de la Comisaría, o alguno de sus integrantes, rinda dictamen pericial.

Parágrafo 2. En todo caso, la actuación administrativa deberá resolverse dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud o a la apertura oficiosa de la investigación, y el recurso de reposición que contra el fallo se presente deberá ser resuelto dentro de los diez días calendario siguientes al vencimiento del término para interponerlo. Vencido el término para fallar o para resolver el recurso de reposición sin haberse emitido la decisión correspondiente, la autoridad administrativa perderá competencia para seguir conociendo del asunto y remitirá inmediatamente el expediente al juez de familia para que, de oficio, adelante *la actuación o el proceso respectivo*. Cuando el juez reciba el expediente deberá informarlo a la Procuraduría General de la Nación para que se promueva la investigación disciplinaria a que haya lugar.

Excepcionalmente y por solicitud razonada del defensor de familia, el director regional podrá ampliar el término para fallar la actuación administrativa hasta por dos meses más, contados a partir del vencimiento de los cuatro meses iniciales, sin que exista en ningún caso nueva prorroga".

En el parágrafo segundo hay que tener en cuenta que el juez no siempre debe adelantar un proceso a partir de la pérdida de competencia de la autoridad administrativa. Por ejemplo, cuando la pérdida de competencia se origina en la demora en resolver el recurso de reposición, la actuación del juez consistirá en examinar el fallo emitido por la autoridad administrativa. Por eso sería mejor decir: "…remitirá inmediatamente el expediente al juez de familia para que, de oficio, adelante la actuación o el proceso respectivo". Propone también modificar el inciso 2 del parágrafo, así: "Por solicitud razonada del defensor de familia, el director regional podrá ampliar el término para fallar la actuación administrativa hasta por dos meses más".

7.56 El artículo 99, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 98 y quedará así:
"Artículo 98. Contenido del fallo. La resolución deberá contener una síntesis de los hechos en que se funda, el examen crítico de las pruebas y los fundamentos jurídicos de la decisión. Cuando contenga una medida de restablecimiento deberá señalarla concretamente, explicar su justificación e indicar su forma de cumplimiento, la periodicidad de su evaluación y los demás aspectos que interesen a la situación del niño, niña o adolescente.

La resolución obliga a los particulares y a las autoridades prestadoras de servicios requeridos para la ejecución *inmediata* de la medida".

Se adiciona el término "inmediata".

7.57 El artículo 100, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 99 y quedará así:
"Artículo 99. Notificaciones. La notificación de la providencia de apertura de investigación se practicará en la forma prevista en el Código de Procedimiento Civil para la notificación personal, pero cuando se ignore el nombre o la dirección de las personas citadas, la notificación se entenderá surtida una vez vencido el término del emplazamiento *y se procederá* a designar curador *ad litem*.

Las providencias que se dicten en el curso de las audiencias y diligencias se consideran notificadas en estrados inmediatamente después de proferidas, *aún cuando* las partes no hayan concurrido".

Se debe señalar que vencido el término de emplazamiento *habrá lugar a designar curador ad litem*, de lo contrario se considera que se está vulnerando el derecho a la defensa.

Por la razón anterior se elimina el último inciso.

7.58 El artículo 107, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 106 y quedará así:

"Artículo 106. Reconocimiento de paternidad. Cuando el padre extramatrimonial reconozca, ante el defensor de familia o *el comisario de familia*, la paternidad de un niño, niña o adolescente, se levantará acta y se ordenará su inscripción en el registro del estado civil".

Se adiciona al comisario de familia para efectos de este artículo.

7.59 El artículo 108, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 107 y quedará así:

"Artículo 107. Permiso para salir del país. La autorización para la salida del país otorgado por el defensor de familia para un niño, niña o adolescente, cuando carezca de representante legal, se desconozca su paradero o no se encuentre en condiciones de otorgarlo se sujetará a las siguientes reglas:

1. Legitimación. La solicitud podrá ser formulada por quien tenga el cuidado personal del niño, niña o adolescente.
2. Requisitos de la solicitud. La solicitud deberá señalar los hechos en que se funda y el tiempo de permanencia del niño, niña o adolescente en el exterior. Con ella deberá acompañarse el registro civil de nacimiento y la prueba de los hechos alegados.
3. Trámite. Presentada la solicitud, el defensor de familia ordenará citar a los padres o al representante legal que no la hayan suscrito.

Si dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación o al emplazamiento ninguno de los citados se opone, el funcionario practicará las pruebas que estime necesarias, si a ello hubiere lugar, y decidirá sobre el permiso solicitado.

En firme la resolución que concede el permiso, el defensor de familia remitirá copia de ella al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la División de Extranjería del Departamento Administrativo de Seguridad. El permiso tendrá vigencia por sesenta hábiles contados a partir de su ejecutoria.

En caso de que oportunamente se presente oposición a la solicitud de permiso, el defensor de familia remitirá el expediente al juez de familia, y por medio de telegrama avisará a los interesados para que comparezcan al juzgado que corresponda por reparto.

Parágrafo. Cuando un niño, niña o adolescente vaya a salir del país con uno de los padres o con una persona distinta a los representantes legales deberá obtener previamente el permiso de aquel con quien no viajare o el de aquellos, debidamente autenticado ante notario o autoridad consular. Dicho permiso deberá contener el lugar de destino, el propósito del viaje y la fecha de salida e ingreso de nuevo al país.

No se requerirá autorización de los padres a quienes se les haya suspendido o privado de la patria potestad".

Se elimina del numeral 1 la expresión "representante legal" por estar incluida en el encabezado del artículo.

7.60 El artículo 111 del proyecto se elimina por estar contenido en el artículo 34.

7.61 El artículo 112, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 110 y quedará así:

"Artículo 110. Autorización de trabajo para los adolescentes. La autorización para que un adolescente pueda trabajar, será expedida por el inspector de trabajo, *a solicitud de sus padres, del respectivo representante legal o del Defensor de Familia*. Se requiere autorización escrita del inspector del trabajo y a falta de este por *comisario de familia* o el alcalde municipal.

La autorización estará sujeta a las siguientes reglas:

1. Deberá tramitarse conjuntamente entre el empleador y el adolescente.
2. La solicitud contendrá los datos generales de identificación del adolescente y del empleador, los términos del contrato de trabajo, la actividad que va a realizar, la jornada laboral y el salario.
3. El funcionario que concedió el permiso deberá efectuar una visita para determinar las condiciones de trabajo y la seguridad para la salud del trabajador.
4. Para obtener la autorización se requiere la presentación del certificado de escolaridad del adolescente y si éste no ha terminado su formación básica, el empleador procederá a inscribirlo y, en todo caso, a facilitarle el tiempo necesario para continuar el proceso educativo o de formación, teniendo en cuenta su orientación vocacional.
5. El empleador debe obtener un certificado de estado de salud del adolescente trabajador.
6. La autorización de trabajo o empleo para adolescentes indígenas será conferida por las autoridades tradicionales de la respectiva comunidad teniendo en cuenta sus usos y costumbres. En su defecto, la autorización será otorgada por el inspector del trabajo o por la primera autoridad del lugar.
7. El empleador debe dar aviso inmediato a la autoridad que confirió la autorización, cuando se inicie y cuando termine la relación laboral.

Parágrafo. La autorización para trabajar podrá ser negada o revocada en caso de que no se den las garantías mínimas de salud, seguridad social y educación del adolescente".

Se precisa las personas que deben solicitar la autorización para trabajar, al igual se incluye al comisario de familia como autoridad competente para otorgar autorización a falta de defensor de familia.

7.62 El artículo 118, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 116 y quedará así:

"Artículo 116. Garantías especiales para el adolescente indígena autorizado para trabajar. En los procesos laborales en que sea demandante un adolescente in-

dígena será obligatoria la intervención de las autoridades de su respectivo pueblo. Igualmente se informará a la Dirección de *Etnias* del Ministerio del Interior o de la dependencia que haga sus veces".

Se precisa la dependencia del Ministerio del Interior competente la cual corresponde a la Dirección de Etnias.

7.63 El artículo 120 del proyecto se elimina debido a que en el artículo 119 numeral 3 está incluida la restitución internacional como proceso de única instancia y en este artículo se regulaba como de doble instancia.

7.64 El artículo 123, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 120 y quedará así:

"Artículo 120. Iniciación del proceso y adopción de medidas urgentes. *Los asuntos* a que se refiere este código se iniciarán a instancia del defensor de familia, del representante legal del niño, niña o adolescente, o de la persona que lo tenga bajo su cuidado. El juez podrá iniciarlos también de oficio.

Al momento de iniciar el proceso el juez deberá adoptar las medidas de urgencia que la situación amerite para proteger los derechos del niño, niña o adolescente".

Se sustituye el término "controversias" por "asuntos", y se modifica el título, que pasa de ser "trámite" a "Iniciación del proceso y adopción de medidas urgentes".

7.65 El artículo 126, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 123 y quedará así:

"Artículo 123. Demanda de adopción y anexos de la demanda. *Es competente para conocer el proceso de adopción en primera instancia el juez de familia del domicilio* de la persona o entidad a cuyo cargo se encuentre el niño, niña o adolescente. La demanda sólo podrá ser formulada por los interesados en ser declarados adoptantes.

A la demanda se acompañarán los siguientes documentos:

1. El consentimiento para la adopción, si fuere el caso.

2. La copia de la declaratoria de adoptabilidad o de la autorización para la adopción, según el caso.
3. El registro civil de nacimiento de los adoptantes y el del niño, niña o adolescente.
4. El registro civil de matrimonio o la prueba de la convivencia extramatrimonial de los adoptantes.
5. La certificación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o de una entidad autorizada para el efecto, sobre la idoneidad física, mental, social y moral de los adoptantes, expedida con antelación no superior a seis meses, y la constancia de la entidad respectiva sobre la integración personal del niño, niña o adolescente con el adoptante o adoptantes.
6. El certificado vigente de antecedentes penales o policivos de los adoptantes.
7. La certificación actualizada sobre la vigencia de la licencia de funcionamiento de la institución donde se encuentre albergado el niño, niña o adolescente, expedida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
8. La aprobación de cuentas del curador, si procede.

Parágrafo. Para los fines de la adopción, la convivencia extramatrimonial podrá probarse por cualquiera de los medios siguientes:

Inscripción del compañero o compañera permanente en los registros de las cajas de compensación familiar o de las instituciones de seguridad o previsión social.

Inscripción de la declaración de convivencia que haga la pareja, en la Notaría del lugar del domicilio de la misma, con antelación no menor de dos años.

El Registro Civil de Nacimiento de los hijos habidos por la pareja.

Cuando se trate de compañeros permanentes residentes en el exterior, la convivencia extramatrimonial se probará de conformidad con la legislación del país de residencia de los solicitantes".

Se hace un ajuste en la redacción del artículo para hacerlo mas claro así mismo se unifica con el artículo 127 por ser procedente.

7.66 El artículo 127 se elimina al unificarse con el renumerado artículo 123.

7.67 El artículo 128, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 124 y quedará así:

"Artículo 124. Requisitos adicionales para adoptantes extranjeros. Cuando los adoptantes sean extranjeros que residan fuera del país, deberán aportar, además, los siguientes documentos:

1. Certificación expedida por la entidad gubernamental o privada oficialmente autorizada, donde conste el compromiso de efectuar el seguimiento del niño, niña o adolescente adoptable hasta su nacionalización en el país de residencia de los adoptantes.
2. Autorización del gobierno del país de residencia de los adoptantes para el ingreso del niño, niña o adolescente adoptable.
3. Concepto favorable a la adopción, emitido por el defensor de familia con base en la entrevista que efectúe con los adoptantes y el examen de la documentación en que la entidad autorizada para efectuar programas de adopción recomienda a los adoptantes.

Parágrafo. Los documentos necesarios para la adopción, serán autenticados conforme a las normas del Código de Procedimiento Civil, y no requieren de ratificación ulterior. Si no estuvieren en español, deberán acompañarse de su traducción, efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores por un traductor oficialmente autorizado".

Se adiciona un parágrafo que regula lo concerniente a la autenticación de documentos necesarios para la adopción.

7.68 Artículo nuevo. El artículo 125 quedara así:

"Artículo 125. Reglas especiales del procedimiento de adopción. En los procesos de adopción se seguirán las siguientes reglas especiales:

1. Admitida la demanda se correrá el traslado al defensor de familia por el término de tres (3) días hábiles. Si el defensor se allanare a ella, el juez dictará sentencia dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su admisión.

El juez podrá señalar un término de máximo diez (10) días, para decretar y practicar las pruebas que considere necesarias. Vencido este término, tomará la decisión correspondiente.

2. Suspensión del Proceso. Se podrá solicitar la suspensión del proceso hasta por un término de tres meses improrrogables, siempre que exista causa justificada. Pueden solicitar la suspensión o reanudación del proceso los adoptantes o el defensor de familia.
3. Terminación anticipada del proceso. Cuando falleciere el solicitante de la adopción antes de proferirse la sentencia el proceso terminará.
   Si la adopción fuere conjunta y uno de los adoptantes falleciere antes de proferirse la sentencia, el proceso continuará con el sobreviviente que manifieste su intención de persistir en ella y aquella surtirá efectos jurídicos frente a los dos adoptantes. Si ambos fallecieren, el proceso terminará.
4. Notificación de la sentencia. Por lo menos uno de los adoptantes deberá concurrir personalmente al juzgado a recibir notificación de la sentencia.
5. Contenido y efectos de la sentencia. La sentencia que decrete la adopción deberá contener los datos necesarios para que su inscripción en el registro civil constituya el acta de nacimiento y reemplace la de origen, la cual se anulará. Una vez en firme se inscribirá en el registro del estado civil y producirá todos los derechos y obligaciones propios de la relación paterno o materno-filial, desde la fecha de presentación de la demanda. En todo caso, en la sentencia deberá omitirse mencionar el nombre de los padres de sangre.
   La sentencia que decrete la adopción podrá ser apelada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial, de conformidad con el trámite establecido en el Código de Procedimiento Civil, en donde intervendrá el Defensor de Familia".

Como se señaló en la exposición de motivos se conservará el trámite previsto en el actual Código del menor.

7.69 Artículo nuevo. El artículo 126 quedará así:

"Artículo 126. Seguridad Social de los adoptantes y adoptivos. El padre y la madre adoptantes de un menor tendrán derecho al disfrute y pago de la licencia de maternidad establecida en el artículo 4º de la Ley, la cual incluirá también la

licencia de paternidad consagrada en la Ley 755 de 2002, incluyendo el pago de la licencia a los padres adoptantes.

Los menores adoptivos tendrán derecho a ser afiliados a la correspondiente EPS desde el momento mismo de su entrega a los padres adoptantes por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o de alguna de las Casas de Adopción debidamente reconocidas por dicho Instituto".

Se establece el derecho a la licencia de maternidad a los padres adoptivos.

7.70 El artículo 129 del proyecto se elimina por estar consagrado en el artículo 125 del proyecto.

7.71 El artículo 135, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 132 y quedará así:

"Artículo 132. Medidas especiales para el cumplimiento de la obligación alimentaria. Sin perjuicio de las garantías de cumplimiento de cualquier clase que convengan las partes o establezcan las leyes, el juez tomará las siguientes medidas durante el proceso o en la sentencia, tendientes a asegurar la oportuna satisfacción de la obligación alimentaria:

1. Cuando el obligado a suministrar alimentos fuere asalariado, el juez podrá ordenar al respectivo pagador o al patrono descontar y consignar a órdenes del juzgado, hasta el cincuenta por ciento (50%) de lo que legalmente compone el salario mensual del demandado, y hasta el mismo porcentaje de sus prestaciones sociales, luego de las deducciones de ley. El incumplimiento de la orden anterior, hace al empleador o al pagador en su caso, responsable solidario de las cantidades no descontadas. Para estos efectos, previo incidente dentro del mismo proceso, en contra de aquél o de éste se extenderá la orden de pago.
2. Cuando no sea posible el embargo del salario y de las prestaciones, pero se demuestre el derecho de dominio sobre bienes muebles o inmuebles, o la titularidad sobre bienes o derechos patrimoniales de cualquier otra naturaleza, en cabeza del demandado, el juez podrá decretar *medidas cautelares sobre* los bienes muebles o de los otros derechos, en cantidad suficiente para

garantizar el pago de la obligación y hasta el cincuenta por ciento (50%) de los frutos que ellos produzcan. Del embargo y secuestro quedarán excluidos los útiles e implementos de trabajo de la persona llamada a cumplir con la obligación alimentaria".

7.72 El artículo 147, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 144 y quedará así:

"Artículo 144. Exclusión de la responsabilidad penal para adolescentes**.** *Sin perjuicio de la responsabilidad civil de los padres o representantes legales, así como la responsabilidad penal consagrada en el numeral 2º del artículo 25 del Código Penal, las personas menores de doce (12) años, no serán juzgadas ni declaradas responsables penalmente, privadas de libertad, bajo denuncia o sindicación de haber cometido una conducta punible. El niño o niña menor de doce (12) años deberá ser* entregado *inmediatamente por la policía de infancia y adolescencia ante la autoridad competente para la verificación de la garantía de sus derechos de acuerdo con lo establecido en el artículo* 51 *de este Código. La policía procederá a su identificación y a la recolección de los datos de la conducta punible.*

Así mismo no serán juzgadas, declaradas penalmente responsables ni sometidas a sanciones penales las personas mayores de doce (12) años y menores de dieciocho (18) años con discapacidad psíquica o mental o con trastorno mental. Estas situaciones deben probarse debidamente en el proceso, siempre y cuando la conducta punible guarde relación con la discapacidad.

Parágrafo. Acción y omisión. La conducta punible puede ser realizada por acción o por omisión. Los padres, representantes legales, tutores y curadores que teniendo el deber jurídico de impedir la producción de un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo llevaren a cabo estando en posibilidad de hacerlo, quedarán sujetos a la pena contemplada en la respectiva norma penal. Para este efecto, serán constitutivas de posición de garante las situaciones consagradas en el artículo 25 del Código Penal".

Se sustituye el término "conducido" por "entregado"; así mismo, se adiciona un parágrafo que establece la posición de garante para los padres y representantes legales conforme a lo establecido en el artículo 25 del Código Penal.

7.73 El artículo 151, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 148 y quedará así:

"Artículo 148. El defensor de familia en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. En todas las actuaciones del proceso y en las etapas de indagación y de juicio, el adolescente deberá estar acompañado por el defensor de familia, quien verificará la garantía de los derechos del adolescente".

Se elimina noticia criminal, pues en el sistema acusatorio resulta imposible que se cumpla.

7.74 El artículo 152, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 149 y quedará así:

"Artículo 149. Audiencias en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Las audiencias que se surtan en el proceso de responsabilidad penal para adolescentes, ante los jueces de control de garantías y ante los jueces de conocimiento, serán cerradas al público. En ellas solamente podrán intervenir los sujetos procesales, *un representante del Instituto Colombiano de Bienestar familiar como vocero de las autoridades responsables de la política criminal en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal* y los organismos de control. Las instituciones académicas o científicas podrán asistir, previa autorización del juez respectivo y con el acuerdo del adolescente".

Se hablaba de "autoridades responsables de la política criminal" en forma general, sin embargo, la Ley 888 de 2004 señala once autoridades encargadas de asesorar al Estado en materia de policía criminal, por esto se hace necesario precisar en este tema indicando que el encargado de asistir a estas audiencias será un representante del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que actuará como vocero de las autoridades públicas responsables de la política criminal. De acuerdo con la ley en mención el director de la institución hace parte del Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria.

7.75 El artículo 154, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 151 y quedará así:

"Artículo 151. Presunción de edad. Cuando exista duda en relación con la edad del adolescente, y mientras la autoridad pericial competente lo define, se presume que es menor de 18 años. *En todo caso se presumirá la edad inferior*".

Lo que se busca es que el operador presuma en todo caso la edad inferior del niño o adolescente, pues también podría presentarse en el caso de los quince años para la privación de la libertad y en los 12 años para ingresar al sistema de responsabilidad penal juvenil

7.76 El artículo 155, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 152 y quedará así:

"Artículo 152. Práctica de testimonios. Los niños, niñas y adolescentes podrán ser citados como testigos en los procesos penales que se adelanten contra los adultos. Sus declaraciones solo las podrá tomar el defensor de familia con cuestionario enviado previamente por el fiscal o el juez. El defensor sólo formulará las preguntas que no sean contrarias a su interés superior.

Excepcionalmente, el juez podrá intervenir en el interrogatorio del niño, la niña o el adolescente para conseguir que éste responda a la pregunta que se le ha formulado o que lo haga de manera clara y precisa. Dicho interrogatorio se llevará a cabo fuera del recinto de la audiencia y en presencia del defensor de familia, siempre respetando sus derechos prevalentes.

El mismo procedimiento se adoptará para las declaraciones y entrevistas que deban ser rendidas ante la Policía Judicial y la Fiscalía durante las etapas de indagación o investigación".

Se sustituye el término "prohibición" por "práctica". El título de este artículo no corresponde a su contenido ya que indica la imposibilidad de la recepción de este medio de prueba cuando la norma lo que hace es regular su práctica.

En atención a la naturaleza y técnica del contrainterrogatorio en el sistema de juzgamiento de tendencia acusatoria, esta fase del interrogatorio cruzado es la que precisamente puede resultar más perjudicial para los niños y niñas, ya que se trata de una intervención que está orientada a lograr la impugnación del testigo. Por ese motivo, con ocasión de los testimonios de los niños y niñas con mayor razón deben hacerse a través del defensor de familia, en alguna de las formas previstas en el artículo 383 del Código de Procedimiento Penal. Por la misma razón, las entrevistas y declaraciones (policía judicial y fiscal) que se requieran de los niños y niñas durante las etapas de indagación o investigación deben ser recibidas a través del defensor de familia.

7.77 El artículo 156, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 153 y quedará así:

"Artículo 153. Derecho al debido proceso y a las garantías procesales. Los adolescentes que cometan delitos tienen derecho al debido proceso penal, a las garantías procesales básicas tales como: la presunción de inocencia, el derecho a ser notificado de las *imputaciones*, el derecho de defensa y de contradicción, el derecho al asesoramiento, el derecho a la presencia de los padres o tutores, el derecho a guardar silencio, el derecho a la confrontación con los testigos e interrogar a éstos, el derecho de apelación ante autoridad superior y, las demás garantías consagradas en la Constitución, la ley y los tratados internacionales.

En todos los casos los derechos de los que goza bajo el presente sistema un adolescente autor o partícipe de una conducta punible son, como mínimo, los previstos por la Ley 906 de 2004".

Es más apropiado hablar del derecho de los niños y las niñas a ser notificados de las imputaciones y no de las acusaciones, concepto este que en el sistema acusatorio está más ligado con la búsqueda de una sentencia de culpabilidad penal.

7.78. El artículo 158, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 155 y quedará así:

"Artículo 155. Reserva de las diligencias. Manteniendo la debida reserva de identidad, las actuaciones procesales adelantadas en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes sólo podrán ser conocidas por las partes, sus apoderados, los organismos de control y *por un representante del Instituto Colombiano de Bienestar familiar como vocero de las autoridades responsables de la política criminal* en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal.

En la audiencia cerrada, previa información y aceptación por parte del adolescente, la comunidad científica, académica y las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos debidamente acreditados y expertos en infancia y adolescencia, podrán observar las actuaciones procesales con la autorización del juez de conocimiento *o de control de garantías según el caso,* quien verificará que dicha observancia beneficie el interés superior del adolescente.

Queda prohibido revelar la identidad o imagen que permita la identificación de las personas procesadas".

La misma apreciación que se hace acerca del artículo 152 del proyecto debe tenerse en cuenta para esta norma, por eso es necesario hacer la precisión en cuanto a las autoridades públicas responsables de la política criminal.

Así mismo, en el segundo inciso de este artículo se habla de que la autorización para asistir a las audiencias cerradas la otorga el juez de conocimiento; sin embargo, debe tenerse en cuenta que también existen audiencias preliminares donde el encargado de dar la autorización sería el juez de control de garantías, por lo tanto debe incluirse este funcionario en la norma.

7.79 El artículo 159, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 156 y quedará así:

"Artículo 156. Derecho de defensa. El adolescente durante toda la actuación procesal y aún antes de la imputación deberá tener un apoderado que adelante su defensa técnica. Ninguna actuación procesal tendrá validez si no está presente su apoderado. El adolescente podrá designar apoderado, quien tendrá derecho a revisar las diligencias y a actuar desde el momento de la noticia criminal.

En caso de no contar con apoderado, el mismo adolescente *el Ministerio Público* o la policía judicial solicitarán la asignación de un defensor del Sistema de Defensoría Pública de la Defensoría del Pueblo".

Se permite que el Ministerio Público pueda solicitar la asignación de un defensor público para el adolescente.

7.80 El artículo 161, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 158 y quedará así:

"Artículo 158. Adolescentes indígenas. Los adolescentes pertenecientes a las comunidades indígenas serán juzgados según las normas y procedimientos de sus propias comunidades conforme en la legislación especial indígena consagrada en el artículo 246 de la Constitución Política, los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia y la ley.

Parágrafo. Los niños, niñas y adolescentes que se encuentren fuera del ámbito de su comunidad y que cometan delitos, serán sometidos al sistema de

responsabilidad penal para adolescentes, si no quieren retornar a sus comunidades de origen".

Se mejora la redacción del parágrafo para hacerlo más claro y amplio.

7.81 El artículo 162, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 159 y quedará así:

"Artículo 159. Prohibiciones especiales. En los procesos por responsabilidad penal para adolescentes no proceden el juzgamiento a través de jurados de conciencia, la sentencia anticipada, *el allanamiento a los hechos o a los cargos y los acuerdos* entre la Fiscalía y la defensa".

Se adiciona la figura del allanamiento a los hechos.

7.82 El artículo 164, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 161 y quedará así:

"Artículo 161. Prohibición de antecedentes. *Las sentencias proferidas en procesos por responsabilidad penal para adolescentes no tendrán el carácter de antecedente judicial.* Estos registros son reservados y podrán ser utilizados por las autoridades judiciales competentes para definir las medidas aplicables cuando se trate de establecer la naturaleza y gravedad de las *conductas* y la proporcionalidad e idoneidad de la medida.

Las entidades competentes deberán hacer compatibles los sistemas de información para llevar el registro de los adolescentes que han cometido delitos, con el objeto de definir los lineamientos de la política criminal para adolescentes y jóvenes".

Se ajusta la redacción para hacerlo más claro; a su vez, se sustituye la expresión "hecho punible" por "conducta punible" para hacerlo acorde con la Ley 599 de 2000.

7.83 El artículo 165, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 162 y quedará así:

"Artículo 162. Concepto de la privación de la libertad. Se entiende por privación de la libertad toda forma de internamiento, en un establecimiento público

o privado, *ordenada por autoridad judicial*, del que no se permite *al adolescente* salir por su propia voluntad".

Se cambia la redacción del artículo para hacerlo más claro.

7.84 El artículo 166 pasa a ser el 163 y quedará así:

"Artículo 163. Excepcionalidad de la privación de libertad. Para los efectos de la responsabilidad penal para adolescentes, la privación de la libertad sólo procede para las personas que hayan cumplido quince (15) años y sean menores de dieciocho (18) años. La privación de la libertad sólo procederá como medida pedagógica en casos de delitos graves, y de especial gravedad y en caso de segunda reincidencia por la comisión de delitos de gravedad intermedia.

Los adolescentes desvinculados de grupos armados al margen de la ley no tendrán medida de privación de libertad".

Se mejora la redacción del último inciso en relación con el proyecto para hacerlo más preciso.

7.85 El artículo 170, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 167 y quedará así:

"Artículo 167. Delitos graves. Para los efectos de la responsabilidad penal para adolescentes son delitos graves los delitos contra el patrimonio económico como el hurto calificado y *aquellos* que tienen contemplada en el Código Penal una pena de prisión mínima equivalente setenta y dos (72) meses y hasta ciento setenta y nueve (179) meses".

Se suprime la expresión "cuando se ejerza violencia sobre las personas" dado que esta circunstancia ya se encuentra contemplada cuando el artículo habla de hurto calificado. Así mismo se adiciona la palabra "aquellos" para mayor claridad.

7.86 El artículo 171, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 168 y quedará así:

"Artículo 168. Delitos de gravedad intermedia. Para efectos de la responsabilidad penal para adolescentes, son delitos de gravedad intermedia aquellos que tienen definida en el Código Penal una pena superior a cuarenta y dos (42) meses y hasta noventa y cinco (95) meses".

Se ajusta la redacción para dejar el rango de sanciones en meses.

7.87 El artículo 172, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 169 y quedará así:

"Artículo 169. Delitos leves. Son delitos leves para efectos de la responsabilidad penal para adolescentes aquellos cuya pena mínima en el Código Penal sea inferior a *los cuarenta y dos (42) meses de prisión* y los que requieren querella de parte".

Se ajusta la redacción para dejar el rango de sanciones en meses.

7.87 El artículo 173, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 170 y quedará así:

"Artículo 170. Integración. Forman parte del sistema de responsabilidad penal para adolescentes:

1. Los fiscales delegados ante los jueces penales para adolescentes, quienes se ocuparán de la dirección de las investigaciones en las cuales se encuentren presuntamente comprometidos adolescentes, como autores o partícipes de conductas delictivas.
2. Los jueces penales para adolescentes, promiscuos de familia y los municipales quienes adelantarán las actuaciones y funciones judiciales que les asigna la ley.
3. Las Salas Penales y de Familia de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial que integrarán la Sala de Asuntos Penales para adolescentes en los mismos tribunales, ante quienes se surtirá la segunda instancia.
4. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, ante la cual se tramitará el recurso extraordinario de casación.
5. La Policía Judicial y el Cuerpo Técnico Especializado adscritos a la Fiscalía delegada ante los jueces penales para adolescentes juveniles y promiscuos de familia.
6. La Policía Nacional con su personal especializado quien deberá apoyar las acciones de las autoridades judiciales y entidades del sistema.
7. Los defensores públicos del Sistema Nacional de Defensoría Pública de la Defensoría del Pueblo, quienes deben asumir la defensa técnica del proceso, cuando el niño, niña o adolescente carezca de apoderado.

8. Las Defensorías de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y las Comisarías de Familia, o los Inspectores de Policía, cuando deban tomar las medidas para la verificación de la garantía de derechos, y las medidas para su restablecimiento.
9. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar quien responderá por los lineamientos técnicos para la ejecución de las medidas pedagógicas dispuestas en este Libro.
10. Las demás Instituciones que formen parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.

Parágrafo primero. Cada responsable de las entidades que integran el Sistema de Responsabilidad Penal para adolescentes deberá garantizar la provisión o asignación de los cargos que se requieran para su funcionamiento y la especialización del personal correspondiente.

Parágrafo segundo. La designación de quienes conforman el sistema de responsabilidad penal para adolescentes deberá recaer en personas que demuestren conocimiento calificado de derecho penal, y de infancia y familia, y de las normas internas e internacionales relativas a derechos humanos".

Se elimina a los jueces penales municipales y promiscuos de familia del numeral 1 dado que la dirección de las investigaciones no corresponde a ellos y resultaría incompatible con el artículo 250 de la Constitución Política que le asigna la función de la dirección de las investigaciones al fiscal y sus delegados.

7.88 El artículo 174, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 171 y quedará así:

"Artículo 171. Los Juzgados Penales para adolescentes. Créanse en todo el territorio nacional dentro de la jurisdicción penal ordinaria, los juzgados penales para adolescentes.

Parágrafo. El Congreso de la República, el gobierno nacional y el Consejo Superior de la Judicatura tomarán las medidas necesarias para garantizar la creación y el funcionamiento de los juzgados penales para adolescentes en todo el país.

Los actuales Juzgados de Menores pasarán a convertirse en Juzgados Penales para Adolescentes".

Se aclara que los actuales Juzgados de Menores pasarán a convertirse en Juzgados Penales para Adolescentes.

7.89 Artículo nuevo. El artículo 174 quedará así:

"Artículo 174. Diferenciación funcional de los jueces. Se garantizará que al funcionario que haya ejercido la función de juez de control de garantías en un determinado proceso de responsabilidad penal juvenil respecto a determinado delito, no se le asigne el juzgamiento respecto a ese mismo delito.

Para la eficacia de esta garantía, el Consejo Superior de la Judicatura y, por delegación, los Consejos Seccionales de la Judicatura, adoptarán las medidas generales y particulares que aseguren una adecuada distribución de competencias entre los jueces penales para adolescentes, jueces promiscuos de familia y jueces municipales".

Se establece esta garantía a favor de los adolescentes con el fin de evitar el pre-juzgamiento por parte del juez de control de garantías.

7.90 El artículo 183, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 181, y quedará así:

"Artículo 181. Del principio de oportunidad, la conciliación y la reparación integral de los daños. Las autoridades judiciales deberán facilitar en todo momento el logro de acuerdos que permitan la conciliación y la reparación de los daños y la aplicación del principio de oportunidad. Éstas se realizarán con el consentimiento de ambas partes y se llevarán a cabo con una visión pedagógica y formativa mediante la cual el niño, niña o adolescente pueda tomar conciencia de las consecuencias de su actuación delictiva y de las responsabilidades que de ella se derivan. Así mismo, el conciliador buscará la reconciliación con la víctima.

En los delitos leves y de gravedad intermedia la conciliación y aplicación del principio de oportunidad terminan el proceso. En los delitos graves y de especial gravedad sólo podrá utilizarse la conciliación para determinar la indemnización de perjuicios, para ser considerada positivamente en la definición de la medida aplicable y para buscar la reconciliación con la víctima.

Cuando de la aplicación del principio de oportunidad se pudieren derivar riesgos para la vida y la integridad física del adolescente, el juez competente

deberá ordenar otras medidas de protección, las cuales incluirán, entre otras, ayudas económicas para el cambio de residencia de la familia. El gobierno gestionará la apropiación de las partidas necesarias para cubrir este rubro".

Se adiciona un inciso que establece medidas de protección para la integridad física del adolescente, que incluyen ayudas para el cambio de residencia si es necesario.

7.91 El artículo 184, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 182 y quedará así:

"Artículo 182. El principio de oportunidad en los procesos seguidos a los adolescentes como partícipes de los delitos cometidos por grupos armados al margen de la ley. La Fiscalía General de la Nación podrá renunciar a la persecución penal, en los casos en que los adolescentes, en cualquier condición hayan hecho parte de grupos armados al margen de la ley, o hayan participado directa o indirectamente en las hostilidades o en acciones armadas *o en los delitos cometidos por grupos armados al margen de la ley* cuando:

1. Se establezca que adolescente tuvo como fundamento de su decisión las condiciones sociales, económicas y culturales de su medio para haber estimado como de mayor valor la pertenencia a un grupo armado al margen de la ley.
2. Se establezca que la situación de marginamiento social, económico y cultural no le permitían al adolescente contar con otras alternativas de desarrollo de su personalidad.
3. Se establezca que el adolescente no estaba en capacidad de orientar sus esfuerzos a conocer otra forma de participación social.
4. Por fuerza, amenaza, coacción y costreñimiento.

Los adolescentes que se desvinculen de grupos armados al margen de la ley, tendrán que ser remitidos al programa de atención especializada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para niños, niñas y adolescentes desvinculados de grupos armados irregulares.

Parágrafo. No se aplicará el principio de oportunidad cuando se trate de hechos que puedan significar violaciones graves al derecho internacional humanitario, crímenes de lesa humanidad o genocidio de acuerdo con el Estatuto de Roma".

El principio de oportunidad en los procesos seguidos a los adolescentes como partícipes de los delitos cometidos por grupos armados al margen de la ley.

Si bien el principio de oportunidad es un mecanismo idóneo para tratar estos casos, la norma debe hacer una salvedad similar a la contendida en el parágrafo tercero del artículo 324 de la Ley 906 en lo que tiene que ver con las graves violaciones al derecho internacional humanitario, crímenes de lesa humanidad o genocidio, esto en virtud de que los niños, niñas y adolescentes pueden ser utilizados como perpetradores de esos delitos, por esto se propone agregar un inciso final en el artículo 184 del proyecto en el cual se impida aplicar el principio de oportunidad en estos eventos dejando en todo caso la pena disminuida en los términos del proyecto de ley. No se puede obviar la responsabilidad de un adolescente cuando confluyen todos los requisitos para hacer el reproche penal, de lo contrario se estaría dando vía libre a la impunidad en estos casos si a pesar de ser utilizados como autores materiales para la comisión de delitos graves son conscientes de ello y tienen la voluntad de realizarlos.

Así mismo, se agrega un cuarto escenario donde el funcionario judicial puede aplicar el principio de oportunidad tal como es el caso en donde se obra por amenaza o coacción.

7.92 El artículo 186, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 183 y quedará así:

"Artículo 183. Prohibición especial. *Queda prohibida la entrevista y la utilización en actividades de inteligencia de los niños, niñas y adolescentes desvinculados de los grupos armados al margen de la ley por parte de autoridades de la fuerza pública. El incumplimiento de esta disposición será sancionado con la destitución del cargo, sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar*".

Se mejora la redacción para dar mayor claridad y precisión.

7.93 El artículo 187, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 184 y quedará así:

"Artículo 184. Prescripción de la acción. La acción penal por los delitos graves y de especial gravedad prescribe en cinco años; en los delitos de gravedad intermedia en *tres años* y delitos leves en seis meses.

En las conductas de ejecución instantánea la prescripción empezará a contarse desde el momento de la comisión del hecho; en las de ejecución permanente o en la tentativa, el término comenzará a correr a partir de la realización del último acto, y en las omisivas empezará a correr cuando haya cesado el deber de actuar".

Se amplia el término de prescripción para los delitos de gravedad intermedia a tres años, pues consideramos corto el término de seis meses para este tipo de delitos.

7.94 El artículo 188, al ser renumerado pasa a ser el artículo 185 y quedará así:

"Artículo 186. Medidas. Son medidas pedagógicas aplicables a los adolescentes a quienes se les haya comprobado su participación en el acto delictivo y se haya declarado su responsabilidad:

1. Amonestación
2. Amonestación extensiva a los padres, representantes legales o personas con quienes conviva el adolescente
3. Reglas de conducta
4. Prestación de servicios a la comunidad
5. Libertad asistida
6. Medio semicerrado
7. Privación de libertad

Parágrafo 1. Para la aplicación de todas las medidas la autoridad judicial deberá asegurar que el adolescente esté vinculado a un centro educativo. Los defensores de familia deberán controlar el cumplimiento de esta obligación y verificar la garantía de sus derechos.

Parágrafo 2. El juez que dictó la medida será el competente para controlar su ejecución".

Con relación a este artículo y el 190 del proyecto consideramos que no tiene sentido que el cumplimiento de la medida que tiene unas finalidades específicas lo haga un juez no especializado, que no controla ni sus propias medidas. Si

no es posible la creación de un juez especializado para el control de la medida es más conveniente entregarlo al que la dictó, razón por la cual asignamos la función de control de ejecución de las medidas al mismo juez que la dictó como sucede en la actualidad con el fin de no generar colapso entre los juzgados penales municipales.

7.95. El artículo 193, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 189 y quedará así:

"Artículo 189. Internamiento preventivo. En cualquier momento del proceso y antes de la audiencia de juicio, el juez de control de garantías, como último recurso, podrá decretar la detención preventiva cuando exista:

1. Riesgo razonable de que el adolescente evadirá el proceso.
2. Temor fundado de destrucción u obstaculización de pruebas.
3. Peligro grave para la víctima, el denunciante, el testigo *o la comunidad.*

Parágrafo primero. El internamiento preventivo no procederá sino en los casos en que, conforme a la gravedad del delito sería admisible la privación de libertad como medida. Se ejecutará en centros de internamiento especializados donde los adolescentes procesados deben estar separados de los ya sentenciados.

Parágrafo segundo. El internamiento preventivo no podrá exceder de cuatro meses, prorrogables con motivación, por un mes más. Si cumplido este término el juicio no ha concluido por sentencia condenatoria, el juez que conozca del mismo la hará cesar, sustituyéndola por otra medida".

Es innegable que uno de los criterios que se tienen en cuenta para la imposición de medida de aseguramiento es la eventual puesta en peligro de la comunidad tal como lo señala el artículo 308 de la Ley 906 de 2004 y desarrollado por el artículo 310 de la misma ley, por esto se hace necesario referirse además del peligro grave para la víctima, el denunciante y el testigo, hablar también de peligro grave para la comunidad, puesto que es evidente que un menor de edad puede en un momento dado amenazar la convivencia en el grupo humano en que se desenvuelve llevando al funcionario encargado de imponer la medida a que junto con los otros requisitos que prevé el proyecto y los criterios

que contiene el Código de Procedimiento Penal determine si como medida extrema se hace ineludible la imposición del internamiento preventivo.

El parágrafo 2 del artículo 193 habla del tiempo del internamiento preventivo y lo establece en un mes prorrogable previa motivación de la decisión por un mes más. Sin embargo, el término señalado no otorga el tiempo que se requiere para adelantar las diligencias necesarias a fin de esclarecer los hechos constitutivos de la infracción, por esto se plantea la posibilidad de aumentar de un mes a cuatro meses manteniendo la prórroga motivada por un mes.

7.96 El artículo 202, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 198 y quedará así:

"Artículo 198. Imposición de la medida. Las medidas o medida definitiva se impondrán en la audiencia de juicio oral que debe ser continua y privada, so pena de nulidad. Si la audiencia de juicio no puede realizarse en una sola jornada, continuará durante todas las audiencias consecutivas que fueren necesarias hasta su conclusión. Se podrá suspender por un plazo máximo de 10 días hábiles y la interrupción por más tiempo conlleva la nueva realización del debate desde su inicio".

Se elimina el término "hasta" por ser innecesario en la redacción.

7.97. Artículo nuevo. El artículo 199 quedará así:

"Artículo 199. Las contravenciones de policía cometidas por adolescentes serán sancionadas de la siguiente manera:

1. Será competente para conocer el proceso y sancionar el comisario de familia del lugar donde se cometió la contravención o en su defecto el alcalde municipal.
2. Cuando la contravención dé lugar a sanciones pecuniarias, éstas serán impuestas a quien tenga la patria potestad o la custodia y éste será responsable de su pago, el cual podrá hacerse efectivo por jurisdicción coactiva.
3. Las contravenciones de tránsito cometidas por adolescentes entre los 15 y los 18 años serán sancionadas por los comisarios familia o en su defecto por el alcalde municipal.

4. Para la sanción de contravenciones cometidas por adolescentes se seguirán los mismos procedimientos establecidos para los mayores de edad, siempre que sean compatibles con los principios de este Código y especialmente con los contemplados en el presente Título".

Se introduce este nuevo artículo en consonancia con lo que se expuso anteriormente.

7.98 El artículo 203, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 199 y quedará así:

"Artículo 199. Detención en flagrancia. El adolescente sorprendido en flagrancia será conducido de inmediato ante el fiscal delegado para la autoridad judicial, quien dentro de las 36 horas siguientes lo presentará al juez de control de garantías y le expondrá cómo se produjo la aprehensión. Por solicitud del fiscal, el juez resolverá en la misma audiencia, si convoca directamente a juicio oral dentro de los 10 días hábiles siguientes. El fiscal presentará la acusación directamente en la audiencia de juicio oral y se seguirá en lo demás, el procedimiento penal vigente, con las reglas especiales del proceso para adolescentes establecidas en el presente libro".

Para hacerlo más coherente con la filosofía del sistema acusatorio, puede ser conveniente ajustar la redacción del artículo de la manera en que se propone, debido a la naturaleza de tercero imparcial del juez, que generalmente actúa y decide por petición de parte.

7.99 El artículo 209, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 206 y quedará así:

"Artículo 206. Funciones del representante legal de la víctima. Los padres o el representante legal de la persona menor de edad, están facultados para intervenir en los procesos penales en que se *investigue* o juzgue un adulto por un delito en el cual sea víctima un niño, niña o adolescente como representante de éste, en los términos establecidos en el Código de Procedimiento Penal y para iniciar el incidente de reparación integral de perjuicios".

Las funciones (facultades) del representante legal de una víctima menor de edad, con ocasión del delito de un adulto, deben extenderse a la fase de investigación a cargo de la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 11 y 137 de la Ley 906 de 2004, y no limitarse sólo al juzgamiento, como lo contempla el artículo 209 del Proyecto.

7.100 El artículo 210, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 207 y quedará así:

"Artículo 207. Incidente de reparación integral en los procesos en que los niños, niñas y adolescentes son víctimas. En los procesos penales en que se juzgue un adulto por un delito en el cual sea víctima un niño, niña o adolescente, el incidente de reparación integral de perjuicios se iniciará de oficio si los padres, representantes legales o el defensor de familia no lo hubieren solicitado dentro de los *treinta días* siguientes a la ejecutoria de la sentencia".

Se hace concordar el término de dos meses que tenía previsto el proyecto, con el de 30 días para la caducidad de la solicitud de reparación integral dispuesta en el artículo 106 de la Ley 906 de 2004.

7.101 El artículo 212 del Proyecto se elimina al encontrarse consagrado de manera más clara en el artículo 74 de la Ley 906 de 2004.

7.102 El artículo 213, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 209 y quedará así:

"Artículo 209. Beneficios y subrogados penales. Cuando se trate de los delitos de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa cometidos sobre niños, niñas y adolescentes, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales cometidos contra menores de edad, o secuestro de menores de edad, se aplicarán las siguientes reglas:

1. Si hubiere mérito para proferir medida de aseguramiento en los términos del artículo 306 del Código de Procedimiento Penal, ésta consistirá siempre en detención en establecimiento de reclusión. No serán aplicables en estos delitos las medidas no privativas de la libertad previstas en los artículos 307, literal B, y 315 del Código de Procedimiento Penal.

2. No se otorgará el beneficio de sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario por la de detención en el lugar de residencia, previsto en los numerales 1 y 2 del artículo 314 del Código de Procedimiento Penal.
3. No procederá la extinción de la acción penal en aplicación del principio de oportunidad previsto en el artículo 324, numeral 8, del Código de Procedimiento Penal para los casos de reparación integral de los perjuicios.
4. No procederá el subrogado penal de suspensión condicional de la ejecución de la pena, contemplado en el artículo 63 del Código Penal.
5. No procederá el subrogado penal de libertad condicional, previsto en el artículo 64 del Código Penal.
6. En ningún caso el juez de ejecución de penas concederá el beneficio de sustitución de la ejecución de la pena, previsto en el artículo 461 del Código de Procedimiento Penal.
7. No procederán las rebajas de pena con base en los "preacuerdos y negociaciones entre la fiscalía y el imputado o acusado", previstos en los artículos 348 a 351 del Código de Procedimiento Penal.
8. Tampoco procederá ningún otro beneficio o subrogado judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que ésta sea efectiva.

Parágrafo transitorio. En donde permanezca transitoriamente vigente la Ley 600 de 2000, cuando se trate de delitos a los que se refiere el inciso primero de este artículo no se concederán los beneficios de libertad provisional garantizada por caución, extinción de la acción penal por pago integral de perjuicios, suspensión de la medida de aseguramiento por ser mayor de sesenta y cinco (65) años, rebajas de pena por sentencia anticipada y confesión; ni se concederán los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad de condena de ejecución condicional o suspensión condicional de ejecución de pena, y libertad condicional. Tampoco procederá respecto de los mencionados delitos la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar a ningún otro beneficio subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal siempre que esta sea efectiva".

Se desarrolla de manera más amplia el objetivo del proyecto en este artículo relacionado con la eliminación de los beneficios y subrogados penales para los delitos en que sean víctimas niños, niñas y adolescentes.

7.103 El artículo 214 del proyecto relativo al aumento de penas se elimina dado que las penas ya fueron aumentadas mediante la Ley 890 de 2004.

7.104 El artículo 218, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 213 y quedará así:

"Artículo 213. Responsables de las políticas públicas de infancia y adolescencia. Son responsables del diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas de infancia y adolescencia en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal, el presidente de la república, los gobernadores y los alcaldes. Su incumplimiento será sancionado disciplinariamente como causal de mala conducta. La responsabilidad es indelegable y conlleva la rendición pública de cuentas.

En el nivel territorial se deberá contar con una política pública diferencial de infancia y adolescencia que propicie la articulación entre los Concejos Municipales, Asambleas y Congreso Nacional, para garantizar la definición y asignación de los recursos para la ejecución de la política pública propuesta.

El Departamento Nacional de Planeación con la asesoría técnica del ICBF deberá diseñar los lineamientos técnicos mínimos que deberán contener los planes de desarrollo, en materia de infancia y adolescencia teniendo en cuenta el ciclo de vida, el enfoque de garantía y restablecimiento de derechos.

El gobernador y el alcalde, dentro de los primeros cuatro (4) meses de su mandato, realizarán el diagnóstico de la situación de la niñez y la adolescencia en su departamento y municipio, con el fin de establecer las problemáticas prioritarias que deberán atender en su Plan de Desarrollo, así como determinar las estrategias a corto, mediano y largo plazo que se implementarán para ello.

Las Asambleas y Concejos para aprobar el plan de desarrollo e inversión deberán verificar que éste se corresponda con los resultados del diagnóstico realizado. Para esto requerirán al gobernador y al alcalde, para que lo den a conocer antes del debate de aprobación del Plan de Desarrollo".

Este artículo se desarrolla por sugerencia de la Procuraduría General de la Nación con el fin de dar mayor alcance y desarrollo al tema de políticas públicas dentro del Código, y se elimina el parágrafo.

7.105 El artículo 219 del proyecto, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 214 y quedará así:

"Artículo 214. Sistema nacional de bienestar familiar. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como coordinador del sistema nacional de bienestar familiar, tiene a su cargo la articulación de las entidades responsables de la garantía de los derechos, la prevención de su vulneración, la protección y el restablecimiento de los mismos, en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal.

El Consejo Nacional de Política Social atendiendo los lineamientos y recomendaciones del Departamento Nacional de Planeación es el ente responsable de diseñar la Política Pública, movilizar y apropiar los recursos presupuestales destinados a garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes y asegurar su protección y restablecimiento en todo el territorio nacional".

Por sugerencia de la Procuraduría General de la Nación se adiciona un nuevo inciso que busca una articulación de funciones entre el Consejo Nacional de Política Social y el Departamento Nacional de Planeación para el desarrollo y diseño de la política pública de infancia.

7.106 El artículo 220, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 215 y quedará así:

"Artículo 215. Consejo Nacional de Política Social. El Consejo Nacional de Política Social es el ente responsable de diseñar la política pública, movilizar y apropiar los recursos presupuestales y dictar las líneas de acción para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes y asegurar su protección y restablecimiento en todo el territorio nacional.

El Consejo estará integrado por:

1. El presidente de la república o el vicepresidente, quien lo presidirá.
2. Los ministros de la Protección Social, Interior y Justicia, *Hacienda y Crédito Público,* Educación, Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Cultura, Comunicaciones, o los viceministros.

3. El director del Departamento Nacional de Planeación o el subdirector.
4. El director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien hará la secretaría técnica.
5. Un gobernador en representación de los gobernadores
6. Un alcalde en representación de los alcaldes.

Parágrafo. El Consejo deberá sesionar dos veces al año".

Por sugerencia de la Procuraduría se incluye al ministro de Hacienda y Crédito Público.

7.107 El artículo 231, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 226 y quedará así:

"Artículo 226. Vigencia. El presente Código entrará en vigencia *seis (6) meses* después de su promulgación".

Se amplía el término de entrada en vigencia de la ley de tres a seis meses con el fin de brindar un mayor plazo a varias entidades que cumplirán un papel importante en el desarrollo y aplicación del Código como lo es la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

8. Conclusión

Como conclusión de lo expuesto, los suscritos ponentes ponemos a consideración de la Comisión Primera Constitucional de la Cámara de Representantes la siguiente,

9. Proposición

Aprobar en primer debate los proyectos de ley acumulados: "Proyecto de Ley Estatutaria" 085-2005 Cámara, "por la cual se expide la Ley de la Infancia y la Adolescencia"; y Proyecto de Ley 85-2005-Cámara, Proyecto de Ley 096 de 2005-Cámara, "Por la cual se expide el Código de la Niñez y la Juventud, que subroga el Decreto 2737 de 1989, Código del Menor", de acuerdo con el pliego de modificaciones que se anexa a la presente ponencia.

De los Honorables Representantes,

William Vélez Mesa
Coordinador de ponentes

Carlos Arturo Piedrahíta C.
Coordinador de ponentes

Jesús Ignacio García
Representante a la Cámara

Rosmery Martínez Rosales
Representante a la Cámara

Nancy Patricia Gutiérrez
Representante a la Cámara

Miriam Alicia Paredes
Representante a la Cámara

Telésforo Pedraza
Representante a la Cámara

Ponencia para segundo debate en Cámara Al proyecto de ley 085 de 2005 –Cámara acumulado 096 de 2005– Cámara

Por la cual se expide el Código de la Niñez y la Juventud, que subroga el Decreto 2737 de 1989, Código del Menor.

Bogotá, D. C., 5 de diciembre de 2005
Honorable representante
Gina Parody D'echeona
Presidenta
Comisión Primera Constitucional Permanente
Cámara de Representantes

Referencia: Proyectos de ley acumulados: "Proyecto de Ley Estatutaria" 085 de 2005 Cámara, por la cual se expide la Ley de la Infancia y la Adolescencia; y Proyecto de Ley 85 de 2005 Cámara, Proyecto de Ley 096 de 2005 Cámara, por la cual se expide el Código de la Niñez y la Juventud, que subroga el Decreto 2737 de 1989, Código del Menor.

Ponencia para segundo debate

Respetada señora Presidenta
Honorables Representantes:
En los siguientes términos rendimos informe de ponencia sobre los proyectos de ley de la referencia:

La primera parte de esta ponencia reproduce lo correspondiente de la ponencia para primer debate; por ello se suprime su texto.

El debate en la Comisión Primera de la Cámara

El debate en la Comisión Primera se llevó a cabo los días 8 y 9 de noviembre del presente año. Durante el debate se presentaron varias sugerencias que se acordó

recoger para el informe de segundo debate en la plenaria de la Cámara, por lo que se dejaron como constancias. El texto aprobado fue el propuesto por los ponentes, que traemos a consideración de la Plenaria de la Honorable Cámara de Representantes con algunas correcciones.

Pliego de modificaciones a los proyectos de ley acumulados: Proyecto de Ley estatutaria 085 de 2005-Cámara, por la cual se expide la Ley de la Infancia y la Adolescencia, y Proyecto de Ley 096 de 2005-Cámara, por la cual se expide el Código de la Niñez y la Juventud, que subroga el Decreto 2737 de 1989, Código del Menor

(Con referencia al texto y la nomenclatura del texto aprobado en la Comisión Primera de la Cámara)

1. El artículo 1 quedará así:

"Artículo 1. Finalidad. Este Código tiene por finalidad garantizar a los niños, niñas y adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el respeto a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna".

Por sugerencia de Unicef se eliminan las categorías de discriminación que se encontraban en este artículo y se deja el término abierto de "sin discriminación alguna"

2. El artículo 11 quedará así:

"Artículo 11. Exigibilidad de los derechos. Salvo las normas procesales sobre legitimidad en la causa para incoar las acciones judiciales o procedimientos administrativos a favor de los menores de edad, cualquier persona puede exigir de la autoridad competente el cumplimiento y el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

El Estado en cabeza de todos y cada uno de sus agentes tiene la responsabilidad inexcusable de actuar oportunamente para garantizar la realización, protección y el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Parágrafo. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como ente coordinador del sistema nacional de bienestar familiar, definirá los lineamientos técnicos que las entidades deben cumplir para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y para asegurar su restablecimiento. Así mismo coadyuvará a los entes nacionales, departamentales, distritales y municipales en la ejecución de sus políticas públicas, sin perjuicio de las competencias y funciones constitucionales y legales propias de cada una de ellas".

Se ajusta la redacción debido a que la capacidad de los funcionarios públicos se basa en las competencias determinadas en una norma o un reglamento.

3. El artículo 19 quedará así:

"Artículo 19. Derechos de protección. Los niños, niñas y adolescentes serán protegidos contra:

1. El abandono físico, emocional y psicoafectivo de sus padres, representantes legales o de las personas, instituciones y autoridades que tienen la responsabilidad de su cuidado y atención.
2. La explotación económica por parte de sus padres, representantes legales, quienes vivan con ellos, o cualquier otra persona. Serán especialmente protegidos contra su utilización en la mendicidad.
3. El consumo de sustancias psicoactivas y estupefacientes, y la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños en actividades de promoción, producción, recolección, tráfico, distribución y comercialización.
4. La violación, la inducción, el estímulo y el constreñimiento a la prostitución; la explotación sexual, la pornografía y cualquier otra conducta que atente contra la libertad, integridad y formación sexuales de la persona menor de edad.
5. El secuestro, la venta, la trata de personas y el tráfico y cualquier otra forma contemporánea de esclavitud o de servidumbre.
6. Las guerras y los conflictos armados internos.
7. El reclutamiento y la utilización de los niños por parte de los grupos armados organizados al margen de la ley.

8. La tortura y toda clase de tratos y penas crueles, inhumanos, humillantes y degradantes, la desaparición forzada y la detención arbitraria.
9. La situación de vida en la calle de los niños y niñas.
10. Los traslados ilícitos y su retención en el extranjero para cualquier fin.
11. El desplazamiento forzado.
12. El trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo es probable que pueda afectar la salud, la integridad y la seguridad o impedir el derecho a la educación.
13. Las peores formas de trabajo infantil, conforme al Convenio 182 de la OIT.
14. El contagio de enfermedades infecciosas prevenibles durante la gestación o después de nacer, o la exposición durante la gestación a alcohol o cualquier tipo de sustancia psicoactiva que pueda afectar su desarrollo físico, mental o su expectativa de vida.
15. Los riesgos y efectos producidos por desastres naturales y demás situaciones de emergencia.
16. Cuando su patrimonio se encuentre amenazado por quienes lo administren.
17. Las minas antipersonal.
18. La transmisión del VIH-SIDA y las infecciones de transmisión sexual.
19. Cualquier otro acto que amenace o vulnere sus derechos".

    Se agrega el derecho a la protección contra la transmisión del VIH-SIDA y las ITS.

4. El artículo 23 quedará así:

"Artículo 23. Derecho a los alimentos. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a los alimentos suficientes y demás medios para su desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral y social. Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación o instrucción, y en general todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Los alimentos comprenden la obligación de proporcionar a la madre los gastos de embarazo y parto.

El mayor de edad que reclame alimentos por su condición de estudiante, deberá demostrar estar cursando educación media, carrera profesional o técnica".

Se elimina la expresión "desempeño apropiado".

5. El artículo 40 quedará así:

"Artículo 40. Obligaciones del Estado. El Estado es el contexto institucional en el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. En cumplimiento de sus funciones en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal deberá:

1. Garantizar el ejercicio de todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
2. Asegurar las condiciones para el ejercicio de los derechos y prevenir su amenaza o afectación a través del diseño y la ejecución de políticas públicas sobre infancia y adolescencia.
3. Garantizar la asignación de los recursos necesarios para el cumplimiento de las políticas públicas de niñez y adolescencia, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal para asegurar la prevalencia y sus derechos.
4. Asegurar la protección y el efectivo restablecimiento de los derechos que han sido vulnerados.
5. Promover la convivencia pacífica en el orden familiar y social.
6. Investigar y sancionar severamente los delitos en los cuales los niños, niñas y adolescentes son víctimas, y garantizar la reparación del daño y el restablecimiento de sus derechos vulnerados.
7. Resolver con carácter prevalente los recursos, peticiones o acciones judiciales que presenten los niños, niñas y adolescentes, su familia o la sociedad para la protección de sus derechos.
8. Promover en todos los estamentos de la sociedad, el respeto a la integridad física, psíquica e intelectual, y el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes y la forma de hacerlos efectivos.
9. Formar a los niños, las niñas y los adolescentes y a las familias en la cultura del respeto a la dignidad, el reconocimiento de los derechos de los demás, la convivencia democrática y los valores humanos, y en la solución pacífica de los conflictos.
10. Apoyar a las familias para que éstas puedan asegurarle a sus hijos e hijas desde su gestación, los alimentos necesarios para su desarrollo físico, psicológico e intelectual, por lo menos hasta que cumplan los 18 años de edad.

11. Garantizar y proteger la cobertura y calidad de la atención a las mujeres gestantes y durante el parto; de manera integral y con inclusión del núcleo familiar durante los primeros cinco (5) años de vida del niño, mediante servicios y programas de atención gratuita de calidad, incluida la vacunación obligatoria contra toda enfermedad prevenible, con agencia de responsabilidad familiar.
12. Garantizar la inscripción y trámite del registro civil de nacimiento mediante un procedimiento eficaz y gratuito, lo más cerca posible al lugar y fecha de su nacimiento.
13. Garantizar que los niños, niñas y adolescentes tengan acceso al Sistema de Seguridad Social en Salud de manera oportuna. Este derecho se hará efectivo mediante afiliación inmediata del recién nacido a uno de los regímenes de ley.
14. Reducir la morbilidad y la mortalidad infantil, prevenir y erradicar la desnutrición, especialmente en los menores de cinco años, y adelantar los programas de vacunación y prevención de las enfermedades que afectan a la infancia y a la adolescencia y de los factores de riesgo de la discapacidad.
15. Asegurar los servicios de salud y subsidio alimentario definidos en la legislación del Sistema de Seguridad Social en Salud para mujeres gestantes y lactantes, familias en situación de debilidad manifiesta y niños, niñas y adolescentes.
16. Prevenir y atender en forma prevalente, las diferentes formas de violencia y todo tipo de accidentes que atenten contra el derecho a la vida y la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes.
17. Garantizar las condiciones para que los niños y niñas, desde su nacimiento, tengan acceso a una educación idónea y de calidad, bien sea en instituciones educativas cercanas a su vivienda, o mediante la utilización de tecnologías que garanticen dicho acceso, tanto en los entornos rurales como urbanos.
18. Asegurar los medios y condiciones que les garanticen la permanencia en el sistema educativo y el cumplimiento de su ciclo completo de formación.
19. Garantizar un ambiente escolar respetuoso de la dignidad y los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, y desarrollar programas de formación de maestros para la promoción del buen trato.

20. Erradicar del sistema educativo las prácticas pedagógicas discriminatorias o excluyentes y las sanciones que conlleven maltrato, o menoscabo de la dignidad o integridad física, psicológica o moral de los niños, niñas y adolescentes.
21. Atender las necesidades educativas específicas de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, con capacidades excepcionales y en situaciones de emergencia.
22. Garantizar la etnoeducación para los niños, niñas y adolescentes indígenas y de otros grupos étnicos, de conformidad con la Constitución Política y la ley que regule la materia.
23. Diseñar y aplicar estrategias para la prevención y el control de la deserción escolar y para evitar la expulsión de los niños, niñas y adolescentes del sistema educativo.
24. Fomentar el deporte, la recreación y las actividades de supervivencia, y facilitar los materiales y útiles necesarios para su práctica regular y continuada.
25. Fomentar la participación en la vida cultural y en las artes, la creatividad y producción artística, científica y tecnológica de niños, niñas y adolescentes, y consagrar recursos especiales para esto.
26. Prevenir y atender la violencia sexual, las violencias dentro de la familia y el maltrato infantil, y promover la difusión de los derechos sexuales y reproductivos.
27. Prestar especial atención a los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de riesgo, vulneración o emergencia.
28. Protegerlos contra los desplazamientos arbitrarios que los alejen de su hogar o de su lugar de residencia habitual.
29. Asegurar que no sean expuestos a ninguna forma de explotación económica o a la mendicidad, y abstenerse de utilizarlos en actividades militares, operaciones psicológicas, campañas cívico-militares y similares.
30. Protegerlos contra la vinculación y el reclutamiento en grupos armados al margen de la ley.
31. Asegurar alimentos a los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en procesos de protección y restablecimiento de sus derechos, sin perjuicio de las demás personas que deben prestar alimentos en los términos de

la presente ley, y garantizar mecanismos efectivos de exigibilidad y cumplimiento de las obligaciones alimentarias.

32. Erradicar el trabajo de los niños y niñas menores de quince años, proteger a los adolescentes autorizados para trabajar, y garantizar su acceso y la permanencia en el sistema educativo.
33. Promover estrategias de comunicación educativa para transformar los patrones culturales que toleran el trabajo infantil y resaltar el valor de la educación como proceso fundamental para el desarrollo de la niñez.
34. Asegurar la presencia del niño, niña o adolescente en todas las actuaciones que sean de su interés o que los involucren cualquiera sea su naturaleza, adoptar las medidas necesarias para salvaguardar su integridad física y psicológica y garantizar el cumplimiento de los términos señalados en la ley o en los reglamentos frente al debido proceso. Procurar la presencia en dichas actuaciones de sus padres, de las personas responsables o de su representante legal.
35. Buscar y ubicar a la familia de origen o las personas con quienes conviva a la mayor brevedad posible cuando sean menores de edad no acompañados.
36. Garantizar la asistencia de un traductor o un especialista en comunicación cuando las condiciones de edad, discapacidad o cultura de los niños, niñas o adolescentes lo exijan.
37. Garantizar la inscripción y el trámite del registro civil de nacimiento mediante un procedimiento eficaz y gratuito. Para el efecto, la Registraduría del Estado Civil y el Ministerio de la Protección Social conjuntamente reglamentarán el trámite administrativo que garantice que el niño o niña salga del centro médico donde nació, con su registro civil de nacimiento y certificado de nacido vivo.
38. Promover el cumplimiento de las responsabilidades asignadas en el presente Código a los medios de comunicación.

Parágrafo. Esta enumeración no es taxativa y en todo caso el Estado deberá garantizar de manera prevalente, el ejercicio de todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes consagrados en la Constitución Política, los instrumentos internacionales de derechos humanos y en este Código".

Por sugerencia de la Procuraduría General de la Nación se agrega el numeral 17 (SIC. Léase 12) con el fin de garantizar la inscripción de todos los niños en el registro civil.

Se amplía la protección de niños y adolescentes en el campo militar con el fin de que no sean utilizados en ningún tipo de actividad militar.

6. El artículo 43 quedará así:

"Artículo 43. Obligaciones complementarias de las instituciones educativas. Los directivos y docentes de los establecimientos académicos y la comunidad educativa en general pondrán en marcha mecanismos para:

1. Comprobar la inscripción del registro civil de nacimiento.
2. Establecer la detección oportuna y el apoyo y la orientación en casos de malnutrición, maltrato, abandono, abuso sexual, violencia intrafamiliar, y explotación económica y laboral, las formas contemporáneas de servidumbre y esclavitud, incluidas las peores formas de trabajo infantil.
3. Comprobar la afiliación de los estudiantes a un régimen de salud, controlar el esquema de vacunación y colaborar con los centros de salud para la valoración periódica de los niños y las niñas.
4. Identificar a los estudiantes que trabajan y las condiciones en que lo hacen, y adelantar las acciones necesarias para que se garantice el proceso educativo.
5. Prevenir y controlar el tráfico y consumo de sustancias psicoactivas que producen dependencia.
6. Coordinar los apoyos pedagógicos, terapéuticos y tecnológicos necesarios para el acceso y la integración educativa del niño, niña o adolescente con discapacidad.
7. Reportar a las autoridades competentes, las situaciones de abuso, maltrato o peores formas de trabajo infantil detectadas en niños niñas y adolescentes.
8. Prevenir la vinculación de niños, niñas y adolescentes a grupos armados al margen de la ley.
9. Orientar a la comunidad educativa para la formación en la salud sexual y reproductiva y la vida en pareja".

Se agrega una nueva obligación a las entidades educativas encaminadas a prevenir la vinculación de niños y adolescentes a grupos armados al margen de la ley.

7. El artículo 61 quedará así:

"Artículo 61. La autoridad central en materia de adopción. La autoridad central en materia de adopción es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Solamente podrán desarrollar programas de adopción, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las instituciones debidamente autorizadas por éste".

Justificación: la autoridad central es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y quien ejerce su representación legal, por disposición de la ley, es el director (a) general.

8. El artículo 62 quedará así:

"Artículo 62. Procedencia de la adopción. La adopción procede cuando el Estado ha agotado las posibilidades para lograr el reintegro del niño, niña o adolescente a su familia de origen y se dé una de las siguientes situaciones:

1. Cuando el defensor de familia decrete el estado de adoptabilidad mediante resolución motivada.
2. Cuando se otorgue el consentimiento por quienes ejercen la patria potestad y se dicte resolución motivada de adoptabilidad por parte del defensor de familia, una vez dicho consentimiento se torne irrevocable.
3. Cuando el niño, niña o adolescente no se encuentre en una situación de vulneración de sus derechos y carezca de representante legal, y el defensor de familia autorice la adopción a través de resolución motivada.

   Justificación: es importante que se mantenga en la legislación la tercera causal de adoptabilidad, ya que se trata de una circunstancia totalmente diferente a la primera y con ella se protege el derecho fundamental de los niños a tener una familia y que sin encontrarse en situación de abandono y carecen de representante legal, el defensor de familia autoriza su adopción.

9. El artículo 74 quedará así:

"Artículo 74. Reserva. Todos los documentos y actuaciones administrativas o judiciales propios del proceso de adopción, serán reservados por el término de veinte (20) años a partir de la ejecutoria de la sentencia judicial. De ellos sólo se podrá expedir copia de la solicitud que los adoptantes hicieren directamente, a través de su apoderado o del defensor de familia o del adoptivo que hubiere llegado a la mayoría de edad, la Procuraduría General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través de su Oficina de Control Interno Disciplinario, la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura a través de su Sala Jurisdiccional Disciplinaria, para efectos de investigaciones penales o disciplinarias a que hubiere lugar.

Parágrafo 1. El adoptado, no obstante, podrá acudir ante el Tribunal Superior correspondiente, mediante apoderado o asistido por el defensor de familia, según el caso, para solicitar que se ordene el levantamiento de la reserva y el acceso a la información.

Parágrafo 2. El funcionario que viole la reserva, permita el acceso o expida copia a personas no autorizadas, incurrirá en causal de mala conducta.

Parágrafo 3. Con el objeto de velar por el interés superior del niño, niña o adolescente, y para hacer seguimiento a los niños, niñas o adolescentes entregados en adopción internacional a familias extranjeras, también podrán solicitar la expedición de copias de los documentos señalados en el presente artículo, los jefes de misión diplomática colombianos en los países donde ejerzan su labor".

Justificación: en los procesos de investigación disciplinaria o penal en los que se cometen delitos como la adopción irregular, es necesario permitir a las autoridades correspondientes el acceso a la información para efectos de sus investigaciones. Así mismo, para efectos del seguimiento que se debe hacer a los niños, niñas y adolescentes dados en adopción en el extranjero, se autoriza a los jefes de misión diplomática colombianos solicitar los documentos de estos niños.

10. Artículo nuevo. Se adiciona un artículo con el número 75, y se corre la numeración de los demás. El artículo nuevo será del siguiente tenor:

"Artículo 75. Los requisitos de acreditación para organismos o agencias internacionales que presten servicios de adopción internacional deberán incluir la

presentación de pruebas que indiquen una sólida situación financiera y un sistema efectivo de control financiero interno, así como auditoría externa. Se exigirá a los organismos acreditados y agencias internacionales que mantengan estados contables actualizados, para ser sometidos a la supervisión de la autoridad central tanto del Estado Receptor, como del Estado de Origen".

11. Artículo nuevo. Se adiciona un artículo con el número 76, y se corre la numeración de los demás. El artículo nuevo será del siguiente tenor:

"Artículo 76. A los potenciales padres adoptivos, se les deberá proveer con antelación de una lista detallada de los costos y gastos que probablemente resulten del proceso de adopción. Las autoridades, organismos acreditados y agencias internacionales de los Estados de recepción y de los Estados de origen deberán cooperar para asegurar que esta información se encuentre disponible.

Parágrafo. La información concerniente a los costos, gastos y honorarios que cobran los distintos organismos acreditados y agencias internacionales por la provisión de los servicios de adopción internacional debe ser puesta a disposición del público".

12. Los artículos 75, 76, 77 y 78 pasan a ser los artículos 77, 78, 79 y 80 respectivamente.

13. Artículo nuevo. Se adiciona un artículo con el número 81, y se corre la numeración de los demás. El artículo nuevo será del siguiente tenor:

"Artículo 81. Deberes del defensor de familia. Son deberes del defensor de familia:

1. Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para impedir la paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran.
2. Hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso, usando los poderes que este Código le otorga.
3. Prevenir, remediar y sancionar por los medios que señala la ley, los actos contrarios a la dignidad de la justicia, lealtad, probidad y buena fe que deben observarse en el proceso, lo mismo que toda tentativa de fraude procesal.

4. Emplear los poderes que a éste la ley le concede en materia de pruebas, siempre que lo considere conveniente para verificar los hechos alegados por las partes y evitar nulidades y providencias inhibitorias.
5. Guardar reserva sobre las decisiones que deban dictarse en los procesos, so pena de incurrir en mala conducta. El mismo deber rige para los servidores públicos de la Defensoría de Familia.
6. Dictar las providencias dentro de los términos legales; resolver los procesos en el orden en que hayan ingresado a su despacho, salvo prelación legal; fijar las audiencias y diligencias en la oportunidad legal, y asistir a ellas.

Parágrafo. La violación de los deberes de que trata el presente artículo constituye falta que se sancionará de conformidad con el respectivo régimen disciplinario".

Justificación: por la naturaleza del servicio que prestan los defensores de familia se requiere una pronta y cumplida actuación en los asuntos referentes a los niños y la familia.

14. Los artículos 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, y 106, por efectos de la renumeración, pasan a ser los artículos 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 y 109, respectivamente.

15. El artículo 107 pasa a ser el artículo 110, y quedará así:

"Artículo 110. Permiso para salir del país. La autorización para la salida del país otorgada por el defensor de familia para un niño, niña o adolescente, cuando carezca de representante legal, se desconozca su paradero o no se encuentre en condiciones de otorgarlo se sujetará a las siguientes reglas:

1. Legitimación. La solicitud podrá ser formulada por quien tenga el cuidado personal del niño, niña o adolescente.
2. Requisitos de la solicitud. La solicitud deberá señalar los hechos en que se funda y el tiempo de permanencia del niño, niña o adolescente en el exterior.

Con ella deberá acompañarse el registro civil de nacimiento y la prueba de los hechos alegados.

3. Trámite. Presentada la solicitud, el defensor de familia ordenará citar a los padres o al representante legal que no la hayan suscrito.

Si dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación o al emplazamiento ninguno de los citados se opone, el funcionario practicará las pruebas que estime necesarias, si a ello hubiere lugar, y decidirá sobre el permiso solicitado.

En firme la resolución que concede el permiso, el defensor de familia remitirá copia de ella al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la División de Extranjería del Departamento Administrativo de Seguridad. El permiso tendrá vigencia por sesenta días hábiles contados a partir de su ejecutoria.

En caso de que oportunamente se presente oposición a la solicitud de permiso, el defensor de familia remitirá el expediente al juez de familia, y por medio de telegrama avisará a los interesados para que comparezcan al juzgado que corresponda por reparto.

Parágrafo 1. Cuando un niño, niña o adolescente vaya a salir del país con uno de los padres o con una persona distinta a los representantes legales deberá obtener previamente el permiso de aquel con quien no viajare o el de aquellos, debidamente autenticado ante notario o autoridad consular. Dicho permiso deberá contener el lugar de destino, el propósito del viaje y la fecha de salida e ingreso de nuevo al país.

No se requerirá autorización de los padres a quienes se les haya suspendido o privado de la patria potestad.

Parágrafo 2. El defensor de familia otorgará de plano permiso de salida del país:

- A los niños, niñas o adolescentes que ingresan al programa de víctimas y testigos del Fiscalía General de la Nación.
- A los niños, niñas o adolescentes, desvinculados o testigos en procesos penales, cuando corre grave peligro su vida y su integridad personal.
- A los niños, niñas o adolescentes, que van en misión deportiva, científica o cultural.

- A los niños, niñas o adolescentes cuando requieren viajar por razones de tratamientos médicos de urgencia al exterior".

La experiencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es que estos casos se presentan y no hay normas que amparen estas situaciones para otorgar el permiso de salida del país.

16. Los artículos 108, 109, y 110, por efectos de la renumeración, pasan a ser los artículos 111, 112 y 113 respectivamente.

17. El artículo 111 pasa a ser el 114, y quedará así:
"Artículo 114. Jornada de trabajo. La duración máxima de la jornada laboral de los adolescentes autorizados para trabajar, se sujetará a las siguientes reglas:

1. Los adolescentes mayores de quince (15) y menores de diecisiete (17) años, sólo podrán trabajar en jornada ordinaria máxima de seis (6) horas diarias y treinta (30) horas a la semana, y hasta las seis (6:00) de la tarde.
2. Los adolescentes de diecisiete (17) años, sólo podrán trabajar en una jornada máxima de ocho (8) horas diarias y cuarenta (40) horas a la semana y hasta las ocho (8:00) de la noche".

En concordancia con la Ley 789 de 2002, se reemplaza la expresión "diurna" por "ordinaria".

18. Los artículos 112, 113, 114, 115, 116, 117 y 118, por efectos de la renumeración, pasan a ser los artículos 115, 116, 117, 118, 119, 120 y 121 respectivamente.

19. Se elimina el artículo 119 por encontrarse repetido en el 118, que renumerado es el 121.

20. Los artículos 120, 121, 122, 123, 124, 125 y 126, por efectos de la renumeración, pasan a ser los artículos 122, 123, 124, 125, 126, 127 y 128 respectivamente.

21. Elimínense los artículos 127, 128 y 129 al estar incluidas sus disposiciones en el artículo 125, que renumerado es el artículo 127.

22. Los artículos 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 y 151, por efectos de la renumeración, pasan a ser los artículos 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 y 150 respectivamente.

23. El artículo 152 se renumera como artículo 151 y quedará así:
"Artículo 151. Práctica de testimonios. Los niños, niñas y adolescentes podrán ser citados como testigos en los procesos penales que se adelanten contra los adultos. Sus declaraciones sólo las podrá tomar el defensor de familia con cuestionario enviado previamente por el fiscal o el juez. El defensor sólo formulará las preguntas que no sean contrarias a su interés superior.

Excepcionalmente, el juez podrá intervenir en el interrogatorio del niño, la niña o el adolescente para conseguir que éste responda a la pregunta que se le ha formulado o que lo haga de manera clara y precisa. Dicho interrogatorio se llevará a cabo fuera del recinto de la audiencia y en presencia del defensor de familia, siempre respetando sus derechos prevalentes.

El mismo procedimiento se adoptará para las declaraciones y entrevistas que deban ser rendidas ante la Policía Judicial y la Fiscalía durante las etapas de indagación o investigación.

A discreción del juez, los testimonios podrán practicarse a través de comunicación de audio o video, caso en el cual no será necesaria la presencia física del niño, niña o adolescente".

Por sugerencia del honorable representante Jesús Ignacio García, se incluye la posibilidad de que los testimonios de niños, niñas y adolescentes puedan ser tomados mediante comunicación de audio y video con el fin de garantizar el derecho de contradicción.

24. Los artículos 153, 154, 155 y 156, por efectos de la renumeración, pasan a ser los artículos 152, 153, 154 y 155 respectivamente.

25. El artículo 157, al ser renumerado, pasa a ser el artículo 156 y quedará así:
"Artículo 156. Principio de inmediación. Ninguna actuación que se adelante en la etapa de juicio tendrá validez si no es adelantada directamente por el funcionario judicial. La violación de este principio será causal de destitución del cargo".

Por sugerencia del honorable representante Jesús Ignacio García se precisa que la inmediación se predica en la etapa de juicio.

26. Los artículos 158 al 192, por efectos de la renumeración, pasan a ser los artículos 157 al 191 respectivamente.

27. El artículo 193 se renumera y pasa a ser el artículo 192, que quedará así:
"Artículo 192. La prestación de servicios sociales a la comunidad. Es la realización de tareas de interés general que el adolescente debe realizar, en forma gratuita, por un período que no exceda de 6 meses, durante una jornada máxima de ocho horas semanales preferentemente los fines de semana y festivos o en días hábiles pero sin afectar su jornada escolar.

Parágrafo. En todo caso, queda prohibido el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o que entorpezca la educación del niño o la niña, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social".

Se adiciona un parágrafo tendiente a proteger a los adolescentes a los que se les decrete la medida de prestación de servicios sociales a la comunidad.

28. Los artículos 194 al 226, por efectos de la renumeración, pasan a ser los artículos 193 al 225 respectivamente.

29. El artículo 227, renumerado, pasa a ser el artículo 226, y quedará así:
"Artículo 226. El presente Código deroga el Decreto 2737 de 1989 o Código del Menor y demás disposiciones legales que le sean contrarias".
Justificación: además del Código del Menor, en el ordenamiento jurídico hay leyes complementarias al tema de infancia y adolescencia que pueden resultar contrarias al nuevo Código, por lo cual es necesario consagrar el texto normativo adicional de derogatoria de otras disposiciones no compatibles con la nueva legislación.

Conclusión

Como conclusión de lo expuesto, los suscritos ponentes ponemos a consideración de la Plenaria de la Cámara de Representantes la siguiente

Proposición

Aprobar en segundo debate los proyectos de ley acumulados: Proyecto de Ley Estatutaria 085 de 2005-Cámara, por la cual se expide la Ley de la Infancia y la Adolescencia; y Proyecto de Ley número 85 de 2005-Cámara, Proyecto de Ley 096 de 2005 Cámara, por la cual se expide el Código de la Niñez y la Juventud, que subroga el Decreto 2737 de 1989, Código del Menor, de acuerdo con el pliego de modificaciones que se anexa a la presente ponencia.

De los honorables representantes,

William Vélez Mesa, Carlos Arturo Piedrahíta C., coordinadores de ponentes; Jesús Ignacio García, Rosmery Martínez Rosales, Nancy Patricia Gutiérrez, Miriam Alicia Paredes, Luis Fernando Velasco Chaves, Germán Varón Cotrino, Telésforo Pedraza, representantes a la Cámara.

Ponencia para primer debate en Senado al proyecto de ley 215 de 2005 –Senado, 85 de 2005– Cámara

Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia.

Honorable senador
Ciro Ramírez Pinzón
Presidente Comisión Primera del Senado

En cumplimiento del honroso encargo por usted encomendado procedemos a rendir informe de ponencia para primer debate del Proyecto de Ley 215 de 2005-Senado, 85 de 2005-Cámara, *por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia.*

La iniciativa, que busca la expedición de una normatividad integral y sistemática frente a los distintos asuntos de la niñez y la adolescencia, y reemplazar así el actual Código del Menor o Decreto-Ley 2737 de 1989, fue presentada por el procurador general de la nación, el defensor del pueblo, la senadora Claudia Blum, y los representantes a la Cámara Gina Parody, Tony Jozame, Roberto Camacho, Adriana Gutiérrez, William Vélez, Sandra Ceballos, Carlos Arturo Piedrahíta, Juan Hurtado, Luis Fernando Velasco, Jorge Eliécer Arango, Iván Díaz, Zamir Silva, Clara Pinillos, Telésforo Pedraza, Venus Albeiro Silva, Guillermo Rivera, María Isabel Urrutia, José Luis Arcila, Edgar Fandiño, Ramón Elejalde, Eduardo Enríquez, Yaneth Restrepo, Rosmery Martínez, Zulema Jattin, Jesús Ignacio García y Lorenzo Almendra.

Antecedentes del Proyecto de Ley

El proyecto tiene amplios antecedentes desde 1994, cuando se conformó una Comisión Interinstitucional, asesora del Ministerio de Justicia, que tenía como tarea actualizar el Código del Menor frente a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Como resultado de ese trabajo se presentó un proyecto de ley que, no obstante, fue retirado por el gobierno por razones de inconveniencia. Posteriormente hubo dos intentos similares, en los que participaron tanto

entidades estatales como organismos internacionales como Unicef, pero tampoco llegaron a concretarse.

Así, el antecedente más claro y reciente que encontramos es el Proyecto de Ley Estatutaria 32 de 2004-Senado. Una iniciativa que fue producto del trabajo de algunos congresistas y la Alianza por la Niñez Colombiana, integrada por el ICBF, Unicef, Unodc, Save The Children International, OIM, OMS-OPS, OIT-IPEC, la Facultad de Psicología de la Universidad Javeriana, el Observatorio de Infancia de la Universidad Nacional, entre otras destacadas entidades y organizaciones. El proyecto, que contenía un extenso articulado –con más de 500 disposiciones–, recibió ponencia favorable para su primer debate en la Comisión Primera del Senado. Pero, infortunadamente, debió ser retirado por sus autores en virtud de la escasez de tiempo para que cumpliera todos los debates reglamentarios, dado que en su momento se decidió darle el trámite correspondiente a las leyes estatutarias.

Sin embargo, cuando se produjo tal retiro, algunos de los autores y ponentes dejaron constancia de su compromiso para presentar una nueva iniciativa sobre la materia, circunstancia que se materializó con la radicación del Proyecto de Ley que se estudia, y que fue elaborado a partir de un exhaustivo examen y proceso de depuración de su inmediato antecedente legislativo. A esta labor se vincularon, además de los congresistas y las instituciones ya mencionadas, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior y de Justicia, la Policía de Menores y la Asociación de Defensores de Familia del ICBF, entre otros. De acuerdo con los autores de la actual iniciativa, se buscó estructurar una norma que conservara los objetivos y las concepciones jurídicas que inspiraron el Proyecto de Ley 32 de 2004.

Fue así como se presentó ante la Cámara de Representantes el Proyecto de Ley Estatutaria 085 de 2005-Cámara, 215 de 2005-Senado, *por la cual se expide la Ley para la Infancia y la Adolescencia*, que fue acumulado al Proyecto de Ley 96 de 2005-Cámara, *por la cual se expide el Código de la Niñez y la Juventud, que subroga el Decreto 2737 de 1989, Código del Menor*, presentado por el representante Marino Paz Ospina. En la ponencia presentada a la Comisión Primera de la Cámara para el primer debate de las iniciativas acumuladas, se propuso tomar como base de la discusión el texto y la estructura del primero de

los proyectos referidos, por ser su contenido más amplio y de mayor alcance, al incluir no sólo un régimen completo de protección integral para las personas menores de edad, sino también las disposiciones que definen las pautas del sistema de responsabilidad penal para adolescentes y niños y niñas víctimas de delitos, que se ha considerado un componente fundamental de cualquier normatividad que busque avanzar en el tratamiento de las variadas problemáticas de la niñez y la adolescencia en Colombia. De acuerdo con esos criterios el proyecto fue aprobado con algunas modificaciones frente a su texto original, tanto en primero, como en segundo debate de la Cámara de Representantes.

Justificación, conveniencia y necesidad del proyecto de ley

Tal y como está planteado, el Proyecto de Ley de Infancia que estudiamos se concibe como una herramienta conveniente para adecuar la legislación colombiana sobre niñez y adolescencia a la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, a los principales instrumentos internacionales ratificados por Colombia desde 1991 y, por supuesto, a nuestra actual Carta Política. En la medida en que el Código del Menor vigente es anterior a todos los dispositivos jurídicos mencionados, consagra un esquema de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que es evidentemente limitado frente a las concepciones y consensos jurídicos contemporáneos sobre el tratamiento legislativo que debe darse a las personas menores de edad.

El actual Código del Menor se fundamenta en la *teoría de la situación irregular* que inspiró las primeras legislaciones del siglo XX sobre la niñez, y que se concentra en responder, de manera exclusiva, a los problemas de menores de edad en situaciones de riesgo o de vulneración efectiva de sus derechos. Bajo esta concepción, la legislación para proteger a los niños, niñas y adolescentes sólo opera cuando son víctimas de violencia, de explotación, de inasistencia alimentaria o de abandono, entre otras problemáticas. Se trata de una perspectiva que si bien reconoce la existencia de realidades sociales que afectan a algunos niños y deben ser resueltas, no contempla la protección de los derechos de los menores de edad como una acción sistémica y permanente, en la que concurran responsabilidades compartidas por la familia, la sociedad y el Estado, y políticas públicas de prevención y reafirmación de esos derechos, además de las medidas para atender a la población infantil en circunstancias irregulares.

En contraposición a ello, la *teoría de la protección integral* recogida por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de 1989, reconoce a los niños, las niñas y los adolescentes de manera amplia, como personas autónomas, titulares de derechos y deberes, que deben ser protegidos integral y persistentemente, no sólo cuando son vulnerados o incumplidos. En este contexto, se debe generar una responsabilidad solidaria, conjunta y simultánea en cabeza de la familia, de la sociedad y del Estado de cumplir con obligaciones básicas y de generar políticas sociales para garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia, así como prevenir su amenaza o vulneración.

Los suscritos ponentes no sólo coincidimos en la conveniencia de avanzar hacia un esquema como el reseñado, sino en la necesidad y obligatoriedad de hacerlo, en virtud de que la citada Convención sobre los Derechos del Niño fue aprobada y ratificada por el Estado colombiano mediante la Ley 12 de 1991. En efecto, dicho tratado establece en su artículo 2.1 lo siguiente:

> Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.

Así que es claro que el país está en mora de aprobar una legislación que se adecue a este instrumento internacional. A pesar de que la Constitución Política dispone que los tratados y convenios que reconocen derechos humanos ratificados por el Congreso conforman el bloque de constitucionalidad y prevalecen en nuestro orden jurídico, es pertinente reconocer la necesidad de proporcionar las herramientas, a través de ajustes en la legislación, para que esos derechos puedan ser ejercidos de manera efectiva y concreta. El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, como órgano instituido para vigilar la aplicación de la Convención, ha realizado recomendaciones reiteradas en este sentido. En un informe de ese Comité de octubre de 2000, se consigna expresamente su preocupación por la falta de compatibilidad entre la legislación colombiana y los

principios y disposiciones de la Convención relacionados con la protección integral de los derechos de los niños.

En situación similar se encuentran otros dispositivos internacionales vinculantes que son dignos de mención, por reconocer derechos humanos específicos a los niños, las niñas y los adolescentes, y por haber sido aprobados y ratificados por el Congreso de la República. Entre ellos se destacan:

- La Convención de La Haya sobre Adopción Internacional.
- Los Convenios 132 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo.
- El Protocolo Opcional a la Convención sobre los Derechos del Niño que prohíbe la participación de menores de 18 años en conflictos armados y la prestación del servicio militar.
- El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño contra la prostitución y pornografía infantil.

Por todo lo anterior, se considera que el proyecto de ley que nos ha correspondido estudiar sirve dos objetivos que merecen ser atendidos por la corporación. De un lado, busca asegurar las condiciones para el ejercicio de derechos que les han sido reconocidos por la Constitución de 1991 y por instrumentos internacionales ratificados por el Congreso. Y de otro, consagra mecanismos que posibilitan la protección integral de esos derechos, al establecer mecanismos que definen la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado frente a la materia.

Estructura del texto aprobado por la Cámara de Representantes

El texto del proyecto de ley aprobado en segundo debate por la Cámara de Representante presenta un contenido amplio, de 226 artículos, estructurados en tres libros de la siguiente manera:

El Libro I incluye normas sobre la protección integral de los niños y adolescentes. En su Título I se establecen disposiciones generales; principios y definiciones, como el ámbito de aplicación de la ley y sus reglas de interpretación y aplicación; y algunos derechos y libertades de los niños, niñas y adolescentes. Y el Título II trata la garantía y prevención de los derechos y consagra las obligaciones del Estado, la sociedad y la familia; los mecanismos para restablecer los

derechos de los menores de edad, entre los cuales se incluye la adopción; las autoridades competentes para el restablecimiento de esos derechos, y los procedimientos administrativos y judiciales en asuntos de niñez y adolescencia.

El Libro II establece el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. En su Título I se definen los principios que guían el sistema; se clasifican las conductas punibles que pueden cometer los menores de edad; se establecen las autoridades judiciales y administrativas que intervienen en el sistema; se dispone el funcionamiento de aspectos procesales que tienen que ver con la reparación del daño; y se describen las distintas medidas pedagógicas aplicables a los adolescentes autores de delitos. El Título II hace referencia a los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos, y en él se redefine el delito de maltrato infantil, se le da un rango de pena de prisión de 5 a 10 años, y se establecen una serie de derechos especiales para los menores de edad víctimas de delitos, entre otros aspectos.

El Libro III crea el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, Políticas Públicas e Inspección, Vigilancia y Control. En este Libro se define un sistema que busca articular las políticas públicas y el conjunto de acciones de las distintas entidades y estamentos responsables de garantizar los derechos de los niños y adolescentes, prevenir su vulneración y asegurar su protección y restablecimiento. Así mismo, se determinan competencias generales para que se ejerza control y vigilancia sobre el cumplimiento de dichas responsabilidades. Y por último, se incluye un capítulo de disposiciones finales que se refieren a la reglamentación de la ley, a la financiación de su implementación, a su vigencia y la derogatoria del Código del Menor actual.

Naturaleza de la ley

En la ponencia para segundo debate en la Cámara de Representantes se estudió a fondo el tema relacionado con el trámite que debe dársele al proyecto de ley objeto de la presente ponencia, y se efectuaron las siguientes consideraciones:

> Siguiendo la más rigurosa jurisprudencia de la Corte Constitucional, no hay duda de que la mayoría de los contenidos esenciales de ambos proyectos son propios de una ley ordinaria. La parte más sustantiva de ambas iniciativas se

> encamina a modificar ámbitos normativos propios de la legislación civil y procesal civil tales como la adopción, los alimentos, la administración de los bienes del menor, el permiso para salir del país, o de la legislación penal sustitutiva y procesal tales como la responsabilidad penal del menor, las medidas reeducativas y los procedimientos para aplicarlas, los delitos contra los niños (delito de maltrato infantil) y procedimiento para sancionarlos, o de legislación laboral tales como la autorización de trabajo del menor, jornada laboral especial, o de la organización administrativa, órganos y competencias en asuntos de menores de edad (defensor de familia, comisario de familia, policía de menores, etc.).

Y más adelante concluyó lo siguiente:

> De otro lado, desde una perspectiva práctica, optar en este caso por el procedimiento de ley estatutaria perjudicaría el buen suceso de los proyectos, toda vez que por las especiales circunstancias de este y el siguiente período de sesiones del Congreso, es muy probable que no se termine el trámite legislativo completo antes del 20 de junio de 2006, lo cual hundiría a tan valiosas iniciativas.
>
> Ahora, si el supremo juez de constitucionalidad, pronunciara la inexequibilidad de las normas de la parte declarativa de los Proyectos (sobre derechos fundamentales de los niños) entonces nada lamentable habría sucedido, pues se excluiría la parte declarativa pero se habría salvado lo sustantivo y procesal de la ley.

Adicional a las consideraciones expuestas, valdría la pena ahondar en el análisis de tres aspectos fundamentales sobre este tema: el primero, relacionado con el hecho de si por ser éste un código debe tramitarse como una ley estatutaria; en segundo orden, cuál es la interpretación que la Corte le ha dado al artículo 152 de la Carta Política y, por último, cuál es la naturaleza de las normas mediante las cuales se expide el Código del Menor.

En cuanto al primer aspecto, la Corte ha señalado que los códigos constituyen un tipo de leyes de naturaleza especial, al igual que las orgánicas y las

estatutarias, sin que pertenezcan a ninguna de estas dos categorías. Dicha especialidad radica entonces en que la competencia para su expedición recae de manera exclusiva en el Congreso de la República, toda vez que la Carta Política en el artículo 150 proscribió la posibilidad de expedir Códigos mediante facultades extraordinarias. Al respecto, en sentencia C-362 de 1996[1] manifestó lo siguiente:

> Del contexto puede apenas inferirse que para el constituyente los códigos poseen, al igual que las leyes orgánicas o estatutarias, un estatus superior al de las leyes ordinarias, situación que en el caso de las leyes-código genera que su expedición o modificación se ajuste a una exigencia especial, consistente en que solamente se pueden realizar por el Legislativo.
>
> 18. En síntesis, puede afirmarse que el constituyente de 1991 no se detuvo a tratar en profundidad el tema de los códigos. En efecto, la discusión en torno a la expedición de los códigos se dio apenas como débil prolongación de la generada alrededor del tema de las leyes orgánicas, marco y estatutarias, lo cual significó que no se hicieran diferenciaciones ni reflexiones expresas sobre la naturaleza de los códigos.

En conclusión, el hecho de que el Proyecto de Ley 215 de 2005-Senado se tramite como un Código, no conlleva que por ese solo hecho éste deba tramitarse como una ley estatutaria.

En segundo orden, nuestro máximo tribunal constitucional ha señalado que la reserva de Ley Estatutaria consagrada en el artículo 152 de la Carta Política debe interpretarse de manera restrictiva, y en lo que a derechos fundamentales se refiere, serán materia de regulación por este tipo de leyes solo aquellos aspectos que se relacionan con el núcleo esencial del derecho. En efecto, en sentencia C-373 de 1995 se señaló lo siguiente:

> La Corte Constitucional en forma unánime y reiterada ha venido haciendo una interpretación restrictiva en relación con los asuntos atinentes a los

[1] M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

> derechos fundamentales que deben ser regulados mediante ley estatutaria, llegando a la conclusión de que en ella deberán incluirse únicamente aquellos aspectos que se relacionan con el ámbito intangible del derecho fundamental respectivo, esto es, su núcleo esencial.

Cuando en la ponencia para segundo debate se analizó si el proyecto objeto de Ley de Infancia y Adolescencia tocaba el núcleo esencial de derechos fundamentales, se estableció que "ninguno de los contenidos de los proyectos en estudio apuntan a trazar el núcleo de los derechos fundamentales de los niños y adolescentes. Menos aún apuntan a establecer limitaciones, restricciones o condicionamientos a su ejercicio".

Por tanto, tampoco bajo esa óptica sería procedente tramitar el Código de la Infancia y la Adolescencia como una ley estatutaria.

Por último, y tal vez como argumento con mayor contundencia, cabe resaltar que la jurisprudencia constitucional ya abordó el tema del tipo de norma a través del cual debía tramitarse el Código del Menor, hoy Ley de Infancia y Adolescencia, y manifestó que ésta debía materializarse en una ley ordinaria. En efecto, en sentencia C-568 de 1997 la Corte manifestó al respecto lo siguiente:

> Si se admitiera que el Código del Menor y las demás normas que regulan procedimientos judiciales o administrativos relativos a familia no podían ser afectadas por la Ley 201 de 1995, surgen varias alternativas, a saber: se trataría de normas inmodificables por leyes posteriores, de normas que tendrían rango constitucional o, en últimas, de normas dotadas de una fuerza inferior a la Constitución pero superior a la ley ordinaria.
>
> Ninguna de las alternativas propuestas es plausible. En efecto, si al legislador se le ha atribuido la cláusula general de competencia para crear normas jurídicas vinculantes, es evidente que en su labor de producción normativa y de adecuación del derecho legislado a las variables condiciones sociales se encuentra asistido por la facultad de derogar las normas que él mismo ha creado y de introducirles modificaciones. Lo contrario implicaría sustraer del ámbito propio de la regulación legal todas las materias que hubieren sido

> objeto de tratamiento por el legislador, imponiéndole límites al cumplimiento de su función que, con el tiempo, quedaría anulada, e invertir el orden jerárquico de las fuentes del derecho, ya que una ley que derogara o modificara otra anterior, antes que con la Constitución, que es norma de normas, tendría que ser confrontada con la ley derogada o modificada, lo que a todas luces es inadmisible, pues la pauta para establecer la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de una norma es la Constitución y no una ley de idéntica jerarquía a la juzgada.
>
> *De otra parte, es claro que de ninguna de las normas de la Carta se desprende que el Constituyente le haya otorgado rango constitucional al Código del Menor o a las normas referentes a los procedimientos en materia de familia y tampoco es válido sostener que se les haya atribuido un rango superior a la ley ordinaria, pues la Carta no se ocupa de establecer requisitos especiales o trámites agravados para su aprobación o modificación, como sí acontece, verbi gratia, con las materias propias de las leyes estatutarias o de las leyes orgánicas* (énfasis agregado).

En consecuencia, de conformidad con la sentencia anteriormente transcrita, resulta claro que el Código del Menor o las normas que lo modifiquen no precisan, a la luz de las normas constitucionales, un trámite de ley estatutaria u orgánica, por cuanto éstos deben materializarse en una ley ordinaria.

Explicación del articulado

El Título I, en su capítulo inicial, se ocupa de los principios y las definiciones.

Aun cuando aparecen repetidas muchas disposiciones constitucionales, esto se justifica por la idea de hacer un código, es decir, un conjunto de principios, valores y normas que de manera integral y sistemática se ocupen de regular la protección de los derechos, la exigencia de los deberes y la asignación de las responsabilidades que corresponden a los niños, las niñas y los adolescentes en Colombia.

La razón fundamental que justifica la reforma del actual Código del Menor (Decreto 2737 de 1989) es que sus contenidos deben adecuarse al sistema de fuentes del derecho establecido por la Constitución de 1991. El artículo sexto propuesto introduce el concepto de "bloque de constitucionalidad", y especifica la

importancia de la Convención sobre los Derechos del Niño; esa normativa nacional y supranacional presidirá el ordenamiento jurídico aplicable a nuestros niños, niñas y adolescentes.

Reconocemos que el actual Código del Menor es una buena obra jurídica –de hecho conservamos gran parte de sus disposiciones–, pero las anteriores consideraciones permiten afirmar que la reforma propuesta es mucho mejor, dada la modernidad que supone esta visión integral y supranacional del derecho de la infancia y la adolescencia.

La consagración explícita de principios como la prevalencia de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes cuando se encuentren en conflicto con otras personas, la irrenunciabilidad y preferencia de las normas contenidas en este Código, la protección integral, el concepto de interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes, la corresponsabilidad de los actores de la protección, la perspectiva de género, la responsabilidad parental, la especificidad reconocida a los niños y adolescentes de los grupos étnicos, y el deber de vigilancia del Estado, son entre otros los pilares conceptuales que deberán orientar a los operadores del Código en su aplicación a los casos concretos.

El Capítulo II del mismo Título I se ocupa de los derechos y las libertades.

Aun cuando repetimos normas constitucionales sobre derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, el artículo 17 es clave para entender estas propuestas, pues los conceptos de vida, calidad de vida y ambiente sano se vinculan con el principio de dignidad de los niños, las niñas y los adolescentes, y esto es muy importante porque conduce a la noción del mínimo existencial de estas personas y a la concepción de que no solo sus derechos fundamentales sino también los sociales, económicos, culturales y del ambiente se pueden exigir de manera inmediata y en la dimensión que esa dignidad y el pretendido bienestar lo requieran.

El Título II se ocupa de la garantía de los derechos y la prevención, y en su Capítulo I, sin pretender taxatividad, enumera algunas de las obligaciones que corresponden a la familia, a la sociedad y al Estado en sus niveles nacional, departamental y distrital como actores principales y primeros responsables de la protección de los niños, las niñas y los adolescentes. Igualmente, precisa las

obligaciones de las instituciones educativas, el sistema de seguridad social en salud, los medios de comunicación y la Comisión Nacional de Televisión.

El Capítulo II de este Título trata de las medidas de restablecimiento de los derechos.

Está construido sobre los conceptos de dignidad, integridad y capacidad para ejercer los derechos vulnerados. El obligado al restablecimiento es el Estado que con su potestad puede imponer sanciones y tomar medidas de restablecimiento especialmente ubicando al menor en un medio en el que pueda disfrutar sus derechos, como la familia de origen, la familia extensa, el hogar de paso, el hogar sustituto, la vinculación a programas de atención especializada y la adopción.

Respecto de la adopción, en los artículos 60 a 78 de la propuesta recogemos iniciativas y recomendaciones formuladas por la Alianza por la Niñez Colombiana, y por la Universidad del Rosario a través de escrito enviado por el decano de la Facultad de Jurisprudencia, doctor Alejandro Vanegas Franco. Nos parece que lo aprobado en la honorable Cámara de Representantes se mejora con las modificaciones aceptadas.

La definición de la adopción es más clara y precisa si se mantiene el contenido del artículo 88 del actual Código del Menor, por eso la acogemos.

Igualmente acogemos una nueva redacción de los efectos jurídicos de la adopción, que nos parecen claros en los artículos 97 y 98 del actual Código del Menor. En lo demás respaldamos lo aprobado por la honorable Cámara de Representantes.

En el Capítulo III del Título II, relativo a las autoridades competentes para el restablecimiento de los derechos, se respalda integralmente lo aprobado en la Cámara, pero por recomendación de la Alianza por la Niñez Colombiana se reincorpora el artículo 84 original que se refiere a la creación, composición y reglamentación de las Comisarías de Familia en todos los municipios del país, lo cual parece indispensable para estructurar un sistema nacional de protección de los niños y los adolescentes.

Los Capítulos IV y V del Título II que se ocupan del procedimiento administrativo y del procedimiento judicial para la protección de los niños, las niñas

y los adolescentes, se acogen tal y como fueron aprobados en la honorable Cámara de Representantes, con pequeños ajustes de redacción.

En el Libro II, Título I se propone un sistema de responsabilidad penal para adolescentes que nos merece particular cuidado y por eso proponemos las siguientes modificaciones respecto de lo aprobado en la honorable Cámara de Representantes:

La edad penal. El Código Penal fija la edad para responder penalmente en dieciocho (18) años. Ese límite, que es el mismo que señala la ley para ser ciudadano y ejercer derechos políticos, se explica en profundos estudios, ya clásicos, de psicología y sociología criminal. La inimputabilidad que se asocia a dicho límite de edad se estructura en la falta de comprensión del ilícito, en la incapacidad para comportarse de acuerdo con dicha comprensión. De otro lado, el Código Civil señala los doce (12) años como límite entre la niñez y la adolescencia, pero no podemos estar seguros de que, hoy en día, a esa edad la persona, sana de mente, logre alcanzar el grado de madurez necesario para ser tratado como imputable. Se puede pasar a ser adolescente civilmente pero inimputable penal.

No es igual el nivel de madurez mental y comportamental de un adolescente a los doce (12), que a los catorce (14), o a los dieciséis (16), o a los dieciocho (18) años; el mismo proceso evolutivo natural y cultural va desarrollando lentamente la capacidad cognoscitiva y volitiva de las personas menores de edad. Por eso nos produce incertidumbre fijar los doce (12) años como edad penal, sobre todo si la filosofía del proyecto de código que estamos tramitando no es la de la "situación irregular" sino la de la "protección integral" de la niñez y la adolescencia. Un tratamiento penal, por más benigno que sea, repugna a la idea de protección privilegiada para esos sectores de la población.

Desde luego no se nos escapa que la modernidad ha traído un desarrollo precoz de personas que a los catorce (14) años ya "saben todo sobre la vida", incluso ya son padres o madres.

Por eso proponemos una gradualidad que protege al adolescente pero también defiende a la sociedad. Nos parece que los menores de catorce (14) años deben estar por fuera del sistema penal propuesto; que los adolescentes entre catorce (14) y dieciséis (16) años pueden ser responsables penalmente, pero las sanciones a ellos impuestas no deben ser vindicativas, como por ejemplo

el encarcelamiento, y que en estos casos la aplicación del principio de oportunidad debe ser la regla; por último, proponemos que las personas que al delinquir se encuentren en la franja de los dieciséis (16) a los dieciocho (18) años deben ser penalizados como adultos, pero con la posibilidad de sustituir gran parte de la pena privativa de la libertad por medidas resocializadoras aplicadas y vigiladas por jueces especializados.

Con estas propuestas, y la referencia expresa al sistema de investigación y juzgamiento establecido en la Ley 906 de 2004 (Sistema Penal Acusatorio), presentamos una nueva redacción de los artículos 140 a 163, conservando las ideas aprobadas en la honorable Cámara de Representantes.

El Capítulo II del Título del Libro II se refiere a las conductas punibles, pero en verdad lo que se propone en los artículos 164 a 168 es una clasificación de los delitos de especial gravedad, graves, de gravedad intermedia y leves. Nos parece que esta clasificación es antitécnica y peligrosa; la línea divisoria entre un delito grave y otro de especial gravedad es muy tenue, lo mismo que entre uno de gravedad intermedia y otro leve, a más de la complejidad de justificar los delitos leves frente a la noción de contravención que se entiende como un hecho punible de menor gravedad que el delito.

Creemos que señalar, para efecto de imponer la pena privativa de la libertad, unos delitos graves como lo hace el artículo 165 del proyecto es suficiente. En consecuencia, se puede suprimir todo el Capítulo II.

Los Capítulos de este Libro II relativos a las autoridades y entidades del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, y reparación del daño, se acogen parcialmente como los propuso la honorable Cámara de Representantes; se precisa la propuesta de subir de doce (12) a catorce (14) años la edad penal, y se propone una nueva redacción del artículo 180 correspondiente al principio de oportunidad.

El principio de oportunidad no puede ser para delitos graves o de especial gravedad, a menos que concurran otras de las causales previstas en la Ley 906 de 2004; también hay que tener en cuenta que el principio no es solo para extinguir la acción penal sino que el juez además puede interrumpirla o suspenderla. Por eso proponemos excluir del proyecto el inciso 2 del artículo 180.

De otra parte, proponemos eliminar el artículo 181 de la propuesta de la honorable Cámara de Representantes pues contiene una amnistía disfrazada y, por lo demás, la materia está suficiente y mejor regulada en la Ley 975 de 2005.

El artículo 183 se debe excluir y dejar la prescripción como está regulada en el Código Penal; en un sistema como el nuestro, congestionado e ineficaz, no es ninguna protección para los adolescentes y sí un gran mal para la sociedad bajar tan dramáticamente esos límites.

El artículo 184 propuesto se debe modificar, en razón a que si estamos hablando de responsabilidad penal de los adolescentes, hay que precisar que al delito corresponde una pena o sanción y no una simple medida reeducadora como se prevé para las contravenciones. En consecuencia, y para diferenciar el sistema propuesto de los existentes para los delincuentes mayores de dieciocho (18) años, y para darle a las penas un contenido diferencial y no sólo expiatorio o vindicativo, proponemos hablar de sanciones. Queremos igualmente precisar que la privación de la libertad del delincuente adolescente debe diferenciarse de la que se impone a los mayores, por eso la denominamos expresamente privación de la libertad en centro educativo especializado. No queremos dejar dudas y jamás los adolescentes pagarán sus penas en los mismos sitios que los delincuentes adultos.

También presentamos una nueva propuesta para el artículo 195 del proyecto de la honorable Cámara de Representantes.

Nos parece que principios de política criminal como los de gravedad del hecho, individualidad de la responsabilidad, proporcionalidad de las sanciones, igualdad ante la ley, obligan a que, por ejemplo, el homicidio tenga la misma pena si lo comete un adolescente que si lo comete un adulto; no puede castigarse la muerte de un individuo con cuarenta (40) años de cárcel si quien lo comete tiene más de dieciocho (18) años, y con cinco (5) años si el victimario es menor de esa edad. La protección del delincuente adolescente no debe estar en el *cuantum* de la pena sino en la forma de cumplirla.

El delincuente adolescente debe tener oportunidad de educarse y resocializarse, por eso proponemos que no purgue toda su pena en prisión, y que una parte de la misma se surta cumpliendo compromisos ante el juez.

El Título II del Libro II se ocupa de los procedimientos especiales cuando los niños, las niñas y los adolescentes son víctimas de delitos. Proponemos eliminar el artículo 200 que tipifica una conducta de maltrato infantil, por considerar que eso no es un procedimiento y que el Código Penal maneja mejor el tema de los delitos y las penas, dentro de una estructura de principios, definiciones y proporciones punitivas que no se deben afectar en otros códigos. En lo demás acogemos el articulado aprobado en la honorable Cámara de Representantes.

El Libro III, que se ocupa del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y políticas públicas de infancia y adolescencia nos parece bien elaborado y proponemos acogerlo con dos modificaciones. La primera consiste en revivir el texto del artículo 212, pues compartimos las ideas de la Procuraduría General de la Nación y de la Alianza por la Niñez Colombiana en el sentido de que las políticas públicas de infancia y adolescencia no pueden quedarse en el nivel nacional sino que deben trascender a los niveles departamental y municipal, no sólo por la elemental razón de que es allí donde viven los niños y los adolescentes, sino porque vincular a gobernadores y alcaldes es muy conveniente ya que la visión municipalista de la Constitución (art. 311), y los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad que armonizan la autonomía de las entidades territoriales, aseguran mejor la eficiencia y la eficacia de las políticas públicas en general.

La segunda modificación se orienta a suprimir el artículo 223 propuesto por la honorable Cámara de Representantes ya que la potestad reglamentaria es del presidente de la república, y está debidamente establecida en la Constitución Política (art. 189.11); nos parece que el texto del proyecto es confuso e inconstitucional.

Proposición

Con las anteriores consideraciones y el pliego de modificaciones adjunto, dese primer debate al Proyecto de Ley 215 de 2005-Senado, 85 de 2005-Cámara, *por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia.*

Héctor Helí Rojas Jiménez, senador ponente-coordinador; Germán Vargas Lleras, Juan Fernando Cristo Bustos, Claudia Blum de Barberi y Carlos Holguín Sardi, senadores ponentes.

Senado de la República

Ponencia para segundo debate en Senado al proyecto de ley 215 de 2005-Senado, 85 de 2005-Cámara "por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia"

Doctora
Claudia Blum de Barberi
Presidenta
Honorable Senado de la República
E. S. D.

Señora presidenta:
El presente escrito contiene la ponencia para segundo debate al Proyecto de Ley 215 de 2005-Senado, 085 de 2005-Cámara, acumulado al Proyecto de Ley 096 de 2005-Cámara. "Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia"; de esta manera cumplimos con la honrosa designación que se nos hizo luego de finalizado el debate en la Comisión Primera Constitucional.

Transcribiremos, en primer término, de manera integral el texto de ponencia que presentamos para primer debate, pues consideramos que recoge la argumentación esencial de toda la propuesta legislativa, y no lo modificamos porque fue acogido con gran aceptación por todos los miembros de la Comisión. En una segunda parte nos limitaremos a reseñar y explicar, una a una, las modificaciones introducidas al mismo.

A. Dijimos en el primer debate:

Nota: En este punto se reprodujo el texto de la ponencia para primer debate, por lo que se suprime.

B. En el debate realizado en la Comisión Primera del Senado se introdujeron los siguientes cambios a la propuesta de los ponentes, los cuales acogemos íntegramente para el debate en la plenaria de la corporación:

1. En el artículo 26 que se refiere al derecho a la salud de los menores, se consagra la obligación para los hospitales y centros de salud de atender en

todo caso los requerimientos de atención de este sector de la población, señalando una sanción pecuniaria por el incumplimiento y disponiendo que el Estado o la institución de salud deben precisar cuál debe ser la entidad a cargo del pago respectivo.

2. En el artículo 27 de la ponencia referido al derecho a la educación, se adicionó la prohibición de cobrar derechos académicos a los menores de los estratos uno, dos y tres del Sisben, y se señala la sanción correspondiente.
3. El artículo 34 de la ponencia fue modificado para dejar claramente establecida la prohibición de admitir menores de 15 años en algún empleo u ocupación. Los menores de quince años pueden excepcionalmente desempeñar actividades remuneradas de orden artístico, cultural, recreativo o deportivo, siempre que no se afecte su salud ni su proceso educativo.
4. El artículo 35, referido a los menores discapacitados, fue adicionado con un parágrafo que permite a sus padres reclamar del Estado una especial prestación social cuando asumen integralmente su atención. El gobierno reglamentará esta pretensión.
5. En el artículo 40 sobre obligaciones del Estado, se adicionó el numeral 32, que ordena erradicar el trabajo de los menores de 15 años, con la expresión, "las peores formas de trabajo infantil" para hacer más amplia la protección y para armonizar el lenguaje con el derecho internacional.
6. El artículo 46 sobre responsabilidad de los medios de comunicación se modificó para hacer una mejor relación de los deberes y para aclarar que la responsabilidad por el incumplimiento la señalarán las autoridades hoy competentes, y que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no sanciona, pero sí puede hacer parte en los procesos.
7. El artículo 72 sobre programas de adopción, que fue un tema muy debatido en la Comisión, se adicionó con un parágrafo para proteger al que está por nacer, exigiendo que el consentimiento de la madre gestante para darlo en adopción sea verificado por el Ministerio Público.
8. El artículo 73 fue modificado sustancialmente para prohibir, por razones de dignidad humana, la retribución económica a los padres que dan en adopción a sus hijos. Igualmente, se prohíben las donaciones internacionales a

las instituciones colombianas que manejan programas de adopción, por las mismas razones.

9. En la misma línea de preocupación y argumentación se suprimió el artículo 78 de la ponencia que permitía gastos previos por parte de los adoptantes.
10. El artículo 79 de la ponencia, que pasa a ser el 78 del articulado, sobre defensorías de familia, fue ampliado para incluir el concepto de carrera en la vinculación de los defensores de familia y autorizar legalmente la atribución de funciones judiciales a los mismos.
11. También se modificó el artículo 79 a fin de señalar de manera más técnica los requisitos para ser defensor de familia.
12. El artículo 81, que trata de las funciones del defensor de familia, fue modificado para ordenar los conceptos de su numeral primero.
13. El artículo 102 de la ponencia, que pasa a ser el 101 del articulado, que regula las citaciones y notificaciones de las providencias en los procesos administrativos que versen sobre menores, se modificó para hacerlo más técnico y garantista, utilizando incluso la Internet y los medios masivos, con la fotografía de los menores, si fuere posible, para que haya una efectiva posibilidad de conocer la decisión adoptada.
14. El artículo 105 de la ponencia, que pasa a ser el 104 del articulado, se modificó para suprimir lo relativo a la citación de los interesados y dejar solamente el tema de la entrevista de los menores por parte del defensor o el comisario de familia.
15. El artículo 144, sobre protección a los menores de catorce (14) años, que realizan conductas punibles pero que no son considerados responsables, se amplía para vincularlos a los programas de educación del sistema nacional de bienestar familiar.
16. El artículo 186, que describe la medida de medio semicerrado se modificó para evitar que la internación nocturna afecte el horario escolar.
17. También se modificó el artículo 187 sobre privación de la libertad para adolescentes entre 16 y 18 años, bajando de 10 a 6 años el límite de la pena establecida en el Código Penal a efecto de cobijar algunos eventos de narcotráfico y graves afectaciones a la propiedad privada. El tiempo de presentaciones

periódicas una vez cumplida la pena alternativa impuesta, no será el que falte para cumplir la pena señalada en el Código Penal, sino el que señale el juez.

18. El artículo 203 se complementó señalando que la política pública de infancia y adolescencia no sólo debe ser diferencial sino prioritaria, y que los excedentes financieros derivados de la gestión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se aplicarán a la financiación de esa política.
19. El artículo 206, que trata de los Consejos Departamentales y Municipales de Política Social, se modificó para que estas entidades sean articuladoras entre el nivel nacional y el territorial, más que los sustitutos de las responsabilidades de la nación.
20. Por último, el artículo 210 sobre funciones de la Procuraduría General de la Nación se adicionó con un parágrafo para proteger los contenidos de los expedientes que versen sobre menores.

Proposición

Por lo anterior, y de acuerdo con el texto aprobado por la Comisión Primera Constitucional del Senado de la República, proponemos: *dese segundo debate al Proyecto de Ley 215 de 2005-Senado, 085 de 2005-Cámara, acumulado al Proyecto de Ley 096 de 2005-Cámara, "por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia"*

Héctor Helí Rojas Jiménez
Senador ponente-coordinador

Germán Vargas Lleras
Senador ponente

Juan Fernando Cristo Bustos
Senador ponente

Claudia Blum de Barberi
Senadora ponente

Carlos Holguín Sardi
Senador ponente

Ciro Ramírez Pinzón
Senador ponente

Acta de conciliación

Congreso de la República
Proyecto de ley 215 de 2005-Senado, 85 de 2005-Cámara
(28 de septiembre de 2006)

"Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia"
Acta de conciliación

El día miércoles 20 de septiembre de 2006, se reunieron en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes los honorables senadores y representantes miembros de la Comisión de Conciliación del Proyecto de Ley 215 de 2005-Senado, 85 de 2005-Cámara, "Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia", designados por las mesas directivas de Senado y Cámara, en cumplimiento del artículo 186 de la Ley 5 de 1992, y después de analizar los textos definitivos aprobados en ambas corporaciones, acordaron:

1. En el artículo 3. Sujetos titulares de derechos. Se acoge el texto aprobado por la plenaria de la Cámara de Representantes.
2. En el artículo 38. Obligaciones de la familia. Se acoge el texto aprobado por la plenaria de la Cámara de Representantes.
3. Los artículos 41 y 42 que venían de Cámara, en la plenaria del Senado fueron fusionados; en la conciliación hemos acordado separarlos de nuevo; para el artículo 41 se acoge el texto de la Honorable Cámara de Representantes y para el artículo 42 igualmente se acoge lo aprobado por la Cámara, pero eliminando los tres parágrafos, como lo había hecho el Senado.
4. En el artículo 78. Defensorías de Familia. Se acoge el texto aprobado por la plenaria de la Cámara de Representantes.
5. El artículo 181. El principio de oportunidad en los procesos seguidos a los adolescentes como partícipes de los delitos cometidos por grupos armados al margen de la ley. Este artículo había sido eliminado en el Senado, los conciliadores proponen aprobarlo tal y como venía de la Honorable Cámara de Representantes.

6. El artículo 209. Funciones de la Procuraduría General de la Nación. Se acoge el texto aprobado por la plenaria de la Cámara de Representantes.
7. El artículo 213. Presupuesto y financiación. Hemos acordado acoger el texto aprobado por la plenaria de la Cámara de Representantes que venía bajo la numeración 224.
8. El resto del articulado se propone aprobarlo con los textos del Senado de la Republica, incluyendo la nueva numeración que por razón de los cambios anteriores es pertinente hacer.

Anexamos el texto conciliado.

En los anteriores términos dejamos cumplida la comisión otorgada y solicitamos sea puesta a consideración de las plenarias de Senado y Cámara de Representantes.

Cordialmente,

Honorables Senadores

Héctor Helí Rojas
Gina Parody
Dilian Francisca Toro
Germán Vargas Lleras
Ciro Ramírez Pinzón

Honorables Representantes

William Vélez
Carlos Arturo Piedrahíta
Tarquino Pacheco
Iván David Hernández
Germán Navas Talero

Diario oficial 46.446
Ley 1098
08/11/2006

por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia

El Congreso de Colombia
Decreta:

Libro I
La protección integral

Título I
Disposiciones generales

Capítulo I
Principios y definiciones

Artículo 1. *Finalidad.* Este Código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna.

Artículo 2. *Objeto.* El presente Código tiene por objeto establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la familia, la sociedad y el Estado.

Artículo 3. *Sujetos titulares de derechos*. Para todos los efectos de esta ley son sujetos titulares de derechos todas las personas menores de 18 años. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Código Civil, se entiende por niño

o niña las personas entre los 0 y los 12 años, y por adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad.

Parágrafo 1. En caso de duda sobre la mayoría o minoría de edad, se presumirá ésta. En caso de duda sobre la edad del niño, niña o adolescente se presumirá la edad inferior. Las autoridades judiciales y administrativas, ordenarán la práctica de las pruebas para la determinación de la edad, y una vez establecida, confirmarán o revocarán las medidas y ordenarán los correctivos necesarios para la ley.

Parágrafo 2. En el caso de los pueblos indígenas, la capacidad para el ejercicio de derechos se regirá por sus propios sistemas normativos, los cuales deben guardar plena armonía con la Constitución Política.

Artículo 4. *Ámbito de aplicación.* El presente Código se aplica a todos los niños, las niñas y los adolescentes nacionales o extranjeros que se encuentren en el territorio nacional, a los nacionales que se encuentren fuera del país, y a aquellos con doble nacionalidad, cuando una de ellas sea la colombiana.

Artículo 5. *Naturaleza de las normas contenidas en este Código.* Las normas sobre los niños, las niñas y los adolescentes, contenidas en este código, son de orden público, de carácter irrenunciable y los principios y reglas en ellas consagrados se aplicarán de preferencia a las disposiciones contenidas en otras leyes.

Artículo 6. *Reglas de interpretación y aplicación.* Las normas contenidas en la Constitución Política y en los tratados o convenios internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, en especial la Convención sobre los Derechos del Niño, harán parte integral de este Código, y servirán de guía para su interpretación y aplicación. En todo caso, se aplicará siempre la norma más favorable al interés superior del niño, niña o adolescente.

La enunciación de los derechos y garantías contenidos en dichas normas, no debe entenderse como negación de otras que, siendo inherentes al niño, niña o adolescente, no figuren expresamente en ellas.

Artículo 7. *Protección integral.* Se entiende por protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior.

La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos.

Artículo 8. *Interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes.* Se entiende por interés superior del niño, la niña y el adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes.

Artículo 9. *Prevalencia de los derechos.* En todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de éstos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona.

En caso de conflicto entre dos o más disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicará la norma más favorable al interés superior del niño, la niña o el adolescente.

Artículo 10. *Corresponsabilidad*. Para los efectos de este Código, se entiende por corresponsabilidad, la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. La familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y protección.

La corresponsabilidad y la concurrencia aplican en la relación que se establece entre todos los sectores e instituciones del Estado.

No obstante lo anterior, instituciones públicas o privadas obligadas a la prestación de servicios sociales no podrán invocar el principio de la corresponsabilidad para negar la atención que demande la satisfacción de derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.

Artículo 11. *Exigibilidad de los derechos.* Salvo las normas procesales sobre legitimidad en la causa para incoar las acciones judiciales o procedimientos administrativos a favor de los menores de edad, cualquier persona puede exigir de la autoridad competente el cumplimiento y el restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.

El Estado, en cabeza de todos y cada uno de sus agentes, tiene la responsabilidad inexcusable de actuar oportunamente para garantizar la realización, protección y el restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.

Parágrafo. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como ente coordinador del sistema nacional de bienestar familiar, mantendrá todas las funciones que hoy tiene (Ley 75/68 y Ley 7ª/79) y definirá los lineamientos técnicos que las entidades deben cumplir para garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, y para asegurar su restablecimiento. Así mismo, coadyuvará a los entes nacionales, departamentales, distritales y municipales en la ejecución de sus políticas públicas, sin perjuicio de las competencias y funciones constitucionales y legales propias de cada una de ellas.

Artículo 12. *Perspectiva de género.* Se entiende por perspectiva de género el reconocimiento de las diferencias sociales, biológicas y psicológicas en las relaciones entre las personas según el sexo, la edad, la etnia y el rol que desempeñan en la familia y en el grupo social. Esta perspectiva se debe tener en cuenta en la aplicación de este Código, en todos los ámbitos en donde se desenvuelven los niños, las niñas y los adolescentes, para alcanzar la equidad.

Artículo 13. *Derechos de los niños, las niñas y los adolescentes de los pueblos indígenas y demás grupos étnicos.* Los niños, las niñas y los adolescentes de los pueblos indígenas y demás grupos étnicos, gozarán de los derechos consagrados en la Constitución Política, los instrumentos internacionales de derechos humanos y el presente Código, sin perjuicio de los principios que rigen sus culturas y organización social.

Artículo 14. *La responsabilidad parental*. La responsabilidad parental es un complemento de la patria potestad establecida en la legislación civil. Es además, la obligación inherente a la orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de los niños, las niñas y los adolescentes durante su proceso de formación. Esto incluye la responsabilidad compartida y solidaria del padre y la madre de asegurarse que los niños, las niñas y los adolescentes puedan lograr el máximo nivel de satisfacción de sus derechos.

En ningún caso el ejercicio de la responsabilidad parental puede conllevar violencia física, psicológica o actos que impidan el ejercicio de sus derechos.

Artículo 15. *Ejercicio de los derechos y responsabilidades.* Es obligación de la familia, de la sociedad y del Estado, formar a los niños, las niñas y los adolescentes en el ejercicio responsable de los derechos. Las autoridades contribuirán con este propósito a través de decisiones oportunas y eficaces y con claro sentido pedagógico.

El niño, la niña o el adolescente tendrán o deberán cumplir las obligaciones cívicas y sociales que correspondan a un individuo de su desarrollo.

En las decisiones jurisdiccionales o administrativas, sobre el ejercicio de los derechos o la infracción de los deberes se tomarán en cuenta los dictámenes de especialistas.

Artículo 16. *Deber de vigilancia del Estado.* Todas las personas naturales o jurídicas, con personería jurídica expedida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o sin ella, que aun con autorización de los padres o representantes legales, alberguen o cuiden a los niños, las niñas o los adolescentes son sujetos de la vigilancia del Estado.

De acuerdo con las normas que regulan la prestación del servicio público de bienestar familiar compete al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como ente rector, coordinador y articulador del sistema nacional de bienestar familiar, reconocer, otorgar, suspender y cancelar personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las instituciones del sistema que prestan servicios de protección a los menores de edad o la familia y a las que desarrollen el programa de adopción.

Capítulo II
Derechos y libertades

Artículo 17. *Derecho a la vida y a la calidad de vida y a un ambiente sano.* Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la vida, a una buena calidad de vida y a un ambiente sano en condiciones de dignidad y goce de todos sus derechos en forma prevalente.

La calidad de vida es esencial para su desarrollo integral acorde con la dignidad del ser humano. Este derecho supone la generación de condiciones que les aseguren desde la concepción cuidado, protección, alimentación nutritiva y equilibrada, acceso a los servicios de salud, educación, vestuario adecuado,

recreación y vivienda segura dotada de servicios públicos esenciales en un ambiente sano.

Parágrafo. El Estado desarrollará políticas públicas orientadas hacia el fortalecimiento de la primera infancia.

Artículo 18. *Derecho a la integridad personal.* Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra todas las acciones o conductas que causen muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. En especial, tienen derecho a la protección contra el maltrato y los abusos de toda índole por parte de sus padres, de sus representantes legales, de las personas responsables de su cuidado y de los miembros de su grupo familiar, escolar y comunitario.

Para los efectos de este Código, se entiende por maltrato infantil toda forma de perjuicio, castigo, humillación o abuso físico o psicológico, descuido, omisión o trato negligente, malos tratos o explotación sexual, incluidos los actos sexuales abusivos y la violación, y en general toda forma de violencia o agresión sobre el niño, la niña o el adolescente por parte de sus padres, representantes legales o cualquier otra persona.

Artículo 19. *Derecho a la rehabilitación y la resocialización.* Los niños, las niñas y los adolescentes que hayan cometido una infracción a la ley tienen derecho a la rehabilitación y resocialización, mediante planes y programas garantizados por el Estado e implementados por las instituciones y organizaciones que este determine en desarrollo de las correspondientes políticas públicas.

Artículo 20. *Derechos de protección.* Los niños, las niñas y los adolescentes serán protegidos contra:

1. El abandono físico, emocional y psicoafectivo de sus padres, representantes legales o de las personas, instituciones y autoridades que tienen la responsabilidad de su cuidado y atención.
2. La explotación económica por parte de sus padres, representantes legales, quienes vivan con ellos, o cualquier otra persona. Serán especialmente protegidos contra su utilización en la mendicidad.
3. El consumo de tabaco, sustancias psicoactivas, estupefacientes o alcohólicas, y la utilización, el reclutamiento o la oferta de menores en actividades de promoción, producción, recolección, tráfico, distribución y comercialización.

4. La violación, la inducción, el estímulo y el constreñimiento a la prostitución; la explotación sexual, la pornografía y cualquier otra conducta que atente contra la libertad, integridad y formación sexuales de la persona menor de edad.
5. El secuestro, la venta, la trata de personas y el tráfico y cualquier otra forma contemporánea de esclavitud o de servidumbre.
6. Las guerras y los conflictos armados internos.
7. El reclutamiento y la utilización de los niños por parte de los grupos armados organizados al margen de la ley.
8. La tortura y toda clase de tratos y penas crueles, inhumanos, humillantes y degradantes, la desaparición forzada y la detención arbitraria.
9. La situación de vida en la calle de los niños y las niñas.
10. Los traslados ilícitos y su retención en el extranjero para cualquier fin.
11. El desplazamiento forzado.
12. El trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo es probable que pueda afectar la salud, la integridad y la seguridad o impedir el derecho a la educación.
13. Las peores formas de trabajo infantil, conforme al Convenio 182 de la OIT.
14. El contagio de enfermedades infecciosas prevenibles durante la gestación o después de nacer, o la exposición durante la gestación a alcohol o cualquier tipo de sustancia psicoactiva que pueda afectar su desarrollo físico, mental o su expectativa de vida.
15. Los riesgos y efectos producidos por desastres naturales y demás situaciones de emergencia.
16. Cuando su patrimonio se encuentre amenazado por quienes lo administren.
17. Las minas antipersonal.
18. La transmisión del VIH-SIDA y las infecciones de transmisión sexual.
19. Cualquier otro acto que amenace o vulnere sus derechos.

Artículo 21. *Derecho a la libertad y seguridad personal.* Los niños, las niñas y los adolescentes no podrán ser detenidos ni privados de su libertad, salvo por las causas y con arreglo a los procedimientos previamente definidos en el presente Código.

Artículo 22. *Derecho a tener una familia y a no ser separado de ella*. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a tener y crecer en el seno de la familia, a ser acogidos y no ser expulsados de ella.

Los niños, las niñas y los adolescentes sólo podrán ser separados de la familia cuando ésta no garantice las condiciones para la realización y el ejercicio de sus derechos conforme a lo previsto en este Código. En ningún caso la condición económica de la familia podrá dar lugar a la separación.

Artículo 23. *Custodia y cuidado personal.* Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a que sus padres en forma permanente y solidaria asuman directa y oportunamente su custodia para su desarrollo integral. La obligación de cuidado personal se extiende además a quienes convivan con ellos en los ámbitos familiar, social o institucional, o a sus representantes legales.

Artículo 24. *Derecho a los alimentos.* Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a los alimentos y demás medios para su desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y social, de acuerdo con la capacidad económica del alimentante. Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación o instrucción y, en general, todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. Los alimentos comprenden la obligación de proporcionar a la madre los gastos de embarazo y parto.

Artículo 25. *Derecho a la identidad.* Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a tener una identidad y a conservar los elementos que la constituyen como el nombre, la nacionalidad y filiación conformes a la ley. Para estos efectos deberán ser inscritos inmediatamente después de su nacimiento en el registro del estado civil. Tienen derecho a preservar su lengua de origen, su cultura e idiosincrasia.

Artículo 26. *Derecho al debido proceso.* Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a que se les apliquen las garantías del debido proceso en todas las actuaciones administrativas y judiciales en que se encuentren involucrados.

En toda actuación administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza en que estén involucrados, los niños, las niñas y los adolescentes, tendrán derecho a ser escuchados y sus opiniones deberán ser tenidas en cuenta.

Artículo 27. *Derecho a la salud.* Todos los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la salud integral. La salud es un estado de bienestar físico, psíquico y fisiológico, y no sólo la ausencia de enfermedad. Ningún hospital, clínica, centro de salud y demás entidades dedicadas a la prestación del servicio de salud, sean públicas o privadas, podrán abstenerse de atender a un niño, niña que requiera atención en salud.

En relación con los niños, las niñas y los adolescentes que no figuren como beneficiarios en el régimen contributivo o en el régimen subsidiado, el costo de tales servicios estará a cargo de la nación.

Incurrirán en multa de hasta 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes las autoridades o personas que omitan la atención médica de niños y menores.

Parágrafo 1. Para efectos de la presente ley se entenderá como salud integral la garantía de la prestación de todos los servicios, bienes y acciones, conducentes a la conservación o la recuperación de la salud de los niños, las niñas y los adolescentes.

Parágrafo 2. Para dar cumplimiento efectivo al derecho a la salud integral y mediante el principio de progresividad, el Estado creará el sistema de salud integral para la infancia y la adolescencia, el cual para el año fiscal 2008 incluirá a los niños, las niñas y los adolescentes vinculados, para el año 2009 incluirá a los niños, las niñas y los adolescentes pertenecientes al régimen subsidiado con subsidios parciales, y para el año 2010 incluirá a los demás niños, niñas y adolescentes pertenecientes al régimen subsidiado. Así mismo, para el año 2010 incorporará la prestación del servicio de salud integral a los niños, las niñas y los adolescentes pertenecientes al régimen contributivo de salud.

El gobierno nacional, por medio de las dependencias correspondientes deberá incluir las asignaciones de recursos necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, en el proyecto anual de presupuesto 2008, el plan financiero de mediano plazo y el plan de desarrollo.

Artículo 28. *Derecho a la educación.* Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Ésta será obligatoria por parte del Estado en un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones estatales de acuerdo con los términos establecidos

en la Constitución Política. Incurrirá en multa hasta de 20 salarios mínimos quienes se abstengan de recibir a un niño en los establecimientos públicos de educación.

Artículo 29. *Derecho al desarrollo integral en la primera infancia.* La primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la franja poblacional que va de los cero (0) a los seis (6) años de edad. Desde la primera infancia, los niños y las niñas son sujetos titulares de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la Constitución Política y en este Código. Son derechos impostergables de la primera infancia, la atención en salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la protección contra los peligros físicos y la educación inicial. En el primer mes de vida deberá garantizarse el registro civil de todos los niños y las niñas.

Artículo 30. *Derecho a la recreación, participación en la vida cultural y en las artes.* Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho al descanso, esparcimiento, al juego y demás actividades recreativas propias de su ciclo vital y a participar en la vida cultural y las artes.

Igualmente, tienen derecho a que se les reconozca, respete y fomente el conocimiento y la vivencia de la cultura a la que pertenezcan.

Parágrafo 1. Para armonizar el ejercicio de este derecho con el desarrollo integral de los niños, las autoridades deberán diseñar mecanismos para prohibir el ingreso a establecimientos destinados a juegos de suerte y azar, venta de licores, cigarrillos o productos derivados del tabaco y que ofrezcan espectáculos con clasificación para mayores de edad.

Parágrafo 2. Cuando sea permitido el ingreso a niños menores de 14 años a espectáculos y eventos públicos masivos, las autoridades deberán ordenar a los organizadores la destinación especial de espacios adecuados para garantizar su seguridad personal.

Artículo 31. *Derecho a la participación de los niños, las niñas y los adolescentes.* Para el ejercicio de los derechos y las libertades consagradas en este Código, los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a participar en las actividades que se realicen en la familia, las instituciones educativas, las asociaciones, los programas estatales, departamentales, distritales y municipales que sean de su interés.

El Estado y la sociedad propiciarán la participación activa en organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, cuidado y educación de la infancia y la adolescencia.

Artículo 32. *Derecho de asociación y reunión.* Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho de reunión y asociación con fines sociales, culturales, deportivos, recreativos, religiosos, políticos o de cualquier otra índole, sin más limitación que las que imponen la ley, las buenas costumbres, la salubridad física o mental y el bienestar del menor.

Este derecho comprende especialmente el de formar parte de asociaciones, inclusive de sus órganos directivos, y el de promover y constituir asociaciones conformadas por los niños, las niñas y los adolescentes.

En la eficacia de los actos de los niños, las niñas y los adolescentes se estará a la ley, pero los menores adultos se entenderán habilitados para tomar todas aquellas decisiones propias de la actividad asociativa, siempre que afecten negativamente su patrimonio.

Los impúberes deberán contar con la autorización de sus padres o representantes legales para participar en estas actividades. Esta autorización se extenderá a todos los actos propios de la actividad asociativa. Los padres sólo podrán revocar esta autorización por justa causa.

Artículo 33. *Derecho a la intimidad.* Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la intimidad personal, mediante la protección contra toda injerencia arbitraria o ilegal en su vida privada, la de su familia, domicilio y correspondencia. Así mismo, serán protegidos contra toda conducta, acción o circunstancia que afecte su dignidad.

Artículo 34. *Derecho a la información.* Sujeto a las restricciones necesarias para asegurar el respeto de sus derechos y el de los demás, y para proteger la seguridad, la salud y la moral, los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas a través de los distintos medios de comunicación de que dispongan.

Artículo 35. *Edad mínima de admisión al trabajo y derecho a la protección laboral de los adolescentes autorizados para trabajar.* La edad mínima de admisión al trabajo es los quince (15) años. Para trabajar, los adolescentes entre los 15 y 17 años requieren la respectiva autorización expedida por el Inspector

de Trabajo o, en su defecto, por el Ente Territorial Local y gozarán de las protecciones laborales consagrados en el régimen laboral colombiano, las normas que lo complementan, los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, la Constitución Política y los derechos y las garantías consagrados en este Código.

Los adolescentes autorizados para trabajar tienen derecho a la formación y especialización que los habilite para ejercer libremente una ocupación, arte, oficio o profesión, y a recibirla durante el ejercicio de su actividad laboral.

Parágrafo. Excepcionalmente, los niños y las niñas menores de 15 años podrán recibir autorización de la Inspección de Trabajo, o en su defecto del Ente Territorial Local, para desempeñar actividades remuneradas de tipo artístico, cultural, recreativo y deportivo. La autorización establecerá el número de horas máximas y prescribirá las condiciones en que esta actividad debe llevarse a cabo. En ningún caso el permiso excederá las catorce (14) horas semanales.

Artículo 36. *Derechos de los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad.* Para los efectos de esta ley, la discapacidad se entiende como una limitación física, cognitiva, mental, sensorial o cualquier otra, temporal o permanente de la persona para ejercer una o más actividades esenciales de la vida cotidiana.

Además de los derechos consagrados en la Constitución Política y en los tratados y convenios internacionales, los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad tienen derecho a gozar de una calidad de vida plena, y a que se les proporcionen las condiciones necesarias por parte del Estado para que puedan valerse por sí mismos, e integrarse a la sociedad. Así mismo:

1. Al respeto por la diferencia y a disfrutar de una vida digna en condiciones de igualdad con las demás personas, que les permitan desarrollar al máximo sus potencialidades y su participación activa en la comunidad.
2. Todo niño, niña o adolescente que presente anomalías congénitas o algún tipo de discapacidad, tendrá derecho a recibir atención, diagnóstico, tratamiento especializado, rehabilitación y cuidados especiales en salud, educación, orientación y apoyo a los miembros de la familia o a las personas responsables de

su cuidado y atención. Igualmente, tendrán derecho a la educación gratuita en las entidades especializadas para el efecto.

Corresponderá al gobierno nacional determinar las instituciones de salud y educación que atenderán estos derechos. Al igual que el ente nacional encargado del pago respectivo y del trámite del cobro pertinente.

3. A la habilitación y rehabilitación para eliminar o disminuir las limitaciones en las actividades de la vida diaria.
4. A ser destinatarios de acciones y de oportunidades para reducir su vulnerabilidad y permitir la participación en igualdad de condiciones con las demás personas.

Parágrafo 1. En el caso de los adolescentes que sufren severa discapacidad cognitiva permanente, sus padres o uno de ellos, deberá promover el proceso de interdicción ante la autoridad competente, antes de cumplir aquel la mayoría de edad, para que a partir de ésta se le prorrogue indefinidamente su estado de sujeción a la patria potestad por ministerio de la ley.

Parágrafo 2. Los padres que asuman la atención integral de un hijo discapacitado recibirán una prestación social especial del Estado.

Parágrafo 3. Autorícese al gobierno nacional, a los departamentos y a los municipios para celebrar convenios con entidades públicas y privadas para garantizar la atención en salud y el acceso a la educación especial de los niños, las niñas y los adolescentes con anomalías congénitas o algún tipo de discapacidad.

El Estado garantizará el cumplimiento efectivo y permanente de los derechos de protección integral en educación, salud, rehabilitación y asistencia pública de los adolescentes con discapacidad cognitiva severa profunda, con posterioridad al cumplimiento de los dieciocho (18) años de edad.

Artículo 37. *Libertades fundamentales.* Los niños, las niñas y los adolescentes gozan de las libertades consagradas en la Constitución Política y en los tratados internacionales de derechos humanos. Forman parte de estas libertades el libre desarrollo de la personalidad y la autonomía personal; la libertad de conciencia y de creencias; la libertad de cultos; la libertad de pensamiento; la libertad de locomoción; y la libertad para escoger profesión u oficio.

Título II
Garantía de derechos y prevención

Capítulo I
Obligaciones de la familia, la sociedad y el Estado

Artículo 38. *De las obligaciones de la familia, la sociedad y el Estado.* Además de lo señalado en la Constitución Política y en otras disposiciones legales, serán obligaciones de la familia, la sociedad y el Estado en sus niveles nacional, departamental, distrital y municipal el conjunto de disposiciones que contempla el presente Código.

Artículo 39. *Obligaciones de la familia.* La familia tendrá la obligación de promover la igualdad de derechos, el afecto, la solidaridad y el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y debe ser sancionada. Son obligaciones de la familia para garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes:

1. Protegerles contra cualquier acto que amenace o vulnere su vida, su dignidad y su integridad personal.
2. Participar en los espacios democráticos de discusión, diseño, formulación y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos de interés para la infancia, la adolescencia y la familia.
3. Formarles, orientarles y estimularles en el ejercicio de sus derechos y responsabilidades y en el desarrollo de su autonomía.
4. Inscribirles desde que nacen en el registro civil de nacimiento.
5. Proporcionarles las condiciones necesarias para que alcancen una nutrición y una salud adecuadas, que les permita un óptimo desarrollo físico, psicomotor, mental, intelectual, emocional y afectivo, y educarles en la salud preventiva y en la higiene.
6. Promover el ejercicio responsable de los derechos sexuales y reproductivos, y colaborar con la escuela en la educación sobre este tema.

7. Incluirlos en el sistema de salud y de seguridad social desde el momento de su nacimiento, y llevarlos en forma oportuna a los controles periódicos de salud, a la vacunación y demás servicios médicos.
8. Asegurarles desde su nacimiento el acceso a la educación, y proveer las condiciones y medios para su adecuado desarrollo, garantizando su continuidad y permanencia en el ciclo educativo.
9. Abstenerse de realizar todo acto y conducta que implique maltrato físico, sexual o psicológico, y asistir a los centros de orientación y tratamiento cuando sea requerida.
10. Abstenerse de exponer a los niños, las niñas y los adolescentes a situaciones de explotación económica.
11. Decidir libre y responsablemente el número de hijos e hijas a los que pueda sostener y formar.
12. Respetar las manifestaciones e inclinaciones culturales de los niños, las niñas y los adolescentes, y estimular sus expresiones artísticas y sus habilidades científicas y tecnológicas.
13. Brindarles las condiciones necesarias para la recreación y la participación en actividades deportivas y culturales de su interés.
14. Prevenirles y mantenerles informados sobre los efectos nocivos del uso y el consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales.
15. Proporcionar a los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad un trato digno e igualitario con todos los miembros de la familia y generar condiciones de equidad de oportunidades y autonomía para que puedan ejercer sus derechos. Habilitar espacios adecuados y garantizarles su participación en los asuntos relacionados en su entorno familiar y social.

Parágrafo. En los pueblos indígenas y los demás grupos étnicos las obligaciones de la familia se establecerán de acuerdo con sus tradiciones y culturas, siempre que no sean contrarias a la Constitución Política, la ley y a los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Artículo 40. *Obligaciones de la sociedad.* En cumplimiento de los principios de corresponsabilidad y solidaridad, las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones, las empresas, el comercio organizado, los gremios económicos

y demás personas jurídicas, así como las personas naturales, tienen la obligación y la responsabilidad de tomar parte activa en el logro de la vigencia efectiva de los derechos y garantías de los niños, las niñas y los adolescentes. En este sentido, deberán:

1. Conocer, respetar y promover estos derechos y su carácter prevalente.
2. Responder con acciones que procuren la protección inmediata ante situaciones que amenacen o menoscaben estos derechos.
3. Participar activamente en la formulación, gestión, evaluación, seguimiento y control de las políticas públicas relacionadas con la infancia y la adolescencia.
4. Dar aviso o denunciar por cualquier medio, los delitos o las acciones que los vulneren o amenacen.
5. Colaborar con las autoridades en la aplicación de las disposiciones de la presente ley.
6. Las demás acciones que sean necesarias para asegurar el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.

Artículo 41. *Obligaciones del Estado.* El Estado es el contexto institucional en el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. En cumplimiento de sus funciones en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal deberá:

1. Garantizar el ejercicio de todos los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.
2. Asegurar las condiciones para el ejercicio de los derechos y prevenir su amenaza o afectación a través del diseño y la ejecución de políticas públicas sobre infancia y adolescencia.
3. Garantizar la asignación de los recursos necesarios para el cumplimiento de las políticas públicas de niñez y adolescencia, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal para asegurar la prevalencia de sus derechos.
4. Asegurar la protección y el efectivo restablecimiento de los derechos que han sido vulnerados.
5. Promover la convivencia pacífica en el orden familiar y social.

6. Investigar y sancionar severamente los delitos en los cuales los niños, las niñas y los adolescentes son víctimas, y garantizar la reparación del daño y el restablecimiento de sus derechos vulnerados.
7. Resolver con carácter prevalente los recursos, peticiones o acciones judiciales que presenten los niños, las niñas y los adolescentes, su familia o la sociedad para la protección de sus derechos.
8. Promover en todos los estamentos de la sociedad, el respeto a la integridad física, psíquica e intelectual y el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, y la forma de hacerlos efectivos.
9. Formar a los niños, las niñas y los adolescentes y a las familias en la cultura del respeto a la dignidad, el reconocimiento de los derechos de los demás, la convivencia democrática y los valores humanos, y en la solución pacífica de los conflictos.
10. Apoyar a las familias para que éstas puedan asegurar a sus hijos e hijas desde su gestación, los alimentos necesarios para su desarrollo físico, psicológico e intelectual, por lo menos hasta que cumplan los 18 años de edad.
11. Garantizar y proteger la cobertura y calidad de la atención a las mujeres gestantes y durante el parto; de manera integral durante los primeros cinco (5) años de vida del niño, mediante servicios y programas de atención gratuita de calidad, incluida la vacunación obligatoria contra toda enfermedad prevenible, con agencia de responsabilidad familiar.
12. Garantizar la inscripción y el trámite del registro civil de nacimiento mediante un procedimiento eficaz y gratuito. Para el efecto, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Ministerio de la Protección Social conjuntamente reglamentarán el trámite administrativo que garantice que el niño o la niña salga del centro médico donde nació con su registro civil de nacimiento y certificado de nacido vivo.
13. Garantizar que los niños, las niñas y los adolescentes tengan acceso al Sistema de Seguridad Social en Salud de manera oportuna. Este derecho se hará efectivo mediante afiliación inmediata del recién nacido a uno de los regímenes de ley.
14. Reducir la morbilidad y la mortalidad infantil, prevenir y erradicar la desnutrición, especialmente en los menores de cinco años, y adelantar los progra-

mas de vacunación y prevención de las enfermedades que afectan a la infancia y a la adolescencia y de los factores de riesgo de la discapacidad.

15. Asegurar los servicios de salud y subsidio alimentario definidos en la legislación del sistema de seguridad social en salud para mujeres gestantes y lactantes, familias en situación de debilidad manifiesta, y niños, niñas y adolescentes.
16. Prevenir y atender en forma prevalente las diferentes formas de violencia y todo tipo de accidentes que atenten contra el derecho a la vida y la calidad de vida de los niños, las niñas y los adolescentes.
17 Garantizar las condiciones para que los niños y las niñas desde su nacimiento, tengan acceso a una educación idónea y de calidad, bien sea en instituciones educativas cercanas a su vivienda, o mediante la utilización de tecnologías que garanticen dicho acceso, tanto en los entornos rurales como urbanos.
18. Asegurar los medios y condiciones que les garanticen la permanencia en el sistema educativo y el cumplimiento de su ciclo completo de formación.
19. Garantizar un ambiente escolar respetuoso de la dignidad y los derechos humanos de los niños, las niñas y los adolescentes y desarrollar programas de formación de maestros para la promoción del buen trato.
20. Erradicar del sistema educativo las prácticas pedagógicas discriminatorias o excluyentes y las sanciones que conlleven maltrato, o menoscabo de la dignidad o integridad física, psicológica o moral de los niños, las niñas y los adolescentes.
21. Atender las necesidades educativas específicas de los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad, con capacidades excepcionales y en situaciones de emergencia.
22. Garantizar la etnoeducación para los niños, las niñas y los adolescentes indígenas y de otros grupos étnicos, de conformidad con la Constitución Política y la ley que regule la materia.
23. Diseñar y aplicar estrategias para la prevención y el control de la deserción escolar y para evitar la expulsión de los niños, las niñas y los adolescentes del sistema educativo.
24. Fomentar el deporte, la recreación y las actividades de supervivencia, y facilitar los materiales y útiles necesarios para su práctica regular y continuada.

25. Fomentar la participación en la vida cultural y en las artes, la creatividad y producción artística, científica y tecnológica de niños, niñas y adolescentes, y consagrar recursos especiales para esto.
26. Prevenir y atender la violencia sexual, las violencias dentro de la familia y el maltrato infantil, y promover la difusión de los derechos sexuales y reproductivos.
27. Prestar especial atención a los niños, las niñas y los adolescentes que se encuentren en situación de riesgo, vulneración o emergencia.
28. Protegerlos contra los desplazamientos arbitrarios que los alejen de su hogar o de su lugar de residencia habitual.
29. Asegurar que no sean expuestos a ninguna forma de explotación económica o a la mendicidad, y abstenerse de utilizarlos en actividades militares, operaciones psicológicas, campañas cívico-militares y similares.
30. Protegerlos contra la vinculación y el reclutamiento en grupos armados al margen de la ley.
31. Asegurar alimentos a los niños, las niñas y los adolescentes que se encuentren en procesos de protección y restablecimiento de sus derechos, sin perjuicio de las demás personas que deben prestar alimentos en los términos de la presente ley, y garantizar mecanismos efectivos de exigibilidad y cumplimiento de las obligaciones alimentarias.
32. Erradicar las peores formas de trabajo infantil, el trabajo de los niños y las niñas menores de 15 años, proteger a los adolescentes autorizados para trabajar, y garantizar su acceso y la permanencia en el sistema educativo.
33. Promover estrategias de comunicación educativa para transformar los patrones culturales que toleran el trabajo infantil y resaltar el valor de la educación como proceso fundamental para el desarrollo de la niñez.
34. Asegurar la presencia del niño, la niña o el adolescente en todas las actuaciones que sean de su interés o que los involucren cualquiera sea su naturaleza, adoptar las medidas necesarias para salvaguardar su integridad física y psicológica y garantizar el cumplimiento de los términos señalados en la ley o en los reglamentos frente al debido proceso. Procurar la presencia en dichas actuaciones de sus padres, de las personas responsables o de su representante legal.

35. Buscar y ubicar a la familia de origen o las personas con quienes conviva a la mayor brevedad posible cuando sean menores de edad no acompañados.
36. Garantizar la asistencia de un traductor o un especialista en comunicación cuando las condiciones de edad, discapacidad o cultura de los niños, las niñas o los adolescentes lo exijan.
37. Promover el cumplimiento de las responsabilidades asignadas en el presente Código a los medios de comunicación.

Parágrafo. Esta enumeración no es taxativa y en todo caso el Estado deberá garantizar de manera prevalente el ejercicio de todos los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes consagrados en la Constitución Política, los tratados y convenios internacionales de derechos humanos y en este Código.

Artículo 42. *Obligaciones especiales de las instituciones educativas.* Para cumplir con su misión las instituciones educativas tendrán, entre otras, las siguientes obligaciones:

1. Facilitar el acceso de los niños, las niñas y los adolescentes al sistema educativo y garantizar su permanencia.
2. Brindar una educación pertinente y de calidad.
3. Respetar en toda circunstancia la dignidad de los miembros de la comunidad educativa.
4. Facilitar la participación de los estudiantes en la gestión académica del centro educativo.
5. Abrir espacios de comunicación con los padres de familia para el seguimiento del proceso educativo y propiciar la democracia en las relaciones dentro de la comunidad educativa.
6. Organizar programas de nivelación de los niños y las niñas que presenten dificultades de aprendizaje o estén retrasados en el ciclo escolar, y establecer programas de orientación psicopedagógica y psicológica.
7. Respetar, permitir y fomentar la expresión y el conocimiento de las diversas culturas nacionales y extranjeras, y organizar actividades culturales extracurriculares con la comunidad educativa para tal fin.

8. Estimular las manifestaciones e inclinaciones culturales de los niños, las niñas y los adolescentes, y promover su producción artística, científica y tecnológica.
9. Garantizar la utilización de los medios tecnológicos de acceso y difusión de la cultura, y dotar al establecimiento de una biblioteca adecuada.
10. Organizar actividades conducentes al conocimiento, respeto y conservación del patrimonio ambiental, cultural, arquitectónico y arqueológico nacional.
11. Fomentar el estudio de idiomas nacionales y extranjeros y de lenguajes especiales.
12. Evitar cualquier conducta discriminatoria por razones de sexo, etnia, credo, condición socioeconómica o cualquier otra que afecte el ejercicio de sus derechos.

Artículo 43. *Obligación ética fundamental de los establecimientos educativos.* Las instituciones de educación primaria y secundaria, públicas y privadas, tendrán la obligación fundamental de garantizar a los niños, las niñas y los adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. Para tal efecto, deberán:

1. Formar a los niños, las niñas y losadolescentes en el respeto por los valores fundamentales de la dignidad humana, los derechos humanos, la aceptación, la tolerancia hacia las diferencias entre personas. Para ello deberán inculcar un trato respetuoso y considerado hacia los demás, especialmente hacia quienes presentan discapacidades, especial vulnerabilidad o capacidades sobresalientes.
2. Proteger eficazmente a los niños, las niñas y los adolescentes contra toda forma de maltrato, agresión física o psicológica, humillación, discriminación o burla de parte de los demás compañeros y de los profesores.
3. Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter disuasivo, correctivo y reeducativo para impedir la agresión física o psicológica, los comportamientos de burla, desprecio y humillación hacia niños y adolescentes con dificultades en el aprendizaje, en el lenguaje, o hacia niños y adolescentes con capacidades sobresalientes o especiales.

Artículo 44. *Obligaciones complementarias de las instituciones educativas*. Los directivos y docentes de los establecimientos académicos y la comunidad educativa en general pondrán en marcha mecanismos para:

1. Comprobar la inscripción del registro civil de nacimiento.
2. Establecer la detección oportuna y el apoyo y la orientación en casos de malnutrición, maltrato, abandono, abuso sexual, violencia intrafamiliar, y explotación económica y laboral, las formas contemporáneas de servidumbre y esclavitud, incluidas las peores formas de trabajo infantil.
3. Comprobar la afiliación de los estudiantes a un régimen de salud.
4. Garantizar a los niños, las niñas y los adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar.
5. Proteger eficazmente a los niños, las niñas y los adolescentes contra toda forma de maltrato, agresión física o psicológica, humillación, discriminación o burla de parte de los demás compañeros o profesores.
6. Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter disuasivo, correctivo y reeducativo para impedir la agresión física o psicológica, los comportamientos de burla, desprecio y humillación hacia los niños, las niñas y los adolescentes con dificultades de aprendizaje, en el lenguaje, o hacia niños o adolescentes con capacidades sobresalientes o especiales.
7. Prevenir el tráfico y consumo de todo tipo de sustancias psicoactivas que producen dependencia dentro de las instalaciones educativas, y solicitar a las autoridades competentes acciones efectivas contra el tráfico, venta y consumo alrededor de las instalaciones educativas.
8. Coordinar los apoyos pedagógicos, terapéuticos y tecnológicos necesarios para el acceso y la integración educativa del niño, la niña o el adolescente con discapacidad.
9. Reportar a las autoridades competentes las situaciones de abuso, maltrato o peores formas de trabajo infantil detectadas en niños, niñas y adolescentes.
10. Orientar a la comunidad educativa para la formación en la salud sexual y reproductiva y la vida en pareja.

Artículo 45. *Prohibición de sanciones crueles, humillantes o degradantes.* Los directores y educadores de los centros públicos o privados de educación formal, no formal e informal, no podrán imponer sanciones que conlleven maltrato físico o psicológico de los estudiantes a su cargo, o adoptar medidas que de alguna manera afecten su dignidad. Así mismo, queda prohibida su inclusión bajo cualquier modalidad, en los manuales de convivencia escolar.

Artículo 46. *Obligaciones especiales del Sistema de Seguridad Social en Salud.* Son obligaciones especiales del Sistema de Seguridad Social en Salud para asegurar el derecho a la salud de los niños, las niñas y los adolescentes, entre otras, las siguientes:

1. Diseñar y desarrollar programas de prevención en salud, en especial de vacunación, complementación alimentaria, suplementación nutricional, vigilancia del estado nutricional y mejoramiento de hábitos alimentarios.
2. Diseñar y desarrollar programas de prevención de las infecciones respiratorias agudas, la enfermedad diarreica aguda y otras enfermedades prevalentes de la infancia.
3. Diseñar, desarrollar y promocionar programas que garanticen a las mujeres embarazadas la consejería para la realización de la prueba voluntaria del VIH/SIDA y, en caso de ser positiva, tanto la consejería como el tratamiento antirretroviral y el cuidado y atención para evitar durante el embarazo, parto y posparto la transmisión vertical madre-hijo.
4. Disponer lo necesario para garantizar tanto la prueba VIH/SIDA como el seguimiento y tratamiento requeridos para el recién nacido.
5. Garantizar atención oportuna y de calidad a todos los niños, las niñas y los adolescentes, en especial en los casos de urgencias.
6. Garantizar la actuación inmediata del personal médico y administrativo cuando un niño, una niña o un adolescente se encuentre hospitalizado o requiera tratamiento o intervención quirúrgica, y exista peligro inminente para su vida; carezca de representante legal, o éste se encuentre en situación que le impida dar su consentimiento de manera oportuna o no autorice por razones personales, culturales, de credo o sea negligente; en atención al interés superior del niño, la niña o el adolescente, o a la prevalencia de sus derechos.

7. Garantizar el acceso gratuito de los adolescentes a los servicios especializados de salud sexual y reproductiva.
8. Desarrollar programas para la prevención del embarazo no deseado y la protección especializada y apoyo prioritario a las madres adolescentes.
9. Diseñar y desarrollar programas especializados para asegurar la detección temprana y adecuada de las alteraciones físicas, mentales, emocionales y sensoriales en el desarrollo de los niños, las niñas y los adolescentes, para lo cual capacitará al personal de salud en el manejo y la aplicación de técnicas específicas para su prevención, detección y manejo, y establecerá mecanismos de seguimiento, control y vigilancia de los casos.
10. Capacitar a su personal para detectar el maltrato físico y psicológico, el abuso, la explotación y la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes, y denunciar ante las autoridades competentes las situaciones señaladas y todas aquellas que puedan constituir una conducta punible en que el niño, la niña o el adolescente sea víctima.
11. Diseñar y ofrecer programas encaminados a educar a los niños, las niñas y los adolescentes, a los miembros de la familia y a la comunidad en general en prácticas de higiene y sanidad; en el manejo de residuos sólidos, el reciclaje de basuras y la protección del ambiente.
12. Disponer lo necesario para que todo niño, niña o adolescente que presente anomalías congénitas o algún tipo de discapacidad, tengan derecho a recibir por parte del Estado, atención, diagnóstico, tratamiento especializado y rehabilitación, cuidados especiales de salud, orientación y apoyo a los miembros de la familia o las personas responsables de su cuidado y atención.

Artículo 47. *Responsabilidades especiales de los medios de comunicación.* Los medios de comunicación, en el ejercicio de su autonomía y demás derechos, deberán:

1. Promover, mediante la difusión de información, los derechos y libertades de los niños, las niñas y los adolescentes, así como su bienestar social y su salud física y mental.

2. El respeto por la libertad de expresión y el derecho a la información de los niños, las niñas y los adolescentes.
3. Adoptar políticas para la difusión de información sobre niños, niñas y adolescentes en las cuales se tenga presente el carácter prevalente de sus derechos.
4. Promover la divulgación de información que permita la localización de los padres o personas responsables de niños, niñas o adolescentes cuando por cualquier causa se encuentren separados de ellos, se hayan extraviado o sean solicitados por las autoridades competentes.
5. Abstenerse de transmitir mensajes discriminatorios contra la infancia y la adolescencia.
6. Abstenerse de realizar transmisiones o publicaciones que atenten contra la integridad moral, psíquica o física de los menores, que inciten a la violencia, que hagan apología de hechos delictivos o contravenciones, o que contengan descripciones morbosas o pornográficas.
7. Abstenerse de transmitir por televisión publicidad de cigarrillos y alcohol en horarios catalogados como franja infantil por el organismo competente.
8. Abstenerse de entrevistar, dar el nombre, divulgar datos que identifiquen o que puedan conducir a la identificación de niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas, autores o testigos de hechos delictivos, salvo cuando sea necesario para garantizar el derecho a establecer la identidad del niño o adolescente víctima del delito, o la de su familia si ésta fuere desconocida. En cualquier otra circunstancia, será necesaria la autorización de los padres o, en su defecto, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Parágrafo. Los medios de comunicación serán responsables por la violación de las disposiciones previstas en este artículo. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar podrá hacerse parte en los procesos que por tales violaciones se adelanten contra los medios.

Artículo 48. *Espacios para mensajes de garantía y restablecimiento de derechos.* Los contratos de concesión de los servicios de radiodifusión, televisión y espacios electromagnéticos incluirán la obligación del concesionario de ceder espacios de su programación para transmitir mensajes de garantía y restablecimiento de derechos que para tal fin determine el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dirigidos a los niños, las niñas y los adolescentes y a sus familias.

En alguno de estos espacios, y por lo menos una vez a la semana, se presentarán con nombres completos y foto reciente, las personas que hayan sido condenadas en el último mes por cualquiera de los delitos contemplados en el Título IV, "Delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales", cuando la víctima haya sido un menor de edad.

Artículo 49. *Obligación de la Comisión Nacional de Televisión.* La Comisión Nacional de Televisión o quien haga sus veces garantizará el interés superior de la niñez y la familia, la preservación y ampliación de las franjas infantiles y juveniles, y el contenido pedagógico de dichas franjas que asegure la difusión y conocimiento de los derechos y libertades de los niños, las niñas y los adolescentes consagradas en la presente ley. Así mismo, la Comisión Nacional de Televisión garantizará que en la difusión de programas y materiales emitidos en la franja infantil no se presentarán escenas o mensajes violentos o que hagan apología a la violencia.

Capítulo II
Medidas de restablecimiento de los derechos

Artículo 50. *Restablecimiento de los derechos.* Se entiende por restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, la restauración de su dignidad e integridad como sujetos y de la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los derechos que le han sido vulnerados.

Artículo 51. *Obligación del restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.* El restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas o los adolescentes es responsabilidad del Estado en su conjunto a través de las autoridades públicas, quienes tienen la obligación de informar, oficiar o conducir ante la policía, las defensorías de familia, las comisarías de familia o en su defecto, los inspectores de policía o las personerías municipales o distritales, a todos los niños, las niñas o los adolescentes que se encuentren en condiciones de riesgo o vulnerabilidad. Cuando esto ocurra, la autoridad competente deberá asegurarse de que el sistema nacional de bienestar familiar garantice su vinculación a los servicios sociales.

Artículo 52. *Verificación de la garantía de derechos.* En todos los casos, la autoridad competente deberá, de manera inmediata, verificar el estado de

cumplimiento de cada uno de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, consagrados en el Título I del Libro I del presente Código. Se deberá verificar:

1. El estado de salud física y psicológica.
2. El estado de nutrición y vacunación.
3. La inscripción en el registro civil de nacimiento.
4. La ubicación de la familia de origen.
5. El estudio del entorno familiar y la identificación tanto de elementos protectores como de riesgo para la vigencia de los derechos.
6. La vinculación al sistema de salud y seguridad social.
7. La vinculación al sistema educativo.

Parágrafo 1. De las anteriores actuaciones se dejará constancia expresa, que servirá de sustento para definir las medidas pertinentes para el restablecimiento de los derechos.

Parágrafo 2. Si la autoridad competente advierte la ocurrencia de un posible delito, deberá denunciarlo ante la autoridad penal.

Artículo 53. *Medidas de restablecimiento de derechos.* Son medidas de restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes las que a continuación se señalan. Para el restablecimiento de los derechos establecidos en este Código, la autoridad competente tomará alguna o varias de las siguientes medidas:

1. Amonestación con asistencia obligatoria a curso pedagógico.
2. Retiro inmediato del niño, la niña o el adolescente de la actividad que amenace o vulnere sus derechos, o de las actividades ilícitas en que se pueda encontrar, y ubicación en un programa de atención especializada para el restablecimiento del derecho vulnerado.
3. Ubicación inmediata en medio familiar.
4. Ubicación en centros de emergencia para los casos en que no procede la ubicación en los hogares de paso.

5. La adopción.
6. Además de las anteriores, se aplicarán las consagradas en otras disposiciones legales, o cualquier otra que garantice la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes.
7. Promover las acciones policivas, administrativas o judiciales a que haya lugar.

Parágrafo 1. La autoridad competente deberá asegurar que en todas las medidas provisionales o definitivas de restablecimiento de derechos que se decreten, se garantice el acompañamiento a la familia del niño, la niña o el adolescente que lo requiera.

Parágrafo 2. En el caso de niños, niñas y adolescentes víctimas de desastres naturales u otras situaciones de emergencia, las autoridades tomarán cualquiera de las medidas establecidas en este artículo y las demás que indiquen las autoridades encargadas de la atención de los desastres para la protección de sus derechos.

Artículo 54. *Amonestación.* La medida de amonestación consiste en la conminación a los padres o a las personas responsables del cuidado del niño, la niña o el adolescente sobre el cumplimiento de las obligaciones que les corresponden o que la ley les impone. Comprende la orden perentoria de que cesen las conductas que puedan vulnerar o amenazar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, con la obligación de asistir a un curso pedagógico sobre derechos de la niñez, a cargo de la Defensoría del Pueblo, so pena de multa convertible en arresto.

Artículo 55. *Incumplimiento de la medida.* El incumplimiento de las obligaciones impuestas en la diligencia de amonestación, acarreará a los infractores la sanción de multa equivalente al valor de uno (1) a cien (100) salarios mínimos diarios legales vigentes, convertibles en arresto a razón de un (1) día por cada salario diario mínimo legal vigente de multa. Esta sanción será impuesta por el defensor de familia.

Artículo 56. *Ubicación en familia de origen o familia extensa.* Es la ubicación del niño, la niña o el adolescente con sus padres, o parientes de acuerdo con lo establecido en el artículo 61 del Código Civil, cuando éstos ofrezcan las condiciones para garantizarles el ejercicio de sus derechos.

Si de la verificación del estado de sus derechos se desprende que la familia carece de recursos económicos necesarios para garantizarle el nivel de vida adecuado, la autoridad competente informará a las entidades del sistema nacional de bienestar familiar, para que le brinden a la familia los recursos adecuados mientras ella puede garantizarlos.

Artículo 57. *Ubicación en hogar de paso.* La ubicación en hogar de paso es la ubicación inmediata y provisional del niño, la niña o el adolescente con familias que forman parte de la red de hogares de paso. Procede la medida cuando no aparezcan los padres, parientes o las personas responsables de su cuidado y atención.

La ubicación en Hogar de Paso es una medida transitoria, y su duración no podrá exceder de ocho (8) días hábiles, término en el cual la autoridad competente debe decretar otra medida de protección.

Artículo 58. *Red de Hogares de Paso.* Se entiende por Red de Hogares de Paso el grupo de familias registradas en el programa de protección de los niños, las niñas y los adolescentes, que están dispuestas a acogerlos, de manera voluntaria y subsidiada por el Estado, en forma inmediata, para brindarles el cuidado y atención necesarios.

En todos los distritos, municipios y territorios indígenas del territorio nacional, los gobernadores, los alcaldes, con la asistencia técnica del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, organizarán las redes de hogares de paso y establecerán el registro, el reglamento, los recursos, los criterios de selección, y los controles y mecanismos de seguimiento y vigilancia de las familias, de acuerdo con los principios establecidos en este Código.

Artículo 59. *Ubicación en Hogar Sustituto*. Es una medida de protección provisional que toma la autoridad competente y consiste en la ubicación del niño, niña o adolescente en una familia que se compromete a brindarle el cuidado y atención necesarios en sustitución de la familia de origen.

Esta medida se decretará por el menor tiempo posible de acuerdo con las circunstancias y los objetivos que se persiguen sin que pueda exceder de seis (6) meses. El defensor de familia podrá prorrogarla, por causa justificada, hasta por un término igual al inicial, previo concepto favorable del jefe jurídico de la Dirección Regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En ningún caso podrá

otorgarse a personas residentes en el exterior ni podrá salir del país el niño, la niña o el adolescente sujeto a esta medida de protección, sin autorización expresa de la autoridad competente.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar asignará un aporte mensual al hogar sustituto para atender exclusivamente a los gastos del niño, la niña o el adolescente. Mientras dure la medida el Instituto se subrogará en los derechos contra toda persona que por ley deba alimentos al niño, niña o adolescente. En ningún caso se establecerá relación laboral entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y los responsables del hogar sustituto.

Parágrafo. En el caso de niños, niñas y adolescentes indígenas, se propenderá como primera opción, la ubicación del menor en una familia indígena. El ICBF asegurará a dichas familias indígenas el aporte mensual de que trata este artículo.

Artículo 60. *Vinculación a programas de atención especializada para el restablecimiento de derechos vulnerados*. Cuando un niño, una niña o un adolescente sea víctima de cualquier acto que vulnere sus derechos de protección, de su integridad personal, o sea víctima de un delito, o cuando se trate de una adolescente o mujer mayor de 18 años embarazada, deberán vincularse a un programa de atención especializada que asegure el restablecimiento de sus derechos.

Parágrafo 1. La especialización de los programas debe definirse a partir de estudios diagnósticos que permitan determinar la naturaleza y el alcance de los mismos. Los programas deberán obedecer a las problemáticas sociales que afectan a los niños, las niñas y los adolescentes, y ser formulados en el marco de las políticas públicas de infancia y adolescencia dentro del sistema nacional de bienestar familiar.

Parágrafo 2. El gobierno nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar expedirán la reglamentación correspondiente al funcionamiento y operación de las casas de madres gestantes y los programas de asistencia y cuidado a mujeres con embarazos no deseados de que trata el presente artículo, durante los 12 meses siguientes a la expedición de la presente ley.

Artículo 61. *Adopción*. La adopción es, principalmente y por excelencia, una medida de protección a través de la cual, bajo la suprema vigilancia del Estado, se establece de manera irrevocable, la relación paterno-filial entre personas que no la tienen por naturaleza.

Artículo 62. *La autoridad central en materia de adopción*. La autoridad central en materia de adopción es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Solamente podrán desarrollar programas de adopción, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las instituciones debidamente autorizadas por éste.

Artículo 63. *Procedencia de la adopción*. Sólo podrán adoptarse los menores de 18 años declarados en situación de adoptabilidad, o aquellos cuya adopción haya sido consentida previamente por sus padres.

Si el menor tuviere bienes, la adopción se hará con las formalidades exigidas para los guardadores.

Artículo 64. *Efectos jurídicos de la adopción*. La adopción produce los siguientes efectos:

1. Adoptante y adoptivo adquieren, por la adopción, los derechos y obligaciones de padre o madre e hijo.
2. La adopción establece parentesco civil entre el adoptivo y el adoptante, que se extiende en todas las líneas y grados a los consanguíneos, adoptivos o afines de éstos.
3. El adoptivo llevará como apellidos los de los adoptantes. En cuanto al nombre, sólo podrá ser modificado cuando el adoptado sea menor de tres (3) años, o consienta en ello, o el juez encontrare justificadas las razones de su cambio.
4. Por la adopción, el adoptivo deja de pertenecer a su familia y se extingue todo parentesco de consanguinidad, bajo reserva del impedimento matrimonial del ordinal 9 del artículo 140 del Código Civil.
5. Si el adoptante es el cónyuge o compañero permanente del padre o madre de sangre del adoptivo, tales efectos no se producirán respecto de este último, con el cual conservará los vínculos en su familia.

Artículo 65. *Acciones de reclamación*. Nadie podrá ejercer acción alguna para establecer la filiación consanguínea del adoptivo, ni reconocerle como hijo.

Sin embargo, el adoptivo podrá promover en cualquier tiempo las acciones de reclamación del estado civil que le corresponda respecto de sus padres biológicos, únicamente para demostrar que quienes pasaban por tales, al momento de la adopción, no lo eran en realidad.

La prosperidad de las pretensiones del adoptivo en este caso, no extinguirá los efectos de la adopción, salvo declaración judicial que la ordene y previo el consentimiento del adoptivo. El adoptante deberá ser oído en el proceso.

Artículo 66. *Del consentimiento.* El consentimiento es la manifestación informada, libre y voluntaria de dar en adopción a un hijo o hija por parte de quienes ejercen la patria potestad ante el defensor de familia, quien los informará ampliamente sobre sus consecuencias jurídicas y psicosociales. Este consentimiento debe ser válido civilmente e idóneo constitucionalmente. Para que el consentimiento sea válido debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Que esté exento de error, fuerza y dolo, y tenga causa y objeto lícitos.
2. Que haya sido otorgado previa información y asesoría suficientes sobre las consecuencias psicosociales y jurídicas de la decisión.

Es idóneo constitucionalmente cuando quien da el consentimiento ha sido debida y ampliamente informado, asesorado y tiene aptitud para otorgarlo. Se entenderá tener aptitud para otorgar el consentimiento un mes después del día del parto.

A efectos del consentimiento para la adopción, se entenderá la falta del padre o la madre, no solamente cuando ha fallecido, sino también cuando lo aqueja una enfermedad mental o grave anomalía psíquica certificada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

No tendrá validez el consentimiento que se otorgue para la adopción del hijo que está por nacer. Tampoco lo tendrá el consentimiento que se otorgue en relación con adoptantes determinados, salvo cuando el adoptivo fuere pariente del adoptante hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o que fuere hijo del cónyuge o compañero permanente del adoptante.

Quien o quienes expresan su consentimiento para la adopción podrán revocarlo dentro del mes siguiente a su otorgamiento.

Los adolescentes deberán recibir apoyo psicosocial especializado por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que puedan permanecer con su hijo o hija, o para otorgar el consentimiento libre e informado. El consentimiento del padre o madre menor de dieciocho (18) años tendrá validez si se

manifiesta con el lleno de los requisitos establecidos en el presente artículo. En este caso estarán asistidos por sus padres, o personas que los tengan bajo su cuidado y por el Ministerio Público.

Artículo 67. *Solidaridad familiar*. El Estado reconocerá el cumplimiento del deber de solidaridad que ejerce la familia diferente a la de origen, que asume la protección de manera permanente de un niño, una niña o un adolescente, y le ofrece condiciones adecuadas para el desarrollo armónico e integral de sus derechos. En tal caso no se modifica el parentesco.

Parágrafo. Si alguna persona o pareja quiere adoptar al niño que está al cuidado de la familia distinta a la de origen y cumple con las condiciones de adoptabilidad que exige el Código, podrá hacerlo, a menos que la familia que tiene el cuidado del niño, la niña o el adolescente, decida adoptarlo.

Artículo 68. *Requisitos para adoptar.* Podrá adoptar quien, siendo capaz, haya cumplido 25 años de edad, tenga al menos 15 años más que el adoptable, y garantice idoneidad física, mental, moral y social suficiente para suministrar una familia adecuada y estable al niño, la niña o el adolescente. Estas mismas calidades se exigirán a quienes adopten conjuntamente. Podrán adoptar:

1. Las personas solteras.
2. Los cónyuges conjuntamente.
3. Conjuntamente los compañeros permanentes que demuestren una convivencia ininterrumpida de por lo menos dos (2) años. Este término se contará a partir de la sentencia de divorcio, si con respecto a quienes conforman la pareja o a uno de ellos, hubiera estado vigente un vínculo matrimonial anterior.
4. El guardador al pupilo o ex pupilo una vez aprobadas las cuentas de su administración.
5. El cónyuge o compañero permanente, al hijo del cónyuge o compañero, que demuestre una convivencia ininterrumpida de por lo menos dos (2) años.

Esta norma no se aplicará en cuanto a la edad en el caso de adopción por parte del cónyuge o compañero permanente respecto del hijo de su cónyuge

o compañero permanente o de un pariente dentro del tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

Parágrafo 1. La existencia de hijos no es obstáculo para la adopción.

Parágrafo 2. Si el niño, la niña o el adolescente tuviere bienes, la adopción se hará con las formalidades exigidas para los guardadores.

Artículo 69. *Adopción de mayores de edad.* Podrá adoptarse al mayor de edad, cuando el adoptante hubiera tenido su cuidado personal y haber convivido bajo el mismo techo con él, por lo menos dos años antes de que éste cumpliera los dieciocho (18) años.

La adopción de mayores de edad procede por el sólo consentimiento entre el adoptante y el adoptivo. Para estos eventos el proceso se adelantará ante un juez de Familia.

Artículo 70. *Adopción de niño, niña o adolescente indígena*. Atendiendo las facultades jurisdiccionales de las autoridades indígenas, la adopción de un niño, una niña o un adolescente indígena cuando los adoptantes sean miembros de su propia comunidad procederá de acuerdo con sus usos y costumbres.

Cuando los adoptantes sean personas que no pertenecen a la comunidad del niño, la niña o el adolescente indígena, la adopción procederá mediante consulta previa y con el concepto favorable de las autoridades de la comunidad de origen, y se realizará de acuerdo con lo establecido en el presente Código.

Artículo 71. *Prelación para adoptantes colombianos.* El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las instituciones autorizadas por este para adelantar el programa de adopción, preferirán, en igualdad de condiciones, las solicitudes presentadas por los y las colombianas, cuando llenen los requisitos establecidos en el presente Código. Si hay una familia colombiana residente en el país o en el exterior y una extranjera, se preferirá a la familia colombiana, y si hay dos familias extranjeras una de un país no adherido a la Convención de La Haya o a otro convenio de carácter bilateral o multilateral en el mismo sentido y otra sí, se privilegiará aquella del país firmante del convenio respectivo.

Artículo 72. *Adopción Internacional*. Además de las disposiciones anteriores, la adopción internacional se regirá por los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia sobre esta materia.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como autoridad central, autorizará a los organismos acreditados y agencias internacionales, previo el cumplimiento de los requisitos señalados en la ley y los convenios internacionales ratificados por Colombia, y teniendo en cuenta la necesidad del servicio. El Ministerio del Interior y de Justicia reconocerá personería jurídica e inscribirá a sus representantes legales.

Tanto las agencias internacionales como los organismos acreditados deberán renovar la autorización ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cada dos años.

Artículo 73. *Programa de adopción*. Por programa de adopción se entiende el conjunto de actividades tendientes a restablecer el derecho del niño, la niña o el adolescente a tener una familia.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a través del Comité de Adopción en cada Regional y Agencia, y las Instituciones Autorizadas por este para desarrollar el Programa de Adopción a través de su Comité de Adopción, serán la instancia responsable de la selección de las familias colombianas y extranjeras adoptantes y de la asignación de los niños, las niñas y los adolescentes adoptables.

En la asignación de familia que realice el Comité de Adopción, se dará prelación a las familias colombianas de conformidad con lo establecido en el artículo 70 de este Código. El incumplimiento de esta norma dará lugar a las sanciones disciplinarias del caso e invalidará la citada asignación.

Parágrafo 1. Las instituciones autorizadas para desarrollar el programa de adopción garantizarán plenamente los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes susceptibles de ser adoptados, mientras permanezcan bajo su cuidado y no podrán entregarlos a persona alguna sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Código.

Parágrafo 2. *Integración de los comités de adopciones***.** Los Comités de Adopciones del ICBF y de las instituciones autorizadas, estarán integrados por el director regional del ICBF o su delegado, el director de la institución o su delegado, un trabajador social, un psicólogo y por las demás personas que designen, según sea el caso, el ICBF o las juntas directivas de las instituciones.

Parágrafo 3. Los requisitos de acreditación para agencias o instituciones que presten servicios de adopción internacional deberán incluir la presentación de pruebas que indiquen una sólida situación financiera y un sistema efectivo de control financiero interno, así como auditoría externa. Se exigirá a estas entidades que mantengan estados contables, para ser sometidas a supervisión de la autoridad, incluyendo una declaración detallada de los costes y gastos promedio asociados a las distintas categorías de adopciones.

La información concerniente a los costes, gastos y honorarios que cobren las agencias o instituciones por la provisión de servicios de adopción internacional deberá ser puesta a disposición del público.

Artículo 74. *Prohibición de pago*. Ni el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ni las instituciones autorizadas por éste para desarrollar el programa de adopción, podrán cobrar directa o indirectamente retribución alguna por la entrega de un niño, una niña o un adolescente para ser adoptado. En ningún caso podrá darse recompensa a los padres por la entrega que hagan de sus hijos para ser dados en adopción ni ejercer sobre ellos presión alguna para obtener su consentimiento. Tampoco podrán recibir donaciones de familias adoptantes previamente a la adopción.

Quedan absolutamente prohibidas las donaciones de personas naturales o instituciones extranjeras a las instituciones colombianas como retribución por la entrega de niños, niñas o adolescentes en adopción.

Parágrafo. Sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar, el incumplimiento de esta disposición acarreará la destitución del funcionario infractor, o la cancelación de la autorización para adelantar el programa de adopción si el hecho se hubiere cometido por una institución autorizada.

Artículo 75. *Reserva*. Todos los documentos y actuaciones administrativas o judiciales propios del proceso de adopción, serán reservados por el término de veinte (20) años a partir de la ejecutoria de la sentencia judicial. De ellos sólo se podrá expedir copia de la solicitud que los adoptantes hicieren directamente, a través de su apoderado o del defensor de familia o del adoptivo que hubiere llegado a la mayoría de edad, la Procuraduría General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través de su Oficina de Control Interno

Disciplinario, la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura a través de su Sala Jurisdiccional Disciplinaria, para efectos de investigaciones penales o disciplinarias a que hubiere lugar.

Parágrafo 1. El adoptado, no obstante, podrá acudir ante el Tribunal Superior correspondiente, mediante apoderado o asistido por el defensor de familia, según el caso, para solicitar que se ordene el levantamiento de la reserva y el acceso a la información.

Parágrafo 2. El funcionario que viole la reserva, permita el acceso o expida copia a personas no autorizadas, incurrirá en causal de mala conducta.

Artículo 76. *Derecho del adoptado a conocer familia y origen.* Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, todo adoptado tiene derecho a conocer su origen y el carácter de su vínculo familiar. Los padres juzgarán el momento y las condiciones en que no resulte desfavorable para el niño, la niña o el adolescente conocer dicha información.

Artículo 77. *Sistema de información de restablecimiento de derechos*. Créase el sistema de información de restablecimiento de derechos a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que tiene como finalidad llevar el registro de los niños, las niñas y los adolescentes cuyos derechos se denuncian como amenazados o vulnerados. Dicho registro incluirá la medida de restablecimiento adoptada, el funcionario que adelantó la actuación y el término de duración del proceso.

Este sistema tendrá un registro especial para el desarrollo del programa de adopción.

Artículo 78. *Requisitos de acreditación*. Los requisitos de acreditación para organismos o agencias internacionales que presten servicios de adopción internacional deberán incluir la presentación de pruebas que indiquen una sólida situación financiera y un sistema efectivo de control financiero interno, así como auditoría externa. Se exigirá a los organismos acreditados y agencias internacionales que mantengan estados contables actualizados, para ser sometidos a la supervisión de la autoridad central tanto del Estado Receptor, como del Estado de Origen.

Capítulo III
Autoridades competentes para el restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes

Artículo 79. *Defensorías de Familia*. Son dependencias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de naturaleza multidisciplinaria, encargadas de prevenir, garantizar y restablecer los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.

Las Defensorías de Familia contarán con equipos técnicos interdisciplinarios integrados, por lo menos, por un psicólogo, un trabajador social y un nutricionista.

Los conceptos emitidos por cualquiera de los integrantes del equipo técnico tendrán el carácter de dictamen pericial.

Artículo 80. *Calidades para ser defensor de familia*. Para ser defensor de familia se requieren las siguientes calidades:

1. Ser abogado en ejercicio y con tarjeta profesional vigente.
2. No tener antecedentes penales ni disciplinarios.
3. Acreditar título de posgrado en derecho de familia, derecho civil, derecho administrativo, derecho constitucional, derecho procesal, derechos humanos, o en ciencias sociales siempre y cuando en este último caso el estudio de la familia sea un componente curricular del programa.

Artículo 81. *Deberes del defensor de familia*. Son deberes del defensor de familia:

1. Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para impedir la paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran.
2. Hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso, usando los poderes que este Código le otorga.
3. Prevenir, remediar y sancionar por los medios que señala la ley, los actos contrarios a la dignidad de la justicia, lealtad, probidad y buena fe que deben observarse en el proceso, lo mismo que toda tentativa de fraude procesal.

4. Emplear las facultades que esta ley le otorga en materia de pruebas, siempre que estime conducente y pertinente para verificar los hechos alegados por las partes y evitar nulidades y providencias inhibitorias.
5. Guardar reserva sobre las decisiones que deban dictarse en los procesos, so pena de incurrir en mala conducta. El mismo deber rige para los servidores públicos de la Defensoría de Familia.
6. Dictar las providencias dentro de los términos legales; resolver los procesos en el orden en que hayan ingresado a su despacho, salvo prelación legal; fijar las audiencias y diligencias en la oportunidad legal, y asistir a ellas.

Parágrafo. La violación de los deberes de que trata el presente artículo constituye falta que se sancionará de conformidad con el respectivo régimen disciplinario.

Artículo 82. *Funciones del defensor de familia*. Corresponde al defensor de familia:

1. Adelantar de oficio, las actuaciones necesarias para prevenir, proteger, garantizar y restablecer los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes y las adolescentes cuando tenga información sobre su vulneración o amenaza.
2. Adoptar las medidas de restablecimiento establecidas en la presente ley para detener la violación o amenaza de los derechos de los niños, las niñas o los adolescentes.
3. Emitir los conceptos ordenados por la ley, en las actuaciones judiciales o administrativas.
4. Ejercer las funciones de policía señaladas en este Código.
5. Dictar las medidas de restablecimiento de los derechos para los niños y las niñas menores de catorce (14) años que cometan delitos.
6. Asumir la asistencia y protección del adolescente responsable de haber infringido la ley penal ante el juez penal para adolescentes.
7. Conceder permiso para salir del país a los niños, las niñas y los adolescentes, cuando no sea necesaria la intervención del juez.
8. Promover la conciliación extrajudicial en los asuntos relacionados con derechos y obligaciones entre cónyuges, compañeros permanentes, padres e

hijos, miembros de la familia o personas responsables del cuidado del niño, la niña o el adolescente.

9. Aprobar las conciliaciones en relación con la asignación de la custodia y cuidado personal del niño, el establecimiento de las relaciones materno o paterno filiales, la determinación de la cuota alimentaria, la fijación provisional de residencia separada, la suspensión de la vida en común de los cónyuges o compañeros permanentes, la separación de cuerpos y de bienes del matrimonio civil o religioso, las cauciones de comportamiento conyugal, la disolución y liquidación de sociedad conyugal por causa distinta de la muerte del cónyuge y los demás aspectos relacionados con el régimen económico del matrimonio y los derechos sucesorales, sin perjuicio de la competencia atribuida por la ley a los notarios.
10. Citar al presunto padre con miras al reconocimiento voluntario del hijo extramatrimonial nacido o que esté por nacer y, en caso de producirse, extender el acta respectiva y ordenar la inscripción o corrección del nombre en el registro del estado civil.
11. Promover los procesos o trámites judiciales a que haya lugar en defensa de los derechos de los niños, las niñas o los adolescentes, e intervenir en los procesos en que se discutan derechos de éstos, sin perjuicio de la actuación del Ministerio Público y de la representación judicial a que haya lugar.
12. Representar a los niños, las niñas o los adolescentes en las actuaciones judiciales o administrativas, cuando carezcan de representante, o éste se halle ausente o incapacitado, o sea el agente de la amenaza o vulneración de derechos.
13. Fijar cuota provisional de alimentos, siempre que no se logre conciliación.
14. Declarar la situación de adoptabilidad en que se encuentre el niño, la niña o el adolescente.
15. Autorizar la adopción en los casos previstos en la ley.
16. Formular denuncia penal cuando advierta que el niño, la niña o el adolescente ha sido víctima de un delito.
17. Ejercer las funciones atribuidas por el artículo 71 de la Ley 906 de 2004.
18. Asesorar y orientar al público en materia de derechos de la infancia, la adolescencia y la familia.

19. Solicitar la inscripción del nacimiento de un niño, la corrección, modificación o cancelación de su registro civil, ante la Dirección Nacional de Registro Civil de las personas, siempre y cuando dentro del proceso administrativo de restablecimiento de sus derechos se pruebe que el nombre y sus apellidos no corresponden a la realidad de su estado civil y a su origen biológico, sin necesidad de acudir a la jurisdicción de familia.

Artículo 83. *Comisarías de familia.* Son entidades distritales o municipales o intermunicipales de carácter administrativo e interdisciplinario, que forman parte del sistema nacional de bienestar familiar, cuya misión es prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar y las demás establecidas por la ley.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como entidad coordinadora del sistema nacional de bienestar familiar será el encargado de dictar la línea técnica a las Comisarías de Familia en todo el país.

Artículo 84. *Creación, composición y reglamentación*. Todos los municipios contarán al menos con una Comisaría de Familia según la densidad de la población y las necesidades del servicio. Su creación, composición y organización corresponde a los Concejos Municipales.

Las Comisarías de Familia estarán conformadas como mínimo por un abogado, quien asumirá la función de comisario, un psicólogo, un trabajador social, un médico, un secretario, en los municipios de mediana y mayor densidad de población. Las Comisarías tendrán el apoyo permanente de la Policía Nacional. El gobierno nacional reglamentará la materia con el fin de determinar dichos municipios.

En los municipios en donde no fuere posible garantizar el equipo mencionado en el inciso anterior, la Comisaría estará apoyada por los profesionales que trabajen directa o indirectamente con la infancia y la familia, como los profesores y psicopedagogos de los colegios, los médicos y enfermeras del hospital y los funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Parágrafo 1. Las entidades territoriales podrán suscribir convenios de asociación con el objeto de adelantar acciones de propósito común para garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes,

de acuerdo con lo previsto en las leyes 136 de 1994 y 715 de 2001, o las que las modifiquen.

Parágrafo 2. Los municipios tendrán un término improrrogable de un (1) año a partir de la vigencia de esta ley, para crear la Comisaría de Familia. El incumplimiento de esta obligación será causal de mala conducta sancionada de acuerdo con lo establecido en el Código Disciplinario Único.

Artículo 85. *Calidades para ser comisario de familia*. Para ser comisario de Familia se requieren las mismas calidades que para ser Defensor de Familia.

Artículo 86. *Funciones del comisario de familia*. Corresponde al comisario de familia:

1. Garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar.
2. Atender y orientar a los niños, las niñas y los adolescentes y demás miembros del grupo familiar en el ejercicio y restablecimiento de sus derechos.
3. Recibir denuncias y adoptar las medidas de emergencia y de protección necesarias en casos de delitos contra los niños, las niñas y los adolescentes.
4. Recibir denuncias y tomar las medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar.
5. Definir provisionalmente sobre la custodia y cuidado personal, la cuota de alimentos y la reglamentación de visitas, la suspensión de la vida en común de los cónyuges o compañeros permanentes y fijar las cauciones de comportamiento conyugal, en las situaciones de violencia intrafamiliar.
6. Practicar rescates para conjurar las situaciones de peligro en que pueda encontrarse un niño, una niña o un adolescente, cuando la urgencia del caso lo demande.
7. Desarrollar programas de prevención en materia de violencia intrafamiliar y delitos sexuales.
8. Adoptar las medidas de restablecimiento de derechos en los casos de maltrato infantil y denunciar el delito.
9. Aplicar las medidas policivas que correspondan en casos de conflictos familiares, conforme a las atribuciones que les confieran los Concejos Municipales.

Artículo 87. *Atención permanente*. Los horarios de atención de las Defensorías de Familia y Comisarías de Familia serán permanentes y continuos, a fin de asegurar a los niños, las niñas y los adolescentes la protección y restablecimiento de sus derechos. El Estado deberá desarrollar todos los mecanismos que se requieran para dar cumplimiento a esta disposición.

Artículo 88. *Misión de la Policía Nacional.* La Policía Nacional es una entidad que integra el sistema nacional de bienestar familiar. Su misión como miembro del sistema, es garantizar la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes en el marco de las competencias y funciones que le asigna la ley. Tendrá como cuerpo especializado a la Policía de Infancia y Adolescencia que reemplazará a la Policía de Menores.

Artículo 89. *Funciones de la Policía Nacional para garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.* Sin perjuicio de las funciones atribuidas en otras leyes en relación con los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, la Policía Nacional y en especial la Policía de Infancia y Adolescencia, tendrán las siguientes funciones:

1. Cumplir y hacer cumplir las normas y decisiones que para la protección de los niños, las niñas y los adolescentes impartan los organismos del Estado.
2. Diseñar y ejecutar programas y campañas de educación, prevención, garantía y restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes en todo el territorio nacional.
3. Adelantar labores de vigilancia y control en los lugares de recreación y deporte y demás espacios públicos en donde habitualmente concurran niños, niñas y adolescentes y a la entrada de los establecimientos educativos de su jurisdicción.
4. Adelantar labores de vigilancia a fin de controlar e impedir el ingreso de los niños, las niñas y los adolescentes a los lugares de diversión destinados al consumo de bebidas alcohólicas y cigarrillos, y hacer cumplir la prohibición de venta de estos productos.
5. Adelantar labores de vigilancia a fin de controlar e impedir el ingreso de niños, niñas y adolescentes a los lugares en donde se ejerza la explotación sexual, se realicen espectáculos no aptos para niños, niñas o adolescentes, a

salas de juego de azar y lugares públicos o privados de alto riesgo que ofrezcan peligro para su integridad física y/o moral, y tomar las medidas a que haya lugar.

6. Adelantar labores de vigilancia a fin de prevenir, controlar e impedir la entrada de menores de catorce (14) años a las salas de juegos electrónicos.
7. Controlar e impedir el ingreso de niños, niñas y adolescentes a salas de cine, teatros o similares donde se presenten espectáculos con clasificación para mayores y el alquiler de películas de video clasificadas para adultos.
8. Adelantar labores de vigilancia a fin de controlar el porte de armas de fuego o cortopunzantes, bebidas embriagantes, pólvora, estupefacientes y material pornográfico, por parte de niños, niñas o adolescentes, así como de elementos que puedan atentar contra su integridad, y proceder a su incautación.
9. Diseñar programas de prevención para los adultos sobre el porte y uso responsable de armas de fuego, de bebidas embriagantes, de pólvora, de juguetes bélicos y de cigarrillos cuando conviven o están acompañados de niños, niñas o adolescentes.
10. Brindar apoyo a las autoridades judiciales, los defensores y comisarios de familia, personeros municipales e inspectores de policía en las acciones de policía y protección de los niños, las niñas y los adolescentes y de su familia, y trasladarlos cuando sea procedente, a los hogares de paso o a los lugares en donde se desarrollen los programas de atención especializada de acuerdo con la orden emitida por estas autoridades. Es obligación de los centros de atención especializada recibir a los niños, las niñas o los adolescentes que sean conducidos por la Policía.
11. Apoyar al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), y demás autoridades competentes, en la vigilancia permanente del tránsito de niños, niñas y adolescentes en terminales de transporte terrestre, aéreo y marítimo.
12. Realizar labores de inteligencia para combatir las redes dedicadas a la producción, tráfico o comercialización de sustancias psicoactivas ilegales que produzcan dependencia, a la distribución y comercialización de pornografía infantil a través de Internet o cualquier otro medio, al tráfico o a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, o a cualquier otra actividad que atente contra sus derechos.

13. Adelantar acciones para la detección de niños, niñas y adolescentes que realicen trabajos prohibidos, cualesquiera de las peores formas de trabajo infantil, o que estén en situación de explotación y riesgo, y denunciar el hecho ante la autoridad competente.
14. Recibir las quejas y denuncias de la ciudadanía sobre amenazas o vulneraciones de los derechos del niño, la niña o el adolescente, actuar de manera inmediata para garantizar los derechos amenazados y para prevenir su vulneración cuando sea del caso, o correr traslado a las autoridades competentes.
15. Garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes en todos los procedimientos policiales.
16. Adelantar labores de vigilancia y control de las instituciones encargadas de ejecutar las sanciones establecidas en el presente Código, a fin de garantizar la seguridad de los niños, las niñas y los adolescentes, y evitar su evasión.
17. Prestar la logística necesaria para el traslado de niños, niñas y adolescentes a juzgados, centros hospitalarios, previniendo y controlando todo tipo de alteración que desarrollen los menores, garantizando el normal desarrollo de los niños, las niñas, los adolescentes y la institución.

Artículo 90. *Obligación en formación y capacitación*. La Dirección General de la Policía Nacional creará e integrará en el programa académico de las escuelas de formación de la Policía, para ingreso y ascensos, con carácter obligatorio, la formación y capacitación en derechos de la infancia y la adolescencia, desarrollo infantil, normas nacionales e internacionales relacionadas y procedimientos de atención y protección integral a los niños, las niñas y los adolescentes.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en coordinación con la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional organizarán los cursos necesarios para capacitar los miembros de la Policía de Infancia y Adolescencia.

La Policía Nacional capacitará a la Policía de Infancia y Adolescencia en formación de Policía Judicial con el objeto de que éstos asesoren y apoyen a las autoridades cuando los niños, las niñas y los adolescentes se encuentren incursos en algún hecho delictivo, de acuerdo con las necesidades del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes vigente.

Artículo 91. *Organización*. El director general de la Policía Nacional definirá la estructura de la Policía de Infancia y Adolescencia, que en todo caso deberá tener un encargado que dependerá directamente de la Dirección de Protección y Servicios Especiales que a su vez dependerá del subdirector general y con presencia efectiva en los comandos de departamento, metropolitanas, estaciones y organismos especializados.

Artículo 92. *Calidades de la Policía de Infancia y Adolescencia.* Además de los requisitos establecidos en la ley y en los reglamentos, el personal de la Policía de Infancia y Adolescencia deberá tener estudios profesionales en áreas relacionadas con las ciencias humanas y sociales, tener formación y capacitación en derechos humanos y legislación de la infancia y la adolescencia, en procedimientos de atención y en otras materias que le permitan la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes.

Salvo circunstancias excepcionales determinadas por la Dirección General de la Policía, los miembros de la Policía de Infancia y Adolescencia que hayan sido seleccionados y capacitados en la especialidad, no podrán ser destinados a actividades diferentes a las señaladas en el presente Código.

Parágrafo. La Policía de Infancia y Adolescencia deberá asesorar a los mandos policiales sobre el comportamiento de la institución, desempeño y cumplimiento en los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes y proponer alternativas de mejoramiento particular y general, de acuerdo con las funciones asignadas en este Código.

Artículo 93. *Control disciplinario.* Sin perjuicio de la competencia preferente de la Procuraduría General de la Nación consagrada en el artículo 277 de la Constitución Política, y de las acciones penales a que haya lugar, la Inspección General de la Policía Nacional se encargará de adelantar los procesos disciplinarios relacionados con infracciones a las disposiciones de este Código, cometidas por los miembros de la Policía Nacional.

Artículo 94. *Prohibiciones especiales.* Se prohíbe la conducción de niños, niñas y adolescentes mediante la utilización de esposas o cualquier otro medio que atente contra su dignidad.

Igualmente, se prohíbe el uso de armas para impedir o conjurar la evasión del niño, la niña o el adolescente que es conducido ante autoridad competente,

salvo que sea necesario para proteger la integridad física del encargado de su conducción ante la amenaza de un peligro grave e inminente.

La infracción a esta disposición será causal de mala conducta.

Artículo 95. *El Ministerio Público.* El Ministerio Público está integrado por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, y las personerías distritales y municipales, y tendrá a su cargo, además de las señaladas en la Constitución Política y en la ley, las siguientes funciones:

1. Promover, divulgar, proteger y defender los Derechos Humanos de la infancia en las instituciones públicas y privadas con énfasis en el carácter prevalente de sus derechos, de su interés superior y sus mecanismos de protección frente a amenazas y vulneraciones.
2. Promover el conocimiento y la formación de los niños, las niñas y los adolescentes para el ejercicio responsable de sus derechos.
3. Tramitar de oficio o por solicitud de cualquier persona, las peticiones y quejas relacionadas con amenazas o vulneraciones de derechos de los niños, las niñas y los adolescentes y su contexto familiar, y abogar en forma oportuna, inmediata e informal, porque la solución sea eficaz y tenga en cuenta su interés superior y la prevalencia de los derechos.
4. Hacer las observaciones y recomendaciones a las autoridades y a los particulares en caso de amenaza o violación de los derechos humanos de los niños, las niñas y los adolescentes.

Parágrafo. Las personerías distritales y municipales deberán vigilar y actuar en todos los procesos judiciales y administrativos de restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, en aquellos municipios en los que no haya procuradores judiciales de familia. Así mismo, deberán inspeccionar, vigilar y controlar a los alcaldes para que dispongan en sus planes de desarrollo, el presupuesto que garantice los derechos y los programas de atención especializada para su restablecimiento.

Los procuradores judiciales de familia obrarán en todos los procesos judiciales y administrativos, en defensa de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, y podrán impugnar las decisiones que se adopten.

Capítulo IV
Procedimiento administrativo y reglas especiales

Artículo 96. *Autoridades competentes*. Corresponde a los defensores de familia y comisarios de familia procurar y promover la realización y restablecimiento de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la Constitución Política y en el presente Código.

El seguimiento de las medidas de protección o de restablecimiento adoptadas por los defensores y comisarios de familia estará a cargo del respectivo coordinador del centro zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Artículo 97. *Competencia territorial.* Será competente la autoridad del lugar donde se encuentre el niño, la niña o el adolescente; pero cuando se encuentre fuera del país, será competente la autoridad del lugar en donde haya tenido su última residencia dentro del territorio nacional.

Artículo 98. *Competencia subsidiaria.* En los municipios donde no haya defensor de familia, las funciones que este Código le atribuye serán cumplidas por el comisario de familia. En ausencia de este último, las funciones asignadas al defensor y al comisario de familia corresponderán al inspector de policía.

La declaratoria de adoptabilidad del niño, la niña o el adolescente corresponde exclusivamente al defensor de familia.

Artículo 99. *Iniciación de la actuación administrativa*. El representante legal del niño, la niña o el adolescente, o la persona que lo tenga bajo su cuidado o custodia, podrá solicitar, ante el defensor o comisario de familia o en su defecto ante el inspector de policía, la protección de los derechos de aquel. También podrá hacerlo directamente el niño, la niña o el adolescente.

Cuando el defensor o el comisario de familia o, en su caso, el inspector de policía tenga conocimiento de la inobservancia, vulneración o amenaza de alguno de los derechos que este Código reconoce a los niños, las niñas y los adolescentes, abrirá la respectiva investigación, siempre que sea de su competencia; en caso contrario avisará a la autoridad competente.

En la providencia de apertura de investigación se deberá ordenar:

1. La identificación y citación de los representantes legales del niño, la niña o el adolescente, de las personas con quienes conviva o sean responsables de su

cuidado, o de quienes de hecho lo tuvieren a su cargo, y de los implicados en la violación o amenaza de los derechos.
2. Las medidas provisionales de urgencia que requiera la protección integral del niño, niña o adolescente.
3. La práctica de las pruebas que estime necesarias para establecer los hechos que configuran la presunta vulneración o amenaza de los derechos del niño, la niña o el adolescente.

Artículo 100. *Trámite*. Cuando se trate de asuntos que puedan conciliarse, el defensor o el comisario de familia o, en su caso, el inspector de policía citará a las partes, por el medio más expedito, a audiencia de conciliación que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al conocimiento de los hechos. Si las partes concilian se levantará acta y en ella se dejará constancia de lo conciliado y de su aprobación.

Fracasado el intento de conciliación, o transcurrido el plazo previsto en el inciso anterior sin haberse realizado la audiencia, y cuando se trate de asuntos que no la admitan, el funcionario citado procederá a establecer mediante resolución motivada las obligaciones de protección al menor, incluyendo la obligación provisional de alimentos, visitas y custodia.

El funcionario correrá traslado de la solicitud, por cinco días, a las demás personas interesadas o implicadas en la solicitud, para que se pronuncien y aporten las pruebas que deseen hacer valer. Vencido el traslado decretará las pruebas que estime necesarias, fijará audiencia para practicarlas con sujeción a las reglas del procedimiento civil, y en ella fallará mediante resolución susceptible de reposición. Este recurso deberá interponerse verbalmente en la audiencia por quienes asistieron en la misma, y para quienes no asistieron a la audiencia se les notificará por estado y podrán interponer el recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil.

Resuelto el recurso de reposición o vencido el término para interponerlo, el expediente deberá ser remitido al juez de familia para homologar el fallo, si dentro de los cinco días siguientes a su ejecutoria alguna de las partes o el Ministerio Público lo solicita con expresión de las razones en que se funda la inconformidad, el juez resolverá en un término no superior a 10 días.

Parágrafo 1. Cuando lo estime aconsejable para la averiguación de los hechos, el defensor, el comisario de familia o, en su caso, el inspector de policía, podrán ordenar que el equipo técnico interdisciplinario de la Defensoría o de la Comisaría, o alguno de sus integrantes, rinda dictamen pericial.

Parágrafo 2. En todo caso, la actuación administrativa deberá resolverse dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud o a la apertura oficiosa de la investigación, y el recurso de reposición que contra el fallo se presente deberá ser resuelto dentro de los diez días siguientes al vencimiento del término para interponerlo. Vencido el término para fallar o para resolver el recurso de reposición sin haberse emitido la decisión correspondiente, la autoridad administrativa perderá competencia para seguir conociendo del asunto y remitirá inmediatamente el expediente al juez de familia para que, de oficio, adelante la actuación o el proceso respectivo. Cuando el juez reciba el expediente deberá informarlo a la Procuraduría General de la Nación para que se promueva la investigación disciplinaria a que haya lugar.

Excepcionalmente, y por solicitud razonada del defensor, el comisario de familia o, en su caso, el inspector de policía, el director regional podrá ampliar el término para fallar la actuación administrativa hasta por dos meses más, contados a partir del vencimiento de los cuatro meses iniciales, sin que exista en ningún caso nueva prórroga.

Artículo 101. *Contenido del fallo*. La resolución deberá contener una síntesis de los hechos en que se funda, el examen crítico de las pruebas y los fundamentos jurídicos de la decisión.

Cuando contenga una medida de restablecimiento deberá señalarla concretamente, explicar su justificación e indicar su forma de cumplimiento, la periodicidad de su evaluación y los demás aspectos que interesen a la situación del niño, la niña o el adolescente. La resolución obliga a los particulares y a las autoridades prestadoras de servicios requeridos para la ejecución inmediata de la medida.

Artículo 102. *Citaciones y notificaciones*. La citación ordenada en la providencia de apertura de investigación se practicará en la forma prevista en el Código de Procedimiento Civil para la notificación personal, siempre que se conozca la identidad y la dirección de las personas que deban ser citadas. Cuando se ignore la identidad o la dirección de quienes deban ser citados, la citación se

realizará mediante publicación en una página de Internet del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por tiempo no inferior a cinco días, o por transmisión en un medio masivo de comunicación, que incluirá una fotografía del niño, si fuere posible.

Las providencias que se dicten en el curso de las audiencias y diligencias se consideran notificadas en estrados inmediatamente después de proferidas, aun cuando las partes no hayan concurrido.

Las demás notificaciones se surtirán mediante aviso que se remitirá por medio de servicio postal autorizado, acompañado de una copia de la providencia correspondiente.

Artículo 103. *Carácter transitorio de las medidas*. La autoridad administrativa que haya adoptado las medidas de protección previstas en este Código podrá modificarlas o suspenderlas cuando esté demostrada la alteración de las circunstancias que dieron lugar a ellas. La resolución que así lo disponga se notificará en la forma prevista en el inciso 3 del artículo anterior y estará sometida a la impugnación y al control judicial establecidos para la que impone las medidas.

Este artículo no se aplicará cuando se haya homologado por el juez la declaratoria de adoptabilidad o decretado la adopción.

Artículo 104. *Comisión y poder de investigación*. Con miras a la protección de los derechos reconocidos en este Código, los defensores de familia, el comisario o, en su defecto, el inspector de policía podrán comisionar a las autoridades administrativas que cumplan funciones de policía judicial, para la práctica de pruebas fuera de su sede, en la forma prevista en el Código de Procedimiento Civil.

Con el mismo propósito, los citados funcionarios también podrán solicitar información al respectivo pagador y a la Dirección de Impuestos Nacionales sobre la solvencia de las personas obligadas a suministrar alimentos.

Parágrafo. El defensor, el comisario de familia o, en su caso, el inspector de policía podrán sancionar con multa de uno a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes, a los particulares que rehúsen o retarden el trámite de las solicitudes formuladas en ejercicio de las funciones que esta ley les atribuye. Si el renuente fuere servidor público, además se dará aviso al respectivo superior y a la Procuraduría General de la Nación.

Artículo 105. *Entrevista del niño, la niña o el adolescente*. El defensor o el comisario de familia entrevistará al niño, la niña o el adolescente para establecer sus condiciones individuales y las circunstancias que lo rodean.

Artículo 106. *Allanamiento y rescate*. Siempre que el defensor o el comisario de familia tengan indicios de que un niño, una niña o un adolescente se halla en situación de peligro, que comprometa su vida o integridad personal, procederá a su rescate con el fin de prestarle la protección necesaria. Cuando las circunstancias lo aconsejen practicará allanamiento al sitio donde el niño, la niña o el adolescente se encuentre, siempre que le sea negado el ingreso después de haber informado sobre su propósito, o no haya quien se lo facilite. Es obligación de la fuerza pública prestarle el apoyo que para ello solicite.

De lo ocurrido en la diligencia deberá levantarse acta.

Artículo 107. *Contenido de la declaratoria de adoptabilidad o de vulneración de derechos*. En la resolución que declare la situación de adoptabilidad o de vulneración de derechos del niño, la niña o el adolescente, se ordenará una o varias de las medidas de restablecimiento consagradas en este Código.

En la misma resolución se indicará la cuota mensual que deberán suministrar los padres o las personas de quienes dependa el niño, la niña o el adolescente, para su sostenimiento mientras se encuentre bajo una medida de restablecimiento, cuando a ello haya lugar.

Parágrafo 1. Dentro de los veinte días siguientes a la ejecutoria de la resolución que declara la adoptabilidad podrán oponerse las personas a cuyo cargo estuviere el cuidado, la crianza y educación del niño, la niña o el adolescente, aunque no lo hubieren hecho durante la actuación administrativa. Para ello deberán expresar las razones en que se fundan y aportar las pruebas que sustentan la oposición.

Parágrafo 2. Para garantizar la adecuada atención del niño, la niña o el adolescente en el seno de su familia, el defensor de familia podrá disponer que los padres o las personas a cuyo cargo se encuentre, cumplan algunas de las siguientes actividades:

1. Asistencia a un programa oficial o comunitario de orientación o de tratamiento familiar.

2. Asistencia a un programa de asesoría, orientación o tratamiento de alcohólicos o adictos a sustancias que produzcan dependencia.
3. Asistencia a un programa de tratamiento psicológico o psiquiátrico.
4. Cualquiera otra actividad que contribuya a garantizar el ambiente adecuado para el desarrollo del niño, la niña o el adolescente.

Artículo 108. *Homologación de la declaratoria de adoptabilidad*. Cuando se declare la adoptabilidad de un niño, una niña o un adolescente habiendo existido oposición en la actuación administrativa, y cuando la oposición se presente en la oportunidad prevista en el parágrafo primero del artículo anterior, el defensor de familia deberá remitir el expediente al juez de Familia para su homologación.

En los demás casos la resolución que declare la adoptabilidad producirá, respecto de los padres, la terminación de la patria potestad del niño, la niña o el adolescente adoptable y deberá ser inscrita en el libro de varios de la notaría o de la oficina de registro civil.

Artículo 109. *Reconocimiento de paternidad*. Cuando el padre extramatrimonial reconozca, ante el defensor, el comisario de familia o el inspector de policía, la paternidad de un niño, una niña o un adolescente, se levantará acta y se ordenará su inscripción en el registro del estado civil.

Artículo 110. *Permiso para salir del país*. La autorización del defensor de familia para la salida del país de un niño, una niña o un adolescente, cuando carezca de representante legal, se desconozca su paradero o no se encuentre en condiciones de otorgarlo, se sujetará a las siguientes reglas:

1. Legitimación. La solicitud podrá ser formulada por quien tenga el cuidado personal del niño, la niña o el adolescente.
2. Requisitos de la solicitud. La solicitud deberá señalar los hechos en que se funda y el tiempo de permanencia del niño, la niña o el adolescente en el exterior. Con ella deberá acompañarse el registro civil de nacimiento y la prueba de los hechos alegados.
3. Trámite. Presentada la solicitud, el defensor de familia ordenará citar a los padres o al representante legal que no la hayan suscrito.

Si dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación o al emplazamiento ninguno de los citados se opone, el funcionario practicará las pruebas que estime necesarias, si a ello hubiere lugar, y decidirá sobre el permiso solicitado.

En firme la resolución que concede el permiso, el defensor de familia remitirá copia de ella al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la División de Extranjería del Departamento Administrativo de Seguridad. El permiso tendrá vigencia por sesenta días hábiles contados a partir de su ejecutoria.

En caso de que oportunamente se presente oposición a la solicitud de permiso, el defensor de familia remitirá el expediente al juez de familia, y por medio de telegrama avisará a los interesados para que comparezcan al juzgado que corresponda por reparto.

Parágrafo 1. Cuando un niño, una niña o un adolescente vaya a salir del país con uno de los padres o con una persona distinta a los representantes legales deberá obtener previamente el permiso de aquel con quien no viajare o el de aquellos, debidamente autenticado ante notario o autoridad consular. Dicho permiso deberá contener el lugar de destino, el propósito del viaje y la fecha de salida e ingreso de nuevo al país.

No se requerirá autorización de los padres a quienes se les haya suspendido o privado de la patria potestad.

Parágrafo 2. El defensor de familia otorgará de plano permiso de salida del país:

- A los niños, las niñas o los adolescentes que ingresan al programa de víctimas y testigos de la Fiscalía General de la Nación.
- A los niños, las niñas o los adolescentes desvinculados o testigos en procesos penales, cuando corre grave peligro su vida y su integridad personal.
- A los niños, las niñas o los adolescentes que van en misión deportiva, científica o cultural.
- A los niños, las niñas o los adolescentes cuando requieren viajar por razones de tratamientos médicos de urgencia al exterior.

Artículo 111. *Alimentos*. Para la fijación de cuota alimentaria se observarán las siguientes reglas:

1. La mujer grávida podrá reclamar alimentos a favor del hijo que está por nacer, respecto del padre legítimo o del extramatrimonial que haya reconocido la paternidad.
2. Siempre que se conozca la dirección donde puede recibir notificaciones el obligado a suministrar alimentos, el defensor o comisario de familia lo citará a audiencia de conciliación. En caso contrario, elaborará informe que suplirá la demanda y lo remitirá al juez de familia para que inicie el respectivo proceso. Cuando habiendo sido debidamente citado a la audiencia el obligado no haya concurrido, o habiendo concurrido no se haya logrado la conciliación, fijará cuota provisional de alimentos, pero sólo se remitirá el informe al juez si alguna de las partes lo solicita dentro de los cinco días hábiles siguientes.
3. Cuando se logre conciliación se levantará acta en la que se indicará: el monto de la cuota alimentaria y la fórmula para su reajuste periódico; el lugar y la forma de su cumplimento; la persona a quien debe hacerse el pago, los descuentos salariales, las garantías que ofrece el obligado y demás aspectos que se estimen necesarios para asegurar el cabal cumplimiento de la obligación alimentaria. De ser el caso, la autoridad promoverá la conciliación sobre custodia, régimen de visitas y demás aspectos conexos.
4. Lo dispuesto en este artículo se aplicará también al ofrecimiento de alimentos a los niños, las niñas o los adolescentes.
5. El procedimiento para la fijación de la cuota alimentaria será el especial previsto actualmente en el Decreto 2737 de 1989.

Artículo 112. *Restitución internacional de los niños, las niñas o los adolescentes*. Los niños, las niñas o los adolescentes indebidamente retenidos por uno de sus padres, o por personas encargadas de su cuidado o por cualquier otro organismo en el exterior o en Colombia, serán protegidos por el Estado colombiano contra todo traslado ilícito u obstáculo indebido para regresar al país. Para tales efectos se dará aplicación a la Ley 173 de 1994 aprobatoria del Convenio sobre aspectos civiles del secuestro internacional de niños, suscrito en La Haya el 25 de octubre de 1980, a la Ley 620 de 2000[1] aprobatoria de la Convención Interame-

[1] Hoy Ley 880 de 2004.

ricana sobre restitución internacional de menores, suscrita en Montevideo el 15 de julio de 1989, y a las demás normas que regulen la materia.

Para los efectos de este artículo actuará como autoridad central el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La autoridad central, por intermedio del defensor de familia, adelantará las actuaciones tendientes a la restitución voluntaria del niño, la niña o el adolescente y decretará las medidas de restablecimiento de derechos a que haya lugar.

Artículo 113. *Autorización de trabajo para los adolescentes*. Corresponde al inspector de trabajo expedir por escrito la autorización para que un adolescente pueda trabajar, a solicitud de los padres, del respectivo representante legal o del defensor de familia. A falta del inspector del trabajo la autorización será expedida por el comisario de familia y en defecto de este por el alcalde municipal.

La autorización estará sujeta a las siguientes reglas:

1. Deberá tramitarse conjuntamente entre el empleador y el adolescente.
2. La solicitud contendrá los datos generales de identificación del adolescente y del empleador, los términos del contrato de trabajo, la actividad que va a realizar, la jornada laboral y el salario.
3. El funcionario que concedió el permiso deberá efectuar una visita para determinar las condiciones de trabajo y la seguridad para la salud del trabajador.
4. Para obtener la autorización se requiere la presentación del certificado de escolaridad del adolescente y si éste no ha terminado su formación básica, el empleador procederá a inscribirlo y, en todo caso, a facilitarle el tiempo necesario para continuar el proceso educativo o de formación, teniendo en cuenta su orientación vocacional.
5. El empleador debe obtener un certificado de estado de salud del adolescente trabajador.
6. La autorización de trabajo o empleo para adolescentes indígenas será conferida por las autoridades tradicionales de la respectiva comunidad teniendo en cuenta sus usos y costumbres. En su defecto, la autorización será otorgada por el inspector del trabajo o por la primera autoridad del lugar.

7. El empleador debe dar aviso inmediato a la autoridad que confirió la autorización, cuando se inicie y cuando termine la relación laboral.

Parágrafo. La autorización para trabajar podrá ser negada o revocada en caso de que no se den las garantías mínimas de salud, seguridad social y educación del adolescente.

Artículo 114. *Jornada de trabajo.* La duración máxima de la jornada laboral de los adolescentes autorizados para trabajar se sujetará a las siguientes reglas:

1. Los adolescentes mayores de 15 y menores de 17 años, sólo podrán trabajar en jornada diurna máxima de seis horas diarias y treinta horas a la semana y hasta las 6:00 de la tarde.
2. Los adolescentes mayores de diecisiete (17) años, sólo podrán trabajar en una jornada máxima de ocho horas diarias y 40 horas a la semana y hasta las 8:00 de la noche.

Artículo 115. *Salario*. Los adolescentes autorizados para trabajar tendrán derecho a un salario de acuerdo con la actividad desempeñada y proporcional al tiempo trabajado. En ningún caso la remuneración podrá ser inferior al salario mínimo legal vigente.

Artículo 116. *Derechos en caso de maternidad*. Sin perjuicio de los derechos consagrados en el Capítulo V del Título VIII del Código Sustantivo del Trabajo, la jornada de la adolescente mayor de quince (15) y menor de dieciocho (18) años, no podrá exceder de cuatro horas diarias a partir del séptimo mes de gestación y durante la lactancia, sin disminución de su salario y prestaciones sociales.

Artículo 117. *Prohibición de realizar trabajos peligrosos y nocivos*. Ninguna persona menor de 18 años podrá ser empleada o realizar trabajos que impliquen peligro o que sean nocivos para su salud e integridad física o psicológica o los considerados como peores formas de trabajo infantil. El Ministerio de la Protección Social, en colaboración con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, establecerán la clasificación de dichas actividades de acuerdo con el nivel de peligro y nocividad que impliquen para los adolescentes autorizados para trabajar y la publicarán cada dos años periódicamente en distintos medios

de comunicación. Para la confección o modificación de estas listas, el Ministerio consultará y tendrá en cuenta a las organizaciones de trabajadores y de empleadores, así como a las instituciones y asociaciones civiles interesadas, teniendo en cuenta las recomendaciones de los instrumentos e instancias internacionales especializadas.

Artículo 118. *Garantías especiales para el adolescente indígena autorizado para trabajar.* En los procesos laborales en que sea demandante un adolescente indígena será obligatoria la intervención de las autoridades de su respectivo pueblo. Igualmente, se informará a la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior o de la dependencia que haga sus veces.

Capítulo V
Procedimiento judicial y reglas especiales

Artículo 119. *Competencia del juez de familia en única instancia.* Sin perjuicio de las competencias asignadas por otras leyes, corresponde al juez de familia, en única instancia:

1. La homologación de la resolución que declara la adoptabilidad de niños, niñas o adolescentes.
2. La revisión de las decisiones administrativas proferidas por el defensor de familia o el comisario de familia, en los casos previstos en esta ley.
3. De la restitución internacional de niños, niñas y adolescentes.
4. Resolver sobre el restablecimiento de derechos cuando el defensor o el comisario de familia haya perdido competencia.

Parágrafo. Los asuntos regulados en este Código deberían ser tramitados con prelación sobre los demás, excepto los de tutela y hábeas corpus, y en todo caso el fallo deberá proferirse dentro de los dos meses siguientes al recibo de la demanda, del informe o del expediente, según el caso. El incumplimiento de dicho término constituye causal de mala conducta.

Artículo 120. *Competencia del juez municipal.* El juez civil municipal o promiscuo municipal conocerá de los asuntos que la presente ley atribuye al juez de familia, en única instancia en los lugares donde no exista éste.

Artículo 121. *Iniciación del proceso y adopción de medidas urgentes*. Los asuntos a que se refiere esta ley se iniciarán a instancia del defensor de familia, del representante legal del niño, la niña o el adolescente, o de la persona que lo tenga bajo su cuidado. El juez podrá iniciarlos también de oficio.

Al momento de iniciar el proceso el juez deberá adoptar las medidas de urgencia que la situación amerite para proteger los derechos del niño, la niña o el adolescente.

Artículo 122. *Acumulación de pretensiones y pronunciamiento oficioso*. Podrán acumularse en una misma demanda pretensiones relacionadas con uno o con varios niños, niñas o adolescentes, respecto de los mismos padres, representantes legales, o personas que los tengan bajo su cuidado, siempre que el juez sea competente para conocer de todas.

El juez deberá pronunciarse sobre todas las situaciones establecidas en el proceso que comprometan los intereses del niño, la niña o el adolescente, aunque no hubieren sido alegadas por las partes y cuando todas ellas puedan tramitarse por el mismo procedimiento.

Artículo 123. *Homologación de la declaratoria de adoptabilidad.* La sentencia de homologación de la declaratoria de adoptabilidad se dictará de plano; producirá, respecto de los padres, la terminación de la patria potestad del niño, la niña o el adolescente adoptable y deberá ser inscrita en el libro de varios de la notaría o de la Oficina de Registro del Estado Civil.

Si el juez advierte la omisión de alguno de los requisitos legales, ordenará devolver el expediente al defensor de familia para que lo subsane.

Artículo 124. *Adopción*. Es competente para conocer el proceso de adopción en primera instancia el juez de familia del domicilio de la persona o entidad a cuyo cargo se encuentre el niño, la niña o el adolescente. La demanda sólo podrá ser formulada por los interesados en ser declarados adoptantes, mediante apoderado.

A la demanda se acompañarán los siguientes documentos:

1. El consentimiento para la adopción, si fuere el caso.
2. La copia de la declaratoria de adoptabilidad o de la autorización para la adopción, según el caso.

3. El registro civil de nacimiento de los adoptantes y el del niño, la niña o el adolescente.
4. El registro civil de matrimonio o la prueba de la convivencia extramatrimonial de los adoptantes.
5. La certificación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o de una entidad autorizada para el efecto, sobre la idoneidad física, mental, social y moral de los adoptantes, expedida con antelación no superior a seis meses, y la constancia de la entidad respectiva sobre la integración personal del niño, la niña o el adolescente con el adoptante o adoptantes.
6. El certificado vigente de antecedentes penales o policivos de los adoptantes.
7. La certificación actualizada sobre la vigencia de la licencia de funcionamiento de la institución donde se encuentre albergado el niño, la niña o el adolescente, expedida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
8. La aprobación de cuentas del curador, si procede.

Parágrafo. Para los fines de la adopción, la convivencia extramatrimonial podrá probarse por cualquiera de los medios siguientes:

1. Inscripción del compañero o compañera permanente en los registros de las Cajas de Compensación Familiar o de las instituciones de seguridad o previsión social.
2. Inscripción de la declaración de convivencia que haga la pareja, en la Notaría del lugar del domicilio de la misma, con antelación no menor de dos años.
3. El Registro Civil de Nacimiento de los hijos habidos por la pareja.

Cuando se trate de compañeros permanentes residentes en el exterior, la convivencia extramatrimonial se probará de conformidad con la legislación del país de residencia de los solicitantes.

Artículo 125. *Requisitos adicionales para adoptantes extranjeros*. Cuando los adoptantes sean extranjeros que residan fuera del país, deberán aportar, además, los siguientes documentos:

1. Certificación expedida por la entidad gubernamental o privada oficialmente autorizada, donde conste el compromiso de efectuar el seguimiento del niño,

la niña o el adolescente adoptable hasta su nacionalización en el país de residencia de los adoptantes.
2. Autorización del gobierno del país de residencia de los adoptantes para el ingreso del niño, la niña o el adolescente adoptable.
3. Concepto favorable a la adopción, emitido por el defensor de familia con base en la entrevista que efectúe con los adoptantes y el examen de la documentación en que la entidad autorizada para efectuar programas de adopción recomienda a los adoptantes.

Parágrafo. Los documentos necesarios para la adopción serán autenticados conforme a las normas del Código de Procedimiento Civil, y no requieren de ratificación ulterior. Si no estuvieren en español, deberán acompañarse de su traducción, efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores por un traductor oficialmente autorizado.

Artículo 126. *Reglas especiales del procedimiento de adopción.* En los procesos de adopción se seguirán las siguientes reglas especiales:

1. Admitida la demanda se correrá el traslado al defensor de familia por el término de tres (3) días hábiles. Si el defensor se allanare a ella, el juez dictará sentencia dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su admisión.
   El juez podrá señalar un término de máximo diez (10) días para decretar y practicar las pruebas que considere necesarias. Vencido este término, tomará la decisión correspondiente.
2. Suspensión del proceso. Se podrá solicitar la suspensión del proceso hasta por un término de tres meses improrrogables, siempre que exista causa justificada. Pueden solicitar la suspensión o reanudación del proceso los adoptantes o el defensor de familia.
3. Terminación anticipada del proceso. Cuando falleciere el solicitante de la adopción antes de proferirse la sentencia el proceso terminará.

Si la solicitud de adopción fuere conjunta y uno de los adoptantes falleciere antes de proferirse la sentencia, el proceso continuará con el sobreviviente si

manifiesta su intención de persistir en ella, caso en el cual la sentencia que se profiera solo surtirá efectos respecto de este; en caso contrario el proceso terminará.

4. Notificación de la sentencia. Por lo menos uno de los adoptantes deberá concurrir personalmente al juzgado a recibir notificación de la sentencia.
5. Contenido y efectos de la sentencia. La sentencia que decrete la adopción deberá contener los datos necesarios para que su inscripción en el registro civil constituya el acta de nacimiento y reemplace la de origen, la cual se anulará. Una vez en firme se inscribirá en el Registro del Estado Civil y producirá todos los derechos y obligaciones propios de la relación paterno o materno-filial, desde la fecha de presentación de la demanda. En todo caso, en la sentencia deberá omitirse mencionar el nombre de los padres de sangre.

La sentencia que decrete la adopción podrá ser apelada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial, de conformidad con el trámite establecido en el Código de Procedimiento Civil, en donde intervendrá el defensor de familia.

Artículo 127. *Seguridad social de los adoptantes y adoptivos*. El padre y la madre adoptantes de un menor tendrán derecho al disfrute y pago de la licencia de maternidad establecida en el numeral 4 del artículo 34 la Ley 50 de 1990 y demás normas que rigen la materia, la cual incluirá también la licencia de paternidad consagrada en la Ley 755 de 2002, incluyendo el pago de la licencia a los padres adoptantes.

Los menores adoptivos tendrán derecho a ser afiliados a la correspondiente EPS o ARS, desde el momento mismo de su entrega a los padres adoptantes por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Artículo 128. *Requisito para la salida del país*. El niño, la niña o el adolescente adoptado sólo podrá salir del país cuando la sentencia que decrete la adopción esté ejecutoriada. Las autoridades de emigración exigirán copia de la providencia con la constancia de ejecutoria.

Artículo 129. *Alimentos*. En el auto que corre traslado de la demanda o del informe del defensor de familia, el juez fijará cuota provisional de alimentos, siempre que haya prueba del vínculo que origina la obligación alimentaria. Si no tiene la prueba sobre la solvencia económica del alimentante, el juez podrá establecerla tomando en cuenta su patrimonio, posición social, costumbres y en

general todos los antecedentes y circunstancias que sirvan para evaluar su capacidad económica. En todo caso se presumirá que devenga al menos el salario mínimo legal.

La sentencia podrá disponer que los alimentos se paguen y aseguren mediante la constitución de un capital cuya renta los satisfaga. En tal caso, si el obligado no cumple la orden dentro de los diez días hábiles siguientes, el juez procederá en la forma indicada en el inciso siguiente.

El juez deberá adoptar las medidas necesarias para que el obligado cumpla lo dispuesto en el auto que fije la cuota provisional de alimentos, en la conciliación o en la sentencia que los señale. Con dicho fin decretará embargo, secuestro, avalúo y remate de los bienes o derechos de aquél, los cuales se practicarán con sujeción a las reglas del proceso ejecutivo.

El embargo se levantará si el obligado paga las cuotas atrasadas y presta caución que garantice el pago de las cuotas correspondientes a los dos años siguientes.

Cuando se trate de arreglo privado o de conciliación extrajudicial, con la copia de aquél o del acta de la diligencia el interesado podrá adelantar proceso ejecutivo ante el juez de familia para el cobro de las cuotas vencidas y las que en lo sucesivo se causen.

Cuando se tenga información de que el obligado a suministrar alimentos ha incurrido en mora de pagar la cuota alimentaria por más de un mes, el juez que conozca o haya conocido del proceso de alimentos o el que adelante el ejecutivo dará aviso al Departamento Administrativo de Seguridad ordenando impedirle la salida del país hasta tanto preste garantía suficiente del cumplimiento de la obligación alimentaría y será reportado a las centrales de riesgo.

La cuota alimentaria fijada en providencia judicial, en audiencia de conciliación o en acuerdo privado se entenderá reajustada a partir del 1 de enero siguiente y anualmente en la misma fecha, en porcentaje igual al índice de precios al consumidor, sin perjuicio de que el juez, o las partes de común acuerdo, establezcan otra fórmula de reajuste periódico.

Con todo, cuando haya variado la capacidad económica del alimentante o las necesidades del alimentario, las partes de común acuerdo podrán modificar la cuota alimentaria, y cualquiera de ellas podrá pedirle al juez su modificación.

En este último caso el interesado deberá aportar con la demanda por lo menos una copia informal de la providencia, del acta de conciliación o del acuerdo privado en que haya sido señalada.

Mientras el deudor no cumpla o se allane a cumplir la obligación alimentaria que tenga respecto del niño, la niña o el adolescente, no será escuchado en la reclamación de su custodia y cuidado personal ni en ejercicio de otros derechos sobre él o ella.

Lo dispuesto en este artículo se aplicará también al ofrecimiento de alimentos a niños, niñas o adolescentes.

El incumplimiento de la obligación alimentaria genera responsabilidad penal.

Artículo 130. *Medidas especiales para el cumplimiento de la obligación alimentaria.* Sin perjuicio de las garantías de cumplimiento de cualquier clase que convengan las partes o establezcan las leyes, el juez tomará las siguientes medidas durante el proceso o en la sentencia, tendientes a asegurar la oportuna satisfacción de la obligación alimentaria:

1. Cuando el obligado a suministrar alimentos fuere asalariado, el juez podrá ordenar al respectivo pagador o al patrono descontar y consignar a órdenes del juzgado, hasta el cincuenta por ciento (50%) de lo que legalmente compone el salario mensual del demandado, y hasta el mismo porcentaje de sus prestaciones sociales, luego de las deducciones de ley. El incumplimiento de la orden anterior, hace al empleador o al pagador en su caso, responsable solidario de las cantidades no descontadas. Para estos efectos, previo incidente dentro del mismo proceso, en contra de aquél o de éste se extenderá la orden de pago.
2. Cuando no sea posible el embargo del salario y de las prestaciones, pero se demuestre el derecho de dominio sobre bienes muebles o inmuebles, o la titularidad sobre bienes o derechos patrimoniales de cualquier otra naturaleza, en cabeza del demandado, el juez podrá decretar medidas cautelares sobre ellos, en cantidad suficiente para garantizar el pago de la obligación y hasta el cincuenta por ciento (50%) de los frutos que produzcan. Del embargo y secuestro quedarán excluidos los útiles e implementos de trabajo de la persona llamada a cumplir con la obligación alimentaria.

Artículo 131. *Acumulación de procesos de alimentos.* Si los bienes de la persona obligada o sus ingresos se hallaren embargados por virtud de una acción anterior fundada en alimentos o afectos del cumplimiento de una sentencia de alimentos, el juez, de oficio o a solicitud de parte, al tener conocimiento del hecho en un proceso concurrente, asumirá el conocimiento de los distintos procesos para el sólo efecto de señalar la cuantía de las varias pensiones alimentarias, tomando en cuenta las condiciones del alimentante y las necesidades de los diferentes alimentarios.

Artículo 132. *Continuidad de la obligación alimentaria*. Cuando a los padres se imponga la sanción de suspensión o pérdida de la patria potestad, no por ello cesará la obligación alimentaria. Esta obligación termina cuando el niño, la niña o el adolescente es entregado en adopción.

Artículo 133. *Prohibiciones en relación con los alimentos*. El derecho de pedir alimentos no puede transmitirse por causa de muerte, ni venderse o cederse de modo alguno, ni renunciarse. El que debe alimentos no puede oponer al demandante en compensación lo que el demandante le deba a él.

No obstante lo anterior, las pensiones alimentarias atrasadas podrán renunciarse o compensarse y el derecho de demandarlas transmitirse por causa de muerte, venderse o cederse, con autorización judicial, sin perjuicio de la prescripción que compete alegar al deudor.

Artículo 134. *Prelación de los créditos por alimentos*. Los créditos por alimentos a favor de los niños, las niñas y los adolescentes gozan de prelación sobre todos los demás.

Artículo 135. *Legitimación especial*. Con el propósito de hacer efectivo el pago de la cuota alimentaria, cualquiera de los representantes legales del niño, la niña o el adolescente o el defensor de familia podrán promover, ante los jueces competentes, los procesos que sean necesarios, inclusive los encaminados a la revocación o declaración de la simulación de actos de disposición de bienes del alimentante.

Artículo 136. *Privación de la administración de los bienes del niño, la niña o el adolescente*. En el proceso para la privación de la administración de los bienes del niño, la niña o el adolescente, el juez podrá decretar la suspensión

provisional de las facultades de disposición y de administración de los bienes y la designación de un tutor o un curador, según se trate.

Artículo 137. *Restitución internacional de los niños, las niñas o los adolescentes.* Con el informe del defensor de familia sobre el desacuerdo para la restitución internacional del niño, la niña o el adolescente, el juez de familia iniciará el proceso.

El defensor de familia intervendrá en representación del interés del niño, la niña o el adolescente retenido ilícitamente, sin perjuicio de la actuación del apoderado de la parte interesada.

Artículo 138. *Obligación especial para las autoridades competentes de restablecimiento de derechos*. En todos los casos, y de manera inmediata a su conocimiento, la autoridad competente deberá realizar la verificación de la garantía de derechos ordenada en el artículo 51 de esta ley.

Libro II
Sistema de responsabilidad penal para adolescentes y procedimientos especiales para cuando los niños, las niñas o los adolescentes son víctimas de delitos

Título I
Sistema de responsabilidad penal para adolescentes y otras disposiciones

Capítulo I
Principios rectores y definiciones del proceso

Artículo 139. *Sistema de responsabilidad penal para adolescentes.* El sistema de responsabilidad penal para adolescentes es el conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por personas que tengan entre catorce (14) y dieciocho (18) años al momento de cometer el hecho punible.

Artículo 140. *Finalidad del sistema de responsabilidad penal para adolescentes*. En materia de responsabilidad penal para adolescentes tanto el proceso como las medidas que se tomen son de carácter pedagógico, específico y diferenciado respecto del sistema de adultos, conforme a la protección integral. El proceso deberá garantizar la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño.

En caso de conflictos normativos entre las disposiciones de esta ley y otras leyes, así como para todo efecto hermenéutico, las autoridades judiciales deberán siempre privilegiar el interés superior del niño y orientarse por los principios de la protección integral, así como los pedagógicos, específicos y diferenciados que rigen este sistema.

Parágrafo. En ningún caso, la protección integral puede servir de excusa para violar los derechos y garantías de los niños, las niñas y los adolescentes.

Artículo 141. *Principios del sistema de responsabilidad penal para adolescentes.* Los principios y definiciones consagrados en la Constitución Política, en los instrumentos internacionales de derechos humanos y en la presente ley se aplicarán en el Sistema de Responsabilidad para Adolescentes.

Artículo 142. *Exclusión de la responsabilidad penal para adolescentes.* Sin perjuicio de la responsabilidad civil de los padres o representantes legales, así como la responsabilidad penal consagrada en el numeral 2 del artículo 25 del Código Penal, las personas menores de catorce (14) años, no serán juzgadas ni declaradas responsables penalmente, privadas de libertad, bajo denuncia o sindicación de haber cometido una conducta punible. La persona menor de catorce (14) años deberá ser entregada inmediatamente por la Policía de Infancia y Adolescencia ante la autoridad competente para la verificación de la garantía de sus derechos de acuerdo con lo establecido en esta ley. La policía procederá a su identificación y a la recolección de los datos de la conducta punible.

Tampoco serán juzgadas, declaradas penalmente responsables ni sometidas a sanciones penales las personas mayores de catorce (14) y menores de dieciocho (18) años con discapacidad psíquica o mental, pero se les aplicará la respectiva medida de seguridad. Estas situaciones deben probarse debidamente en el proceso, siempre y cuando la conducta punible guarde relación con la discapacidad.

Artículo 143. *Niños y niñas menores de catorce (14) años*. Cuando una persona menor de catorce (14) años incurra en la comisión de un delito sólo se le aplicarán medidas de verificación de la garantía de derechos, de su restablecimiento y deberán vincularse a procesos de educación y de protección dentro del sistema nacional de bienestar familiar, los cuales observarán todas las garantías propias del debido proceso y el derecho de defensa.

Si un niño, una niña o un adolescente menor de catorce (14) años es sorprendido en flagrancia por una autoridad de policía, ésta lo pondrá inmediatamente o a más tardar en el término de la distancia a disposición de las autoridades competentes de protección y restablecimiento de derechos. Si es un particular quien lo sorprende, deberá ponerlo de inmediato a disposición de la autoridad policial para que ésta proceda en la misma forma.

Parágrafo 1. Cuando del resultado de una investigación o juicio surjan serias evidencias de la concurrencia de un niño, una niña o un adolescente menor de catorce (14) años en la comisión de un delito, se remitirá copia de lo pertinente a las autoridades competentes de protección y restablecimiento de derechos.

Parágrafo 2. El ICBF establecerá los lineamientos técnicos para los programas especiales de protección y restablecimiento de derechos, destinados a la atención de los niños, las niñas o los adolescentes menores de catorce (14) años que han cometido delitos.

Artículo 144. *Procedimiento aplicable*. Salvo las reglas especiales de procedimiento definidas en el presente libro, el procedimiento del sistema de responsabilidad penal para adolescentes se regirá por las normas consagradas en la Ley 906 de 2004 (Sistema Penal Acusatorio), exceptuando aquellas que sean contrarias al interés superior del adolescente.

Artículo 145. *Policía Judicial en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes.* En los procesos en que estén involucrados niños, niñas o adolescentes como autores o partícipes de un delito, o como víctimas de los mismos, hará las veces de Policía Judicial la Policía de Infancia y Adolescencia, o en su defecto los miembros de la Policía Judicial que sean capacitados en derechos humanos y de infancia. En todo caso en las diligencias que se adelanten estará presente un defensor de familia.

Artículo 146. *El defensor de familia en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes.* En todas las actuaciones del proceso y en las etapas de indagación, investigación y del juicio, el adolescente deberá estar acompañado por el defensor de familia, quien verificará la garantía de los derechos del adolescente.

Artículo 147. *Audiencias en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes.* Las audiencias que se surtan en el proceso de responsabilidad penal para adolescentes, ante los jueces de control de garantías y ante los jueces

de conocimiento, serán cerradas al público si el juez considera que la publicidad del procedimiento expone a un daño psicológico al niño, la niña o el adolescente. Cuando así lo disponga, en ellas solamente podrán intervenir los sujetos procesales.

Artículo 148. *Carácter especializado.* La aplicación de esta ley tanto en el proceso como en la ejecución de medidas por responsabilidad penal para adolescentes, estará a cargo de autoridades y órganos especializados en materia de infancia y adolescencia.

Parágrafo. Para el cumplimiento de las medidas de restablecimiento de derechos de los menores de 14 años y ejecución de sanciones impuestas a los adolescentes de 14 a 16 años y de 16 a 18 años que cometan delitos, el ICBF diseñará los lineamientos de los programas especializados en los que tendrán prevalencia los principios de política pública de fortalecimiento a la familia de conformidad con la Constitución Política y los Tratados, Convenios y Reglas Internacionales que rigen la materia.

Artículo 149. *Presunción de edad.* Cuando exista duda en relación con la edad del adolescente, y mientras la autoridad pericial competente lo define, se presume que es menor de 18 años. En todo caso se presumirá la edad inferior.

Artículo 150. *Práctica de testimonios*. Los niños, las niñas y los adolescentes podrán ser citados como testigos en los procesos penales que se adelanten contra los adultos. Sus declaraciones sólo las podrá tomar el defensor de familia con cuestionario enviado previamente por el fiscal o el juez. El defensor sólo formulará las preguntas que no sean contrarias a su interés superior.

Excepcionalmente, el juez podrá intervenir en el interrogatorio del niño, la niña o el adolescente para conseguir que éste responda a la pregunta que se le ha formulado o que lo haga de manera clara y precisa. Dicho interrogatorio se llevará a cabo fuera del recinto de la audiencia y en presencia del defensor de familia, siempre respetando sus derechos prevalentes.

El mismo procedimiento se adoptará para las declaraciones y entrevistas que deban ser rendidas ante la Policía Judicial y la Fiscalía durante las etapas de indagación o investigación.

A discreción del juez, los testimonios podrán practicarse a través de comunicación de audio video, caso en el cual no será necesaria la presencia física del niño, la niña o el adolescente.

Artículo 151. *Derecho al debido proceso y a las garantías procesales.* Los adolescentes que cometan delitos tienen derecho al debido proceso penal, a las garantías procesales básicas tales como: la presunción de inocencia, el derecho a ser notificado de las imputaciones, el derecho de defensa y de contradicción, el derecho al asesoramiento, el derecho a la presencia de los padres o tutores, el derecho a guardar silencio, el derecho a la confrontación con los testigos e interrogar a éstos, el derecho de apelación ante autoridad superior, y las demás garantías consagradas en la Constitución, la ley y los tratados internacionales.

En todos los casos los derechos de los que goza bajo el presente sistema un adolescente autor o partícipe de una conducta punible son, como mínimo, los previstos por la Ley 906 de 2004.

Artículo 152. *Principio de legalidad*. Ningún adolescente podrá ser investigado acusado, ni juzgado por acto u omisión, al momento de la comisión del delito que no esté previamente definido en la ley penal vigente, de manera expresa e inequívoca. El adolescente declarado responsable por la autoridad judicial de la comisión de un delito sólo podrá ser sancionado con la imposición de las medidas definidas en la presente ley.

Artículo 153. *Reserva de las diligencias*. Las actuaciones procesales adelantadas en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, sólo podrán ser conocidas por las partes, sus apoderados, y los organismos de control.

La identidad del procesado, salvo para las personas mencionadas en el inciso anterior, gozará de reserva.

Queda prohibido revelar la identidad o imagen que permita la identificación de las personas procesadas.

Artículo 154. *Derecho de defensa.* El adolescente durante toda la actuación procesal y aún antes de la imputación deberá tener un apoderado que adelante su defensa técnica. Ninguna actuación procesal tendrá validez si no está presente su apoderado. El adolescente podrá designar apoderado, quien tendrá derecho a revisar las diligencias y a actuar desde el momento de la noticia criminal.

En caso de no contar con apoderado, el mismo adolescente, el Ministerio Público, o la policía judicial, solicitarán la asignación de un defensor del Sistema de Defensoría Pública de la Defensoría del Pueblo.

Artículo 155. *Principio de inmediación.* Ninguna actuación que se adelante en la etapa de juicio tendrá validez si no es adelantada directamente por el funcionario judicial. La violación de este principio será causal de destitución del cargo.

Artículo 156. *Adolescentes indígenas y demás grupos étnicos*. Los adolescentes pertenecientes a las comunidades indígenas serán juzgados según las normas y procedimientos de sus propias comunidades conforme a la legislación especial indígena consagrada en el artículo 246 de la Constitución Política, los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia y la ley. Siempre y cuando la sanción impuesta no sea contraria a su dignidad, tampoco se permitirá que sea sometido a maltrato ni a vejaciones y se informará a la autoridad judicial sobre la actuación o procedimiento a seguir por parte de la comunidad frente a la medida que sea tomada.

Parágrafo. Los niños, las niñas y los adolescentes que se encuentren fuera del ámbito de su comunidad y que cometan delitos, serán sometidos al sistema de responsabilidad penal para adolescentes, si no quieren retornar a sus comunidades de origen.

Artículo 157. *Prohibiciones especiales.* En los procesos de responsabilidad penal para adolescentes no proceden los acuerdos entre la Fiscalía y la defensa.

Cuando el adolescente aceptare los cargos en la audiencia de legalización de la aprehensión o de imputación se procederá a remitir el asunto al juez de conocimiento para que fije la fecha para la audiencia de imposición de la sanción. El juez instará a la Defensoría de Familia para que proceda al estudio de la situación familiar, económica, social, psicológica y cultural del adolescente y rinda el informe en dicha audiencia.

El juez, al proceder a seleccionar la sanción a imponer, tendrá en cuenta la aceptación de cargos por el adolescente, y durante la ejecución de la sanción será un factor a considerar para la modificación de la misma.

Artículo 158. *Prohibición de juzgamiento en ausencia*. Los adolescentes sometidos a procesos judiciales por responsabilidad penal no serán juzgados en su ausencia. En caso de no lograrse su comparecencia se continuará la investigación y el defensor público o apoderado asumirá plenamente su defensa hasta

la acusación o la preclusión. Si hay acusación, se notificará al defensor público o apoderado y al defensor de familia. El proceso se suspenderá mientras se logra la comparecencia del procesado. En estos eventos la prescripción de la acción penal se aumentará en una tercera parte.

Artículo 159. *Prohibición de antecedentes*. Las sentencias proferidas en procesos por responsabilidad penal para adolescentes no tendrán el carácter de antecedente judicial. Estos registros son reservados y podrán ser utilizados por las autoridades judiciales competentes para definir las medidas aplicables cuando se trate de establecer la naturaleza y gravedad de las conductas y la proporcionalidad e idoneidad de la medida.

Las entidades competentes deberán hacer compatibles los sistemas de información para llevar el registro de los adolescentes que han cometido delitos, con el objeto de definir los lineamientos de la política criminal para adolescentes y jóvenes.

Artículo 160. *Concepto de la privación de la libertad*. Se entiende por privación de la libertad toda forma de internamiento, en un establecimiento público o privado, ordenada por autoridad judicial, del que no se permite al adolescente salir por su propia voluntad.

Artículo 161. *Excepcionalidad de la privación de libertad*. Para los efectos de la responsabilidad penal para adolescentes, la privación de la libertad sólo procede para las personas que al momento de cometer el hecho hayan cumplido catorce (14) y sean menores de dieciocho (18) años. La privación de la libertad sólo procederá como medida pedagógica.

Artículo 162. *Separación de los adolescentes privados de la libertad.* La privación de la libertad de adolescentes, en los casos que proceda, se cumplirá en establecimientos de atención especializada en programas del sistema nacional de bienestar familiar siempre separados de los adultos.

En tanto no existan establecimientos especiales separados de los adultos para recluir a los adolescentes privados de la libertad, el funcionario judicial procederá a otorgarles libertad provisional o la detención domiciliaria.

Capítulo II
Autoridades y entidades del sistema de responsabilidad penal para adolescentes

Artículo 163. *Integración*. Forman parte del sistema de responsabilidad penal para adolescentes:

1. Los fiscales delegados ante los jueces penales para adolescentes, quienes se ocuparán de la dirección de las investigaciones en las cuales se encuentren presuntamente comprometidos adolescentes, como autores o partícipes de conductas delictivas.
2. Los jueces penales para adolescentes, promiscuos de familia y los municipales quienes adelantarán las actuaciones y funciones judiciales que les asigna la ley.
3. Las Salas Penales y de Familia de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial que integrarán la Sala de Asuntos Penales para adolescentes en los mismos tribunales, ante quienes se surtirá la segunda instancia.
4. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, ante la cual se tramitará el recurso extraordinario de casación, y la acción de revisión.
5. La Policía Judicial y el Cuerpo Técnico Especializado adscritos a la Fiscalía delegada ante los jueces penales para adolescentes y promiscuos de familia.
6. La Policía Nacional con su personal especializado quien deberá apoyar las acciones de las autoridades judiciales y entidades del sistema.
7. Los Defensores Públicos del Sistema Nacional de Defensoría Pública de la Defensoría del Pueblo, quienes deben asumir la defensa técnica del proceso, cuando el niño, la niña o el adolescente carezca de apoderado.
8. Las Defensorías de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y las Comisarías de Familia, o los Inspectores de Policía, cuando deban tomar las medidas para la verificación de la garantía de derechos, y las medidas para su restablecimiento.
9. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar quien responderá por los lineamientos técnicos para la ejecución de las medidas pedagógicas dispuestas en este Libro.

10. Las demás instituciones que formen parte del sistema nacional de bienestar familiar.

Parágrafo 1. Cada responsable de las entidades que integran el Sistema de Responsabilidad Penal para adolescentes deberá garantizar la provisión o asignación de los cargos que se requieran para su funcionamiento y la especialización del personal correspondiente.

Parágrafo 2. La designación de quienes conforman el sistema de responsabilidad penal para adolescentes deberá recaer en personas que demuestren conocimiento calificado de derecho penal, y de infancia y familia, y de las normas internas e internacionales relativas a derechos humanos.

Parágrafo 3. Los equipos que desarrollan programas especializados, brindarán a las autoridades judiciales apoyo y asesoría sobre el proceso de cada uno de los adolescentes que están vinculados a estos programas, informando los progresos y necesidades que presenten.

Artículo 164. *Los juzgados penales para adolescentes*. Créanse en todo el territorio nacional dentro de la jurisdicción penal ordinaria, los juzgados penales para adolescentes.

Parágrafo 1. El gobierno nacional y el Consejo Superior de la Judicatura tomarán las medidas necesarias para garantizar la creación y el funcionamiento de los juzgados penales para adolescentes en todo el país.

Parágrafo 2. Los jueces de menores asumirán de manera transitoria las competencias asignadas por la presente ley a los jueces penales para adolescentes, hasta que se creen los juzgados penales para adolescentes.

Artículo 165. *Competencia de los jueces penales para adolescentes*. Los jueces penales para adolescentes conocerán del juzgamiento de las personas menores de dieciocho (18) años y mayores de catorce (14) años acusadas de violar la ley penal. Igualmente conocerán de la función de control de garantías en procesos de responsabilidad penal para adolescentes que no sean de su conocimiento.

Artículo 166. *Competencia de los jueces promiscuos de familia en materia penal.* En los sitios en los que no hubiera un juez penal para adolescentes el Consejo de la Judicatura dispondrá que los jueces promiscuos de familia cumplan

las funciones definidas para los jueces penales para adolescentes en el artículo anterior relativas al juzgamiento y control de garantías en procesos de responsabilidad penal para adolescentes. A falta de juez penal para adolescentes o promiscuo de familia, el juez municipal conocerá de los procesos por responsabilidad penal para adolescentes.

Parágrafo transitorio. La competencia de los jueces promiscuos de familia en esta materia se mantendrá hasta que se establezcan los juzgados penales para adolescentes necesarios para atender los procesos de responsabilidad penal para adolescentes.

Artículo 167. *Diferenciación funcional de los jueces*. Se garantizará que al funcionario que haya ejercido la función de juez de control de garantías en un determinado proceso de responsabilidad penal juvenil respecto a determinado delito, no se le asigne el juzgamiento del mismo.

Para la eficacia de esta garantía, el Consejo Superior de la Judicatura y, por delegación, los Consejos Seccionales de la Judicatura, adoptarán las medidas generales y particulares que aseguren una adecuada distribución de competencias entre los jueces penales para adolescentes, jueces promiscuos de familia y jueces municipales.

Artículo 168. *Composición y competencias de las salas de asuntos penales para adolescentes.* Los Tribunales Superiores de Distrito Judicial contarán con Salas de Asuntos Penales para adolescentes, especializadas en los asuntos que versen sobre responsabilidad penal adolescente. Estas Salas estarán integradas por un (1) magistrado de la Sala Penal y dos (2) magistrados de la Sala de Familia o, en su defecto, de la Sala Civil del respectivo Tribunal Superior.

En los procesos de responsabilidad penal para adolescentes la segunda instancia se surtirá ante las Salas de Asuntos Penales para Adolescentes de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial.

Parágrafo. El gobierno nacional y el Consejo Superior de la Judicatura garantizarán los recursos para la conformación de las Salas de Asuntos Penales para Adolescentes con magistrados especializados en el tema de la responsabilidad penal adolescente.

Capítulo III
Reparación del daño

Artículo 169. *De la responsabilidad penal.* Las conductas punibles realizadas por personas mayores de catorce (14) años y que no hayan cumplido los dieciocho (18) años de edad, dan lugar a responsabilidad penal y civil, conforme a las normas consagradas en la presente ley.

Artículo 170. *Incidente de reparación*. Los padres, o representantes legales, son solidariamente responsables, y en tal calidad, deberán ser citados o acudir al incidente de reparación a solicitud de la víctima del condenado o su defensor. Esta citación deberá realizarse en la audiencia que abra el trámite del incidente.

Artículo 171. *De la acción penal*. La acción penal será oficiosa salvo en aquellos delitos en los que exija su denuncia o querella.

Artículo 172. *Desistimiento*. Los delitos querellables admiten desistimiento.

Artículo 173. *Extinción de la acción penal*. La acción penal se extingue por muerte, desistimiento, prescripción, conciliación y reparación integral de los daños cuando haya lugar, aplicación del principio de oportunidad, y en los demás casos contemplados en esta ley y en el Código de Procedimiento Penal.

Artículo 174. *Del principio de oportunidad, la conciliación y la reparación integral de los daños*. Las autoridades judiciales deberán facilitar en todo momento el logro de acuerdos que permitan la conciliación y la reparación de los daños, y tendrán como principio rector la aplicación preferente del principio de oportunidad. Éstas se realizarán con el consentimiento de ambas partes y se llevarán a cabo con una visión pedagógica y formativa mediante la cual el niño, la niña o el adolescente pueda tomar conciencia de las consecuencias de su actuación delictiva y de las responsabilidades que de ella se derivan. Así mismo, el conciliador buscará la reconciliación con la víctima.

Cuando de la aplicación del principio de oportunidad se pudieren derivar riesgos para la vida y la integridad física del adolescente, el juez competente deberá ordenar otras medidas de protección, las cuales incluirán, entre otras, ayudas económicas para el cambio de residencia de la familia. El gobierno gestionará la apropiación de las partidas necesarias para cubrir a este rubro.

Artículo 175. *El principio de oportunidad en los procesos seguidos a los adolescentes como partícipes de los delitos cometidos por grupos armados al*

margen de la ley. La Fiscalía General de la Nación podrá renunciar a la persecución penal, en los casos en que los adolescentes, en cualquier condición hayan hecho parte de grupos armados al margen de la ley, o hayan participado directa o indirectamente en las hostilidades o en acciones armadas o en los delitos cometidos por grupos armados al margen de la ley cuando:

1. Se establezca que el adolescente tuvo como fundamento de su decisión las condiciones sociales, económicas y culturales de su medio para haber estimado como de mayor valor la pertenencia a un grupo armado al margen de la ley.
2. Se establezca que la situación de marginamiento social, económico y cultural no le permitían al adolescente contar con otras alternativas de desarrollo de su personalidad.
3. Se establezca que el adolescente no estaba en capacidad de orientar sus esfuerzos a conocer otra forma de participación social.
4. Por fuerza, amenaza, coacción y constreñimiento.

Los adolescentes que se desvinculen de grupos armados al margen de la ley, tendrán que ser remitidos al programa de atención especializada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para niños, niñas y adolescentes desvinculados de grupos armados irregulares.

Parágrafo. No se aplicará el principio de oportunidad cuando se trate de hechos que puedan significar violaciones graves al derecho internacional humanitario, crímenes de lesa humanidad o genocidio de acuerdo con el Estatuto de Roma.

Artículo 176. *Prohibición especial*. Queda prohibida la entrevista y la utilización en actividades de inteligencia de los niños, las niñas y los adolescentes desvinculados de los grupos armados al margen de la ley por parte de autoridades de la fuerza pública. El incumplimiento de esta disposición será sancionado con la destitución del cargo, sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar.

Capítulo V
Sanciones

Artículo 177. *Sanciones*. Son sanciones aplicables a los adolescentes a quienes se les haya declarado su responsabilidad penal:

1. La amonestación.
2. La imposición de reglas de conducta.
3. La prestación de servicios a la comunidad
4. La libertad asistida.
5. La internación en medio semicerrado.
6. La privación de libertad en centro de atención especializado.

Las sanciones previstas en el presente artículo se cumplirán en programas de atención especializados del sistema nacional de bienestar familiar y deberán responder a lineamientos técnicos diseñados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Parágrafo 1. Para la aplicación de todas las sanciones la autoridad competente deberá asegurar que el adolescente esté vinculado al sistema educativo. El defensor de familia o quien haga sus veces deberán controlar el cumplimiento de esta obligación y verificar la garantía de sus derechos.

Parágrafo 2. El juez que dictó la medida será el competente para controlar su ejecución.

Artículo. 178. *Finalidad de las sanciones.* Las sanciones señaladas en el artículo anterior tienen una finalidad protectora, educativa y restaurativa, y se aplicarán con el apoyo de la familia y de especialistas.

El juez podrá modificar en función de las circunstancias individuales del adolescente y sus necesidades especiales las medidas impuestas.

Artículo 179. *Criterios para la definición de las sanciones.* Para definir las sanciones aplicables se deberá tener en cuenta:

1. La naturaleza y gravedad de los hechos.
2. La proporcionalidad e idoneidad de la sanción atendidas las circunstancias y gravedad de los hechos; las circunstancias y necesidades del adolescente y las necesidades de la sociedad.

3. La edad del adolescente.
4. La aceptación de cargos por el adolescente.
5. El incumplimiento de los compromisos adquiridos con el juez.
6. El incumplimiento de las sanciones.

Parágrafo 1. Al computar la privación de la libertad en centro de atención especializada, la autoridad judicial deberá descontar el período de internamiento preventivo al que haya sido sometido el adolescente.

Parágrafo 2. Los adolescentes entre 14 y 18 años que incumplan cualquiera de las sanciones previstas en este Código, terminarán el tiempo de sanción en internamiento.

El incumplimiento por parte del adolescente del compromiso de no volver a infringir la ley penal, ocasionará la imposición de la sanción de privación de libertad por parte del juez.

Artículo 180. *Derechos de los adolescentes durante la ejecución de las sanciones*. Durante la ejecución de las sanciones, el adolescente tiene los siguientes derechos, además de los consagrados en la Constitución Política y en el presente Código:

1. Ser mantenido preferentemente en su medio familiar siempre y cuando éste reúna las condiciones requeridas para su desarrollo.
2. Recibir información sobre el programa de atención especializada en el que se encuentre vinculado, durante las etapas previstas para el cumplimiento de la sanción.
3. Recibir servicios sociales y de salud por personas con la formación profesional idónea, y continuar su proceso educativo de acuerdo con su edad y grado académico.
4. Comunicarse reservadamente con su apoderado o defensor público, con el defensor de familia, con el fiscal y con la autoridad judicial.
5. Presentar peticiones ante cualquier autoridad y a que se le garantice la respuesta.
6. Comunicarse libremente con sus padres, representantes o responsables, salvo prohibición expresa de la autoridad judicial.

7. A que su familia sea informada sobre los derechos que a ella le corresponden y respecto de la situación y los derechos del adolescente.

Artículo 181. *Internamiento preventivo*. En cualquier momento del proceso y antes de la audiencia de juicio, el juez de control de garantías, como último recurso, podrá decretar la detención preventiva cuando exista:

1. Riesgo razonable de que el adolescente evadirá el proceso.
2. Temor fundado de destrucción u obstaculización de pruebas.
3. Peligro grave para la víctima, el denunciante, el testigo o la comunidad.

Parágrafo 1. El internamiento preventivo no procederá sino en los casos en que, conforme a la gravedad del delito, sería admisible la privación de libertad como medida. Se ejecutará en centros de internamiento especializados donde los adolescentes procesados deben estar separados de los ya sentenciados.

Parágrafo 2. El internamiento preventivo no podrá exceder de cuatro meses, prorrogable con motivación, por un mes más. Si cumplido este término el juicio no ha concluido por sentencia condenatoria, el juez que conozca del mismo lo hará cesar, sustituyéndola por otra medida como la asignación a una familia, el traslado a un hogar o a una institución educativa.

Mientras se encuentren bajo custodia, los adolescentes recibirán cuidados, protección y toda la asistencia social, educacional, profesional, psicológica, médica y física que requieran, habida cuenta de su edad, sexo y características individuales.

Artículo 182. *La amonestación.* Es la recriminación que la autoridad judicial le hace al adolescente sobre las consecuencias del hecho delictivo y la exigencia de la reparación del daño. En todos los casos deberá asistir a un curso educativo sobre respeto a los derechos humanos y convivencia ciudadana que estará a cargo del Instituto de Estudios del Ministerio Público.

En caso de condena al pago de perjuicios, el funcionario judicial exhortará al niño, la niña o el adolescente y a sus padres a su pago en los términos de la sentencia.

Artículo 183. *Las reglas de conducta.* Es la imposición por la autoridad judicial al adolescente de obligaciones o prohibiciones para regular su modo de

vida, así como promover y asegurar su formación. Esta sanción no podrá exceder los dos (2) años.

Artículo 184. *La prestación de servicios sociales a la comunidad*. Es la realización de tareas de interés general que el adolescente debe realizar, en forma gratuita, por un período que no exceda de 6 meses, durante una jornada máxima de ocho horas semanales preferentemente los fines de semana y festivos o en días hábiles pero sin afectar su jornada escolar.

Parágrafo. En todo caso, queda prohibido el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o que entorpezca la educación del adolescente, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.

Artículo 185. *La libertad vigilada.* Es la concesión de la libertad que da la autoridad judicial al adolescente con la condición obligatoria de someterse a la supervisión, la asistencia y la orientación de un programa de atención especializada. Esta medida no podrá durar más de dos años.

Artículo 186. *Medio semicerrado.* Es la vinculación del adolescente a un programa de atención especializado al cual deberán asistir obligatoriamente durante horario no escolar o en los fines de semana. Esta sanción no podrá ser superior a tres años.

Artículo 187. *La privación de la libertad.* La privación de la libertad en centro de atención especializada se aplicará a los adolescentes mayores de dieciséis (16) y menores de dieciocho (18) años que sean hallados responsables de la comisión de delitos cuya pena mínima establecida en el Código Penal sea o exceda de (6) años de prisión. En estos casos, la privación de libertad en centro de atención especializada tendrá una duración de uno (1) hasta cinco (5) años.

En los casos en que los adolescentes mayores de catorce (14) y menores de dieciocho (18) años sean hallados responsables de homicidio doloso, secuestro o extorsión, en todas sus modalidades, la privación de la libertad en centro de atención especializada tendrá una duración de dos (2) hasta ocho (8) años.

Parte de la sanción impuesta podrá ser sustituida por el establecimiento de presentaciones periódicas, servicios a la comunidad, el compromiso de no volver a delinquir y guardar buen comportamiento, por el tiempo que fije el juez. El incumplimiento de estos compromisos acarreará la pérdida de estos

beneficios y el cumplimiento del resto de la sanción inicialmente impuesta bajo privación de libertad.

Parágrafo. Si estando vigente la sanción de privación de la libertad el adolescente cumpliere los dieciocho (18) años, esta podrá continuar hasta que éste cumpla los veintiún (21) años. En ningún caso esta sanción podrá cumplirse en sitios destinados a infractores mayores de edad.

Los Centros de Atención Especializada tendrán una atención diferencial entre los adolescentes menores de dieciocho (18) años y aquellos que alcanzaron su mayoría de edad y deben continuar con el cumplimiento de la sanción. Esta atención deberá incluir su separación física al interior del Centro.

Artículo 188. *Derechos de los adolescentes privados de libertad.* Además de los derechos consagrados en la Constitución Política y en la presente ley, el adolescente privado de libertad tiene los siguientes derechos:

1. Permanecer internado en la misma localidad, municipio o distrito o en la más próxima al domicilio de sus padres, representantes o responsables.
2. Que el lugar de internamiento satisfaga las exigencias de higiene, seguridad y salubridad, cuente con acceso a los servicios públicos esenciales y sea adecuado para lograr su formación integral.
3. Ser examinado por un médico inmediatamente después de su ingreso al programa de atención especializada, con el objeto de comprobar anteriores vulneraciones a su integridad personal y verificar el estado físico o mental que requiera tratamiento.
4. Continuar su proceso educativo de acuerdo con su edad y grado académico.
5. Que se le mantenga en cualquier caso separado de los adultos.
6. Derecho a participar en la elaboración del plan individual para la ejecución de la sanción.
7. Derecho a recibir información sobre el régimen interno de la institución, especialmente sobre las sanciones disciplinarias que puedan serle aplicables y sobre los procedimientos para imponerlas y ejecutarlas
8. No ser trasladado arbitrariamente del programa donde cumple la sanción. El traslado sólo podrá realizarse por una orden escrita de la autoridad judicial.
9. No ser sometido a ningún tipo de aislamiento.

10. Mantener correspondencia y comunicación con sus familiares y amigos, y recibir visitas por lo menos una vez a la semana.
11. Tener acceso a la información de los medios de comunicación.

Artículo 189. *Imposición de la sanción.* Concluidos los alegatos de los intervinientes en la audiencia del juicio oral el juez declarará si hay lugar o no a la imposición de medida de protección, citará a audiencia para la imposición de la sanción a la cual deberá asistir la Defensoría de Familia para presentar un estudio que contendrá por lo menos los siguientes aspectos: situación familiar, económica, social, psicológica y cultural del adolescente y cualquier otra materia que a juicio del funcionario sea de relevancia para imposición de la sanción. Escuchada la Defensoría de Familia el juez impondrá la sanción que corresponda.

Las sanciones se impondrán en la audiencia de juicio oral que debe ser continua y privada, so pena de nulidad. Si la audiencia de juicio no puede realizarse en una sola jornada, continuará durante todas las audiencias consecutivas que fueren necesarias hasta su conclusión. Se podrá suspender por un plazo máximo de 10 días hábiles y la interrupción por más tiempo conlleva la nueva realización del debate desde su inicio.

Artículo 190. *Sanción para contravenciones de policía cometidas por adolescentes.* Las contravenciones de policía cometidas por adolescentes serán sancionadas de la siguiente manera:

Será competente para conocer el proceso y sancionar el comisario de familia del lugar donde se cometió la contravención o en su defecto el alcalde municipal.

Cuando la contravención dé lugar a sanciones pecuniarias, éstas serán impuestas a quien tenga la patria potestad o la custodia y éste será responsable de su pago, el cual podrá hacerse efectivo por jurisdicción coactiva.

Las contravenciones de tránsito cometidas por adolescentes entre los 15 y los 18 años serán sancionadas por los comisarios de familia o en su defecto por el alcalde municipal.

Para la sanción de contravenciones cometidas por adolescentes se seguirán los mismos procedimientos establecidos para los mayores de edad, siempre que sean compatibles con los principios de este Código y especialmente con los contemplados en el presente título.

Artículo 191. *Detención en flagrancia*. El adolescente sorprendido en flagrancia será conducido de inmediato ante el fiscal delegado para la autoridad judicial, quien dentro de las 36 horas siguientes lo presentará al juez de control de garantías y le expondrá cómo se produjo la aprehensión. Por solicitud del fiscal, la cual contendrá la acusación, el juez de control de garantías enviará la actuación al juez de conocimiento para que éste cite a audiencia de juicio oral dentro de los 10 días hábiles siguientes. En lo demás se seguirá el procedimiento penal vigente, con las reglas especiales del proceso para adolescentes establecidas en el presente libro.

Título II
Capítulo único
Procedimientos especiales cuando los niños, las niñas o los adolescentes son víctimas de delitos

Artículo 192. *Derechos especiales de los niños, las niñas y los adolescentes víctimas de delitos.* En los procesos por delitos en los cuales los niños, las niñas o los adolescentes sean víctimas el funcionario judicial tendrá en cuenta los principios del interés superior del niño, prevalencia de sus derechos, protección integral y los derechos consagrados en los convenios internacionales ratificados por Colombia, en la Constitución Política y en esta ley.

Artículo 193. *Criterios para el desarrollo del proceso judicial de delitos en los cuales son víctimas los niños, las niñas y los adolescentes.* Con el fin de hacer efectivos los principios previstos en el artículo anterior y garantizar el restablecimiento de los derechos, en los procesos por delitos en los cuales sean víctimas los niños, las niñas y los adolescentes la autoridad judicial tendrá en cuenta los siguientes criterios específicos:

1. Dará prioridad a las diligencias, pruebas, actuaciones y decisiones que se han de tomar.
2. Citará a los padres, representantes legales o a las personas con quienes convivan, cuando no sean estos los agresores, para que lo asistan en la reclamación de sus derechos. Igualmente, informará de inmediato a la Defensoría

de Familia, a fin de que se tomen las medidas de verificación de la garantía de derechos y restablecimiento pertinentes, en los casos en que el niño, la niña o el adolescente víctima carezca definitiva o temporalmente de padres, representante legal, o éstos sean vinculados como autores o partícipes del delito.

3. Prestará especial atención para la sanción de los responsables, la indemnización de perjuicios y el restablecimiento pleno de los derechos vulnerados.
4. Decretará de oficio o a petición de los niños, las niñas y los adolescentes víctimas de delitos, de sus padres, representantes legales, del defensor de familia o del Ministerio Público, la práctica de las medidas cautelares autorizadas por la ley para garantizar el pago de perjuicios y las indemnizaciones a que haya lugar. En estos casos no será necesario prestar caución.
5. Tendrá especial cuidado, para que en los procesos que terminan por conciliación, desistimiento o indemnización integral, no se vulneren los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes víctimas del delito.
6. Se abstendrá de aplicar el principio de oportunidad y la condena de ejecución condicional cuando los niños, las niñas o los adolescentes sean víctimas del delito, a menos que aparezca demostrado que fueron indemnizados.
7. Pondrá especial atención para que en todas las diligencias en que intervengan niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos se les tenga en cuenta su opinión, su calidad de niños, se les respete su dignidad, intimidad y demás derechos consagrados en esta ley. Igualmente velará por que no se les estigmatice, ni se les generen nuevos daños con el desarrollo de proceso judicial de los responsables.
8. Tendrá en cuenta la opinión de los niños, las niñas y los adolescentes víctimas de delitos en los reconocimientos médicos que deban practicárseles. Cuando no la puedan expresar, el consentimiento lo darán sus padres, representantes legales o en su defecto el defensor de familia o la Comisaría de Familia y, a falta de éstos, el personero o el inspector de familia. Si por alguna razón no la prestaren, se les explicará la importancia que tiene para la investigación y las consecuencias probables que se derivarían de la imposibilidad de practicarlos. De perseverar en su negativa se acudirá al juez de control de garantías quien decidirá si la medida debe o no practicarse. Las

medidas se practicarán siempre que sean estrictamente necesarias y cuando no representen peligro de menoscabo para la salud del adolescente.

9. Ordenará a las autoridades competentes la toma de medidas especiales para garantizar la seguridad de los niños, las niñas y los adolescentes víctimas y/o testigos de delitos y de su familia, cuando a causa de la investigación del delito se hagan necesarias.
10. Informará y orientará a los niños, las niñas y los adolescentes víctimas de delitos, a sus padres, representantes legales o personas con quienes convivan sobre la finalidad de las diligencias del proceso, el resultado de las investigaciones y la forma como pueden hacer valer sus derechos.
11. Se abstendrá de decretar la detención domiciliaria, en los casos en que el imputado es miembro del grupo familiar del niño, la niña o el adolescente víctima del delito.
12. En los casos en que un niño, una niña o un adolescente deba rendir testimonio deberá estar acompañado de autoridad especializada o por un psicólogo, de acuerdo con las exigencias contempladas en la presente ley.
13. En las diligencias en que deba intervenir un niño, una niña o un adolescente, la autoridad judicial se asegurará de que esté libre de presiones o intimidaciones.

Artículo 194. *Audiencia en los procesos penales*. En las audiencias en las que se investiguen y juzguen delitos cuya víctima sea una persona menor de dieciocho (1 8) años, no se podrá exponer a la víctima frente a su agresor. Para el efecto se utilizará cualquier medio tecnológico y se verificará que el niño, la niña o el adolescente se encuentre acompañado de un profesional especializado que adecue el interrogatorio y contrainterrogatorio a un lenguaje comprensible a su edad. Si el juez lo considera conveniente en ellas sólo podrán estar los sujetos procesales, la autoridad judicial, el defensor de familia, los organismos de control y el personal científico que deba apoyar al niño, la niña o el adolescente.

Artículo 195. *Facultades del defensor de familia en los procesos penales*. En los procesos penales por delitos en los cuales sea víctima un niño, una niña o un adolescente, el defensor de familia podrá solicitar información sobre el desarrollo de la investigación, para efectos de tomar las medidas de verificación de la garantía de derechos y restablecimiento pertinentes.

Artículo 196. *Funciones del representante legal de la víctima*. Los padres o el representante legal de la persona, niños, niñas y adolescentes, están facultados para intervenir en los procesos penales en que se investigue o juzgue un adulto por un delito en el cual sea víctima un niño, una niña o un adolescente como representante de éste, en los términos establecidos en el Código de Procedimiento Penal y para iniciar el incidente de reparación integral de perjuicios.

Los niños y las niñas víctimas, tendrán derecho a ser asistidos durante el juicio y el incidente de reparación integral por un abogado (a) calificado que represente sus intereses aún sin el aval de sus padres y designado por el defensor del pueblo.

Artículo 197. *Incidente de reparación integral en los procesos en que los niños, las niñas y los adolescentes son víctimas*. En los procesos penales en que se juzgue un adulto por un delito en el cual sea víctima un niño, una niña o un adolescente, el incidente de reparación integral de perjuicios se iniciará de oficio si los padres, representantes legales o el defensor de familia no lo hubieren solicitado dentro de los treinta días siguientes a la ejecutoria de la sentencia.

Artículo 198. *Programas de atención especializada para los niños, las niñas y los adolescentes víctimas de delitos*. El gobierno nacional, departamental, distrital, y municipal, bajo la supervisión de la entidad rectora del sistema nacional de bienestar familiar, diseñará y ejecutará programas de atención especializada para los niños, las niñas y los adolescentes víctimas de delitos, que respondan a la protección integral, al tipo de delito, a su interés superior y a la prevalencia de sus derechos.

Artículo 199. *Beneficios y mecanismos sustitutivos*. Cuando se trate de los delitos de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o secuestro, cometidos contra niños, niñas y adolescentes, se aplicarán las siguientes reglas:

1. Si hubiere mérito para proferir medida de aseguramiento en los casos del artículo 306 de la Ley 906 de 2004, ésta consistirá siempre en detención en establecimiento de reclusión. No serán aplicables en estos delitos las medidas no privativas de la libertad previstas en los artículos 307, literal b), y 315 de la Ley 906 de 2004.

2. No se otorgará el beneficio de sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario por la de detención en el lugar de residencia, previsto en los numerales 1 y 2 del artículo 314 de la Ley 906 de 2004.
3. No procederá la extinción de la acción penal en aplicación del principio de oportunidad previsto en el artículo 324, numeral 8, de la Ley 906 de 2004 para los casos de reparación integral de los perjuicios.
4. No procederá el subrogado penal de Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena, contemplado en el artículo 63 del Código Penal.
5. No procederá el subrogado penal de Libertad Condicional, previsto en el artículo 64 del Código Penal.
6. En ningún caso el juez de ejecución de penas concederá el beneficio de sustitución de la ejecución de la pena previsto en el artículo 461 de la Ley 906 de 2004.
7. No procederán las rebajas de pena con base en los "preacuerdos y negociaciones entre la fiscalía y el imputado o acusado", previstos en los artículos 348 a 351 de la Ley 906 de 2004.
8. Tampoco procederá ningún otro beneficio o subrogado judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que ésta sea efectiva.

Parágrafo transitorio. En donde permanezca transitoriamente vigente la Ley 600 de 2000, cuando se trate de delitos a los que se refiere el inciso primero de este artículo no se concederán los beneficios de libertad provisional garantizada por caución, extinción de la acción penal por pago integral de perjuicios, suspensión de la medida de aseguramiento por ser mayor de sesenta y cinco (65) años, rebajas de pena por sentencia anticipada y confesión; ni se concederán los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad de condena de ejecución condicional o suspensión condicional de ejecución de pena, y libertad condicional. Tampoco procederá respecto de los mencionados delitos la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar a ningún otro beneficio subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal siempre que ésta sea efectiva.

Artículo 200. El artículo 119 de la Ley 599 de 2000 quedará así:

Artículo 119. *Circunstancias de agravación punitiva*. Cuando con las conductas descritas en los artículos anteriores concurra alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 104 las respectivas penas se aumentarán de una tercera parte a la mitad.

Cuando las conductas señaladas en los artículos anteriores se cometan en niños y niñas menores de catorce (14) años las respectivas penas se aumentarán en el doble.

Libro III
Sistema nacional de bienestar familiar, políticas públicas e inspección, vigilancia y control

Capítulo I
Sistema nacional de bienestar familiar y políticas públicas de infancia y adolescencia

Artículo 201. *Definición de políticas públicas de infancia y adolescencia*. Para los efectos de esta ley, se entienden por políticas públicas de infancia y adolescencia el conjunto de acciones que adelanta el Estado, con la participación de la sociedad y de la familia, para garantizar la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes.

Las políticas públicas se ejecutan a través de la formulación, implementación, evaluación y seguimiento de planes, programas, proyectos y estrategias.

Artículo 202. *Objetivos de las políticas públicas*. Son objetivos de las políticas públicas, entre otros, los siguientes:

1. Orientar la acción y los recursos del Estado hacia el logro de condiciones sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales, que hagan posible el desarrollo de las capacidades y las oportunidades de los niños, las niñas y los adolescentes, como sujetos en ejercicio responsable de sus derechos.
2. Mantener actualizados los sistemas y las estrategias de información que permitan fundamentar la toma de decisiones adecuadas y oportunas sobre la materia.

3. Diseñar y poner en marcha acciones para lograr la inclusión de la población infantil más vulnerable a la vida social en condiciones de igualdad.
4. Fortalecer la articulación interinstitucional e intersectorial.

Artículo 203. *Principios rectores de las políticas públicas*. Las políticas públicas de infancia, adolescencia y familia como políticas de Estado se regirán como mínimo por los siguientes principios:

1. El interés superior del niño, la niña o el adolescente.
2. La prevalencia de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.
3. La protección integral.
4. La equidad.
5. La integralidad y articulación de las políticas.
6. La solidaridad.
7. La participación social.
8. La prioridad de las políticas públicas sobre niñez y adolescencia.
9. La complementariedad.
10. La prioridad en la inversión social dirigida a la niñez y la adolescencia.
11. La financiación, gestión y eficiencia del gasto y la inversión pública.
12. La perspectiva de género.

Artículo 204. *Responsables de las políticas públicas de infancia y adolescencia*. Son responsables del diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas de infancia y adolescencia en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal, el presidente de la república, los gobernadores y los alcaldes. Su incumplimiento será sancionado disciplinariamente como causal de mala conducta. La responsabilidad es indelegable y conlleva la rendición pública de cuentas.

En el nivel territorial se deberá contar con una política pública diferencial y prioritaria de infancia y adolescencia que propicie la articulación entre los Concejos Municipales, Asambleas y Congreso Nacional, para garantizar la definición y asignación de los recursos para la ejecución de la política pública propuesta.

El Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de la Protección Social y el Ministerio de Educación, con la asesoría técnica del ICBF, deberá

diseñar los lineamientos técnicos mínimos que deberán contener los planes de desarrollo en materia de infancia y adolescencia teniendo en cuenta el ciclo de vida, el enfoque de garantía y restablecimiento de derechos.

El gobernador y el alcalde, dentro de los primeros cuatro (4) meses de su mandato, realizarán el diagnóstico de la situación de la niñez y la adolescencia en su departamento y municipio, con el fin de establecer las problemáticas prioritarias que deberán atender en su Plan de Desarrollo, así como determinar las estrategias a corto, mediano y largo plazo que se implementarán para ello.

Las Asambleas y Concejos para aprobar el plan de desarrollo e inversión deberán verificar que éste se corresponda con los resultados del diagnóstico realizado. Para esto requerirán al gobernador y al alcalde, para que lo den a conocer antes del debate de aprobación del Plan de Desarrollo.

Parágrafo. La totalidad de los excedentes financieros derivados de la gestión del ICBF se aplicará a la financiación de las políticas públicas de infancia y adolescencia definidas en esta ley.

Artículo 205. *Sistema Nacional de Bienestar Familiar*. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como rector del sistema nacional de bienestar familiar, tiene a su cargo la articulación de las entidades responsables de la garantía de los derechos, la prevención de su vulneración, la protección y el restablecimiento de los mismos, en los ámbitos nacional, departamental, distrital, municipal y resguardos o territorios indígenas.

El Consejo Nacional de Política Social, atendiendo los lineamientos y recomendaciones del Departamento Nacional de Planeación, es el ente responsable de diseñar la Política Pública, movilizar y apropiar los recursos presupuestales destinados a garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, y asegurar su protección y restablecimiento en todo el territorio nacional.

Artículo 206. *Consejo Nacional de Política Social*. El Consejo Nacional de Política Social es el ente responsable de diseñar la política pública, movilizar y apropiar los recursos presupuestales y dictar las líneas de acción para garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, y asegurar su protección y restablecimiento en todo el territorio nacional.

El Consejo estará integrado por:

1. El presidente de la república o el vicepresidente, quien lo presidirá.
2. Los ministros de la Protección Social, Interior y de Justicia, Hacienda y Crédito Público, Educación, Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Cultura, Comunicaciones, o los viceministros.
3. El director del Departamento Nacional de Planeación o el subdirector.
4. El director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien hará la secretaría técnica.
5. Un gobernador en representación de los gobernadores.
6. Un alcalde en representación de los alcaldes.
7. Una autoridad indígena en representación de las Entidades Territoriales Indígenas.

Parágrafo. El Consejo deberá sesionar dos veces al año.

Parágrafo transitorio. Mientras se conforman las Entidades Territoriales Indígenas, hará parte del Consejo una autoridad indígena en su representación, siempre que en su territorio se adelante una actividad destinada a la protección de la infancia y la adolescencia.

Artículo 207. *Consejos departamentales y municipales de política social*. En todos los departamentos, municipios y distritos deberán sesionar Consejos de Política Social, presididos por el gobernador y el alcalde quienes no podrán delegar ni su participación, ni su responsabilidad so pena de incurrir en causal de mala conducta. Tendrán la responsabilidad de la articulación funcional entre las Entidades Nacionales y las Territoriales, deberán tener participación de la sociedad civil organizada y definirán su propio reglamento y composición. En todo caso deberán formar parte del Consejo las autoridades competentes para el restablecimiento de los derechos y el Ministerio Público.

En los municipios en los que no exista un centro zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la coordinación del sistema de bienestar familiar la ejercerán los Consejos de Política Social.

Los Consejos deberán sesionar como mínimo cuatro veces al año, y deberán rendir informes periódicos a las Asambleas Departamentales y a los Concejos Municipales.

Capítulo II
Inspección, vigilancia y control

Artículo 208. *Definición*. Para los efectos de esta ley se entiende por vigilancia y control las acciones de supervisión, policivas, administrativas y judiciales, encaminadas a garantizar el cumplimiento de las funciones y obligaciones para la garantía y restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes y su contexto familiar, y prevenir su vulneración a través del seguimiento de las políticas públicas y de la evaluación de la gestión de los funcionarios y de las entidades responsables.

Artículo 209. *Objetivo general de la inspección, vigilancia y control*. El objetivo de la inspección, la vigilancia y el control es asegurar que las autoridades competentes cumplan sus funciones en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal para: garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes y su contexto familiar. Asegurar que reciban la protección integral necesaria para el restablecimiento de sus derechos.

Disponer la adecuada distribución y utilización de los recursos destinados al cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de infancia, adolescencia y familia.

Verificar que las entidades responsables de garantizar y restablecer los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes cumplan de manera permanente con el mejoramiento de su calidad de vida y la de sus familias.

Artículo 210. *Autoridades competentes de inspección, vigilancia y control*. De conformidad con las competencias que les asignan la Constitución y las leyes, ejercerán la función de inspección, vigilancia y control:

1. La Procuraduría General de la Nación.
2. La Contraloría General de la República.
3. La Defensoría del Pueblo.
4. Las Personerías distritales y municipales.
5. Las entidades administrativas de inspección y vigilancia.
6. La sociedad civil organizada, en desarrollo de los artículos 40 y 103 de la Constitución Política.

Artículo 211. *Funciones de la Procuraduría General de la Nación*. La Procuraduría General de la Nación ejercerá las funciones asignadas en esta ley anterior por intermedio de la Procuraduría Delegada para la Defensa del Menor y la familia, que a partir de esta ley se denominará la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, la cual a través de las procuradurías judiciales ejercerá las funciones de vigilancia superior, de prevención, control de gestión y de intervención ante las autoridades administrativas y judiciales tal como lo establecen la Constitución Política y la ley.

Artículo 212. *Funciones de la Contraloría General de la República*. La Contraloría General de la República ejercerá las funciones a que hace referencia este título mediante el control posterior y selectivo del manejo de las finanzas, la gestión y los resultados de las políticas, programas y proyectos relacionados con la infancia, adolescencia y la familia de conformidad con los objetivos y principios de esta ley.

Artículo 213. *Funciones de la Defensoría del Pueblo*. La Defensoría del Pueblo ejercerá las funciones a que hace referencia este título a través de la Defensoría Delegada para los derechos de la niñez, la juventud y las mujeres mediante la divulgación, protección, promoción de derechos y el seguimiento a las políticas públicas que comprometan derechos humanos de los niños, las niñas y los adolescentes, como lo establece la Constitución Política y la ley.

Artículo 214. *Participación de la sociedad*. En desarrollo del principio de corresponsabilidad, las organizaciones sociales especializadas, como las veedurías ciudadanas, o cualquier otra forma de organización de la ciudadanía, participarán en el seguimiento y vigilancia de las políticas públicas y de las acciones y decisiones de las autoridades competentes. Las autoridades nacionales y territoriales deben garantizar que esta función se cumpla.

Capítulo III
Disposiciones finales

Artículo 215. *Presupuesto y financiación*. El gobierno nacional, el Congreso de la República, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura dispondrán la asignación, reorganización y redistribución de los recursos

presupuestales, financieros, físicos y humanos para el cumplimento de la presente ley, bajo la coordinación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Artículo 216. *Vigencia*. La presente ley entrará en vigencia seis (6) meses después de su promulgación. Con excepción de los artículos correspondientes a la ejecución del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, los cuales se implementarán de manera gradual en el territorio nacional empezando el primero de enero de 2007 hasta su realización total el 31 de diciembre de 2009.

El artículo 198 relativo a los beneficios y mecanismos sustitutivos entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Parágrafo. La Fiscalía General de la Nación realizará los estudios necesarios y tomará las medidas pertinentes para la implementación gradual del sistema de responsabilidad penal para adolescentes dentro del término señalado en esta ley.

Artículo 217. *Derogatoria*. El presente Código deroga el Decreto 2737 de 1989 o Código del Menor a excepción de los artículos 320 a 325 y los relativos al juicio especial de alimentos los cuales quedan vigentes, también deroga las demás disposiciones que le sean contrarias.

La presidenta del honorable Senado de la República,
Dilian Francisca Toro Torres
El secretario general del honorable Senado de la República,
Emilio Ramón Otero Dajud
El presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Alfredo Ape Cuello Baute
El secretario general de la honorable Cámara de Representantes,
Angelino Lizcano Rivera
República de Colombia - Gobierno Nacional
Publíquese y ejecútese.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de noviembre de 2006.
Álvaro Uribe Vélez
El ministro del Interior y de Justicia,
Carlos Holguín Sardi
El ministro de la Protección Social,
Diego Palacio Betancourt

Índice de autores

Personas naturales y jurídicas que colaboraron en la elaboración del proyecto de ley *Nuevo Código de Infancia y Adolescencia*

A

Alfonso Rueda Manuel Alberto
Alianza por la Niñez Colombiana
Andiarios
Arango Palacio Jorge Eliécer
Arcila Córdoba José Luis
Arias López Juan Carlos

B

Blum de Barberi Claudia

C

Camacho Weverberg Roberto
Castellanos Alonso
Ceballos Sandra
Cinde
Comisión Interinstitucional Asesora del Ministro de Justicia y del Derecho
Cristo Bustos Juan Fernando
Curiel Laura Gabriela

D

DANE
Defensor del Pueblo
Defensoría del Pueblo
Departamento Administrativo de Bienestar Social de Bogotá
Devia Arias Javier Ramiro
Díaz Mateus Iván
Diez Vargas Cecilia

E

Elejalde Arbeláez Ramón
Enríquez Maya Eduardo
Enríquez Rosero Manuel
Erazo Amalia

F

Facultad de Psicología de la Universidad Javeriana
Fandiño Edgar
Fiscalía General de la Nación
Flórez Luzmila
Flórez Rivera José Luis
Forero María Victoria
Forero Ramírez Juan Carlos
Fradique Carlos
Fundación Luis Amigó
Fundación Restrepo Barco

G

Galindo Camilo
Galvis Ortiz Ligia
Galvis Rodolfo
García Valencia Jesús Ignacio
Giraldo Jorge Homero
Gómez Jiménez Mario
González Díaz Andrés
Gutiérrez Adriana
Gutiérrez Nancy Patricia
Guzmán Álvarez Martha Patricia

H

Hernández Iván David
Hernández Villarreal Gabriel
Herrera Consuelo

Holguín Sardi Carlos
Hurtado Juan
Hurtado María Cristina

I

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
IPEC

J

Jalal Espitia Janni
Jattin Corrales Zulema
Jiménez Ana María
Jozame Amar Tony

L

Linares Beatriz
Londoño Beatriz
López Julieta

M

Maloof Cuse Dieb
Manríquez Manuel
Marín Fortunato, Coronel
Martínez Darío
Martínez Jairo
Martínez Rosales Rosmery
Martínez Rujana Sonia
Medina Pabón Juan Enrique
Ministerio de la Protección Social
Montes Álvarez Reginaldo
Muñoz Jesús Antonio

N

Navas Talero Carlos Germán

O

Obregón Espinal Liliana
Observatorio de Infancia de la Universidad Nacional
Observatorio Legislativo y de Opinión
Ochoa Adalberto Jaimes
OIM
OIT-IPEC
OMS-OPS

P

Padre Javier de Nicoló
Pardo Rueda Rafael
Paredes Aguirre Myriam Alicia
Parody D'Echeona Gina María
Paz Ospina Marino
PCAA
Pedraza Ortega Telésforo
Piedrahíta Cárdenas Carlos Arturo
Pinillos Abozaglo Clara Isabel
Plan Internacional
Policía de Menores
Policía Nacional
Procuraduría General de la Nación
Profamilia

R

Ramírez Pinzón Ciro
Red Antioqueña de Niñez
Restrepo Fernández Carlos Martín
Restrepo Gallego Griselda Yaneth

Rivera Guillermo
Rodríguez Edwin
Rodríguez Montana Alfredo
Rodríguez Sarmiento Milton Arlex
Rojas Jiménez Héctor Helí
Rojas Miguel
Rueda Serrano Juan Guillermo
Rueda Serrano Manuel Guillermo

S

Sabogal Báez Fernando
Sanín Posada Nora
Save the Children
Sense Internacional
Sierra Mónica
Silva Amín Zamir Eduardo
Silva Venus Albeiro
Sindicato ICBF

T

Tamayo Gómez Clemencia
Tapasco Treviño Dixon Ferney
Tarquino Pacheco
Terciarios Carpuchinos
Tierfund
Torres Villarreal María Lucía

U

Unfpa
Unicef
Universidad del Rosario
Unodc
Urrutia María Isabel

V

Vargas Lleras Germán
Varón Cotrino Germán
Velasco Chaves Luis Fernando
Velasco Lorenzo Almendra
Vélez Mesa William
Venegas Franco Alejandro
Villanueva José Maria
Visión Mundial

W

Wilches Claudia

Z

Zárate Adriana

Índice de normas nacionales e internacionales

A

Acto Legislativo 3 de 2002 228

C

Código Civil 47, 329, 339
Código de Procedimiento Civil 39, 268, 387
Código de procedimiento Penal 30, 291, 292, 293, 294, 329
Constitución Política 25
Convención de La Haya sobre Adopción Internacional 321
Convención Internacional de los Derechos del Niño 218, 317
Convenio 182 de 1999 179, 240
Convenio 132 de la OIT de 1998 179

D

Declaración de Ginebra de 1924 178
Declaración de los Derechos del Niño de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1959 178
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 178
Decreto 2737 de 1989 28, 227, 299, 300, 315, 316, 318, 326

L

Ley 74 de 1968 33
Ley 16 de 1972 33, 46
Ley 50 de 1990 400
Ley 12 de 1991 46
Ley 5 de 1992 337
Ley 100 de 1993 210
Ley 115 de 1994 210
Ley 173 de 1994 393
Ley 258 de 1996 212
Ley 294 de 1996 82, 212

Ley 575 de 2000 28, 212
Ley 620 de 2000 393
Ley 755 de 2002 276, 400
Ley 888 de 2004 278
Ley 890 de 2004 295
Ley 906 de 2004 57, 290, 293, 330, 378
Ley 962 de 2005 39
Ley 975 de 2005 331

P

Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966 178, 218
Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 178

Este libro fue compuesto en
caracteres Caxton Light en 10 puntos,
impreso sobre papel propal de 70 gramos
y encuadernado con método Hot Melt,
en el mes de julio de 2007,
Bogotá, D.C., Colombia,